



Agitación en América Latina



NUEVA SOCIEDAD

es una revista latinoamericana abierta a las corrientes de pensamiento progresista, que aboga por el desarrollo de la democracia política, económica y social.

Se publica cada dos meses en Buenos Aires, Argentina, y circula en toda América Latina.

Directora: Svenja Blanke

Jefe de redacción: Pablo Stefanoni

Coordinadora de producción: Silvina Cucchi

Plataforma digital: Mariano Schuster, Eugenia Corriés

Administración: Vanesa Knoop, Karin Ohmann

NUEVA SOCIEDAD Nº 295

Diseño original de portada: Horacio Wainhaus

Diagramación: Fabiana Di Matteo

Ilustraciones: Luisa Sabatini

Corrección: Germán Conde, Vera Giaconi

Traducción al inglés de los sumarios: Kristie Robinson

Impreso en Talleres Gráficos Nuevo Offset,

Viel 1444, Buenos Aires, Argentina

Los artículos que integran **NUEVA SOCIEDAD** son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Revista. Se permite, previa autorización, la reproducción de los ensayos y de las ilustraciones, a condición de que se mencione la fuente y se haga llegar una copia a la redacción.

NUEVA SOCIEDAD – ISSN 0251-3552

Oficinas: Humberto Primo 531, C1103ACK Buenos Aires, Argentina.

Tel/Fax: (54-11) 3708-1330

Correo electrónico: <info@nuso.org>

<distribucion@nuso.org> (distribución y ventas)

<www.nuso.org>

El portal **NUEVA SOCIEDAD** es una plataforma de reflexión sobre América Latina.
Articula un debate pluralista y democrático sobre política y políticas latinoamericanas.

 **NUEVA
SOCIEDAD**

es un proyecto de la

**FRIEDRICH
EBERT**

STIFTUNG

Septiembre-Octubre 2021

Índice

COYUNTURA

- 4725 **Colette Capriles.** Venezuela: ¿alcanzarán los nuevos incentivos para negociar? 4

TRIBUNA GLOBAL

- 4726 **Guadalupe González / Mónica Hirst / Carlos Luján / Carlos A. Romero / Juan Gabriel Tokatlian.** Afganistán y América Latina frente a la primacía desafiada de Estados Unidos 14

TEMA CENTRAL

- 4727 **Bernabé Malacalza.** América del Sur: una periferia convulsionada 29
- 4728 **Elisabeth Möhle / Daniel Scheingart.** Hacia un ecodeesarrollismo latinoamericano 42
- 4729 **Jorge Atria / Cristóbal Rovira Kaltwasser.** Las elites chilenas y su (des)conexión con la sociedad 57
- 4730 **Zaraí Toledo Orozco.** Una guía para entender el Perú de Pedro Castillo 72
- 4731 **Francisco J. Cantamutto / Martín Schorr.** Argentina: las aporías del neodesarrollismo 82
- 4732 **Arnold Antonin.** El magnicidio de Jovenel Moïse. ¿Un golpe dentro del golpe? 99
- 4733 **Jessica Dominguez Delgado.** El pueblo, el gobierno y las realidades paralelas en Cuba 113
- 4734 **Gilles Bataillon.** Nicaragua, ¿una dinastía acorralada? 123
- 4735 **Fernando Pairican.** Los horizontes autonomistas del movimiento mapuche 136
- 4736 **Benjamin Moallic.** El Salvador: un autoritarismo *millennial* 149

ENSAYO

- 4737 **Laura Fernández Cordero.** Un ejercicio de memoria feminista 162

SUMMARIES

Segunda página

La agitación política y social volvió a instalarse en América Latina y el Caribe. Comenzadas a menudo antes de la pandemia de covid-19, las protestas se mezclaron con diversas crisis políticas y fueron impulsadas, en medio de la crisis sanitaria, por distintas combinaciones de desigualdad y crisis económica y social. Incluso los modelos económicos de países de la costa del Pacífico, como Chile y Perú, que habían sobrevivido otras olas de protestas y cambio político, fueron esta vez puestos en cuestión. Hoy ni las derechas más liberales ni las izquierdas más estatistas parecen tener la llave del éxito económico. Y en este marco, el Tema Central de este número de NUEVA SOCIEDAD está dedicado a pensar la coyuntura regional desde diferentes ángulos, con los pies en la actualidad y la mirada hacia el futuro.

Bernabé Malacalza abre el *dossier* analizando la convulsión sudamericana, la región más golpeada por el covid-19 –al menos según las estadísticas oficiales– y pensando tanto el malestar actual como el complejo escenario político, que registra un incremento de la presencia de Estados Unidos y China. Ambas potencias observan la espiral de inestabilidad a través de diferentes prismas e intentan demarcar diversas estrategias de control. A su turno, Elisabeth Möhle y Daniel Schteingart reflexionan sobre las posibilidades de un ecodesarrollismo latinoamericano y se preguntan cómo puede América Latina enfrentar los desafíos que presenta el mundo pospandemia en materia social y ambiental. La respuesta apunta a un modelo que combine una triple sostenibilidad (social, macroeconómica y ambiental) y permita encarar, en conjunto y de manera virtuosa, los grandes déficits que arrastran los modelos de desarrollo de la región.

En su artículo, Jorge Atria y Cristóbal Rovira Kaltwasser se enfocan en la crisis de Chile, marcada por la desconexión entre elite y ciudadanía, a partir de un estudio de opinión que permite analizar brechas entre las elites económica, social y cultural y la sociedad, así como también discrepancias y concordancias intraelite. Por su parte, el artículo de Fernando Pairican deja ver la acumulación política del

movimiento mapuche, cuyo hito fue la elección de Elisa Loncon como presidenta de la Convención Constitucional, y las diferentes estrategias en su interior, desde apuestas gradualistas hasta opciones más radicalizadas.

Perú es también escenario de un quiebre entre los de «arriba» y los de «abajo», y el triunfo de Pedro Castillo operó como un terremoto en la política limeña. «¿Cómo un sindicalista de provincia llegó a la Presidencia de Perú?» es la pregunta disparadora que se hace Zarái Toledo Orozco. Se trata del triunfo de una «izquierda provinciana» en un país que había quedado fuera del giro regional, que tampoco tuvo movimientos indígenas poderosos, como los que hubo en Bolivia y Ecuador, y que ahora inicia un incierto cambio político y social. También muestra tensiones el modelo político en Argentina, un país que tras cuatro años de gobierno de centroderecha volvió a ser liderado por una compleja coalición panperonista, con un proyecto neodesarrollista que no ha logrado por el momento encontrar un rumbo; a este caso se dedica el artículo de Francisco J. Cantamutto y Martín Schorr. Los esfuerzos del gobierno por ordenar la economía y darle una orientación exportadora han chocado tanto con problemas estructurales de larga data como con tensiones internas en la coalición gubernamental.

En el Caribe, el magnicidio de Jovenel Moïse, el presidente haitiano, marca un punto extremo de la agitación. El brutal asesinato añadió nuevos elementos a la crisis del país, tras años de intervención extranjera y con un Estado que es cada vez más una maquinaria para el enriquecimiento de las camarillas en el poder. Arnold Antonin analiza el asesinato como un «golpe dentro del golpe» y pone en perspectiva la crisis actual. Pero también Cuba ha venido siendo eje de numerosos análisis, a partir de las inéditas protestas sociales del 11 de julio pasado. Jessica Domínguez Delgado pone el foco en las diversas interpretaciones de esta jornada, tanto dentro como fuera de la isla, y en las consecuencias de manifestaciones que, a diferencia de otros momentos, tuvieron como principales actores a personas de sectores populares.

En el caso de Nicaragua, lo que se viene observando es un desplazamiento creciente hacia un régimen autoritario. Como muestra el artículo de Gilles Bataillon, Daniel Ortega y Rosario Murillo han construido un poder familiar que recuerda los tiempos previos a la Revolución Sandinista de 1979. Decenas de opositores fueron enviados a prisión, mientras el país se encamina hacia elecciones controladas y sin candidaturas opositoras reales.

También en América Central, Benjamin Moallic contextualiza la crisis de los partidos salvadoreños y la llegada al poder de Nayib Bukele, quien ha tensionado las instituciones en una línea autoritaria sin que nada de eso haya mermado su popularidad. Después de cuatro décadas de predominio de los partidos nacidos de la guerra civil, el presidente *millennial* apareció no solamente como la promesa de una renovación del escenario político, sino también como el «brazo vengador» que liquidaría el «viejo mundo» político.

Se trata de un panorama marcado por la heterogeneidad, en el que la propia pandemia mostró el débil estado de la integración regional.

Venezuela: ¿alcanzarán los nuevos incentivos para negociar?

Colette Capriles

La situación interna –incluida una fuerte desafección política de la población– y la externa –un alineamiento de Estados Unidos y Europa en favor del diálogo– han cambiado las condiciones para una negociación política en Venezuela. Con la mediación noruega, el diálogo que se lleva adelante en México busca una normalización institucional, en el marco de las elecciones regionales que se llevarán adelante en noviembre próximo.

Para intentar describir lo que está sucediendo y puede suceder con el proceso de negociación que el gobierno y la oposición venezolanos recién arrancaron en México, me parece que hay que subrayar, o más bien argumentar, en qué se diferencia de experiencias anteriores y si estas diferencias auguran un resultado distinto. A mi modo de ver, hay tres factores diferenciales, naturalmente interrelacionados entre sí, pero que pueden distinguirse analíticamente: las lecciones aprendidas de procesos anteriores; los cambios acontecidos en

la sociedad y los nuevos incentivos de las partes; y la conformación de una nueva «teoría del cambio» en correlación con lo que podríamos llamar una nueva «teoría de la permanencia».

Lecciones aprendidas (o que deberían aprenderse)

Ante las informaciones oficiosas acerca de la reactivación del llamado «proceso pendular de consultas» con miembros del gobierno y de la oposición que la

Colette Capriles: es profesora agregada e investigadora en el área de Filosofía Política y Ciencias Sociales en la Universidad Simón Bolívar (Venezuela). Además de numerosos artículos académicos, ha publicado dos libros de crónicas políticas: *La revolución como espectáculo* (Debate, Caracas, 2004) y *La máquina de impedir* (Alfa, Caracas, 2010). Dirige la revista *Argos*, de la Universidad Simón Bolívar.

Palabras claves: cambio, continuidad, negociaciones, Nicolás Maduro, Venezuela.

Cancillería del reino de Noruega impulsó desde principios de este año, se publicaron varios estudios y comentarios de expertos que no solo revisitaban las experiencias anteriores, sino que por sí mismos resultaban un testimonio de la atmósfera con que se recibía la posibilidad de reanudar negociaciones: una combinación de escepticismo con cautela, sobre todo en torno de la pregunta clave: ¿qué mueve *ahora* a los actores políticos a intentar reconstruir un espacio de negociación tan accidentado? ¿Hay algún cambio en su estructura de incentivos?

El reporte que produjo la Oficina en Washington para Latinamérica (WOLA, por sus siglas en inglés), en conjunto con United States Institute of Peace (USIP), en julio de este año, ofrece hallazgos muy importantes y recomendaciones concretas que vale la pena examinar¹. Los autores lograron una síntesis notable de los elementos estructurales que favorecieron u obstaculizaron las experiencias de negociación registradas hasta ahora. Queda claro que se trata de un mismo proceso con avances y retrocesos y que este proceso ha cumplido un papel fundamental en el metabolismo político de los últimos años, mostrando que el conflicto venezolano, a pesar de su prolongación y del daño antropológico que ha provocado, no es en realidad intratable. Las partes recurren en última instancia a un mecanismo que,

aunque no ha logrado los objetivos explícitos, sí ha ido dejando aprendizajes para avanzar hacia una solución política para Venezuela.

El reporte analiza brevemente, pero de manera precisa, los tres capítulos previos a la negociación de Oslo-Barbados de 2019: el emprendido a instancias de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) a raíz de las protestas y represión de 2014, el patrocinado por el Vaticano en 2016 y el desarrollado en República Dominicana entre diciembre de 2017 y enero de 2018. Aunque con características distintas, estas iniciativas compartieron debilidades comunes asociadas a la mutua falta de confianza, la imposibilidad de establecer garantías para los acuerdos enunciados y, en general, podemos añadir, a una concepción, compartida por ambas partes, de que la negociación era la continuación de la guerra política por otros medios y se podía zanjar como derrota o victoria. En el caso de la experiencia en República Dominicana, el reporte subraya las acciones tomadas por el gobierno de Nicolás Maduro para presionar a la oposición, tales como la inhabilitación de partidos y un adelanto de ocho meses de las elecciones presidenciales, y la falta de confidencialidad del proceso, el cual se hizo permeable a todo tipo de presiones. El involucramiento de miembros de la comunidad internacional resultó en este caso infructuoso, pero dejó

1. Geoff Ramsey, Keith Mines, David Smilde y Steve Hege: «Negotiating a Return to Democracy in Venezuela: Insights from the Participants in the 2019 Oslo-Barbados Talks», WOLA / United States Institute for Peace, Washington, DC, 7/2021.

en claro que el factor internacional jugaría, en adelante, un rol esencial en la gestión del conflicto político.

No obstante, el reporte se ocupa centralmente del proceso de Oslo-Barbados, que se distingue de los anteriores por la arquitectura, completamente diferente, que la facilitación de la Cancillería noruega logró imprimirle a través del mecanismo llamado «pendular». Una larga serie de encuentros previos con las partes permitió definir el terreno, las reglas y la agenda básica de la potencial negociación en un clima muy celoso de la confidencialidad. Ya algunas lecciones parecían haberse aprendido.

Por supuesto, la premisa implícita sobre la que se basa el análisis es que en las partes negociadoras se hallan sectores que sí tienen la voluntad política para alcanzar una solución negociada, y de hecho uno de los hallazgos relevantes del reporte es que, en efecto, los testimonios de ambas partes reconocen que algunos sectores recalcitrantes de sus propias coaliciones obstaculizaron los posibles progresos en el último ciclo de negociaciones.

Ello es un signo positivo entre otros que el reporte señala: se alcanzó, en las sesiones de Oslo y Barbados, cierto grado de mutua confianza, y las conversaciones se centraron en las condiciones políticas e institucionales para construir una ruta viable para la solución del conflicto. Aunque no se han hecho públicos los documentos que permitirían trazar la trayectoria de las conversaciones, se sabe que la oposición presentó un plan que contemplaba

el levantamiento de sanciones sujeto a la realización de nuevas elecciones presidenciales libres bajo un gobierno de transición mixto, sin condicionarlo a la renuncia de Maduro. La oposición flexibilizó su posición admitiendo que se podía adelantar un proceso electoral con Maduro en el poder y, según testimonios, el gobierno aceptó considerar esta opción, sin ofrecer por su parte una contrapropuesta.

Esta flexibilización no fue acompañada por el gobierno estadounidense, presidido por Donald Trump, cuya política hacia Venezuela estaba dividida entre una visión favorable a la negociación, como la del Departamento de Estado, y la postura de la misma Casa Blanca, escéptica ante cualquier escenario que no involucrara el «quiebre» del régimen de Maduro. El anuncio de nuevas sanciones el 6 de agosto de 2019, justo cuando la oposición presentaba su plan, se tradujo en la suspensión, primero momentánea y luego definitiva, de la negociación.

Muy sintéticamente, podría decirse que la negociación fracasó por dos razones. La primera es que los sectores con poder de veto bloquearon el proceso, mostrando que la voluntad de alcanzar una solución negociada y de mutuas concesiones no era compartida por todos los actores, porque persistía la teoría del cambio por «quiebre» o colapso del gobierno de Maduro. La posibilidad de acordar una secuencia de levantamiento de sanciones siguiendo distintas etapas de concesiones institucionales y políticas que terminarían en una competencia electoral libre no

fue bienvenida por esos actores, ante la posibilidad, objetivamente muy remota pero a la que apostaba el madurismo, de que un eventual mejoramiento de las condiciones de gobierno pudiera significar una nueva administración chavista elegida en condiciones competitivas. La segunda tiene que ver con la denominada «mejor alternativa ante un acuerdo» (BATNA, por sus siglas en inglés). Las partes consideraron que no alcanzar un acuerdo las dejaba con algún margen de acción para consolidarse en sus posiciones. Lo que hoy ocurre —y por ello puede verse al menos con cierto optimismo el proceso iniciado en México— es que estas dos condiciones han variado significativamente.

Una sociedad autonomizada, nuevos actores, nuevos incentivos

En mi opinión, y esto es controversial, las respectivas «mejores alternativas ante el acuerdo» resultaron ser bastante asimétricas. El gobierno de Maduro construyó una estrategia ofensiva, mientras que la de la oposición se redujo a tratar de mantener el *statu quo* del «gobierno interino» de Juan Guaidó, a pesar del fracaso de sus intentos de poner cuñas en el apoyo militar al régimen. De hecho, podría decirse que fue precisamente el madurismo, a partir de septiembre de 2019, el que logró lo que la oposición pretendía: dividir al adversario. Tras un pacto con fuerzas minoritarias de la coalición opositora que habían venido mostrando

su descontento con la política del gobierno interino y de la oposición parlamentaria, y auxiliado por el dócil Tribunal Supremo de Justicia, el gobierno se hizo de aliados cuya utilidad fundamental fue debilitar a los partidos políticos mayoritarios de la oposición y asegurar que estos no participasen en las elecciones legislativas que se celebraron en 2020.

Con esta maniobra, el gobierno de Maduro aprovechó y potenció las fracturas que se venían gestando dentro de la coalición opositora y también las condiciones de parálisis producidas por la pandemia, y logró debilitar eficazmente a la oposición mientras recuperaba el control de la Asamblea Nacional. Pero su propia BATNA mostró sus limitaciones: en primer lugar, porque las elecciones legislativas exhibieron la dramática mengua de la base electoral madurista y el escaso atractivo del resto de las opciones que participaron en ellas. Lejos de reconquistar alguna legitimidad —popular e institucional— a través de esas elecciones, quedó de manifiesto que la recuperación de la pretensión hegemónica empeoró el estatus político del gobierno. Y más significativamente: la perspectiva de una perpetuación del conflicto creó, paradójicamente, las condiciones para un sutil pero crucial cambio de escenario.

El primer síntoma es el brusco desapego que la población parece experimentar con respecto a la política y a los políticos. Aquel ambiente de polarización que predominaba a principios de 2019 se ha desvanecido. Los sondeos

de opinión revelan una mayoría sin afiliación y con amplio rechazo al liderazgo de todo el espectro, a pesar de que persisten, como constantes, el descontento hacia el gobierno de Maduro y el anhelo de cambio político. La población se concentra hoy en encontrar métodos de supervivencia frente a la orfandad en que la han dejado el progresivo abandono del Estado y el fracaso de las alternativas políticas.

La paradoja mayor consiste en que ha sido el régimen chavista el que, en su propia estrategia de supervivencia política, ha favorecido la liquidación de la acción del Estado en la producción de bienes y servicios públicos. El gasto público tiene hoy en Venezuela el más bajo nivel conocido en la historia reciente, y las políticas sustitutivas han consistido en un *laissez-faire* que daría envidia a los más rudos manchesterianos. Ante la caída del ingreso petrolero y las restricciones debidas a las sanciones estadounidenses, el chavismo ha logrado el milagro de romper la relación rentista del Estado con la sociedad, con un costo humano extraordinario y sacrificando las ya menguadas capacidades de gestión institucional del Estado.

Los economistas venezolanos están empezando a cuantificar este efecto del abandono estatal en términos de creación de nuevos circuitos económicos informales e ilegales, las consecuencias de la dolarización informal, la normalización de la corrupción como método de redistribución y la privatización indirecta de los servicios públicos. Nótese que la palabra clave aquí

es «informal». Aunque permanece el entramado legal que hace del Estado el gran agente económico, en la práctica se ha producido una suspensión deliberada de los controles en todas las esferas de la economía. No se trata de un proceso de recuperación institucional de la economía sino, al revés, de una profundización de la desinstitucionalización y de la falta de reglas que se repite en todos los ámbitos.

Contra algunas imágenes corrientes, el resultado es que la sociedad venezolana se ha vuelto menos dependiente del Estado en forma directa. Aunque importantes sectores de la población necesitan la ayuda alimentaria del gobierno y reciben modestos subsidios monetarios, el peso de estos en el ingreso familiar ha venido disminuyendo, completado por ingresos informales y remesas.

Pero esta autonomización relativa de la población más vulnerable, que como mencioné, se traduce en una orfandad en cuanto a servicios básicos como salud, servicio de agua, transporte y educación, ha descorrido la cortina en torno de la gravísima situación humanitaria y de violación de derechos humanos que viene siendo diagnosticada y abordada por organizaciones de la sociedad civil desde al menos 2017. La respuesta de este tejido social a la emergencia humanitaria compleja, cuyo origen es la persistencia del conflicto político, ha sido desarrollar, desde 2019, un programa de incidencia socio-política destinado a construir oportunidades para la reinstitucionalización o el retorno a la norma institucional

y a la Constitución. Amparadas en su autonomía, estas organizaciones articuladas entre sí, con iniciativas como la del Foro Cívico, han emprendido una labor de intermediación, de puente y de interlocución entre actores políticos del gobierno y de la oposición, asumiendo el costo político de adelantar iniciativas negociadas que los actores políticos por sí mismos no pueden asumir. Otras iniciativas como el Frente Amplio persiguen también construir relaciones entre partidos (en este caso de la oposición mayoritaria o G+, que reúne a 18 agrupaciones) y grupos de la sociedad civil.

En definitiva, se trata de la emergencia de un actor social que, en distintos niveles, está intentando abrir espacios de negociación, buscando aliados tanto en el gobierno como en sectores de la oposición dispuestos a cooperar para alcanzar acuerdos sectoriales que generen cambios para la restitución de los derechos humanos, incluyendo los electorales y cívicos.

Un hito de este esfuerzo fue la conformación, en abril de este año, de una nueva directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE), que por primera vez en más de diez años se realizó siguiendo las normas legales en vez de ocurrir por mandato del Tribunal Supremo de Justicia. La norma implica una selección imparcial de candidatos y prescribe postulaciones de candidatos de la sociedad civil, puesto que se trata del Poder Ciudadano. Negociaciones políticas entre miembros de la oposición, de la sociedad civil y de la Asamblea Nacional chavista lograron conformar

un directorio aún sesgado hacia el chavismo, pero con representación de expertos asociados a la oposición. Desde entonces, el CNE ha actuado para recuperar algunas de las condiciones electorales mínimas para no repetir el desastre institucional de las últimas elecciones.

Hay otras iniciativas en curso, como la creación de un espacio humanitario con reglas concertadas para permitir la actuación de organismos locales e internacionales, o la creación de la Mesa Técnica para vacunación y la puesta en funcionamiento del Programa Mundial de Alimentos, que señalan terrenos en los que son posibles acuerdos de cooperación entre actores sociales y el gobierno, y en algunos casos miembros de la oposición. También apuntan a una decisión política, por parte del gobierno de Maduro, de ofrecer gestos de apertura que puedan ser leídos internacionalmente como señales para favorecer la negociación, como en efecto lo fueron, particularmente para el gobierno de Joe Biden.

Se trata, repito, de una decisión política, junto con la de reducir los desequilibrios en el CNE para disminuir la desconfianza de la población hacia el proceso electoral que tendrá lugar en noviembre próximo, cuando se elegirán autoridades regionales, y favorecer de este modo la participación de la oposición que desde 2017 se negaba a hacerlo en vista de las deterioradas condiciones políticas.

Esas señales fueron también interpretadas por sectores de la oposición

mayoritaria, que desarrollaron a su vez canales de comunicación con altos funcionarios gubernamentales, tanto para presionar a favor de un mejoramiento de condiciones electorales como para atraer a sectores recalcitrantes dentro de la oposición a la participación electoral y a la posibilidad de la reanudación de una negociación de alto nivel. En la práctica, se trata de volver a realinear a los partidos del G+ (que incluye a los cuatro grandes partidos nacionales de oposición: Voluntad Popular de Leopoldo López, Primero Justicia de Henrique Capriles, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo) en una nueva estrategia común que empiece el proceso de rearticulación interna tras la experiencia del «gobierno interino» de Guaidó, cuyo saldo político y organizativo es bastante desfavorable.

Nueva «teoría del cambio» y nueva «teoría de la permanencia»

Como se puede ver, tanto el gobierno de Maduro como la oposición parecen tener un nuevo conjunto de incentivos para emprender una ronda de negociaciones. Pero se ha producido, correlativamente, un giro en la comunidad internacional, o más bien en los países que se alinearon con los dos polos políticos. En primer lugar, por la convergencia entre la diplomacia estadounidense y la europea para favorecer y apoyar un proceso de negociación robusto y significativo. Aunque la administración Biden no ha hecho explícita su nueva política hacia Venezuela para

evitar costos políticos en los que podría incurrir para las elecciones de medio término de 2022 en estados como Florida, donde decisivos votantes de la diáspora venezolana y cubana favorecen la visión republicana hacia América Latina, en la práctica está dispuesta a revisar la política de sanciones si se producen cambios institucionales y de entorno político que apunten hacia la apertura y normalización constitucional en Venezuela.

Por otra parte, los socios del chavismo, en particular Rusia y China, parecen también dispuestos a apostar al proceso de negociación. El recién nombrado canciller venezolano viene de servir como embajador en China, mientras que Rusia aparece como el «país amigo» del gobierno en la mesa de negociación en México. Y en tercer lugar, los países latinoamericanos, en particular los receptores de la inmensa migración venezolana, tienen un interés particular en regularizar sus relaciones con el gobierno de Maduro y en que se reduzca el flujo de migrantes, además de ponderar el efecto tóxico que la situación venezolana ha venido teniendo en sus políticas internas, incluso polarizando al electorado.

La interacción de todos estos factores conduce a una nueva constelación que podría expresarse en una nueva teoría del cambio político y su dialéctica con la teoría de la permanencia en el poder que sostiene el chavismo. Hay una percepción generalizada de que el proyecto del chavismo incluye la aspiración a ejercer el poder

eternamente, como única opción históricamente viable para Venezuela, y que ahí se ubica el principal obstáculo para tomar en serio cualquier prédica acerca de su carácter democrático. Pero esa percepción omite que el chavismo, como lo hacen en general los populismos, pretendió fundar una revolución de manera legítima sobre el consentimiento popular expresado en el voto. Se puede contestar a esto, sin duda, pero el caso es que, una vez desaparecido Hugo Chávez, en quien se hallaba encarnada esa legitimación popular, por así decirlo, el asunto de la legitimidad se le presenta al chavismo, y a Maduro en particular, como un problema y una fragilidad a la que debe enfrentarse ya no con represión y radicalización, sino con la recuperación de la gobernabilidad.

Al menos así parecen perfilar-se las señales que se envían desde el gobierno de Maduro. Su teoría de la permanencia en el poder implica una recuperación de sus capacidades de gestión del Estado benefactor y hegemónico. Seguramente, con la mirada puesta más en lo que fue el chavismo con Chávez en la época del esplendor rentista petrolero que en un futuro posible, pero recuperando el sustento popular mayoritario como fuente de legitimación.

Esa recuperación de capacidades, que aspira a obtener gobernabilidad, también incluye una reconfiguración del papel de la oposición en una dinámica política de la que hoy está excluida. La teoría del cambio que se gestó en la oposición mayoritaria a

partir de 2014, lo que se ha llamado la «teoría del quiebre», suponía privilegiar el cambio político, entendido como el cambio de gobierno o la sustitución de Maduro, como una prioridad estratégica y urgente, en contraste con la estrategia seguida entre 2006 y 2013, cuando la oposición creció electoralmente hasta convertirse en una opción real de poder. La teoría suponía que la presión interna (como ocurrió con las enormes manifestaciones de 2017) y la externa (con las sanciones y el desconocimiento internacional de las elecciones de 2018) lograrían fracturar a la coalición dominante, especialmente al factor militar.

Aunque no fueron esos los resultados, es cierto que las presiones hicieron efecto en la medida en que el gobierno de Maduro adoptó una visión más pragmática que, aunque le permitió sobrevivir en el poder, ha obligado a cambios que están afectando variables fundamentales de su economía política. Pero es igualmente cierto que el costo para la oposición no fue bajo. También el saldo en términos de debilitamiento interno, divisiones y desconexión de la población ante el incumplimiento de las promesas de transformación política, obligó a la oposición a reconfigurar su teoría del cambio y a reencaminarla hacia lo que hoy aparece como prioridad: el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la restitución de los derechos, los equilibrios constitucionales y la alternabilidad electoral, en una noción de cambio sustentable que no se limita a un cambio en la conducción del gobierno.

Lo andado hasta ahora

Esta situación genera, en términos de la negociación, una zona de posible acuerdo que ya había sido esbozada en los encuentros de Oslo y Barbados. En el reporte de WOLA y USIP que ya he mencionado, se resalta una especie de paradoja: tanto el chavismo como la oposición coinciden en adoptar el objetivo de alcanzar elecciones justas, competitivas, como método democrático para distribuir el poder. Pero el significado de «justas y competitivas» no es igual para ambos grupos. Para la oposición, significa elecciones con garantías institucionales y políticas para participar y hacer respetar resultados. Para el chavismo, competir significa llegar a elecciones habiendo podido desarrollar su gestión de gobierno sin las restricciones que le imponen las sanciones, que presuntamente serían la causa de su mala gestión e impopularidad. En mi opinión, esa ecuación resume el nudo de la zona de posible acuerdo negociado, pero solo en la medida en que supone previos acuerdos para reformas institucionales, para permitir el funcionamiento del sistema político y del restablecimiento de la vigencia de la Constitución, así como entendimientos con respecto a la urgencia de atender las demandas sociales y la gigantesca crisis humanitaria.

Lo que se ha hecho público, de manera formal, con respecto a los parámetros en los que se espera que se mueva la negociación en México, está contenido en el Memorandum de Entendimiento suscrito por las partes el 13 de agosto. Y en efecto, se sostiene

que el objetivo de la negociación es alcanzar un acuerdo para «establecer reglas claras de convivencia política y social, con respeto absoluto a la Constitución Nacional», y que, en términos metodológicos, la negociación se entiende como un proceso integral pero incremental, que admite la posibilidad de alcanzar acuerdos parciales de urgente implementación antes de alcanzar un acuerdo global.

Objetivo y método difieren notablemente de las experiencias anteriores y señalan, como decíamos, una voluntad política de atender el fondo del conflicto. Aunque en el Memorandum se menciona el principio formal de que «nada está acordado hasta que todo esté acordado», se lo relativiza con la posibilidad de adelantar acuerdos que a su vez puedan permitir avanzar en el levantamiento parcial de sanciones o aplicación de licencias, lo que constituye un incentivo importante para mantener la negociación durante el tiempo que sea necesaria. Ello también indica un aprendizaje de experiencias anteriores en las que el principio del «nada está acordado hasta que todo esté acordado» terminó paralizando el proceso. De hecho, es importante subrayar que, en el diseño al menos, la propuesta para esta negociación incorpora las recomendaciones fundamentales de expertos y observadores: se establecerá un mecanismo para la consulta y participación de la sociedad civil en la construcción de una agenda social; se enfocará la mecánica en términos de «hitos» alcanzados como acuerdos parciales; se discutirán las condiciones

para la reinstitucionalización, entendiéndola como procesos de garantía que pavimentarán el camino hacia elecciones libres y competitivas. Todo esto está por construirse y deberá sobrepasar obstáculos importantes, en especial considerando que se prevé que la negociación se extienda por meses.

Es imposible predecir los resultados del proceso. Ciertamente, las condiciones hoy son más favorables, en la medida en que las partes no tienen alternativas atractivas en este momento para abandonar la negociación. Pero eso puede variar, y es posible que los resultados de las elecciones de noviembre próximo alteren en alguna medida el panorama; no es posible mantener la negociación aislada del tablero político cotidiano. Sin embargo, hay un elemento político

crucial que señala la dirección que se le quiere imprimir al proceso. El Memorandum de Entendimiento comienza con un reconocimiento político mutuo de las partes, como gobierno y como Plataforma Unitaria de la oposición. La figura del «gobierno interino», presidido por Guaidó, no es mencionada en el Memorandum y queda implícito que se abandona el terreno de los «dos gobiernos» en el que se había movido el conflicto en los últimos años. En términos prácticos, se espera que la negociación dé respuesta sobre cómo desmontar, bajo garantías políticas para todos, el esquema de custodia de activos de la Nación que dependía del gobierno interino, de modo que puedan recuperarse para alimentar la urgente agenda social sin ser botín político de ninguna de las partes. ☒

ÍCONOS

REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES

Septiembre-Diciembre de 2021

Quito

Vol. xxv N° 71

CIENCIA, CONOCIMIENTO Y SOCIEDAD

DOSSIER: Presentación del dossier, **Roberto Chauca y José Ragas**. La enseñanza de las políticas públicas en América Latina: estado de la situación y desafíos para la ciencia política, **Nicolás Bentancur, Germán Bidegain y Rodrigo Martínez**. Transnacionalización de las políticas de ciencia y tecnología en América Central. Un análisis de redes, 1955-2020, **Ronny Viales-Hurtado, Ronald Saénz-Leandro y Marco Garita-Mondragón**. Investigación colaborativa: potencialidades y limitaciones de la cartografía social participativa, **Pablo Saravia-Ramos, Débora Vega-Valdés, Luis Espinoza-Almonacid y Paulo Gutiérrez-Soto**. Experticia estadística en la administración pública ecuatoriana: mecanismos de emergencia y legitimación, **Byron Villacís**. Los últimos spencerianos. Hacia un canon de la primera sociología ecuatoriana, **Philipp Altmann**. TEMAS: Trayectorias y contexto político de los organismos ciudadanos: el control de la corrupción en Ecuador, **Héctor Manuel Gutiérrez-Magaña**. La política en territorio. Género, migraciones y sostenibilidad de la vida en Argentina, **María José Magliano y Sofía Arrieta**. Justicia reparativa frente a los legados de la esclavitud en el Caribe. Perspectivas interregionales, **Claudia Rauhut**. Conexiones internacionales del proceso de colonización de la frontera amazónica ecuatoriana, 1960-1970, **Pablo Campaña**. «Una nueva clase dirigente». Los intendentes bonaerenses durante el Proceso de Reorganización Nacional en Argentina, **Paula Vera Canelo y Juan Pablo Kryskowski**.

Íconos es una publicación cuatrimestral de Flacso-Ecuador, La Pradera E7-174 y Av. Almagro, Quito, Ecuador. Tel.: (593 2) 3238888. Correo electrónico: <revistaiconos@flacso.edu.ec>. Página web: <www.revistaiconos.ec>.

Afganistán y América Latina frente a la primacía desafiada de Estados Unidos

Guadalupe González / Mónica Hirst / Carlos Luján /
Carlos A. Romero / Juan Gabriel Tokatlian

Pese a su lejanía geográfica, la ocupación y salida de Afganistán al ritmo del avance imparable de los talibanes ilumina algunas cuestiones sobre la política de intervención internacional estadounidense y sus límites que resultan útiles para pensar la geopolítica latinoamericana, en un contexto en el que la primacía mundial del país del Norte parece atravesar una fase declinante.

Afganistán no es una realidad ni tan ajena ni tan distante de América Latina y el Caribe como podría parecer a primera vista. Los 20 años transcurridos entre la caída de las Torres Gemelas que dio origen a la invasión de Afganistán, con la consiguiente deposición

del gobierno talibán, y su actual regreso al poder tras el abandono de Kabul por parte de Estados Unidos y sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) el 31 de agosto de 2021 son un espejo que permite mirar con nitidez y precisión la huella de

Guadalupe González: internacionalista y politóloga mexicana. Actualmente es profesora e investigadora del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México.

Mónica Hirst: es historiadora y tiene un doctorado en Estudios Estratégicos. Es profesora visitante en la Universidad del Estado de Río de Janeiro y profesora en la Universidad Torcuato Di Tella (Buenos Aires).

Carlos Luján: es politólogo y profesor de Teoría de las Relaciones Internacionales, Negociación y Metodología de la Investigación en la Universidad de la República (Montevideo).

Carlos Romero: es politólogo, doctor en Ciencias Políticas y profesor titular jubilado del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela.

Juan Gabriel Tokatlian: es sociólogo con un doctorado en Relaciones Internacionales. Actualmente, es vicerrector y profesor plenario de la Universidad Torcuato Di Tella (Buenos Aires).

Palabras claves: cambio de régimen, estatalidad, Afganistán, Estados Unidos, América Latina.

Nota: los autores agradecen la asistencia de investigación de Lara Duboscq.

algunas estrategias, políticas y agendas de EEUU en nuestra región. La larga y multimillonaria intervención militar en Asia central es el último hito de una historia tan conocida como penosa: la superpotencia que encabeza el orden liberal mundial desde 1945 construye escenarios débiles de estabilidad, paz, libertad y democracia en zonas de conflicto, que se desploman por un negacionismo que le impide rectificar frente a errores evidentes.

Si queremos trazar una línea que conecte los hechos en Afganistán y América Latina, es necesario analizar el núcleo de irradiación de la búsqueda de primacía de EEUU: su política de intervención internacional. Recurrimos a la geometría para establecer una metáfora potente heurísticamente: como si de un compás se tratara, el análisis toma Washington como punto fijo y rota, desde Asia central hasta América Latina, involucrando modalidades de intervención que obedecen a propósitos previamente definidos: asistencia militar, reconstrucción estatal, cambio de régimen, ayuda humanitaria, intereses materiales, con sus diferencias y similitudes.

El análisis de estas intervenciones permite construir un mapa de aprendizajes sobre caminos que podrían ser recorridos en el vínculo de América Latina con EEUU. Este mapa resulta particularmente importante en momentos en que la primacía mundial estadounidense parece atravesar una fase declinante. Esta situación podría abrir una ventana de oportunidad para que América Latina tenga una mayor autonomía como región, siempre y cuando logre

superar su fragmentación y la volatilidad política que resulta de la polarización interna en muchos de sus países.

Distintas caras de la primacía: sobreextensión y primacía de bajo costo

Iraq, Libia y ahora Afganistán son casos paradigmáticos de lo que podríamos llamar el «síndrome de sobreextensión imperial» (un concepto propuesto por Paul Kennedy y Jack Snyder, entre otros), que se produce en el proceso mismo de la toma de decisiones cuando intereses particulares, inercias burocráticas e ideologías fuertemente enraizadas en la historia y el sistema político estadounidense capturan o secuestran la visión del interés nacional para plantear objetivos irrealizables y narrar fracasos ostensibles como historias de éxito. En la presente coyuntura, la utilización de este concepto invita a preguntarnos sobre los mecanismos que operan en el caso de EEUU, considerando los factores internos e internacionales que podrían llevar a una auténtica rectificación estratégica o a frenarla a partir de un nuevo ciclo de errores repetidos. El zigzaguo entre una actuación que busca enfrentar el terrorismo internacionalizado, luchar contra la insurgencia, promocionar cambios de régimen o reconstruir Estados ha acelerado este ciclo.

EEUU ha implementado diferentes modalidades de actuación en su búsqueda de la primacía mundial, con un tipo de estrategia que puede

sintetizarse así: una potencia no consciente ni tolera el ascenso y la consolidación de una potencia competidora de igual talla. Se trata, básicamente, de que el más poderoso pretende afirmar y sostener su preeminencia. EEUU, durante los dos mandatos del presidente George W. Bush, desplegó una primacía agresiva: ataques preventivos, unilateralismo asertivo, desdén hacia los foros multilaterales, recurso persistente y expansivo a la fuerza y aumento significativo de los gastos militares. Barack Obama ensayó, durante sus dos mandatos, una primacía calibrada: un multilateralismo ocasional, más consultas con los principales aliados de Washington, el repliegue paulatino en algunas guerras como la de Iraq, un mayor empleo de ataques quirúrgicos con drones, ejecuciones extrajudiciales en el exterior y presupuestos de defensa menos abultados que los de su antecesor. Por su parte, Donald Trump implementó una primacía ofuscada. Recurrió a una suerte de diplomacia coercitiva de la sumisión, en la que persuadir era fútil y chantajear resultaba imprescindible. Anunció y aplicó un unilateralismo voraz, rechazó y descreyó de los ámbitos multilaterales, amenazó y apeló al uso de la fuerza, valoró y aumentó los gastos militares, y desechó y despreció a muchos aliados históricos. Actualmente, el presidente Joe Biden esboza una primacía sosegada que apunta a recuperar alguna legitimidad internacional por medio del impulso a la democracia y la revalorización del multilateralismo, al tiempo que procura aliados para cercar

a China y revertir su proyección de poder. En esta modalidad atemperada, a la vez que se reduce el brazo militar, se perpetúa el uso recurrente a las sanciones como instrumento diplomático coercitivo.

La comparación entre Asia central y América Latina con base en la metáfora del movimiento de un compás permite observar cómo, a partir de una misma búsqueda de primacía, se reproducen en ambos escenarios regionales proyecciones diferenciadas del poder estadounidense con prácticas, políticas y modalidades de intervención ya sea por imposición externa o por invitación interna, directas o indirectas, instrumentales o imperativas. No se trata de la reproducción de situaciones similares en las dos regiones, sino de realidades distintas que acompañan las rotaciones del «compás». Mientras que en Asia central prevaleció la ocupación militar prolongada y directa como zaga de la lucha contra el terrorismo, en América Latina y el Caribe la presencia de EEUU en los últimos 20 años se mantuvo sobre la base de una primacía de bajo costo que se benefició de la marginalidad estratégica de la región, al mismo tiempo que la profundizó. Las condiciones regionales de volatilidad política, déficits estatales, vulnerabilidades estructurales, desigualdad y exclusión social, pobreza extrema, violencia criminal y mercados ilegales serían el caldo de cultivo para la experimentación de intentos de «estabilización», «cambio de régimen» y «construcción de capacidad institucional» que, al igual que en

Afganistán, resultaron mal concebidas y contraproducentes.

La retirada militar del gobierno estadounidense y el desmontaje de su enclave administrativo en Afganistán han detonado una nueva ronda de evaluaciones sobre el recurso de la intervención en la proyección internacional de Washington. Una retirada incondicional por «elección», como rotuló Richard Haas, presidente del Consejo de Política Internacional, fue más el fruto de un error de cálculo que una acción impostergable impuesta por la fatiga de la ocupación. La salida no fue obligada, había sido postergada una y otra vez por Bush y Obama para terminar siendo mal negociada por Trump con los talibanes, sin la participación de sus aliados, y mal instrumentada por Biden. Hay algo más que errores de cálculo, pues tanto la intervención como la salida carecieron de objetivos claros, estrategias sólidas e instrumentos adecuados.

Más que reflexionar sobre el impacto de esta situación en nuestra región, proponemos una categorización de las múltiples formas de actuación por vía de la injerencia que ha adoptado el gobierno estadounidense. La primera es la intervención directa con despliegue de fuerza militar, unilateral o colectiva, para resolver a favor de la fuerza interventora y de sus aliados domésticos un *impasse* político-institucional de potencial efecto negativo para el interventor. La segunda es la intervención indirecta a través del apoyo a una determinada elite en el poder vía asistencia militar, provisión de armas,

entrenamiento de fuerzas armadas y de seguridad y acceso a bases internas para impulsar políticas públicas específicas (contrainsurgencia, combate al narcotráfico) afines a sus intereses y los del gobierno de turno. En este caso, sobresale lo que se llama la «intervención por invitación», que atendería a una solicitud de colaboración externa ante la imposibilidad de preservar un mínimo orden interno, con el respaldo activo en materia de seguridad (venta de armamento, provisión de inteligencia, estacionamiento temporal de agentes, soldados y fuerzas especiales, entre otros) para sostener a la elite dirigente en la nación intervenida. Una tercera modalidad consiste en la intervención instrumental con operación y asistencia militar motivada, esencialmente, por objetivos geopolíticos (acceso a fuentes de energía, minerales, recursos estratégicos, etc.). Finalmente, la cuarta forma comprende la intervención imperativa, que también podría merecer el rótulo de humanitarismo armado. En este caso, se ejecuta una acción armada en un país aquejado por problemas graves de derechos humanos, con un propósito altruista y con un alto nivel de consenso internacional. Esta modalidad, motivada por realidades de severas y masivas crisis humanitarias, se ha proyectado en la jerga de la gobernanza global como la «responsabilidad de proteger» (R2P).

Sumamos a esta categorización cuatro puntos de conexión entre las dos realidades bajo foco: recursos estratégicos y sanciones; cambio de régimen y construcción estatal; prohibicionismo

y violencia; y crisis humanitarias de evacuación, refugio y migración.

Recursos estratégicos y sanciones

La economía afgana sufre las consecuencias de las vulnerabilidades acumuladas por la secuencia de guerras, conflictos interreligiosos internos y sucesivas ocupaciones externas. Si bien la importancia estratégica del país está esencialmente anclada en su geografía política, algunos de sus atributos naturales han despertado creciente interés internacional. Desde el campo de la economía política, un *pendant* entre Afganistán y América Latina conduce a la temática de los recursos minerales y tierras raras, en particular las reservas de litio. Fuertemente anhelados por China, estos minerales podrían convertirse en una poderosa moneda de canje entre Kabul y Beijing en un «toma y daca» pragmático entre estabilidad e inversiones. Las reservas de litio de Afganistán, aún por ser exploradas, sumadas a las de otros minerales (cobre, hierro, oro, zinc, etc.) están evaluadas en de uno a tres trillones de dólares. En América Latina existe lo que se denomina el «triángulo del litio», conformado por Chile, Argentina y Bolivia. Estos tres países contienen las reservas explotables de litio más grandes a escala mundial. Se entiende entonces que el litio, junto con reservas minerales y energéticas, puede ser una gran oportunidad de fortalecimiento de los vínculos afganos con China, país que busca ampliar su acceso a materiales

necesarios para su desarrollo industrial y tecnológico. No obstante, hay que subrayar el descalabro ocasionado por la pandemia, que impactó negativamente en la producción y explotación de litio en los países latinoamericanos.

En efecto, la profundización de lazos con China podrá ser un factor vital para los talibanes, que no disponen de medios o formas para reducir sus niveles de dependencia externa. Los años de presencia militar estadounidense contribuyeron a reforzar los típicos procesos de subordinación y reconfiguración de un país bajo ocupación, lo que facilita una lógica de dependencia reemplazada. Algo comparable se produjo en América Latina con el *boom* de los *commodities* y la reprimarización económica estimulada por impacto de la demanda china de minerales y productos agrícolas.

Otro punto de contacto en el ámbito económico, inmiscuido en el tablero de la política mundial, se refiere al de las sanciones comerciales y la automática inclusión del Afganistán talibán como una más de sus víctimas. El plan de ruta decidido en la reciente reunión del G-7 sirvió para reemplazar el menú de la acción militar conjunta por el de la diplomacia coercitiva compartida. Todo esto está por definirse en función de cómo evolucione la situación interna de inseguridad, inestabilidad y derechos humanos en Afganistán. Lo que es claro, sin embargo, es que una eventual escalada de sanciones económicas como instrumento para tratar de influir en ese país bien podría empujarlo a los

brazos de los competidores estratégicos de EEUU: China y Rusia. Esta ha sido, en gran medida, la historia reciente en América Latina. Actualmente una práctica de alcance expansivo, liderada por EEUU y la Unión Europea, la aplicación de sanciones ha estimulado estrategias defensivas que fortalecen los vínculos y las redes de solidaridad entre los países castigados. Se genera una contradiplomacia entre gobiernos enemistados con el círculo de poderes occidentales que contribuye a pasteurizar la idea de amenaza, a securitizar visiones del mundo y a transformar la noción de diferencia en conflicto. Una consecuencia de tal distorsión ha sido la repetición de las estrategias de doble vía adoptadas por Washington en sus reticentes movimientos de diálogo político, sin abandonar el recurso de la coerción.

En América Latina, tanto Cuba como Venezuela son buenos ejemplos de repetidos ciclos de diálogos condicionados por prácticas coercitivas. Son largas las listas de sanciones aplicadas a ambos países que, en el periodo reciente, en el contexto de la pandemia de covid-19, fueron cuestionadas por las propias agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)¹. Ya en 2015, durante el

gobierno de Obama, la Casa Blanca calificó a Venezuela como un «inusual y extraordinario peligro para la seguridad nacional», bajo la orden ejecutiva 13.692 del 8 de marzo de 2015, emanada de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, renovada y ampliada varias veces por el presidente Trump y también en 2021 por el presidente Biden². Al mismo tiempo, se ha implementado un conjunto de sanciones para evitar que el régimen venezolano pueda seguir exportando petróleo e importando gasolina y otros productos derivados del petróleo del exterior³. Entre tantas consecuencias, las importaciones petroleras estadounidenses desde Venezuela se redujeron de 1,2 millones de barriles diarios en 2008 a cero en 2020, y el comercio exterior de bienes entre los dos países pasó de 56.200 millones de dólares en 2012 (el último año del último ciclo positivo de la economía venezolana) a 1.200 millones en 2020. Las exportaciones de EEUU a Venezuela facturaron 17.500 millones en 2012 y 1.130 millones en 2020. Las importaciones de EEUU desde Venezuela superaron los 38.700 millones en 2012 y en 2020 fueron tan solo de 168 millones⁴.

1. Naciones Unidas: «Bachelet pide que se reevalúen las sanciones a Cuba y Venezuela en medio de la pandemia del coronavirus» en *Noticias ONU*, 24/3/2020.

2. J. Biden: «A Letter on the Continuation of the National Emergency with Respect to Venezuela», 3/3/2021, disponible en <www.whitehouse.gov/>.

3. Departamento del Tesoro de EEUU: «Treasury Targets Venezuelan Oil Sector Sanctions Evasion Network», comunicado de prensa, 19/1/2021, disponible en <<https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1239>>.

4. Oficina del Censo de EEUU: «2021: US Trade in Goods with Venezuela», cuadro en <www.census.gov/foreign-trade/balance/c3070.html>.

Cambio de régimen y estatalidad

En cuanto a América Latina, el fracaso estadounidense en la reconstrucción de Afganistán y la instalación de la democracia en ese país podría alejar toda posible intervención militar de EEUU en la región en general y en Venezuela en particular. Entre tanto, ahuyentar opciones extremas no significa excluir otros formatos de injerencia. Los cambios de régimen son más complejos, caros, largos y difíciles de lograr de lo que el establishment estadounidense ha concebido hasta el momento. Requieren, además, de un apoyo interno casi imposible de obtener en el actual contexto de polarización política estadounidense.

El esfuerzo de diseñar e implementar un régimen democrático en Afganistán ha fracasado por su limitada capilaridad, causada por la miopía imperial frente a las malas prácticas de sus aliados políticos locales, incentivadas por el derrame de recursos. Hay, además, una responsabilidad rara vez reconocida por parte de la red de intermediarios privados estadounidenses en la corrupción endémica de este tipo de intervenciones en el extranjero.

Después de 20 años, la irradiación de políticas comprometidas con el Estado de derecho se mantuvo concentrada en reducidas zonas del país y no alteró las raíces estructurales de los dramáticos niveles de pobreza y la carencia de políticas públicas en temas esenciales como salud, educación, infraestructura y derechos humanos. La fuerte dependencia de la ayuda

internacional quedó al desnudo en 2020 a partir de la decisión de pactar la salida de EEUU, lo que provocó una instantánea retracción de las fuentes internacionales de asistencia para el desarrollo.

Puede darse un efecto de contagio negativo en otros casos y en otros continentes, en la medida en que el realismo político supla al orden liberal y que la crítica a este vea florecer el tema del poder «desnudo», a la par de la reducción de los alcances de un buen gobierno y de las libertades fundamentales. Resurge un pensamiento pesimista en los sectores académicos y decisionales estadounidenses sobre la imposibilidad de exportar el modelo democrático a espacios periféricos y en cuanto a que prevalezca el concepto de razón de Estado por encima del concepto de Estado de derecho.

Ha sido usual que funcionarios civiles y militares de EEUU, en gobiernos demócratas y republicanos, acuñen términos respecto a los Estados del Sur global a los que se percibe como enemigos de Washington: Estado «paria» (*pariah*), Estado «villano» (*rogue*), Estado «forajido» (*outlaw*), Estado «fanático» (*backlash*), Estado «rufián» (*outcast*), Estado «fallido» (*failed*), Estado «fantasma» (*phantom*), Estado «maligno» (*malign*). Más allá de esas construcciones, los resultados de EEUU en sus intentos de derrotarlos, modificarlos o neutralizarlos han sido muy débiles. Más aún, en ciertos casos, Washington ha hecho «fallecer» Estados o los ha hecho más violentos (un ejemplo es la Libia post-Gadafi). Esos

términos se han usado en diferentes gobiernos en casos de América Latina (a lo largo y ancho de la región) y Asia central (en especial, Afganistán): el resultado de las acciones de fuerza para «enderezar», «transformar» o «revertir» tales Estados ha sido paradójicamente contrario a los objetivos trazados. Injerencias que afectan las capacidades estatales ya fragilizadas terminan afectando los controles civiles y democráticos sobre las Fuerzas Armadas y los aparatos de seguridad y comprometen la protección a los derechos humanos. En América Latina, este proceso de erosión viene facilitando la opción de un «neogolpismo», que se considera diferente del golpe de Estado tradicional y que pervierte la institucionalidad democrática y debilita el Estado de derecho con una violencia menos ostensible.

Colombia y Venezuela representan los ejemplos sobresalientes del binomio búsqueda de primacía/intervención de EEUU en los últimos 20 años⁵. La intervención por invitación en el caso colombiano tuvo como piedra angular el llamado Plan Colombia. En este marco, entre 2000 y 2016 EEUU brindó una asistencia de más de 10.000 millones de dólares. En esencia, se trató de una iniciativa antinarcóticos que se fue convirtiendo en un plan contrainsurgente y que incorporó elementos de un plan antiterrorista. La ayuda de Washington

tuvo una dimensión de seguridad y contó con la presencia de efectivos militares y asesores de inteligencia estadounidenses en Colombia, a punto tal que, en algunos años de la primera década de este siglo, la embajada de EEUU en Bogotá fue la más numerosa del mundo después de la embajada en Iraq. En 2009, el embajador William Brownfield afirmó que el Plan Colombia era «el ejercicio de construcción de naciones más exitoso al que EEUU se ha asociado quizás en los últimos 25-30 años»⁶. Con el tiempo, Colombia se fue transformando en la plataforma clave de una *proxy war* o guerra subsidiaria en Venezuela. Una estrategia «delegativa» por parte de EEUU con bajos costos.

Venezuela, por su parte, ha merecido una secuencia de intentos frustrados de injerencia que mezclan modalidades de intervención directa e indirecta. A partir de la primera victoria electoral de Hugo Chávez en 1998, Washington ha tratado por varias vías de cambiar el régimen venezolano; de manera directa, en el caso del apoyo dado a las insurgencias militares de 2002 y el breve gobierno presidido por Pedro Carmona y con el respaldo al gobierno paralelo de Juan Guaidó. De manera indirecta, tratando de desplazar diplomáticamente a los gobiernos de Chávez y de Nicolás Maduro, reduciendo y rompiendo desde 2019 las relaciones diplomáticas y consulares

5. La omisión del caso de Cuba no significa ignorar los persistentes intentos estadounidenses de injerencia y desestabilización en la realidad de este país desde 1960. Sin embargo, las relaciones de EEUU con Cuba arrastran otro tipo de complejidad histórica y de entramado interméstico bilateral.

6. «Colombia to Aid us in Taliban Fight» en *CBS News*, 27/7/2009.

entre los dos países, procurando crear alianzas de otros gobiernos en contra del régimen y apoyando a la oposición venezolana. En este contexto, los gobiernos estadounidenses han calificado al régimen venezolano de acuerdo con el vocabulario estratégico dominante en círculos académicos y decisionales, etiquetando al país como «Estado fallido», «Estado forajido», «Estado terrorista», con una emergencia humanitaria compleja y como una dictadura, pero hay un hecho cierto: no se ha dado un cambio de régimen ni ha habido una intervención militar por parte de tropas estadounidenses. De igual modo, en Venezuela no hay una guerra civil.

Prohibicionismo y violencia

Las cuestiones pertenecientes al ámbito de la securitización global que nutren la percepción de amenaza del gobierno de EEUU en las últimas dos décadas son comparables *ma non troppo* en Asia central y América Latina y el Caribe. Se destacan el terrorismo, el tráfico de drogas y la violencia armada. Después de 20 años, no parece precipitado afirmar que América Latina y el Caribe es un «zona libre de terrorismo», lo que se comprueba por la ausencia de redes terroristas transnacionales. La tergiversación producida por EEUU para justificar sus políticas de falsos positivos en cuanto a la existencia de tales redes o de grupos aislados

se tornó en un caldo de cultivo para los procesos de polarización política en muchos países latinoamericanos.

Ya en materia del control sobre la producción de drogas, la punta del compás encuentra más fácilmente sus líneas de contacto. En cuanto a sustancias psicoactivas declaradas ilícitas, el triángulo andino (Colombia, Perú y Bolivia) produjo, según el informe de 2021 de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), unas 1.700 toneladas de cocaína, mientras que la producción de heroína en Afganistán alcanzó a unas 6.300 toneladas⁷. En síntesis, en ambos espacios se produjeron las mayores cuantías de dos de las sustancias de base natural, salvo la más potente variedad sin semilla de marihuana que se produce en EEUU. A su vez, la minería ilegal es parte importante de la economía de Afganistán, al tiempo que ha prosperado en los países amazónicos (Brasil, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia): negocios muy lucrativos que vienen reforzando la ilegalidad material y la precariedad estatal. El papel de los militares para resolver la cuestión de las drogas ha sido un fracaso y ha resultado peligroso. La militarización de la lucha antinarcóticos ha sido fallida en cuanto a revertir el fenómeno, al mismo tiempo que ha generado graves perforaciones institucionales: (a) aumentó las violaciones de derechos humanos cometidas por las

7. UNODC: 2020 *World Drug Report*, Naciones Unidas, 7/2020, disponible en <https://wdr.unodc.org/wdr2020/field/wdr20_booklet_3.pdf>.

Fuerzas Armadas; (b) desequilibró la relación cívico-militar en desmedro de los civiles; (c) elevó la corrupción entre soldados y generales; (d) generó grupos paraestatales que se asocian a miembros de las Fuerzas Armadas en una degradada lucha contra el narcotráfico; (e) incrementó la desmoralización de los militares; (f) debilitó la defensa del país; y (g) vulneró la capacidad de inteligencia del Estado.

La incapacidad de lidiar con el tema de la droga camina lado a lado con la relativa a la violencia. La guerra en Afganistán ha producido en 20 años miles de muertos entre los combatientes, un número casi similar de civiles y más de 2,5 millones de refugiados⁸. La violencia armada, criminal e institucional en América Latina es asombrosa; en especial, en los países que conforman la amplia Cuenca del Caribe, al tiempo que recientes situaciones dramáticas como la de Venezuela han generado más de cinco millones de migrantes y refugiados. A su vez, entre los 20 países con las más altas tasas de homicidios, 15 están en América Latina y el Caribe. Según el Observatorio Venezolano de Violencia, en 2020 hubo en ese país 11.891 muertes por causas violentas: 4.231 muertes por resistencia a la autoridad, 4.153 homicidios y 3.507 muertes que se encuentran en averiguación penal. De acuerdo con esta ONG, lo que resalta es

el aumento de la «violencia policial» y de las acciones extrajudiciales⁹.

En Afganistán, EEUU proporcionó más de 80.000 millones en armamentos y entrenamiento a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas de seguridad. En América Latina, EEUU es el principal proveedor de armas livianas, que son utilizadas en 75% de las muertes violentas¹⁰. Eso es letal en una región que, con 8,3% de la población mundial, representa 37% de los homicidios en el mundo.

Crisis humanitarias de evacuación/refugio y migración

No dejó de ser llamativo el hecho de que, al final de su primer pronunciamiento después de la toma de Kabul por los talibanes, el presidente Biden hiciera una referencia a los esfuerzos de su gobierno para asistir a la población haitiana frente a las severas condiciones humanitarias enfrentadas después del sismo del 14 de agosto último. Son y seguirán siendo notables las diferencias entre lo que significa el desmontaje desprolijo de 20 años de una ocupación político-militar *de facto* y un prolongado tutelaje marcado por la desidia y el abandono. «*Boat-people*», la expresión despectiva utilizada para hacer referencia a los haitianos que llegan ilegalmente a territorio

8. Jens Manuel Krogstad: «Key Facts about Refugees to the US», Pew Research Center, 7/10/2019.

9. Roberto Briceño León, citado en «La violencia en Venezuela fue 'más letal' que la pandemia, según ONG» EN DW, 29/12/2020.

10. «ONU: 75% de los homicidios en América se producen con armas de fuego» EN DW, 15/7/2020.

estadounidense y «*plane-people*», como se podrían llamar las centenas de miles de afganos evacuados, son igualmente víctimas de una mezcla de infortunios en la cual no ha sido menor la responsabilidad de las sucesivas administraciones estadounidenses. Se observan vicios semejantes en la ayuda de EEUU a Haití y a Afganistán. La concentración de recursos destinados al campo de la seguridad —la Policía Nacional Haitiana y el Ejército afgano— y el descuido de los temas esenciales para la reconstrucción de los países, empezando por la infraestructura básica y la reducción de la pobreza, dan cuenta de ello¹¹. Su lugar como principal donante de la ayuda a estos países amplía la responsabilidad de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y otros entes de la administración estadounidense por años y décadas de ayuda mal distribuida, erróneamente gastada y el manejo de la migración masiva de los ciudadanos de estos países con paliativos. Los efectos son bien conocidos: la destrucción de capacidades de producción de alimentos, la expansión desmedida de la economía informal, con presencia dominante del sector de servicios, una cosmética apariencia de modernización acompañada por índices elevados de corrupción¹².

En lo que va del siglo, las crisis humanitarias a escala global se han

agravado por conflictos, desastres y ahora la pandemia, lo que ha generado un aumento de la población vulnerable de refugiados, desplazados y migrantes forzados. En 2021, según la ONU, 238 millones de personas requerirán asistencia humanitaria y protección internacional, 30% más que en 2020. Las crecientes necesidades de evacuación, atención y protección internacional ejercen cada vez más presión sobre países fronterizos y sobre los regímenes existentes en materia de asilo y migración en EEUU y sus aliados europeos, precisamente cuando las visiones restrictivas y antiinmigración han ganado terreno político en el plano interno. En materia humanitaria, Asia central y la Cuenca del Caribe son dos focos rojos: 11% de los refugiados provienen de Afganistán y 16% de Venezuela, respectivamente. En nuestra región hay que sumar el reciente éxodo silencioso de población haitiana, hondureña, cubana, salvadoreña y guatemalteca expulsada por la situación crónica de violencia, inestabilidad política, fragilidad económica y desastres naturales que, en 2020, alcanzó a cerca de un millón de personas. Y no hay que olvidar que el principal corredor migratorio del mundo es el conformado por EEUU, México y Centroamérica, donde, además, se registra el mayor número de muertes de migrantes en tránsito.

11. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): «Boosting Private Sector Development and Entrepreneurship in Afghanistan», OECD Policy Insights, 2019.

12. De acuerdo con el índice de percepción de corrupción elaborado por Transparency International en 2020, Afganistán ocupaba el lugar 165 y Haití, el 170, sobre un total de 180 países considerados. V. <www.transparency.org/en/cpi/2020/index/afg>.

Los contrastes de atención y desatención frente a distintas situaciones humanitarias resultan enigmáticos. La visibilidad del éxodo venezolano (5,4 millones) contrasta con el silencio frente a los 8,2 millones de desplazados internos en Colombia. Las imágenes de la emergencia humanitaria en Afganistán para evacuar, trasladar y dar acogida a miles de refugiados chocan con la invisibilización de los haitianos y centroamericanos varados en las fronteras mexicanas y con los esfuerzos de externalización de los controles fronterizos estadounidenses para detener a estas personas que han desplegado gobiernos republicanos y demócratas, incluido el de Biden. La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de restablecer el programa «Quédate en México», que obliga a los solicitantes de asilo a esperar su trámite en terceros países sin garantías ni protección, y las restricciones legales para acoger con rapidez a los refugiados afganos que en su momento lo apoyaron representan auténticas derrotas morales para EEUU en su calidad de principal oferente de asistencia humanitaria en el mundo.

Lecciones y proyecciones

La intervención internacional en Afganistán no fue una política pública integral de dos décadas de duración, sino la mera sucesión de políticas internacionales llevadas adelante por seis gobiernos estadounidenses. Evidentemente, el caso de Afganistán, en el marco

de Eurasia, no es equiparable en términos geopolíticos al de América Latina. Afganistán se localiza en lo que Zbigniew Brzezinski llamó el «gran tablero mundial», objeto de una intensa disputa estratégica entre distintas grandes potencias como EEUU, China, Rusia y la India, y pivotes gravitantes como Turquía e Irán. América Latina y el Caribe cargan con una ubicación geopolítica marcada por su relativa marginalidad respecto de los grandes escenarios de competencia global y zonas de conflicto militar, pero sobre todo por la asimetría estructural y la subalternidad política de un «pequeño tablero» de EEUU.

A primera vista, no se da una correlación entre lo que sucede en Asia central y la cuenca del Caribe. Sin embargo, puede proyectarse una vinculación en cuanto a lo que EEUU, la UE y otros actores internacionales tienen como una prioridad geopolítica: evitar que América Latina se categorice como una región en «emergencia» e internacionalizada, en disputa por actores globales, que se convierta entonces en un tablero inestable, no institucionalizado y que sea una fuente de rivalidades y de violencia.

América Latina y el Caribe podrá tornarse un escenario de continua pérdida de prioridad para EEUU siempre y cuando China no decida jugar fuerte en la región desplegando una presencia económica, político-estratégica y/o militar –tal como lo hizo la Unión Soviética a principios de la década de 1960 en Cuba–. Esta posibilidad no parece estar en el horizonte de

mediano plazo, en tanto son los mares de la China y varios países de África donde podrían aparecer líneas tectónicas de fricción o, incluso, de fractura en el nivel internacional.

En este contexto, la actual situación podría ser vista como un momento de «desolaciones compartidas», o que podría traducirse en una de oportunidad para replanteos en el diálogo político entre América Latina y el Caribe y EEUU. Tal posibilidad, entre tanto, implica un cambio de orientación del lado de Washington y el descarte de posiciones fragmentadoras por parte de los países de nuestra región. El uso indebido del sistema interamericano – Organización de Estados Americanos (OEA), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR)– contribuyó a desdibujar y comprometer la noción de intereses comunes. La pregunta es entonces: ¿sería posible establecer una agenda de diálogo entre EEUU y América Latina y el Caribe a

partir del reconocimiento de necesidades específicas?

Los puntos de contacto del compás entre las realidades afgana y de nuestra región son también los temas sustantivos sobre los cuales habrá que trabajar para lograr procesos sustentables de diálogo y negociación. De manera resumida, delimitamos tres prioridades: (a) transiciones democráticas y no cambios de régimen –hijos de intervenciones militares de distinto tipo– y apoyo al fortalecimiento de la estatalidad desde y con una participación plural de los actores nacionales (sociales, económicos, políticos y culturales); (b) definición de una agenda migratoria humanitaria entre países de la región, y de la región hacia EEUU; y (c) temas de coordinación de la lucha contra el crimen transnacional y la violencia social y política, con particular atención en el fracaso de la «guerra contra las drogas», que generó la militarización del tratamiento de la problemática y una elección ineficaz de los remedios administrados. ☒

PÁGINAS

Septiembre de 2021

Lima

Nº 263

ACTUALIDAD: La vacancia en el orden del día, **Pilar Arroyo**. **REFLEXIÓN:** La promesa republicana. Una meditación sobre nuestro Bicentenario, **Gonzalo Gamio Gehri**. Desafíos del bicentenario. Una relectura desde la teología de la liberación, **Marco Antonio Prieto Caso**. ¿Qué ves? (Jer 1,11). Una mirada profética de la realidad, **Mila Díaz Solano, OP**. Para que tengamos vida plena, **Carlos Flores Lizana**. Re-vestir vidas desnudadas. Biopolítica desde la opción preferencial por los pobres, **Glafira Jiménez París**. El efecto Pigmalión o el buen samaritano de la educación, **Jorge de Juan Fernández y Carlos González de la Mota Bianchi**. La «Prisión Permanente Revisable» desde la bioética y la ética de la compasión, **José Ramón Pascual García**. **ENTREVISTA:** José Ignacio González Faus: más calidad que cantidad, la Iglesia en el cambio de época. Entrevista de **Aníbal Pastor**. **INFORME:** Recrudece el hambre en el mundo y en el Perú, **Carmen Lora**. **DOCUMENTOS:** V Jornada Mundial de los pobres. **Mensaje del papa Francisco**. Con paso firme, hagamos grande nuestro Perú. **Mensaje de los Obispos del Perú**. El asesinato del presidente de Haití. Espejo del caos político y socioeconómico de una sociedad, **Los jesuitas de Haití**. Sostener la esperanza, **Mensaje de la Conferencia de religiosas y religiosos de Cuba**.

Edita y distribuye Centro de Estudios y Publicaciones, Belisario Flores 681 – Lince, Lima 14, Perú. Tel.: (511) 4336453 – Fax: (511) 4331078. Correo electrónico: <paginas@revistapaginas.com.pe>. Página web: <www.revistapaginas.com.pe>.

An aerial, black and white photograph capturing a massive crowd of people filling a city square. The crowd is dense and extends across most of the square's area. In the upper right, a tall, modern building with a grid-like facade stands prominently. At the bottom of the frame, a multi-lane road is visible with several cars and a large truck. The overall scene conveys a sense of large-scale public gathering or protest.

| TEMA CENTRAL

Agitación en América Latina

América del Sur: una periferia convulsionada

Bernabé Malacalza

América del Sur es la región más castigada del planeta como efecto del coronavirus. Una gran depresión económica de arrastre y un creciente malestar social, agravados por la pandemia, hacen al actual estado de convulsión, que se expresa en protestas sociales. Al mismo tiempo, se observa en este delicado escenario un incremento de la presencia de Estados Unidos y de China que, desde diferentes prismas, observan con atención la espiral de inestabilidad e intentan demarcar diversas formas de control.

«Quien ha visto vaciarse todo, casi sabe de qué se llena todo», escribió Antonio Porchia, escritor italo-argentino, en 1943¹. Para una región como América del Sur, que ingresó en un estado de convulsión en 2019 por distintos motivos, que ha visto dismantelados en ese mismo año organismos regionales como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y mecanismos de gobernanza como el Consejo Suramericano de Salud, y que se encuentra más vulnerable y expuesta a la rivalidad entre Estados Unidos y China desde que Washington decidió apostar a frenar la ascendente influencia económica, financiera, comercial y tecnológica de Beijing en su periferia, es una necesidad clave conocer lo que se vació para aspirar a llenarlo.

Bernabé Malacalza: es doctor en Ciencias Sociales, investigador adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina y docente del doctorado en Desarrollo Económico de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y de la maestría en Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT).

Palabras claves: crisis, multilateralismo de bienestar, sindemia, América del Sur, China, Estados Unidos.

1. A. Porchia: *Voces reunidas*, Alción Editora, Córdoba, 2016.

Indicar de qué forma y por qué razones América del Sur se ha convertido en la región más castigada del planeta a causa de la pandemia de coronavirus no es una parada sencilla. El momento actual es singular en muchos sentidos. ¿A qué se debe el impacto desproporcionado de la pandemia en la región? ¿En qué medida ello obedece a causas endógenas? ¿Cuáles son los puntos candentes que las principales potencias, Washington y Beijing, están observando? ¿Contribuye la presencia ubicua de potencias extrarregionales a la erupción de este volcán? ¿Cómo se puede canalizar un impulso constructivo centrípeto que no sea meramente restaurador de fórmulas pasadas y responda adecuadamente a los desafíos actuales?

Algo se rompió

A fines de junio de 2021, América del Sur acumula más de 75.000 casos de covid-19 por cada millón de habitantes, casi 10.000 más que América del Norte y por encima de esa cifra respecto a Europa. Los 985.346 muertos contabilizados oficialmente por causa de la enfermedad son equivalentes a una proporción de 25,3% del total mundial, a pesar de que la población sudamericana representa solo 5,5% del total global. Una tesis extendida sobre las razones de este descalabro es que los efectos de la pandemia se habrían agudizado por el mayor costo relativo socioeconómico —en comparación con los países desarrollados— de implementar medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio. Desde el inicio de la pandemia, los gobiernos debieron buscar un delicado equilibrio entre los objetivos de salud pública, cumpliendo a la vez con el mandato conferido por la población para conservar los medios de subsistencia y la actividad económica. Sin embargo, ¿cuáles han sido los condicionantes estructurales previos?

La pandemia de covid-19 llegó a América del Sur con el trasfondo de una gran crisis de arrastre. La región estaba en su peor crisis en casi un siglo antes de 2020. Según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el sexenio 2014-2019 fue uno de los de menor crecimiento desde que hay registro, solo comparable con los que incluyen a la Primera Guerra Mundial o la Gran Depresión. El crecimiento promedio fue de solo 0,3% y el crecimiento por habitante fue negativo. De esa manera, la pandemia llegó en el peor de los escenarios y llevó a la mayor contracción del PIB desde 1900 y a que se registrara en América del Sur el desempeño más pobre entre las regiones en desarrollo. Como si esto no bastara, el descalabro social conforma un cóctel explosivo con los desequilibrios económicos. En el último año, la tasa de pobreza alcanzó el 33,7%, la desigualdad en la distribución del ingreso aumentó el equivalente a 2,9% del índice de Gini y la

inseguridad alimentaria llegó a 40,4% de la población, lo que significa una proporción de 65 millones de personas². La situación, por lo tanto, no solo es de declinación, sino de un contrato social fracturado, tal como lo refleja el fuerte deterioro de los indicadores económicos y sociales.

Previo a la pandemia, ya se observaba una considerable inconformidad de los sudamericanos con la persistente desigualdad y una insatisfacción con el funcionamiento de la política. Esto se ha traducido en demandas de mayor igualdad y no discriminación, y en algunos casos, en procesos de movilización social. Las protestas sociales que estallaron a fines de 2019 en Chile, Ecuador y Bolivia siguieron su paso firme en Perú, Brasil y Colombia, pese al contexto de plena ebullición de casos de covid-19. La erupción de este volcán es un subproducto de un creciente malestar social que deviene de la exacerbación de una situación de efervescencia previa, concatenada con una variedad de causas políticas, económicas y sociales. Según un estudio de la Cepal³, el aumento de las frustraciones de la ciudadanía está relacionado con el deterioro socioeconómico, que se traslada a un cuestionamiento generalizado de la distribución del bienestar, el acceso a la salud, la educación o la protección social y la desigualdad social; con las debilidades político-institucionales, que se expresan en una insatisfacción con la representación política; y con la evaluación negativa de las relaciones sociales, manifestada en experiencias de individualismo exacerbado, polarización ideológica y vivencias de discriminación. La fractura está expuesta.

En esa dirección, es menester observar que el concepto de pandemia no solo es insuficiente, sino que podría ser acotado e inútil para demarcar el fin de un evento cuya duración aparentemente será mucho mayor que el tiempo que lleve la inmunización colectiva de América Latina. En el actual contexto, es correcto hablar de «malestar en la sindemia». El concepto de sindemia admite varias acepciones. Una de ellas es la suma de dos o más epidemias concurrentes o secuenciales que exacerbaban el pronóstico y la carga de una enfermedad. Un ejemplo reciente es el comienzo de la circulación comunitaria y simultánea de las nuevas variantes de covid-19 propias de la región (Lambda y p1) y de otras regiones (Delta). Otra acepción refiere al neologismo creado mediante la unión de las palabras «sinergia» y «epidemia», que fuera acuñado por la antropóloga Merrill Singer a

En el actual contexto, es correcto hablar de «malestar en la sindemia»

2. Cepal: «La paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe. Crecimiento con persistentes problemas estructurales: desigualdad, pobreza, poca inversión y baja productividad», Informe Especial Covid-19 N° 11, 7/2021.

3. Cepal: *Panorama social de América Latina 2020*, Naciones Unidas, Santiago de Chile, 2021.

mediados de la década de 1990⁴. Las sindemias son fenómenos biosociales que suelen ser consecuencia de una inequidad sanitaria previa causada por factores como la desigualdad social, la pobreza o la violencia estructural. La figura se parece a una *matrioshka*, la muñeca icono de la cultura rusa, en la que una pieza madre contiene varias piezas más hasta llegar a la pieza semilla. En ese sentido, la crisis pandémica es solo una capa exterior, mientras que en el núcleo están los desequilibrios económicos, sociales y ambientales.

La región, por lo tanto, inició una nueva década con tres grandes y complejos desafíos: una gran depresión de arrastre, un creciente malestar social expresado en movilizaciones sociales y el impacto de una sindemia cuyo final es todavía incierto. La llegada de la vacuna regeneró esperanzas, pero

**¿Estamos
ad portas de una
nueva ola
de inestabilidad
social e
institucional?**

no solucionó las cuestiones de fondo. Tanto por los problemas estructurales de índole social y económica como a raíz de la pandemia, en la región se experimenta un gran deterioro de las condiciones de vida, que se observa en indicadores objetivos que tienen correlato en expresiones subjetivas de malestar. Mientras América del Sur atraviesa aún el coronavirus con diferentes ritmos de vacunación en los países, ¿estamos *ad portas* de una nueva ola de inestabilidad social e institucional?

¿Expresan las movilizaciones en Chile, Ecuador, Perú, Brasil y Colombia distintas aristas de una ruptura del contrato social en la región? ¿Qué implicancias tiene y tendrá esta «gran convulsión» en la geopolítica regional?

EEUU y la «presencia por evangelización»

Los principales objetivos históricos de Washington en la región han sido garantizar su seguridad y propender a una estabilidad deseada. Para lograrlo, aplicó premios y castigos, políticas de «buena vecindad» y de «gran garrote», mediante un amplio abanico de instrumentos que van desde la ayuda y el financiamiento al recurso a la coerción diplomática, la ocupación física o la instalación de bases militares. Hoy la preocupación palpable de Washington se expresa en la percepción de que las causas de la fragilidad regional pueden ser múltiples, no solo político-institucionales, sino también sociales, económicas y ambientales. Aun en países que demuestran solidez institucional, el deterioro de la situación socioeconómica y/o el malestar social a raíz de la pandemia pueden ser fuente de crisis e inestabilidades varias.

4. M. Singer: *Introduction to Syndemics: A Critical Systems Approach to Public and Community Health*, John Wiley & Sons, San Francisco, 2009.

Esta situación de «periferia convulsionada» no solo implica un mayor peso de las relaciones de jerarquía entre centro y periferia, sino también la peculiaridad de que las elites regionales son hoy más vulnerables a la «tensión emocional» que implica la disputa EEUU-China. En 1950, cuatro años después de enviar su famoso cable al secretario de Estado estadounidense George Marshall en el que detallaba sus puntos de vista sobre la Unión Soviética y la política estadounidense al respecto, George Kennan envió otro memorando al secretario de Estado Dean Acheson en el que incluyó una serie de afirmaciones notables sobre la importancia de América Latina para EEUU ante una eventual guerra con la URSS⁵. La relevancia de la región –sostenía Kennan– no guardaba en sustancia relación con la presencia de bases militares, tampoco con la defensa del Canal de Panamá y el reaseguro de la presencia naval en dos océanos; en esencia, radicaba en «la posibilidad de que las actitudes de los latinoamericanos puedan influir en la tendencia política general de la comunidad internacional». En pocas palabras, habría sido un golpe profundo a la moral de Washington que la región se sumase al bando opositor. Estas recomendaciones de Kennan, que apuntaban a restaurar el dominio y la presencia estadounidenses en la región sobre la base de que era importante «mantener la realidad de que somos un gran poder y que los latinoamericanos nos necesitan más de lo que nosotros a ellos», hoy parecen cobrar vigencia⁶. ¿En qué medida pesa en la actualidad el factor psicológico en la disputa entre EEUU y China? ¿Da esto pie a una suerte de estrategia de evangelización desde Washington sobre los paraísos que ofrece el país del Norte frente al infierno que implicaría para la región alinearse con China?

La «Guía estratégica provisional de seguridad nacional» dada a conocer por el gobierno de Joe Biden el 3 de marzo pasado define a China como «el único competidor», una condición de gran rival que no difiere en esencia de lo expresado por la administración Trump. Si bien el gobierno de Biden inició sus primeros contactos en América Latina con México y Centroamérica como prioridad, ha comprendido, en el marco de la rivalidad con China y la creciente presencia de este país en América del Sur, que es importante desarrollar una estrategia hacia la región que aborde tanto los fenómenos de la convulsión como de la penetración. Las principales señales de alarma en el primer año de gobierno parecen estar en el riesgo de una espiral de inestabilidad regional que genere condiciones para la penetración de actores externos, primordialmente China. Ese

5. Juan Tokatlian: «Latin America Between Kennan and Obama» en *Project Syndicate*, 15/5/2015.

6. «Memorandum by the Counselor of the Department (Kennan) to the Secretary of State, Washington», 29/3/1950, disponible en <<https://resources.primarysource.org/c.php?g=767969&cp=5508195>>.

diagnóstico aparece también en una alocución del 16 de marzo pasado del jefe del Comando Sur, Craig Faller:

Hay una espiral acelerada de inestabilidad que se apodera de la región a medida que la pandemia ha aumentado la fragilidad. América Latina y el Caribe han sufrido una de las tasas de mortalidad por covid-19 más altas del mundo, y durante mis viajes a la región, fui testigo de la profunda tensión física y emocional que están experimentando las naciones. (...) Inmediatamente después de las protestas públicas generalizadas contra los gobiernos en toda la región a fines de 2019, estas pérdidas por el covid-19, junto con agravantes socioeconómicos de larga data y corrupción, han creado las condiciones para una inestabilidad y disturbios aún mayores entre nuestros países socios. Estas condiciones crean una región más frágil que sirve como terreno fértil para que nuestros competidores promuevan sus propios intereses, tanto malignos como legítimos, lo que hace que este desafío sea aún más complejo. Incluso algunos de nuestros socios más fuertes corren el riesgo de inestabilidad debido a esta confluencia de factores (...).⁷

Si bien no existe un documento de referencia, los lineamientos para América del Sur se pueden inferir de la visita a Brasil y Argentina del asesor de Seguridad Nacional de EEUU, Jack Sullivan, en agosto de este año; o bien de las declaraciones públicas de los funcionarios de menor rango del Departamento de Estado y del Consejo de Seguridad Nacional. Una de las máximas preocupaciones de EEUU que aparecen en el corto plazo es el posible desembarco en la región de la tecnología 5G, de la mano de las empresas de telecomunicaciones chinas Huawei y ZTE. Así, la opción del veto a las «telcos» chinas ha sido presentada como un «auxilio» para que los países de la región eviten caer en los tentáculos «malignos» y no transparentes de China. No se trata, sin embargo, de una confrontación nueva, sino de algo que se remonta ya a la presidencia de Barack Obama, cuyo gobierno inició las primeras investigaciones sobre las firmas chinas⁸,

7. Declaración del almirante Craig S. Faller, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos ante el 117^{mo} Congreso del Comité de Servicios Armados del Senado, 16/5/2021, disponible en <www.southcom.mil/>.

8. La primera vez que las «telcos» chinas fueron categorizadas como amenaza a la seguridad fue en 2012, en el informe «Investigative Report on the US National Security – Issues Posed by Chinese Telecommunications Companies Huawei and ZTE», elaborado por un comité del Congreso y disponible en <[https://stacks.stanford.edu/file/druid:rm226yb7473/HUAWEI-ZTE%20INVESTIGATIVE%20REPORT%20\(FINAL\).pdf](https://stacks.stanford.edu/file/druid:rm226yb7473/HUAWEI-ZTE%20INVESTIGATIVE%20REPORT%20(FINAL).pdf)>.



y continuó con Donald Trump en la Casa Blanca, cuando se aplicaron las primeras restricciones y sanciones⁹.

La disputa tecnológica encuentra también su correlato en la diplomacia de vacunas. En esa dirección, la estrategia de donaciones a la región dispuesta por el secretario de Estado Anthony Blinken busca reaccionar y contrarrestar el avance de las vacunas de China y Rusia, mientras se habilita el apoyo logístico a los laboratorios farmacéuticos estadounidenses en competencia con los chinos y los rusos por el acceso a mercados. Como se observa en el cuadro 1, las prioridades de las donaciones en la subregión han sido extender el salvataje a Paraguay –único país que mantiene su lealtad a Taiwán en el histórico diferendo–, apoyar a Uruguay –en tratativas para un acuerdo comercial amplio con Washington– y asistir a Ecuador y Colombia –países de importancia en la dimensión militar–. No es novedad entonces que los intereses estratégicos y económicos de Washington se entrelacen en un mismo canal, combinando componentes defensivos (reacción) y ofensivos (presencia).

A diferencia del periodo de la Posguerra Fría, en el actual escenario de disputa con Beijing Washington no asume exclusivamente un rol de monitoreador férreo y/o de soporte de la estabilidad, sino que se muestra decidido a extender una «presencia por evangelización», de manera similar al Imperio español, con el objetivo de ejercer una mayor influencia política sobre los gobiernos y contrarrestar el avance económico, comercial y financiero de China sobre su «patio trasero». En ese sentido, Washington apela al mantra de la democracia y la transparencia no solo para rivalizar con el modelo político de China, sino también para intentar frenar su creciente poderío económico en la región. ¿Posee hoy Washington los recursos suficientes para ofrecer incentivos y generar oportunidades económicas alternativas a Beijing? ¿Está EEUU en condiciones de proveer bienes públicos a una región necesitada de ellos? Una extensión de la influencia estadounidense podría sacar provecho de las condiciones de una América Latina con pobre volumen diplomático y en el momento de menor expresión política de mecanismos regionales de gobernanza, en una coyuntura en que se los necesita mucho. Sin embargo, no se vislumbra en el corto plazo que Washington pueda proporcionar alternativas competitivas frente a Beijing en materia de financiamiento, infraestructura y transferencia tecnológica.

9. En abril de 2018, Trump prohibió otorgar subvenciones a empresas estadounidenses que compren equipos de Huawei y ZTE y, a través de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional de 2019, impulsó un veto provisional a la compra de equipos de estas empresas.

Cuadro 1

Donaciones de EEUU a países de América del Sur

País receptor	Base o acuerdo militar	Reconoce a Taiwán	Donaciones de China	Vacuna	Dosis donadas	Dosis c/100 hab.
Paraguay	Acuerdo de acceso (Mariscal Estigarribia)	Sí	No	Pfizer	2.000.000	28
Uruguay	-	No	No	Pfizer	500.000	14
Ecuador	Base operativa (Manta)	No	No	Pfizer	2.000.000	12
Colombia	Base expedicionaria e instalaciones	No	No	J&J	6.000.000	12
Bolivia	-	No	Sí	J&J	1.000.000	9
Argentina	-	No	No	Moderna	3.500.000	8
Perú	Centro de operaciones de emergencia y efectivos militares	No	No	Pfizer	2.000.000	6
Brasil	Acuerdo para uso de Base de Alcântara	No	No	J&J	3.000.000	1
TOTAL					20.000.000	

Fuente: elaboración del autor sobre la base de Chase Harrison: «Tracker: US Vaccine Donations to Latin America» en *AS/COA Online*, 28/7/2021, <www.as-coa.org/articles/tracker-us-vaccine-donations-latin-america>.

China y la «presencia por factorías»

La presencia de China en América del Sur reúne algunas variables atípicas. Su esencia radica en la extensión de cuatro procesos concomitantes: el de transformación de su política exterior, el de internacionalización de su Estado, el de internacionalización de sus empresas y el de incremento del rol internacional de sus provincias y ciudades. Esto implica el paso de una proyección originalmente centrada en la clave Estado-Estado hacia una suerte de «presencia por factorías» de corte económico, pragmático y más caótica en su penetración, siguiendo el modelo expansionista del Imperio portugués. Las factorías de los portugueses se construían para centralizar y así dominar

el comercio local de productos hacia Europa; hoy los proyectos de infraestructura de Beijing propenden a hacer más fluido el comercio de materias primas hacia Asia y China continental. Mientras Washington mantiene una presencia esencialmente política y militar ejercida de manera vertical, Beijing se proyecta sobre un rango mayor de actores y de manera más descentralizada, priorizando los lazos económicos, financieros y comerciales con gobiernos subnacionales.

Esta lógica de «presencia por factorías» está estrechamente ligada al máximo proyecto de expansión geopolítica de Beijing: la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Se dan en el caso de la diplomacia de vacunas todos los factores que se anotan habitualmente para mostrar expansión de poder económico. En efecto, de un total de 19 países miembros en América Latina de esta plataforma, diez recibieron vacunas chinas, una proporción que equivale a más de 50%. Es preciso señalar también que no solo las exportaciones fueron fluidas hacia miembros de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, sino que incluso la política de donaciones se centró en esos destinos, tal como muestran los casos de Venezuela, Guyana, Ecuador y Bolivia (cuadro 2). Por otra parte, Uruguay y Chile, los primeros países sudamericanos en sumarse a la Iniciativa en 2018, fueron los que avanzaron de manera más rápida en los procesos de inmunización a partir de la importación de vacunas de la firma privada china Sinovac, tras haber sido, en el caso chileno, lugar de ensayo de ese laboratorio. Posteriormente, ambos países fueron el conducto para llevar las vacunas chinas a Paraguay y a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), pese a las trabas diplomáticas por el reconocimiento de Asunción a Taiwán.

Además de la consolidación de la Iniciativa de la Franja y la Ruta en la región, Beijing busca influir en las condiciones de acceso al mercado en países con los que mantiene un estatus de asociación estratégica amplia, como Argentina y Brasil. Las prioridades son asegurar la continuidad de proyectos estratégicos, promover inversiones en infraestructura, apalancar la transferencia tecnológica de última generación y contribuir a la internacionalización del renminbi, la moneda china. Esto ha habilitado, por ejemplo, la celebración de acuerdos de exportación de vacunas con los gobiernos provinciales de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Jujuy, Entre Ríos, Mendoza y Ciudad de Buenos Aires en Argentina y con el estado de San Pablo en Brasil, así como la suscripción de contratos para la producción local con laboratorios argentinos y brasileños¹⁰. Por otra parte, Beijing no solo ha intentado penetrar en espacios relegados por Washington en la región, sino que ha avanzado en las relaciones bilaterales con aliados tradicionales de EEUU como

10. «Qué provincias buscan comprar vacunas por su cuenta y con quién negocian» en *El Cronista*, 30/5/2021.

Cuadro 2

**Exportaciones y donaciones de vacunas chinas a países
de América del Sur**

País	Miembro IFR	Reconoce a Taiwán	Intermediario	Vacuna	Contrato de producción local	Dosis donadas	Dosis exportadas	Dosis c/ 100 hab.
Chile	Sí	No	-	Sinovac, Cansino	-	-	17.471.476	92
Uruguay	Sí	No	-	Sinovac	-	-	1.750.000	51
Brasil	No	No	-	Sinovac	Sí (Sinovac)	-	29.200.000	14
Ecuador*	Sí	No	Chile	Sinovac, Cansino	-	220.000	1.500.000	9,9
Bolivia	Sí	No	-	Sinopharm	-	200.000	834.000	8,9
Argentina	No	No	-	Sinopharm	Sí (Sinopharm)	-	3.000.000	7
Colombia	No	No	-	Sinovac	-	-	2.972.200	6
Perú	Sí	No	-	Sinopharm	-	-	1.300.000	4
Paraguay**	No	Sí	Chile	Sinovac, Sinopharm	-	20.000	250.000	3,8
Guyana	Sí	No	-	Sinopharm	-	20.000	-	2,5
Venezuela	Sí	No	-	Sinopharm	-	500.000	-	1,7
TOTAL							59.237.676	

* 20.000 dosis donadas por Chile / ** 20.000 dosis donadas por Chile.

Fuente: elaboración del autor sobre la base de Bridge: «China Covid-19 Vaccine Tracker», 26/7/2021, disponible en <https://bridgebeijing.com/our-publications/our-publications-1/china-covid-19-vaccines-tracker/#Overseas_Manufacturers_of_Chinese_Vaccines>.

Colombia. Este último país ha dado un paso histórico al apoyar a Beijing en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas poco tiempo después de haber recibido vacunas chinas¹¹.

En esencia, la «presencia por factorías» de Beijing busca apuntalar una diplomacia económica que habilite y/o asegure el acceso al mercado de las empresas chinas. En congruencia con ello, China posee una visión sobre la estabilidad regional por la vía del control de mercados y la penetración económica, comercial y financiera para influir en los gobiernos. A raíz de la crisis de

11. «Colombia aplaude los avances en derechos humanos de China» en *El Tiempo*, 24/3/2021.

Venezuela en la región y a medida que se incrementan los desafíos de la economía china hacia adentro y prevalece un enfoque centrado en la expansión del consumo interno, esa posición sobre la incidencia económica en la estabilidad ha ganado más espacio en la política exterior china, considerando de manera prudente potenciales riesgos políticos e impactos en las inversiones. La perspectiva china de la estabilidad está centrada en las condiciones y posiciones del capital de sus empresas y en las posibilidades de internacionalización del renminbi antes que en la institucionalidad o la garantía de un tipo de régimen político. En esa dirección, se ponderan las fortalezas estatales y la capacidad de control asociada a los recursos del Estado.

Hacia un «multilateralismo de bienestar»

La condición de «periferia convulsionada» de América del Sur se acentúa por agravantes socioeconómicos, debilidades político-institucionales y fracturas sociales, profundizadas por la pandemia. Mientras se procura avanzar en la inmunización en la mayoría de los países, se profundizan las desigualdades, el malestar social y las demandas sobre la representación política. Como ya se ha observado en las protestas sociales de 2021 en Perú, Brasil y Colombia, el escenario social es complejo, por lo que es de esperar que sigan surgiendo nuevos desafíos a la capacidad de control de los gobiernos. Al mismo tiempo, se trata de problemáticas transversales que, en los casos en que recrudecen la violencia política y la represión policial, pueden poner en jaque la estabilidad regional en su conjunto. El telón de fondo es una gran sindemia con profundas consecuencias nacionales y regionales, mientras reemergen desafíos económicos, sociales y ambientales, un fenómeno que aparenta ser mucho más duradero que la pandemia. Está claro que cuestiones como el monitoreo de las fronteras, el acceso a vacunas o la resolución pacífica de conflictos seguirán siendo claves y no podrán sortearse desde la lógica unilateral del «sálvese quien pueda» que ha predominado en la pandemia. Afrontar la «gran convulsión» para evitar el colapso, y en un escenario de incremento de la presencia de EEUU y China, exige y exigirá por sobre todo concertación política regional.

Pese al complejo escenario, existen diversas señales de esperanza y espacios de oportunidad que es preciso remarcar, ya que, en palabras de Norbert Lechner, «el malestar puede ser leído como una crítica tácita (no verbalizada) del estado de cosas y, simultáneamente, como una búsqueda de alternativas»¹². Como hemos sostenido en estas páginas con Mónica Hirst,

12. N. Lechner: «Desafíos de un desarrollo humano: individualización y capital social» en *Instituciones y Desarrollo* vol. 7, 2000.

la crisis del regionalismo es un escollo para que se avance hacia una agenda regional de bienestar e inclusión social necesaria e imprescindible para encontrar la puerta de salida de la sindemia¹³. El «multilateralismo de bienestar» puede ofrecer normativas y narrativas centrípetas, así como espacios para la concertación política que permitan abordar de manera colectiva los desafíos comunes. La región necesita hoy más que nunca bienes públicos globales y regionales para aspirar a un «nuevo contrato social» que asegure servicios públicos universales y de calidad y amplíe el acceso a ellos. No obstante, con un menor grado de pretensión, podría optarse por impulsar iniciativas puntuales de cooperación técnica bilateral y triangular basadas en los pilares de coherencia en las políticas macroeconómicas, seguridad alimentaria, generación de empleo, inclusión social, igualdad de género, transición justa energética y acceso a la salud y a la educación. Un aporte allí parece fundamental, no solo para reducir las brechas de bienestar, sino como un camino para revertir las tendencias a la inestabilidad y la desintegración de la región. ☐

13. M. Hirst y B. Malacalza: «¿Podrá reinventarse el multilateralismo? El orden internacional y el coronavirus» en *Nueva Sociedad* N^o 287, 5-6/2020, disponible en <www.nuso.org>.

Hacia un ecodesarrollismo latinoamericano

Elisabeth Möhle / Daniel Schteingart

La pandemia parece estar cediendo, pero no así los problemas latinoamericanos. ¿Cómo puede América Latina enfrentar los desafíos en materia social y ambiental que presenta el mundo pospandemia? La respuesta que se plantea en este artículo es un marco ecodesarrollista que garantice una triple sostenibilidad (social, macroeconómica y ambiental) y permita encarar en conjunto y de manera virtuosa los grandes déficits que arrastran los modelos de desarrollo de la región.

El fin de la pandemia parece acercarse en nuestra región, y con ella terminará este estado de excepción en el que nos hemos dedicado en gran medida a sobrevivir. Ahora bien, la vuelta a la normalidad en América Latina no constituye una narrativa pospandémica suficiente. Más bien, desde los progresismos latinoamericanos necesitamos construir nuevas utopías, firmemente basadas en las realidades, necesidades, potencialidades y limitaciones de nuestros países, para poder pensar en horizontes concretos y realizables que permitan crear futuros mejores para las mayorías.

La pandemia surgió en un contexto de estancamiento económico y social imperante desde el fin del superciclo de los *commodities* que caracterizó al periodo 2003-2013. En este contexto, los progresismos

Elisabeth Möhle: es licenciada en Ciencias Ambientales, magíster en Políticas Públicas y Gerenciamiento del Desarrollo y becaria doctoral en Ciencia Política (Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica, Foncyt-Universidad Nacional de San Martín, UNSAM).

Daniel Schteingart: es doctor en Sociología por el Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES)-Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y director del Centro de Estudios para la Producción (CEP-XXI) en el Ministerio de Desarrollo Productivo de Argentina.

Palabras claves: ambientalismo, *commodities*, desarrollismo, restricción externa, América Latina.

—tanto aquellos en los gobiernos como los de la oposición— intentan representar y dar respuestas a diversas demandas sociales de inclusión, pero presentan serias dificultades para articular un modelo de desarrollo sostenible que pueda convocar a amplios sectores sociales en un proyecto común de generación de riqueza y reducción de la pobreza y la desigualdad que, en el mismo proceso, transite hacia la sustentabilidad ambiental.

Estos desafíos que enfrenta la agenda progresista se magnifican aún más al tener en cuenta que la crisis ambiental que atraviesa el mundo se acelera a un ritmo vertiginoso. Los límites planetarios se tensionan cada vez más y los efectos son cada vez más visibles en forma de olas de calor, incendios, sequías e inundaciones en distintos rincones del planeta. Ante esta situación, el mundo desarrollado no termina de hacerse cargo de su responsabilidad diferenciada, pero de todos modos ya coquetea con el proteccionismo ambiental. El Acuerdo de París suscripto en 2015 celebraba la acción climática y ambiental como un objetivo global colectivo; sin embargo, los fondos que el mundo desarrollado prometió destinar a los países en vías de desarrollo para acompañar la transición de las estructuras productivas fluyen muy lentamente, mientras que las propuestas de medidas contra el impacto ambiental de las importaciones se multiplican y se corre el riesgo de que se conviertan en un nuevo modo de «patear la escalera».

Así, América Latina enfrenta el imperativo de llevar adelante una transición hacia modelos de desarrollo con menor impacto ambiental siendo una de las regiones más desiguales del mundo¹, sin aún haber podido garantizar condiciones de vida dignas a toda su población, sin ser responsable determinante de la crisis ambiental y sin el necesario apoyo de los países ricos. Frente a este escenario, surge el interrogante respecto del marco conceptual con el cual encarar el porvenir de la pospandemia. Intentaremos en lo que sigue esbozar algunas ideas al respecto.

Un modelo de tres sostenibilidades

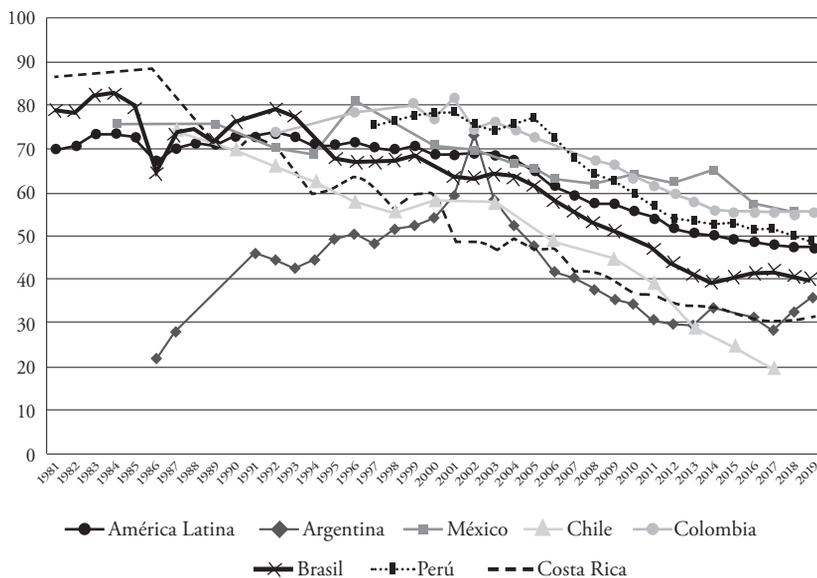
Que América Latina pueda ir en dirección al desarrollo sostenible depende de que pueda abordar simultáneamente tres sostenibilidades: la social, la macroeconómica y la ambiental. Lo que aquí entenderemos como «ecodesarrollismo» o «desarrollismo ambientalista» apunta al logro simultáneo de esas tres sostenibilidades.

1. Si tomáramos los países del sur de África (por ejemplo, Sudáfrica, Namibia, Botsuana, Mozambique, Lesoto o Zambia) como una región, esta sería todavía más desigual que América Latina.

La sostenibilidad social refiere al bienestar de las mayorías, a partir de la reducción de la pobreza, la desigualdad, la desocupación y la precarización laboral y del acceso a bienes públicos tales como educación, salud o infraestructura. Tal sostenibilidad requiere de una tasa de crecimiento económico elevada, habida cuenta de que todos estos indicadores tienden a mejorar cuando el PIB per cápita crece. La evidencia empírica pareciera sostener la idea de que sin crecimiento es muy difícil la sostenibilidad social (aunque no siempre el crecimiento implica mejora de los indicadores mencionados). En las casi cuatro décadas comprendidas entre 1981 y 2019, la pobreza por ingresos en América Latina (medida con la vara de 10 dólares al día a paridad de poder adquisitivo)² pasó de 70% a 47% de la población (gráfico 1). Sin embargo, 18 de esos 23 puntos de disminución de la pobreza los explica el periodo 2003-2013, coincidente con la aceleración del crecimiento económico, en gran medida impulsado por la suba de los precios de los *commodities*.

Gráfico 1

Tasa de pobreza en América Latina, 1981-2019 (en porcentaje, línea de 10 dólares/día en PPA)



Fuente: elaboración de los autores sobre la base de PovcalNet, Banco Mundial.

2. Esta vara es comparable en exigencia con la que actualmente tiene Argentina. Los datos provienen del sitio PovCalNet, del Banco Mundial.

En todos los países de la región se observa una correlación estrecha (aunque no perfecta) entre crecimiento económico y disminución de la pobreza. En las últimas décadas, el incremento del PIB per cápita tendió a ir de la mano de la mejora en los niveles de ingreso de la población. Hubo excepciones a la regla, como la modernización excluyente de Argentina en los años 90, donde la economía creció en conjunción con un dramático incremento de la desigualdad, que determinó un incremento también notorio de la pobreza. Sin embargo, la correlación entre ingreso per cápita y pobreza a lo largo del tiempo es clara; no solo eso, también en las últimas décadas el crecimiento económico tendió a estar asociado a una reducción de los niveles de desigualdad, aunque aquí es posible interpretarlo de manera bidireccional. Redistribuir supone redirigir recursos hacia las poblaciones con mayor propensión al consumo que al ahorro, lo cual tiene un efecto macroeconómico expansivo por la vía de una mayor demanda efectiva; a su vez, el crecimiento tiende a disminuir el desempleo –que afecta mucho más a la población vulnerable que a la clase media profesional– y a incrementar el poder de negociación de las clases trabajadoras. Ahora bien, la tasa de crecimiento compatible con la sostenibilidad social es mayor a la compatible con la sostenibilidad macroeconómica y con la sostenibilidad ambiental. Veamos por qué.

En la gran mayoría de las economías del mundo (y, particularmente, en las periféricas como las latinoamericanas), el crecimiento económico supone un incremento de las importaciones de bienes y servicios. Los mecanismos son varios. En primer lugar, un aumento del consumo de los hogares, derivado de una mejora de los ingresos, tiende a ser abastecido en parte con importaciones (por ejemplo, una persona que, como producto de la suba de sus ingresos, opta por cambiar su teléfono móvil, que es importado de China). En segundo lugar, un aumento del consumo de los hogares tracciona sobre las industrias locales, que necesitan insumos (muchas veces importados) para poder producir. En tercer lugar, una mayor actividad económica suele incentivar la inversión privada (ya que los empresarios tienden a invertir más cuando las cosas marchan bien), la cual suele requerir de maquinarias –mayormente importadas–. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en los países latinoamericanos, por cada 1% que crece la economía las cantidades importadas crecen alrededor de 1,5%³.

Este incremento de las importaciones derivado del crecimiento se paga en divisas y debe financiarse de algún modo. Las opciones son varias, pero sobresalen básicamente tres: (a) las exportaciones, (b) la deuda externa y (c)

3. Cepal: «Construir un nuevo futuro: una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad», Naciones Unidas, Santiago de Chile, 2020.

la inversión extranjera. Las exportaciones dependen en gran medida del ciclo económico de los socios comerciales latinoamericanos (principalmente, Estados Unidos, el Este asiático y la Unión Europea), de modo que cuando estos crecen, los países latinoamericanos exportan más y, por ende, tienen mayor capacidad para importar y, por tanto, para crecer. Eso pasó en el periodo 2003-2013, que coincidió con una notable mejora no solo de las cantidades exportadas sino también de los precios de exportación. Sin embargo, un rasgo estructural de la región es que la propensión importadora tiende a ser mayor que la propensión exportadora. A modo de ejemplo, de acuerdo con la Cepal, cuando Brasil crece 1%, las cantidades importadas lo hacen en 1,7%; en contraste, cuando crecen sus socios comerciales, las cantidades exportadas de Brasil suben 1%. En cambio, en países tradicionalmente ubicados en la periferia, como China, Corea del Sur o Vietnam, la propensión exportadora es mucho más intensa que la propensión importadora, lo que les permite crecer muy por encima de la media mundial sin ingresar en problemas de escasez de divisas.

Esta asimetría entre las propensiones a importar y a exportar de la región –cuyo origen se basa en la matriz productiva latinoamericana, de relativamente baja sofisticación tecnológica– supone un techo al crecimiento económico y, por ende, limita la posibilidad de lograr la sostenibilidad social. El mecanismo es el siguiente: si, por ejemplo, un gobierno implementa políticas expansionistas que hacen crecer el PIB, las importaciones se disparan y, en tanto las exportaciones no acompañan en la misma magnitud, el país ingresa en un déficit comercial. Si el país no incrementa las exportaciones, ese déficit se debe financiar o bien con deuda externa (que si no se utiliza para transformar la estructura productiva para mejorar las mencionadas propensiones a exportar/importar, puede ser explosiva, como ocurrió en la región en la década de 1970, con la consecuente crisis de la deuda de los años 80) o con inversión extranjera (que por un lado puede permitir ampliar capacidades productivas y financiar el desequilibrio comercial, e incluso, bajo ciertas condiciones, transferir tecnología al tejido productivo local, pero a expensas de una potencial pérdida de soberanía nacional y de salida de divisas a futuro por la vía de la remisión de utilidades). Si el país no logra equilibrar su déficit externo por alguna de estas vías, tarde o temprano el crecimiento se frena (por ejemplo, a través de una devaluación de la moneda local, que impacta negativamente en los ingresos reales de la población y, por ende, en el consumo y en el PIB). Este proceso es el que comúnmente se conoce como «restricción externa». Como señala el citado informe de la Cepal, la restricción externa genera dos brechas: por un lado, una *brecha centro-periferia*, esto es, la región no puede converger en PIB per cápita con los países centrales, ya que cuando intenta crecer más aceleradamente ingresa en un déficit

de divisas que termina desestabilizando la macroeconomía. Por el otro, la restricción externa provoca una *brecha social*, ya que la tasa de crecimiento compatible con el equilibrio del sector externo (esto es, la tasa de crecimiento compatible con la sostenibilidad macroeconómica) es inferior a la tasa de crecimiento necesaria para la sostenibilidad social.

La transformación productiva de las economías latinoamericanas (a través de una mayor diversificación, de una mayor sofisticación tecnológica o, también, de la sustitución de importaciones o la intensificación de las exportaciones ya existentes) puede contribuir a incrementar la tasa de crecimiento compatible con la restricción externa. En el periodo 2003-2013, esa tasa aumentó no tanto por la transformación productiva sino por el incremento de los precios de exportación y debido a que el mundo creció más rápido. Ello permitió acercar la tasa de crecimiento compatible con la sostenibilidad macroeconómica a la tasa de crecimiento compatible con la sostenibilidad social y, por ende, contribuyó a mejorar notoriamente los indicadores sociales de la gran mayoría de la región.

Ahora bien, el desafío es todavía más complejo: ya no se trata solo –como se pensaban las políticas de desarrollo hasta ahora– de transformar la estructura productiva para incrementar la tasa de crecimiento compatible con la restricción externa. También es fundamental tener en cuenta, en el marco de los desafíos ambientales actuales, una tercera sostenibilidad: la ambiental, que tiene un vínculo complejo con las otras dos sostenibilidades.

Así como el crecimiento ha sido crucial para mejorar la calidad de vida de los distintos países (y por eso aquellos países con elevados PIB per cápita son los que tienen los menores niveles de pobreza, y viceversa), también ha tenido hasta ahora un profundo impacto en ciertas variables ambientales fundamentales que hoy están comprometiendo los límites planetarios. Por ejemplo, en tanto el crecimiento requiere de energía y esta ha sido tradicionalmente (y sigue siendo) abastecida mediante combustibles fósiles, no sorprende que la expansión económica haya supuesto un impresionante incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero (responsables del calentamiento global). Dado que los países ricos son los que más han crecido, su contribución al calentamiento global también ha sido mayor que la de los países periféricos. A su vez, el crecimiento económico –y el incremento del consumo asociado a él– ha requerido de múltiples materiales y presionado incansablemente sobre la naturaleza y los ecosistemas. Los datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) muestran que los países con mayor índice

Es fundamental tener en cuenta, en el marco de los desafíos actuales, una tercera sostenibilidad: la ambiental

de desarrollo humano (indicador que, además de tomar en cuenta el PIB per cápita, incorpora la esperanza de vida al nacer y la cantidad de años de escolarización de un país) presionan más sobre los límites planetarios (a partir de las emisiones per cápita de dióxido de carbono y la huella material per cápita⁴). En general, a mayor desarrollo económico, mayores presiones planetarias; no solo eso, hasta ahora ningún país ha sido capaz de congeniar un alto desarrollo humano con una reducida contribución per cápita al daño ambiental global.

Dado este contexto, actualmente la tasa de crecimiento compatible con la sostenibilidad ambiental es aún inferior a la compatible con la restricción externa y, por tanto, es muy inferior a la compatible con la sostenibilidad social. Aquí se da una especie de paradoja: que los países ricos crezcan ayuda a que la periferia exporte más (y da más espacio para el crecimiento doméstico y la concomitante baja de la pobreza y el desempleo), pero en simultáneo presiona todavía más sobre los ya muy comprometidos límites planetarios. A la vez, crecer genera más recursos para invertir en infraestructuras y tecnologías ambientales, para crear cuadros técnicos estatales bien pagos (y por ende, capacidades estatales que implementen mejor las políticas ambientales) y para fomentar el desarrollo de nuevos sectores con menores impactos sobre el ambiente.

Estas interrelaciones y tensiones entre las tres sostenibilidades dejan algunas conclusiones claras: por un lado, si el objetivo principal es el bienestar de las mayorías, necesitamos transformar la matriz productiva para que la tasa de crecimiento compatible con la restricción externa sea más alta de lo que es hoy y, a la vez, necesitamos que esa transformación minimice el impacto

¿Cuánto «espacio ambiental» van a dejar los países desarrollados para que los países más pobres puedan crecer?

ambiental que genera cada punto de crecimiento del PIB –esto es, necesitamos que la tasa de crecimiento compatible con la sostenibilidad ambiental sea más alta de lo que es hoy–. Pero a la vez, el juego de las tres sostenibilidades dispara una serie de interrogantes aún irresueltos. El primero de ellos: ¿cómo se implementará en la práctica el principio de las «responsabilidades comunes pero diferenciadas» entre los países centrales y los periféricos? En otras palabras, ¿cuánto «espacio ambiental» van a dejar los países desarrollados para que los países más pobres puedan crecer? ¿Cuánto van a esforzarse en desacoplar la matriz productiva del impacto

4. La huella material per cápita es la suma (en toneladas) de la materia producida por un país, menos las exportaciones más las importaciones, dividida por el total de población. De alguna manera, trata de visualizar cuántos materiales per cápita demanda un país (y, por ende, cuánto presiona sobre la naturaleza).

ambiental? ¿Cuánto van a contribuir a que los países periféricos puedan adoptar y –sobre todo– desarrollar tecnologías de punta que minimicen el impacto ambiental derivado del crecimiento? El segundo interrogante irresuelto tiene que ver con cómo definimos cuál es el piso de necesidades básicas satisfechas que consideramos justo (en otros términos, qué entendemos en concreto por sostenibilidad social) y cuál sería el impacto ambiental que, dada la tecnología actual, estaríamos dispuestos a afrontar para la satisfacción de tales necesidades.

La pregunta por el contenido concreto de la sostenibilidad social refiere, por ejemplo, a qué matriz de consumo queremos propiciar en la población y qué cambios son necesarios respecto a los patrones actuales. Preguntas como ¿se puede limitar el acceso al consumo de carne por sus presiones sobre la naturaleza?, ¿cómo se hace sin convertirlo solo en un consumo de ricos?, ¿existe el derecho al automóvil?, ¿cuántos es justo tener por familia? se enmarcan en esta tensión entre qué piso de necesidades básicas queremos garantizar y cuáles son los impactos ambientales que la satisfacción de tal piso supondría.

Historia reciente de la relación entre desarrollo y ambiente en América Latina

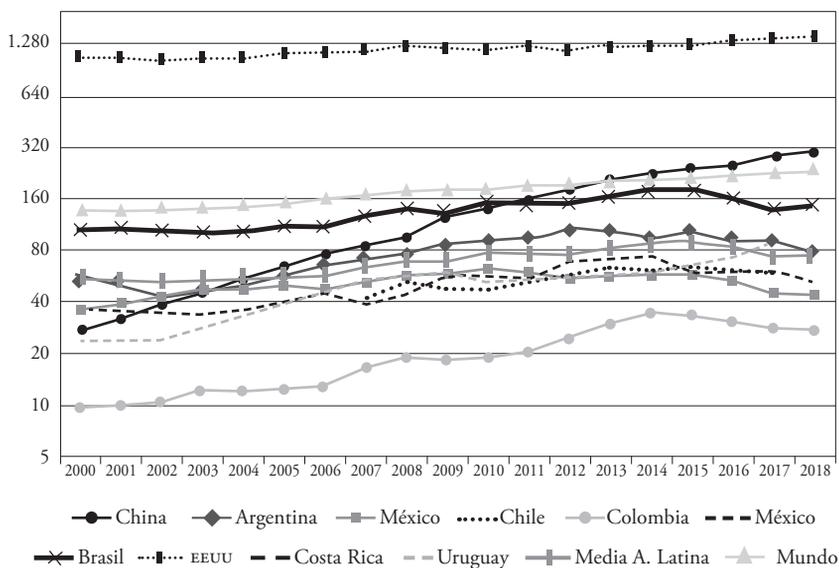
Como vimos, en las últimas cuatro décadas, la pobreza por ingresos en América Latina se redujo en un tercio, al pasar de 70% a 47%, con gran parte de la baja registrada en la «década de los *commodities*» (2003-2013). Esa mejora ocurrió en prácticamente toda la región, y tanto en países gobernados por coaliciones nacional-populares (Argentina, Brasil o Bolivia, por ejemplo) como en otros con gobiernos más promercado (como Chile, Perú o Colombia). La desigualdad también disminuyó en gran parte de la región, junto con la mejora de indicadores sociales como la esperanza de vida, el alfabetismo y el acceso a infraestructuras tales como agua potable, cloacas, electricidad o telecomunicaciones⁵. Todo ello se dio con una matriz productiva que registró pocos cambios en su composición relativa (prosiguieron la alta dependencia de las exportaciones primarias en Sudamérica, el ensamble de manufacturas en México y parte de América Central y el bajo peso de las actividades intensivas en investigación y desarrollo, I+D), pero que sí avanzó en términos cuantitativos. En otros términos, la bonanza económica de la década no cambió el lugar de América Latina en la división internacional del trabajo, pero sí se crearon capacidades productivas *absolutas* en el tejido productivo. El aumento del *stock* de empresas

5. Los datos surgen del Centro de Estudios Distributivos y Sociales (CEDLAS).

formales fue un común denominador del periodo: Argentina creó 231.000 empresas entre 2002 y 2013 (un crecimiento de 62%), en todos los sectores productivos⁶. El *boom* de exportaciones de materias primas fue condición de posibilidad de tal dinamismo empresarial, que se dio en sectores «lejanos» a los recursos naturales, como la industria, la construcción, el comercio, el turismo y los servicios profesionales y recreativos. Algo similar ocurrió en países como Brasil, Chile y Uruguay⁷. Los gastos en I+D también crecieron (56% en términos per cápita en la región entre 2003-2013), a un ritmo para nada despreciable, aunque a todas luces opacado por el excepcional dinamismo de países como China en la misma materia e insuficiente para cerrar las enormes brechas tecnológicas con el mundo desarrollado (gráfico 2).

Gráfico 2

Gasto en I+D per cápita, 2000-2018 (en dólares a paridad de poder adquisitivo de 2005)



Fuente: elaboración de los autores sobre la base de datos de Unesco: «Data for the Sustainable Development Goals», <www.uis.unesco.org>.

6. Datos del Ministerio de Trabajo de Argentina.

7. La cantidad de empresas creció 19% en Brasil entre 2006 y 2015, 22% en Chile entre 2003 y 2013 y 59% en Uruguay entre 2005 y 2016. Los datos surgen de Marco Dini y Giovanni Stumpo (coords.): *Mipymes en América Latina. Un frágil desempeño y nuevos desafíos para las políticas de fomento*, Cepal, Santiago de Chile, 2020.

El balance del ciclo de los *commodities* dejó luces y sombras. Las mejoras sociales y económicas fueron palpables (y en la gran mayoría de los países se sostuvieron, de modo que en los albores de la pandemia los indicadores sociales eran definitivamente mejores que a principios del milenio en casi toda la región). Sin embargo, la imposibilidad de transformar *cualitativamente* las estructuras productivas hizo que, finalizada la bonanza internacional, las mejoras en las economías latinoamericanas se estancaran.

La mejora en los precios de exportación durante la década de los *commodities* permitió acercar la tasa de crecimiento compatible con la sostenibilidad macroeconómica a la tasa compatible con la sostenibilidad social. Sin embargo, estos avances conllevaron impactos ambientales y conflictos sociales asociados a ellos en toda América Latina. Sea por la minería, el *fracking*, los proyectos hidroeléctricos, la deforestación o el avance sobre ecosistemas o territorios de pueblos originarios, la conflictividad y las demandas socioambientales se multiplicaron. Como consecuencia de esta presión social –combinada con la incorporación de los derechos ambientales en las reformas constitucionales, la creciente visibilización de las problemáticas ambientales, la lenta jerarquización de las carteras ambientales en los gobiernos y los avances científicos sobre tópicos como el calentamiento global, los límites planetarios o la biodiversidad–, empezaron a surgir políticas, leyes y fallos judiciales que limitaron algunas de estas actividades. Así, por ejemplo, en Argentina se sancionaron las leyes de protección de bosques y de glaciares, en Chile se frenó el proyecto minero Pascua Lama, en Honduras se detuvo la construcción de la represa hidroeléctrica de Agua Zarca, en Colombia se bloqueó el proyecto minero La Colosa y en Costa Rica se emitió un decreto presidencial que prohíbe la exploración y explotación de hidrocarburos hasta 2050.

De manera complementaria, la emergencia de la figura de Greta Thunberg en 2018 como emblema de la demanda juvenil de acción frente al cambio climático se reflejó en la región en el surgimiento de movimientos de jóvenes, principalmente de sectores medios urbanos, que se sumaron a las movilizaciones globales por el clima. Con el transcurrir del tiempo y la acumulación de experiencia, la línea discursiva de Thunberg fue adquiriendo un mayor énfasis en la diferenciación de las responsabilidades entre el Norte y el Sur globales. De la misma manera, las organizaciones locales inspiradas en ella fueron fortaleciendo sus vínculos con las expresiones territoriales –tanto las asambleas que se oponen a diversos proyectos productivos como las organizaciones de recuperadores urbanos– y ensayando un discurso creciente de justicia social.

De este modo, en el presente la agenda ambiental de la sociedad civil latinoamericana se mueve en dos dimensiones: la global y la local. La primera se expresa principalmente en estos movimientos juveniles urbanos que, en una suerte de alianza generacional global, exigen a los gobiernos

un plan a largo plazo que muestre el camino por el cual se pretende descarbonizar las economías, impulsar la economía circular y proteger la naturaleza para dar cumplimiento a los compromisos internacionales en materia de cambio climático y biodiversidad. La segunda, que cobró protagonismo con el superciclo de los *commodities*, son las expresiones locales organizadas principalmente en torno de la oposición a proyectos productivos específicos. Estos movimientos, en general, reclaman contra actividades productivas (mayormente ligadas a los recursos naturales) a gran escala. En general, estas actividades suelen ser muy intensivas en capital (lo que implica inversiones cuantiosas que generan, para la magnitud de los montos desembolsados, relativamente pocos puestos de trabajo directos, aunque bastantes más indirectos y en general con salarios altos) y en muchos casos están asociadas a empresas multinacionales. Dada su escala, el impacto sobre la naturaleza es muchas veces elevado. Esta combinación de características incide en el frecuente rechazo de las comunidades locales, que a menudo se encuentran con costos directos y escasos beneficios —y que son apropiados tanto por las empresas como, en muchas ocasiones, también por los Estados y la ciudadanía territorialmente lejana a esas comunidades—. A su vez, el discurrir de estos proyectos suele tener falencias en términos de transparencia, garantías y posibilidades de participación ciudadana. Esta combinación de beneficios difusos y dificultades en los procesos de gobernanza generó una proliferación de conflictos en el continente, como muestra el Atlas de Justicia Ambiental (EJAtlas)⁸.

En los últimos tiempos, ambas dimensiones respecto a los problemas ambientales (la global y la local) se han vinculado cada vez más y se observa en ellas una creciente radicalización de las demandas, motivada tanto por la agudización de las problemáticas ambientales como porque los Estados en sus múltiples niveles no logran articular respuestas y estrategias consistentes a ninguna de las dos demandas.

Estos reclamos ambientales crecientes se dan en una región donde ya en los años previos a la pandemia había frenado la mejora de los indicadores sociales y donde la llegada del covid-19 los empeoró dramáticamente en la mayoría de los países. De esta manera, la región se encuentra hoy tironeada por dos fuerzas que, *a priori*, parecieran opuestas: la de la sostenibilidad social —que requiere crecimiento elevado— y la de la sostenibilidad ambiental —que, sin mediar cambios profundos en la matriz productiva, supone hoy una tasa de crecimiento mucho más reducida—. En el medio, la sostenibilidad macroeconómica —limitada por la debilidad tecnológica de las estructuras productivas latinoamericanas— impone una restricción adicional al crecimiento necesario para la sostenibilidad social.

8. Disponible en <<https://ejatlas.org/>>.

Una hoja de ruta para el futuro

A continuación, planteamos algunos puntos pensando en el corto y en el largo plazo que podrían formar parte de una agenda «ecodesarrollista» que permita la alineación virtuosa de las tres sostenibilidades. En el corto plazo, proponemos trabajar sobre la reducción de los impactos de las estructuras productivas actuales y utilizar los recursos naturales como palanca para el desarrollo. En el largo plazo, sostenemos que es necesario tender a una transformación estructural hacia la triple sostenibilidad, haciendo foco principalmente en la transición hacia actividades económicas de menor impacto ambiental y mayor inclusión social.

Lo primero es entonces reducir los impactos ambientales de la estructura productiva existente, de modo que la tasa de crecimiento compatible con la sostenibilidad ambiental sea mayor a la actual.

Esto requiere un sinnúmero de ejes de acción que deben ser impulsados por los Estados mediante políticas productivas proactivas, en donde se asista técnica y financieramente a las empresas para incorporar conocimientos, herramientas y tecnologías tanto en procesos como en productos que hagan sus actividades más amigables en términos ambientales. Esto es particularmente relevante en

las PYMES, donde la mejora de las prácticas ambientales muchas veces no ocurre por falta de financiamiento y capacitación. El reciente Plan de Desarrollo Productivo Verde de Argentina incorpora esta dimensión, ya que uno de sus programas prevé financiar y asistir técnicamente a 3.400 PYMES para la adecuación ambiental. En esta línea, también es clave el fomento a la eficiencia de materiales y energía (tanto en empresas como en hogares, por ejemplo, vía financiamiento público a la adquisición de nuevas maquinarias o electrodomésticos eficientes energéticamente). Esto contribuye no solo a reducir la huella ambiental, sino también a lograr la sostenibilidad macroeconómica (a través del ahorro energético o de materiales que puede reducir importaciones y/o aumentar exportaciones). Con las grandes empresas —y los grandes sectores productivos—, la estrategia probablemente deba ser otra: en general, cuentan con mayores espaldas para afrontar procesos de readecuación ambiental, y en todo caso es necesario fortalecer las capacidades estatales (y la autonomía estatal) para exigirles estándares ambientales cada vez más altos. En este sentido, por ejemplo, el etiquetado implementado en Chile y México es una política que permite a quienes consumen elegir sus alimentos basándose en información más clara, lo cual luego implica que las empresas se vean en la obligación de producir alimentos más saludables

Lo primero es entonces reducir los impactos ambientales de la estructura productiva existente

para mantener las ventas. La aprobación de este tipo de políticas requiere de Estados autónomos frente a la presión del sector privado. Ahora bien, en la medida en que los países continúen en recesión o en estancamiento, la posibilidad de construir capacidades estatales y de aumentar las exigencias al sector privado se reduce.

En segundo lugar, y en tanto la región continuará por bastante tiempo dependiendo de los recursos naturales para generar divisas y crecer, es fundamental atender y dar respuesta a quienes desde los territorios reclaman información, participación económica en las actividades, el desarrollo de infraestructuras, el cumplimiento de los derechos ambientales o el respeto de la consulta libre e informada previa a la aprobación de las actividades. Atender y dar respuesta no significa que siempre la oposición de un grupo a determinado proyecto culmine en su prohibición, pero sí que en democracias con ciudadanías movilizadas y comprometidas los modelos de desarrollo no se pueden imponer, sino que exigen esquemas y procesos de gobernanza que involucren a todos los actores y permitan generar consensos sobre qué y cómo producir. En este sentido, el Acuerdo de Escazú y su triple herramienta de acceso a la información, a la justicia y a la participación ambiental es un avance para la región. A su vez, las políticas que desarrollen las cadenas de valor en torno de recursos naturales (sea a partir del desarrollo de proveedores o de la agregación de valor a la materia prima) son fundamentales para mejorar tanto la sostenibilidad macroeconómica (vía ahorro de divisas) como la social (al multiplicar el empleo indirecto asociado a un recurso natural).

Complementariamente, en materia de aprovechamiento de los recursos naturales, es menester la evaluación continua de las estrategias que se implementan respecto de su explotación. Esto incluye desde los marcos institucionales y cuáles son las tecnologías de explotación permitidas, hasta la forma de articulación con los organismos de ciencia y tecnología para ir ajustando las políticas en función de los aprendizajes alcanzados. El caso del litio, por ejemplo, permite un análisis comparativo en lo que concierne a las trayectorias de los tres países productores (Argentina, Bolivia y Chile, lo que se conoce como el triángulo del litio). Estos países han compartido un interés similar en lo que respecta a la importancia del mineral y su industrialización, pero han ensayado formas diferentes de explotarlo. Cómo le fue hasta ahora a cada uno según sus objetivos y las capacidades de cada país es un interrogante fundamental a la hora de pensar el futuro del litio. En la misma línea, la posibilidad de cooperación entre las tres naciones para fortalecer su posición como tenedores del recurso es otro punto clave. Esta evaluación y mejora continua de la estrategia de explotación de los recursos naturales es lo que podría permitir superar la experiencia de 2003-2013 y habilitar la

transformación cualitativa de la estructura productiva hacia actividades de mayor complejidad tecnológica y menores impactos ambientales.

Por último, en el largo plazo, los Estados latinoamericanos necesitan pensar en la transformación de los sistemas socioeconómicos hacia hábitos, consumos, tecnologías, matrices energéticas y estructuras productivas descarbonizadas, circulares, regenerativas y adaptadas a un planeta más caliente. Esto requiere principalmente de Estados con un compromiso firme con el redireccionamiento de los modelos de desarrollo hacia la triple sostenibilidad, pero también de sectores productivos, de ciencia y técnica, organizaciones sociales y sociedad en su conjunto que acompañen este proceso aportando desde sus respectivos lugares.

En este sentido, los Estados precisan incentivar y premiar las innovaciones ambientales, es decir, la ciencia y la tecnología al servicio de soluciones que permitan desacoplar el crecimiento del impacto ambiental. América Latina tiene una participación marginal en las innovaciones ambientales a escala global y en los próximos años será importadora de esas soluciones tecnológicas. Eso mejorará la huella ambiental, pero a la vez podría presionar sobre la sostenibilidad macroeconómica (en la medida en que las mayores importaciones derivadas de esta adopción tecnológica más que compensen las eventuales mayores exportaciones que la región podría tener a los países centrales, principalmente europeos, que cada vez más exigirán que sus importaciones se produzcan utilizando las mejores prácticas ambientales). De ahí la importancia de invertir localmente en este tipo de tecnologías. Ya hay algunas cartas de intención al respecto, por ejemplo, en lo que concierne a la estrategia de fabricación local de vehículos eléctricos en México, Brasil y Argentina.

En el mismo sentido, la transformación de fondo de la lógica productiva lineal hacia modelos circulares, tanto a través del fomento del ecodiseño como del fortalecimiento de cooperativas y empresas de reciclado, se vuelve fundamental. La economía circular es muy relevante para atender la triple sostenibilidad, ya que no solo reduce el impacto ambiental, sino que puede generar miles de puestos de trabajo y, a la vez, evitar importaciones de insumos (y contribuir a la sostenibilidad macroeconómica). Aún más, hay empresas especializadas en economía circular, como la colombiana Bioestibas, que a partir de los residuos de las hortensias que se producen para ornamentación producen estibas, exportan 98% de su producción y contribuyen así a la sostenibilidad ambiental a través de la reducción de residuos, a la sostenibilidad social a través de la generación de empleo y a la sostenibilidad macroeconómica mediante las exportaciones.

América Latina tiene una participación marginal en las innovaciones ambientales a escala global

Por último, la transición energética hacia fuentes limpias es otro de los ejes centrales en este esquema. Aquí los países de la región se encuentran en general mejor posicionados que la media mundial, dada la baja participación del carbón como fuente de energía y el protagonismo de la hidroelectricidad (particularmente en países como Perú, Colombia, Ecuador o Brasil) y, en ciertos países, el gas natural (como Argentina y México). El desafío respecto a la transición energética para América Latina consiste en llevarla a cabo desarrollando capacidades tecnológicas, creando empleos locales y reduciendo el perfil importador de tecnología. Los potenciales son disímiles entre los países, pero Argentina, Brasil y México –los más industrializados de la región– cuentan con activos para al menos intentar una mayor participación local en esa transición. Resulta interesante resaltar ciertos casos como el argentino, donde recientemente el gobierno nacional –en alianza con el gobierno de la provincia de Mendoza, de signo político contrario– estatizó parcialmente la empresa IMPSA, que corría riesgo de caer en bancarrota. IMPSA es una de las principales fabricantes latinoamericanas de equipos para el sector energético. Chile –y más incipientemente Argentina–, por su parte, está apostando a hacer del hidrógeno verde una fuente tanto de descarbonización de la matriz productiva como de exportaciones futuras. Un caso particular es el de Costa Rica, que no solo construyó una marca país en torno de la sostenibilidad ambiental, sino que también delineó un Plan de Descarbonización transversal a sus sectores productivos con metas establecidas a 2035 y 2050. La alianza entre la sostenibilidad macroeconómica y la social viene dada en este caso por el desarrollo del turismo y la atracción de inversiones verdes.

Para finalizar, retomamos la preocupación con la que iniciamos este texto: ¿cómo puede América Latina enfrentar los desafíos en materia social y ambiental que presenta el mundo pospandemia? Creemos que el marco ecodesarrollista de la triple sostenibilidad permite encarar en conjunto y de manera virtuosa los grandes problemas que arrastran los modelos de desarrollo latinoamericanos. A partir de este marco conceptual, luego resulta posible –y necesario– construir una visión de qué Latinoamérica y qué proyectos nacionales queremos, para así configurar una estrategia que permita aglutinar a los actores en función de objetivos alcanzables. Aquí lógicamente surge la pregunta sobre qué actores y qué alianzas pueden encarnar e impulsar este ideario ecodesarrollista, toda vez que se trata de un proceso que no va a estar exento de tensiones, tanto políticas como geopolíticas. Sin embargo, tal potencial conflictividad no es excusa para seguir postergando el avance hacia futuros mejores para las mayorías latinoamericanas. 

Las elites chilenas y su (des)conexión con la sociedad

Jorge Atria / Cristóbal Rovira Kaltwasser

Chile experimentó recientemente un estallido social, que se explica en gran medida por la desconexión entre elite y ciudadanía. Para demostrar la validez empírica de esta tesis, se presentan datos de un estudio que permite analizar brechas de opinión entre la elite y la sociedad, como así también discrepancias y concordancias entre las distintas elites del país. Los resultados sugieren que si las elites no están dispuestas a facilitar las reformas demandadas por la ciudadanía, difícilmente podrá Chile retomar la estabilidad política y económica.

Todas las sociedades tienen elites, pero existe gran variación en cómo estas se componen y actúan. Así, por ejemplo, mientras que en los regímenes democráticos la permanencia y el poder de las elites políticas dependen en última instancia del apoyo que estas reciben de los votantes, en los regímenes autoritarios la clase política puede gobernar y mantenerse en el poder por largos periodos, independientemente del parecer

Jorge Atria: es profesor asistente de la Universidad Diego Portales (UDP), Santiago de Chile, e investigador asociado del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES). Su agenda de investigación se centra en sociología económica y sociología fiscal, con foco en desigualdad, impuestos y elites. Es coeditor de *Rethinking Taxation in Latin America: Reform and Challenges in Times of Uncertainty* (con Constantin Groll y María Fernanda Valdés, Palgrave-Macmillan, Cham, 2018).

Cristóbal Rovira Kaltwasser: es profesor titular de la Universidad Diego Portales (UDP), Santiago de Chile, e investigador asociado del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES). Su agenda de investigación se focaliza en el estudio del populismo en perspectiva comparada. Es coeditor de *Riding the Populist Wave: Europe's Mainstream Right in Crisis* (con Tim Bale, Cambridge UP, Cambridge, 2021).

Palabras claves: conflicto, elites, ideología, polarización, Chile.

de la ciudadanía. Por su parte, la globalización financiera ha traído consigo un enriquecimiento sustancial de los dueños del capital, quienes en cierto sentido pueden ser considerados como una minoría de poder que actúa en el nivel planetario antes que nacional¹. Más allá de las diferencias que puedan existir entre países y del impacto de transformaciones a escala global, estudiar quiénes son y cómo piensan las elites es un ejercicio de suma relevancia para entender mejor el funcionamiento de la sociedad actual. Dado que las elites ocupan las posiciones superiores en las principales esferas del orden social y tienen gran capacidad de influir en el devenir de la sociedad y sus problemas, es crucial tener información sobre ellas y sus preferencias.

De hecho, es común escuchar que lo propio del siglo XXI es la existencia de una elite que crecientemente se ha venido distanciando del parecer de la ciudadanía, lo cual explicaría en parte el progresivo malestar con la democracia. Entre otros motivos para el aumento de la desconexión entre elite y ciudadanía, se suele señalar la persistencia o acentuación de la concentración de ingresos y riqueza, la segregación residencial y graduales transformaciones estructurales en la población (por ejemplo, la liberalización cultural y el impacto de la inmigración) que usualmente no son advertidas por las elites². Sin embargo, la evidencia sobre la brecha entre elite y ciudadanía es difícil de estudiar empíricamente. No solo es costoso acceder a las elites para saber cuáles son sus opiniones, sino que también tenemos escasos datos a lo largo del tiempo y, por tanto, poca claridad al momento de averiguar si las posturas de la elite son consistentes o han variado.

Para abordar este vacío de investigación, gracias al apoyo del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social (COES), hemos llevado a cabo un inédito estudio de la elite chilena, y en este artículo presentamos algunos de los hallazgos más relevantes³. Esta contribución se divide en seis apartados. En primer lugar, ofrecemos información respecto a la peculiaridad del caso chileno en perspectiva comparada y una breve discusión sobre la metodología de nuestro estudio. A continuación, analizamos los datos sobre polarización ideológica para demostrar que la disputa política es mucho mayor en el nivel de la elite que en el de las masas. Después de esto, nos detenemos en el análisis de la inmigración y mostramos que esta cuestión genera creciente preocupación entre la ciudadanía, pero no en el ámbito de las elites. Luego nos adentramos en el tópico de los conflictos, mostrando divergencias entre elites y ciudadanía en asuntos económicos y de clase, pero coincidencias en la

1. Thomas Piketty: *El capital en el siglo XXI*, FCE, Ciudad de México, 2014.

2. V., por ejemplo, Pierre Rosanvallon: *La sociedad de los iguales*, RBA, Barcelona, 2012.

3. J. Atria y C. Rovira Kaltwasser: «Informe de resultados. Estudio COES de la elite cultural, económica y política en Chile», COES, Santiago de Chile, 2021.

percepción de un gran conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado chileno. La siguiente sección discute sobre brechas salariales y muestra la concordancia entre las elites respecto al menor salario que deberían recibir ocupaciones ligadas a la política y la administración empresarial. Finalmente, el artículo concluye con algunas reflexiones respecto a cómo estos hallazgos nos iluminan sobre el comportamiento de las elites en general y sobre el futuro de Chile en particular.

¿Por qué y cómo estudiar a las elites en Chile?

Debido a la solidez de sus instituciones, a un exitoso proceso de modernización económica y a su marcada estabilidad política, Chile es usualmente visto como un país singular en el contexto de América Latina. Sin embargo, esta imagen ha sido puesta en tela de juicio en los últimos años. No solo los partidos políticos establecidos tienen crecientes problemas para procesar las demandas de la ciudadanía, sino que además una serie de escándalos de corrupción y colusión han sacudido la imagen de la clase empresarial y política, al tiempo que investigaciones periodísticas y judiciales han revelado serios casos de pederastia y encubrimiento dentro de la Iglesia católica. A esto se suma una robusta evidencia sobre la incapacidad del desarrollo económico para reducir la persistente concentración de ingreso y riqueza, manteniéndose pese a todos los avances de las últimas décadas disparidades comparables a las que tenía el país a mediados del siglo xx. A su vez, movimientos sociales de distinto tipo han venido ganando terreno mediante la politización del malestar generado por estas desigualdades⁴. En efecto, Chile experimentó a fines de 2019 un estallido social que tuvo como consecuencia serias violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden y una tensión e inestabilidad política inusitadas, que en parte se logró aplacar mediante la convocatoria a un plebiscito constitucional que se llevó a cabo en octubre de 2020 y cuyo resultado mostró un masivo apoyo a la redacción de una nueva Carta Magna por parte de una asamblea conformada en su totalidad por constituyentes elegidos para este propósito⁵.

Chile es usualmente visto como un país singular en el contexto de América Latina

4. Sofia Donoso y Marisa von Bülow (eds.): *Social Movements in Chile: Organization, Trajectories, and Political Consequences*, Palgrave-Macmillan, Nueva York, 2017.

5. Un análisis empírico de la votación para ese plebiscito se puede encontrar en Carlos Meléndez, C. Rovira Kaltwasser y Javier Sajuria: «Chile 2020: pandemia y plebiscito constitucional» en *Revista de Ciencia Política* vol. 41 N° 2, 2021.

Por cierto, la pandemia ha reforzado muchos de los problemas que afectan a la sociedad chilena. En resumen, diversos acontecimientos del último tiempo demuestran que Chile está enfrentando serios desafíos de gobernabilidad y no es del todo claro si estos podrán ser abordados de manera exitosa en el futuro cercano.

Si bien es cierto que una diversidad de causas explica las dificultades que actualmente atraviesa la sociedad chilena, existe consenso respecto a que una parte importante del problema radica en el comportamiento de las elites. No cabe duda de que estas últimas han sido las principales beneficiadas del desarrollo en las últimas décadas y, por lo mismo, han puesto muy poca atención en un creciente malestar en grandes sectores de la ciudadanía respecto del funcionamiento del sistema económico y político imperante. Asimismo, frente a diagnósticos cada vez más robustos de problemas en esferas claves del desarrollo, el debate público confronta soluciones políticas muy divergentes y las elites tienden a reproducir propuestas cuya efectividad ha sido precisamente puesta en tela de juicio por la ciudadanía en las últimas décadas.

Aun cuando este diagnóstico es compartido por distintos analistas y académicos, existe poca evidencia empírica que nos permita analizar de manera concreta en qué temas existen pareceres similares o diferentes no solo entre elite y ciudadanía, sino también en el interior de la propia elite. Para abordar esta pregunta de investigación, elaboramos una encuesta que cubre diversas temáticas, la cual fue aplicada de manera presencial (o vía remota mediante Zoom, debido a la pandemia) a integrantes de la elite chilena desde agosto de 2019 hasta enero de 2021. En total logramos realizar 420 encuestas, que se dividen de manera bastante homogénea entre la elite cultural (144 casos), la elite económica (137 casos) y la elite política (139). A su vez, gran parte de las preguntas de esta encuesta también han sido utilizadas en encuestas recientes que son representativas de la población adulta del país, lo que permite establecer comparaciones entre las opiniones de la elite y la ciudadanía.

La metodología utilizada se sustenta en una tradición de estudios empíricos sobre elites que trabajan con el método posicional, según el cual estas se componen de individuos que ocupan los máximos puestos de poder y, por tanto, ejercen influencia constante y sustancial sobre las decisiones que afectan el funcionamiento de la sociedad⁶. Es por ello que, antes de realizar el trabajo de campo, confeccionamos un universo de casos con las posiciones

6. Wilhelm P. Rebenstorf y Hilke Bürklin (eds.): *Eliten in Deutschland: Rekrutierung und Integration*, vs Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 1997; Ursula Hoffmann-Lange: «Methods of Elite Identification» en Heinrich Best y John Higley (eds.): *The Palgrave Handbook of Political Elites*, Palgrave Macmillan, Londres, 2018.

de poder para las distintas élites nacionales. En el caso de la elite económica, nos basamos en el ranking de las 500 empresas más grandes de Chile elaborado por América Economía en 2019 y armamos una lista de los gerentes generales (o puestos similares) y miembros del directorio (de preferencia, el presidente), estableciendo de esta manera un universo muestral de 1.284 contactos. Para la elite política, trabajamos con el organigrama del Estado de Chile para identificar posiciones de poder en distintas instituciones (Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Legislativo, gobiernos regionales, instituciones autónomas, etc.) y también consideramos gremios, sindicatos y directivas de partidos políticos con representación parlamentaria, configurando un universo muestral de 531 casos. Por último, para la elite cultural, confeccionamos un mapa de las distintas posiciones de poder considerando instituciones tales como universidades, iglesias, medios de comunicación, *think tanks* y casas editoriales, entre otros, y así logramos establecer un universo muestral de 466 casos.

Antes de detenernos en el análisis de algunos de los hallazgos más relevantes de este estudio, nos parece importante indicar dos rasgos de la muestra obtenida de la elite chilena. En primer lugar, los datos revelan que se trata de un grupo mayoritariamente masculino: tan solo 19% de las encuestadas son mujeres. Esta diferencia es más marcada en la elite económica, la cual está compuesta en 92% por hombres, mientras que la muestra de la elite política tiene 80% de hombres y la de la elite cultural, 72%. En segundo lugar, los datos reflejan que la elite en general es más religiosa que el resto de la ciudadanía. Mientras que 45% de la población adulta en Chile se declara católica, esta cifra se eleva a 58% en la elite. Esta diferencia es particularmente marcada para la elite económica: 70% se identifica como católica. A su vez, se observa que entre la población adulta de Chile hay 15% que se declara evangélica y 20% que no declara ninguna religión, mientras que en la elite en promedio solo 1% se identifica como evangélica y 10% indica no tener ninguna religión. Estos datos sobre el género y la religiosidad nos adelantan un tema que analizaremos con mayor profundidad a continuación, a saber, una brecha importante entre elites y ciudadanía en el Chile actual.

Los datos reflejan que la elite en general es más religiosa que el resto de la ciudadanía

Polarización ideológica

No hay duda de que el debate político en Chile está crecientemente polarizado. Basta pensar en la discusión respecto al plebiscito constitucional realizado a fines del año pasado, cuando un sector argumentaba que

modificar la Constitución implicaría el derrumbe del país y la implantación de un modelo «castro-chavista», mientras que otro planteaba que a través de la transformación de la Constitución se podrían superar gran parte de los problemas y dar pie a la pronta conformación de un Estado de Bienestar que acabe de raíz con las desigualdades. Ahora bien, lo que no sabemos con certeza es si esta polarización ideológica que se observa en el debate público obedece a conflictos entre las elites o más bien a disputas entre las elites y la ciudadanía.

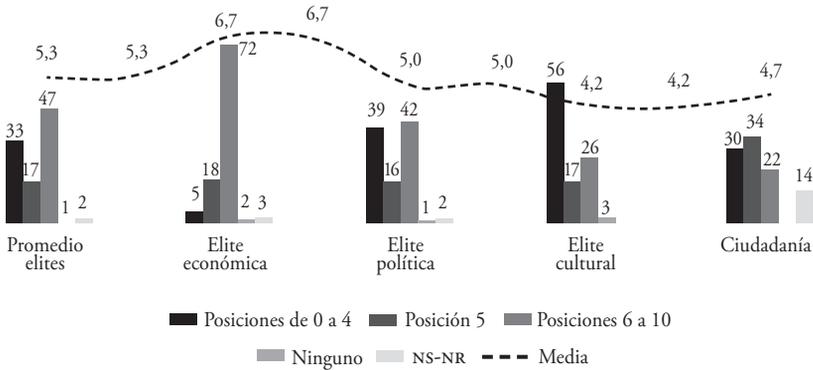
Para abordar este tema, el estudio de la elite chilena incluyó una pregunta en la que cada encuestado debía elegir una posición en una escala de 0 a 10, donde 0 representaba ser de «izquierda», 5 ser de «centro» y 10 ser de «derecha». Los datos se pueden observar en el gráfico 1, en el que también se pueden visualizar las posturas de la ciudadanía. Esta última se divide en tres grupos relativamente homogéneos: 30% dice ser de izquierda, 34% de centro y 22% de derecha (también existe un 14% que no toma posición). Sin embargo, las cifras para las elites son muy diferentes. La gran mayoría de la elite económica se declara de derecha (72%), mientras que la mayoría de la elite cultural se define de izquierda (56%). Por su parte, la elite política está dividida en dos grupos mayoritarios: 39% dice ser de derecha y 42% se posiciona a la izquierda (tan solo 16% se declara de centro). Esta evidencia revela entonces que la polarización política es un fenómeno que afecta antes que nada a la elite y no tanto a la ciudadanía. Tal como indica Nancy Bermeo en un célebre libro⁷, hay que tener mucho cuidado con culpabilizar a las masas por la adopción de posturas radicales y más bien hay que estudiar las posiciones de las elites. Estas últimas pueden actuar de manera tal que ignoran el parecer de las mayorías y con ello se enfrasan en disputas internas que imposibilitan tanto una discusión razonable sobre los problemas que afectan a la sociedad como la búsqueda de soluciones consensuadas.

El estudio que llevamos a cabo incluía también una serie de preguntas para analizar la opinión de elites y ciudadanía frente al rol del Estado en la economía. Al revisar esos datos, se repite el patrón de polarización descrito. Por lo general, la ciudadanía tiende a demandar la existencia de un Estado que tenga mayor capacidad de proveer bienestar para la mayoría y disminuir las desigualdades, pero las elites presentan gran variación frente a estas temáticas. Particularmente notoria es la postura de la elite económica, que defiende posiciones muy a favor del libre mercado. A su vez, más de la mitad de la población se inclina en favor de que el Estado se haga cargo de la salud (55%), la educación (58%) y las pensiones (61%), pero frente a estos asuntos las elites tienden a respaldar modelos mixtos donde se combinan el Estado y el mercado.

7. N. Bermeo: *Ordinary People in Extraordinary Times: The Citizenry and the Breakdown of Democracy*, Princeton UP, Princeton, 2003.

Gráfico 1

Chile: posicionamientos ideológicos (promedio de posiciones y media)



Fuente: elaboración de los autores a partir de las respuestas a la pregunta: «En nuestro país la gente define las posiciones políticas como más cercanas a la izquierda, al centro o a la derecha. Usando una escala de 0 a 10 donde 0 es ser de 'izquierda', 5 es ser de 'centro' y 10 es ser de 'derecha', ¿dónde se ubicaría usted?». J. Atria y C. Rovira Kaltwasser: «Informe de resultados», cit.

Inmigración

La inmigración se ha vuelto un fenómeno global que afecta a los países de distintas maneras. Algunos experimentan una creciente presión inmigratoria, mientras que otros se distinguen más bien por olas de emigración. Estos flujos migratorios impactan distintas dimensiones de la sociedad, tales como el mercado de trabajo, la provisión de servicios sociales y el sentido de pertenencia. A su vez, los fenómenos migratorios suelen ser evaluados de manera muy diferente por la elite y la ciudadanía. Por ejemplo, en Europa occidental, las elites tienden a tener posturas bastante abiertas hacia la inmigración, aun cuando segmentos importantes del electorado se oponen a la llegada de población extranjera. Esta dinámica ha pavimentado el camino para la irrupción de partidos populistas de derecha radical, que levantan un discurso xenófobo con serias consecuencias para el sistema democrático⁸.

8. Cas Mudde y C. Rovira Kaltwasser: *Populism: A Very Short Introduction*, Oxford UP, Nueva York, 2017.

En el caso de Chile, pese a los problemas económicos y políticos experimentados en el último tiempo, el número de inmigrantes ha venido aumentando en años recientes. Cifras oficiales indican que en el país hay aproximadamente 1,5 millones de inmigrantes, lo cual representa cerca de 8% de la población⁹. A modo de comparación, a inicios de 1990 se estima que la población inmigrante no representaba más de 1% de la población nacional (unas 105.000 personas). En consecuencia, la inmigración es un fenómeno evidente en el Chile de hoy, pero disponemos de poca información respecto a su evaluación por parte de las elites en comparación a la ciudadanía. Para tematizar esto, nuestro estudio incluyó una serie de preguntas sobre inmigración y las respuestas nos revelan patrones marcadamente diferenciados entre el parecer de la elite y la ciudadanía. La elite cultural, económica y política muestra posturas bastante abiertas hacia la inmigración, lo cual no sucede necesariamente en el resto de la sociedad. En efecto, 95% de los encuestados de las elites opinó que la inmigración fortalece la diversidad cultural (cifra que alcanza 46% en la población chilena) y 11% de la elite plantea que la inmigración aumenta el desempleo (cifra que es de 47% en la población). Por su parte, cerca de un tercio de la población está de acuerdo con la idea de que la inmigración aumenta los riesgos de terrorismo, mientras que tan solo 1% de la elite comparte esta opinión.

Cuadro

Chile: percepciones sobre inmigración (en porcentajes)

	Promedio elites			Elite económica			Elite política			Elite cultural			Ciudadanía		
	(1+2)	(3)	(4+5)	(1+2)	(3)	(4+5)	(1+2)	(3)	(4+5)	(1+2)	(3)	(4+5)	(1+2)	(3)	(4+5)
Aumenta los riesgos de terrorismo	88	10	1	85	13	1	88	9	3	89	9	1	42	22	31
Aumenta el desempleo	66	22	11	61	23	15	67	22	9	68	24	8	31	20	47
Fortalece la diversidad cultural	2	3	95	1	2	97	2	4	93	3	3	94	30	21	46

Fuente: elaborado por los autores a partir de la respuesta a la pregunta: «En una escala de 1 a 5, donde 1 es ‘muy en desacuerdo’ y 5 ‘muy de acuerdo’, ¿cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con cada una de las siguientes frases relacionadas con los efectos que ha tenido la migración para el desarrollo de Chile?». J. Atria y C. Rovira Kaltwasser: «Informe de resultados», cit.

9. Fundación Servicio Jesuita a Migrantes: *Migración en Chile. Anuario 2019, un análisis multisectorial*, Santiago de Chile, 2020.

En resumen, los datos de este estudio dan cuenta de una importante brecha al momento de pensar y evaluar la inmigración. Gran parte de las élites muestran posturas abiertas hacia la llegada de extranjeros al país, pero una fracción importante del electorado es bastante escéptica frente al fenómeno migratorio. Este hallazgo debe ser leído como un llamado de atención que demuestra que es preciso tomar en cuenta el parecer de la ciudadanía respecto a esta temática. La evidencia comparada demuestra que, si las élites optan por obviar el tema de la inmigración, pueden terminar surgiendo fuerzas políticas de derecha populista radical con ideas xenóforas, que tienen un serio impacto en la convivencia democrática. En consecuencia, un desafío importante consiste en propiciar un diálogo constructivo sobre la inmigración y los criterios de su regulación.

Conflicto

La visualización de los conflictos sociales se ha intensificado en el debate público del Chile actual. Por un lado, las numerosas marchas protagonizadas por estudiantes en las manifestaciones de 2011 fueron revitalizadas e incluso superadas en el estallido social de 2019, cuando alcanzaron una participación masiva, para luego continuar en menor medida durante la pandemia. A modo de ejemplo, entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre de 2019 existieron más de 3.300 acciones de protesta en Chile, frente a las 1.100 acciones que se desplegaron entre junio y agosto de 2011¹⁰. Por otro lado, las biografías de sufrimiento y reivindicación retratadas en la cobertura mediática, y las distintas evaluaciones de actores sociales, políticos y económicos en torno de cómo interpretar los problemas y cómo encauzarlos institucionalmente han puesto de relieve que en Chile existen numerosos conflictos que deben ser abordados.

Sin embargo, los resultados de la encuesta exhiben discrepancias importantes respecto a lo que se considera como un conflicto y a la gravedad con que estos son observados. Tres constelaciones son llamativas al respecto: primero, los temas económicos y de clase – plasmados en la encuesta en las preguntas sobre si hay conflicto entre empresarios y trabajadores y entre ricos y pobres– son sustancialmente menos percibidos como confrontaciones importantes por la elite económica que por las otras élites y la ciudadanía. Esto es evidente en las relaciones entre trabajadores y empresarios: mientras 48% de la ciudadanía percibe un gran conflicto en ellas, 33% de la elite cultural y 23% de la elite política comparten esa percepción, para caer a 8% de los encuestados de la elite económica que coincide con ese diagnóstico.

10. Nicolás Somma, Matías Garretón, Tomás Campos y Alfredo Joignant: «Radiografía del estallido social» en A. Joignant, M. Garretón, N. Somma y T. Campos (eds.): *Informe anual Observatorio de Conflictos COES 2020*, COES, Santiago de Chile, 2020.

Para 35% de la ciudadanía existe un gran conflicto entre Chile y los países vecinos, percepción que cae a 7% promedio en las tres elites

Segundo, se aprecia una clara divergencia entre las elites y la población al analizar las relaciones entre Chile y sus países vecinos, como así también entre chilenos e inmigrantes. De hecho, para 35% de la ciudadanía existe un gran conflicto entre Chile y los países vecinos, percepción que cae drásticamente a 7% promedio en las tres elites. Del mismo modo, mientras en promedio 11% de las elites encuestadas considera que no existe un gran conflicto entre los chilenos y los inmigrantes, 45% de la ciudadanía sí percibe de modo muy problemático esta relación, en línea con la brecha antes presentada en torno de cómo la inmigración es discutida y evaluada. Consistentemente, y por razones que pueden incluir la conveniencia económica, posturas cosmopolitas o de valoración de la diversidad y también la distancia territorial y social, los datos revelan que la elite exhibe desdén hacia un tema que para la población chilena es considerado muy complejo.

No obstante esta brecha, existe alta coincidencia frente a otros conflictos, como es el caso de la relación entre el pueblo mapuche y el Estado, en la cual 79% de la elite chilena en promedio identifica un gran conflicto, muy cerca del 81% exhibido por la ciudadanía. Estos resultados son relevantes porque sugieren que, si se trata de resaltar los acuerdos para pensar soluciones a problemas comunes, la relación entre el pueblo mapuche y el Estado chileno debería ser un asunto claramente atendido con prioridad, el cual podría considerar aspectos que van desde su reconocimiento hasta su representación política, incluyendo también desigualdades sistemáticas en oportunidades y capital simbólico¹¹.

Brechas salariales

Junto con la concentración de ingreso y riqueza, la desigualdad económica en Chile se refleja en salarios promedio muy bajos. De acuerdo con la Encuesta Suplementaria de Ingresos 2019 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE)¹², el ingreso laboral promedio de la población ocupada en Chile fue de aproximadamente 890 dólares neto mensual (620.528 pesos

11. V. por ejemplo Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): *Desiguales. Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile*, Naciones Unidas, Santiago de Chile, 2017.

12. INE: Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI), 2020; síntesis de datos utilizados disponible en INE: «Ingreso laboral promedio mensual en Chile fue de \$620.528 en 2019», 26/10/2020, <[www.ine.cl/prensa/2020/10/26/ingreso-laboral-promedio-mensual-en-chile-fue-de-\\$620.528-en-2019](http://www.ine.cl/prensa/2020/10/26/ingreso-laboral-promedio-mensual-en-chile-fue-de-$620.528-en-2019)>.

chilenos), en tanto que la mediana de ingresos –representativa del punto exacto donde se ubica la mitad de la población– alcanzó unos 570 dólares (401.000 pesos). Diferencias de género y regionales pueden llevar a promedios y medianas aún más bajos; por ejemplo, en el mismo periodo, el ingreso promedio para las mujeres fue de unos 722 dólares (506.651 pesos), mientras que la mediana del ingreso para las mujeres llegó a 500 dólares (352.865 pesos).

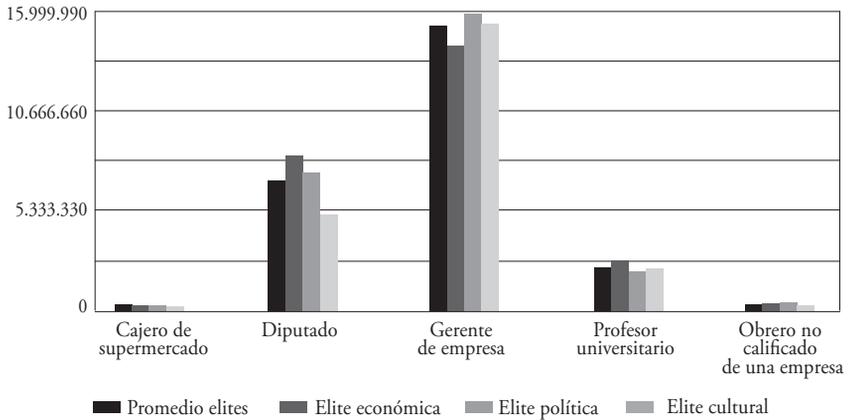
Para abordar las diferencias salariales en la encuesta, consideramos dos preguntas: la primera de ellas solicita a los encuestados que respondan cuál es el ingreso mensual líquido que creen que se recibe en cinco ocupaciones distintas, y la segunda, cuál es el ingreso mensual líquido que se debería recibir en tales ocupaciones. Las ocupaciones seleccionadas capturan niveles muy distintos de la estructura ocupacional, a saber, posiciones de muy baja o baja remuneración (un obrero no calificado de una fábrica y un cajero de supermercado), de remuneración media-alta (un profesor universitario) y posiciones en la cima de la jerarquía salarial (un diputado y un gerente de una gran empresa nacional). En su conjunto, ambas preguntas permiten conocer cómo perciben los encuestados los sueldos actuales y los sueldos justos en esas ocupaciones.

Los gráficos 2 y 3 ilustran las percepciones de la elite frente a estas preguntas. En el primer caso, los encuestados reconocen diferencias importantes en los salarios que recibirían las ocupaciones, particularmente entre aquellas de baja remuneración y el resto. A su vez, dentro de las tres ocupaciones de mayor salario, se aprecian distancias significativas, y todas las elites perciben que el gerente de una gran empresa puede ganar entre 75% y casi 300% más que un diputado. Todas estas cifras sin embargo tienen transformaciones cuando se observa la pregunta que mide el salario que *deberían* obtener estas ocupaciones: mientras que los encuestados de las tres elites declaran que un cajero de supermercado, un obrero no calificado y un profesor universitario deberían tener salarios superiores a los que ellos estiman que reciben actualmente, al mismo tiempo plantean que las retribuciones de los diputados y gerentes de grandes empresas deberían disminuir. Entre estos resultados, sorprende que la reducción que la elite económica esperaría del salario de un gerente es bastante menor a la que esperan las otras elites para este grupo. Esto es importante si tenemos en consideración que, en términos reales, estos salarios representan una diferencia abismal con lo que obtiene la mayoría de los chilenos, como exhiben las cifras de media y mediana salarial presentadas anteriormente.

Al mirar más específicamente las magnitudes de estos cambios, se observa que las tres elites no aplican el mismo criterio para proponer cambios

Gráfico 2

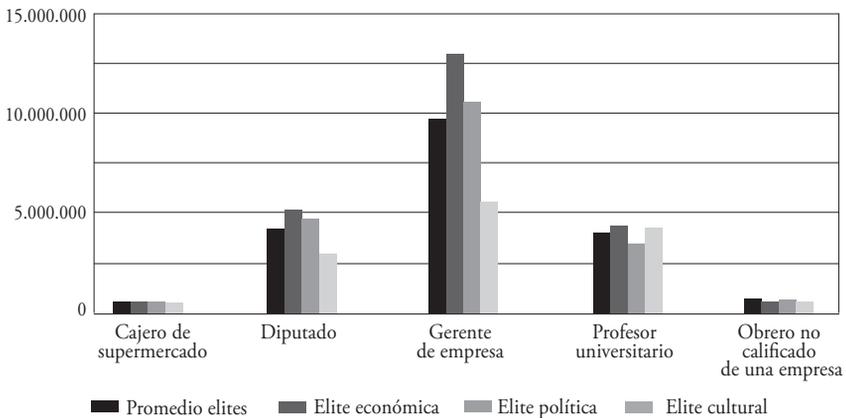
**Chile: percepciones sobre ingresos I
(media de menciones en pesos chilenos, CLP)**



Fuente: elaborado por los autores a partir de respuestas a la pregunta: «¿Cuánto cree usted que es el ingreso mensual líquido que las personas actualmente reciben en algunas ocupaciones o trabajos?». J. Atria y C. Rovira Kaltwasser: «Informe de resultados», cit.

Gráfico 3

Chile: percepciones de ingresos II (media de menciones en pesos chilenos, CLP)



Fuente: elaborado por los autores a partir de respuestas a la pregunta: «¿Cuánto cree usted que deberían ganar algunas ocupaciones o trabajos?». J. Atria y C. Rovira Kaltwasser: «Informe de resultados», cit.

salariales en ocupaciones de otras élites frente a la ocupación asociada con su ámbito de pertenencia, siendo más benevolentes con esta última. Así, las tres élites proponen un salario más alto para un profesor universitario, pero mientras la elite económica propone un alza de 65% y la política de 63%, la elite cultural sugiere que el salario de esa ocupación debería ser 83% mayor. Inversamente, mientras la elite económica sugiere que la reducción salarial de un diputado debería ser de 39% y la elite cultural de 45%, para la elite política tal disminución debería ser de 38%. Finalmente, aunque las élites política y cultural esperarían bajas salariales de 34% y 64% respectivamente para el gerente de una gran empresa, la elite económica sugiere que tal reducción solo debería ser de 8%.

Conclusión

En este artículo hemos examinado las percepciones y preferencias de la elite chilena en torno de cuatro temas de alta relevancia en el país: la polarización ideológica, la inmigración, la percepción de conflictos y las brechas salariales. Para eso, proporcionamos nueva evidencia basada en una encuesta a la elite económica, política y cultural, estableciendo comparaciones con actitudes ciudadanas obtenidas de encuestas recientes.

En términos generales, los resultados muestran una desconexión importante entre las posiciones de las élites y las expresadas por la mayoría de la población chilena. En aspectos tan diversos como la migración, el rol que debe asumir el Estado en la provisión de servicios sociales o los conflictos económicos y de clase, se observa una distancia particularmente significativa entre la elite económica y la ciudadanía. Esto es importante porque problematiza las consecuencias que puede tener la conversión de desigualdad económica en desigualdad política. Si es cierto que grandes disparidades de recursos pueden traducirse en disparidades de voz e influencia para lograr que las preferencias de los grupos privilegiados se impongan sobre las de aquellos de menores recursos¹³, que esas preferencias sean muy distintas debilita profundamente el potencial de las democracias de producir políticas públicas en favor de las mayorías¹⁴. Asimismo, y respecto a las desigualdades que caracterizan nuestra época, esto no solo intensifica la desconfianza en las instituciones económicas y políticas que parecen beneficiar a una

13. Task Force on Inequality and American Democracy, American Political Science Association: «American Democracy in an Age of Rising Inequality», APSA, 2004.

14. Benjamin I. Page, Larry M. Bartels y Jason Seawright: «Democracy and the Policy Preferences of Wealthy Americans» en *Perspectives on Politics* vol. 11 N° 1, 2013.

minoría¹⁵, sino que pone en riesgo los soportes básicos del capitalismo y las políticas de bienestar contemporáneas, agravando la secesión de los ricos y la insuficiencia de las instituciones redistributivas, lo que favorece a su vez la conformación de un capitalismo patrimonial¹⁶.

En términos más específicos, los resultados también permiten avanzar en el estudio de las elites en el siglo XXI. Los datos sugieren que estas no son un grupo completamente homogéneo y monolítico, sino que en algunos casos tienen opiniones diversas e incluso posiciones coincidentes con la ciudadanía. Esto es particularmente destacado en lo que concierne a la elite cultural, aunque también es identificable a veces en la elite política. Tal resultado es importante al momento de pensar en reformas sociales, políticas y económicas, haciendo posible avanzar en coaliciones que vayan más allá de las diferencias ideológicas frente a algunos temas e incorporando liderazgos que ocupan posiciones influyentes en distintas esferas sociales. En temas altamente controversiales, sin embargo, este tipo de alianzas resulta más complejo, razón por la cual el grado de éxito en cada caso dependerá de la construcción de mayorías que cuenten con bases amplias de apoyo, incluyendo también la participación de la sociedad civil.

Finalmente, los resultados también señalan otra discusión que debe ser profundizada con nuevas investigaciones en el futuro. La evidencia de nuestro estudio sugiere que en Chile no existe alta polarización en la ciudadanía, sino más bien en la elite. Parte del problema seguramente radica en que segmentos de la elite tienen muy poco contacto con la realidad del país e incluso promueven agendas que, voluntariamente o no, fomentan la polarización, por ejemplo, mediante el financiamiento a *think tanks* que difunden ideas de derecha radical¹⁷. A su vez, los datos disponibles indican que desde hace largo tiempo importantes segmentos de la ciudadanía han venido adoptando posiciones morales cada vez más liberales y, a su vez, demandan un rol más activo del Estado en la regulación del mercado, provisión de bienestar y protección del medio ambiente¹⁸. Considerando el proceso de discusión constitucional que enfrenta el país, los debates sostenidos en la esfera pública muchas veces enfatizan la intensificación de las diferencias entre elites, más que un acercamiento más profundo al parecer de la ciudadanía con el fin de propiciar un diálogo más

15. Joseph Stiglitz: *El precio de la desigualdad*, Taurus, Madrid, 2012.

16. T. Piketty: ob. cit.; J. Atria: «Legalism and Creativity: Tax Non-Compliance in the Eyes of the Economic Elite» en *International Review of Sociology* vol. 29 N° 1, 2019.

17. Mireya Dávila: «Los *think tanks* de derecha en tiempos de crisis» en *Barómetro de Política y Equidad* vol. 17, 2020.

18. C. Rovira Kaltwasser: «La (sobre)adaptación programática de la derecha chilena y la irrupción de la derecha populista radical» en *Colombia Internacional* N° 99, 7-9/2019; C. Rovira Kaltwasser: «El error de diagnóstico de la derecha chilena y su encrucijada actual» en *Estudios Públicos* N° 158, 2019.

amplio y representativo de las preocupaciones de distintos grupos. En este sentido, priorizar los planteamientos de la ciudadanía en la conversación pública, así como evitar la sobrerrepresentación de la elite –en especial, de la elite económica– en esa conversación, representan desafíos de gran envergadura para que las propuestas que de allí emanen sean del interés y conveniencia de la mayoría. Sin ser aún claro el desenlace de este proceso, la elección de los constituyentes el 15 y 16 de mayo pasados ofrece señales interesantes de una mayor representatividad de la realidad nacional y crea expectativas para proyectar un diálogo más democrático y fructífero para el Chile de las próximas décadas. En efecto, la gran diversidad de la Convención Constitucional recientemente electa contrasta de manera radical con la homogeneidad de género, etaria, socioeconómica e ideológica de la elite que fue encuestada en este estudio. ☐

Perfiles

Latinoamericanos

Julio-Diciembre de 2021

Ciudad de México

Nº 58

ARTÍCULOS: Ejercer el periodismo en entornos violentos: análisis empírico de las zonas de silencio en México, **Grisel Salazar Rebolledo**. La sentencia es de quien la trabaja: estructura organizacional y justicia constitucional en México (1996-2005), **Josafat Cortez Salinas**. Nicaragua mestiza versus Nicaragua multiétnica: el caso de la Costa Caribe, **Hloreley Osorio Mercado** y **Luis Héctor Serra Vázquez**. Cambio climático y gobernanza multinivel en Uruguay: percepciones tras diez años del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, **Amalia Margarita Stuhldreher**. Leña, sustentabilidad, desigualdad y ciudades multiculturales, **Andrés Enrique Miguel Velasco**, **Ruffo Cain López Hernández**, **Karina Aidee Martínez García**, **Luz Astrid Martínez Sánchez** y **Lizbeth Fabiola García Cruz**. Agua en la Ciudad de México: deseconomías de escala y tecnologías intermedias, **Carlos A. Fraga-Castillo**. Gobernanza de la expansión: infraestructuras transnacionales de energía en América Latina, **Alke Christine Jenss**. La dimensión política del patrimonio. Reivindicación del valor social del ferrocarril en Chile entre dictadura y democracia (1973-2012), **Andrea Ortega** y **Macarena Ibarra**. Hacia una infraestructura cooperativa: cultura política solidaria en presupuestos participativos, **Antonio Cádiz-Cota** y **Mariano Jorge Beret Rodríguez**. Cultura del trabajo y de la vida con sentido solidario, **Elizabeth Alves Pérez**. Nueva ruralidad y migración en la Mixteca Alta, México, **Matthew Lorenzen**. Satisfacción familiar en América Latina: ¿importan las relaciones?, **René Millán** y **Rosario Esteinou**. Estilos de consumo, actitudes hacia el dinero, y materialismo en adolescentes chilenos y ecuatorianos, **Mariela del Carmen Denegri Coria**, **Jorge Alonso Rodrigo Torres Acosta**, **Manuel Ignacio Correa Abarzúa**, **Valentina Belén González Rodríguez**, **Javiera Camila Belén Toro Lavanderos**, **Pamela Alejandra Salazar Valenzuela**, **Leonor Maricela Riquelme Segura**, **José Andrés Sepúlveda Maldonado**. Educación superior, productividad y crecimiento económico en México entre 2004 y 2015, **Alejandro Mungaray Lagarda**, **Raúl Barutch Pimienta Gallardo** y **Marco Tulio Ocegueda Hernández**. ENSAYO: Impactos del covid-19 en los escenarios latinoamericanos contemporáneos, **Gerardo Caetano** y **Nicolás Pose**. RESEÑAS.

En línea: <<https://perfilesa.flacso.edu.mx/>>

Perfiles Latinoamericanos es una publicación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), sede México. Coordinación de Fomento Editorial, Carretera al Ajusco 377, Colonia Héroes de Padierna, C.P. 14200, México, DF. Tel.: (5255) 3000 0244 / 3000 0251. Correo electrónico: <perfiles@flacso.edu.mx>.

Una guía para entender el Perú de Pedro Castillo

Zaraí Toledo Orozco

¿Cómo un sindicalista de provincia llegó a la Presidencia de Perú? En un país que quedó fuera del «giro a la izquierda» regional de los años 2000 y de los levantamientos indígenas de otros países de la región, y que hizo de la continuidad del modelo económico un dogma de fe para cualquier candidato que buscara llegar a la jefatura de Estado, las elecciones del 6 de junio pasado provocaron un terremoto político. Habrá que ver si es el anuncio de una reconciliación del país consigo mismo o el anticipo de nuevas crisis políticas.

Un sindicalista de Chota, una de las provincias más pobres del Perú, le ganó la Presidencia a la tres veces candidata, ex-congresista y heredera del partido más rico e importante de derecha. Tras el colapso sanitario y una larga crisis política que dejó tres presidentes en cuatro años, Perú ha quedado dividido en dos partes casi iguales. Una, que votó por Keiko Fujimori, predominantemente limeña, urbana y costeña, quedó en pánico luego de oír por meses que el comunismo le va a quitar todo. La otra, compuesta por votantes de bajos recursos de zonas rurales, andinas y amazónicas, eligió que Perú inicie el bicentenario de su independencia liderado por Pedro Castillo, un presidente

Zaraí Toledo Orozco: es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Columbia Británica, Vancouver. Investiga sobre desarrollo del Estado andino, manejo de recursos naturales e informalidad. Actualmente es investigadora posdoctoral en el Center for Inter-American Policy and Research (CIPR) de la Universidad Tulane, Nueva Orleans.

Palabras claves: desigualdad, Pedro Castillo, Keiko Fujimori, Perú.

de izquierda, maestro, rondero¹, cercano al evangelismo² y completamente ajeno a la política limeña, de quien mucho se dice, pero casi nada se sabe.

Ninguno de los candidatos representaba el sentir de las mayorías. Ambos pasaron a segunda vuelta con votaciones menores a 20%, solamente explicables a partir del alto grado de fragmentación política. De un lado estaba Fujimori, la lideresa que promovió dos intentos de vacancia presidencial tras perder las elecciones pasadas y quien, como en anteriores ocasiones, tuvo como única consigna evitar que se tocaran las políticas neoliberales que implementara su padre, el ex-presidente hoy encarcelado Alberto Fujimori. Del otro estaba Castillo, un candidato improvisado e inconsistente, que se postuló por el partido Perú Libre, cuyo líder, el polémico Vladimir Cerrón, redactó un programa político autodefinido, sin ahorrarse adscripciones, como antiimperialista, mariateguista, socialista y marxista-leninista. Al fiel estilo de la izquierda sudamericana de los 2000, las únicas propuestas concretas de Castillo fueron el cambio constitucional y la expansión en el acceso a servicios públicos. Pese a los serios temores que provocaban ambas candidaturas, luego de la primera vuelta comenzó una pomposa pero incoherente campaña en la que Fujimori hija se autoproclamó como la única representante de la estabilidad, la democracia y hasta del capitalismo.

Varios politólogos han dicho que esta elección pone un fin al consenso alrededor del modelo económico peruano. Dicen que buena parte de los electores puso en duda las políticas de libre empresa implementadas desde la década de 1990. Algunos hablan de un voto de protesta. Dicen que los peruanos, molestos por la ineficiencia estatal expuesta en la pandemia, buscan cambios radicales. Otro grupo dice que los «excluidos», carentes de representación política, han volcado su malestar hacia la opción más antiestablishment. La crisis no solo es política sino también, y sobre todo, dicen, institucional.

Todo esto es real y, sin embargo, nada de ello es nuevo en la política peruana. Las preocupaciones formales de los analistas habituales no alcanzan para explicar la amplia alianza entre los líderes de derecha y centro, el sesgo mediático, las campañas publicitarias del miedo financiadas por empresarios en las provincias e incluso la militancia de presentadores e *influencers* limeños. En más de 20 años de democracia, el mayor consenso al que llegaron las elites urbanas en Perú es que nada debe cambiar. Ni en relación con

1. Las rondas surgieron como organizaciones campesinas de defensa contra el hurto de ganado, pero con el tiempo se transformaron en poderes autónomos para la toma de decisiones y administración de territorios comunitarios. Sobre el origen de las rondas, v. Orin Starn: *Reflexiones sobre rondas campesinas, protesta rural y nuevos movimientos sociales*, IEP, Lima, 1991.

2. Su esposa y una de sus hijas pertenecen a la Iglesia del Nazareno y él participa a menudo de sus oraciones.

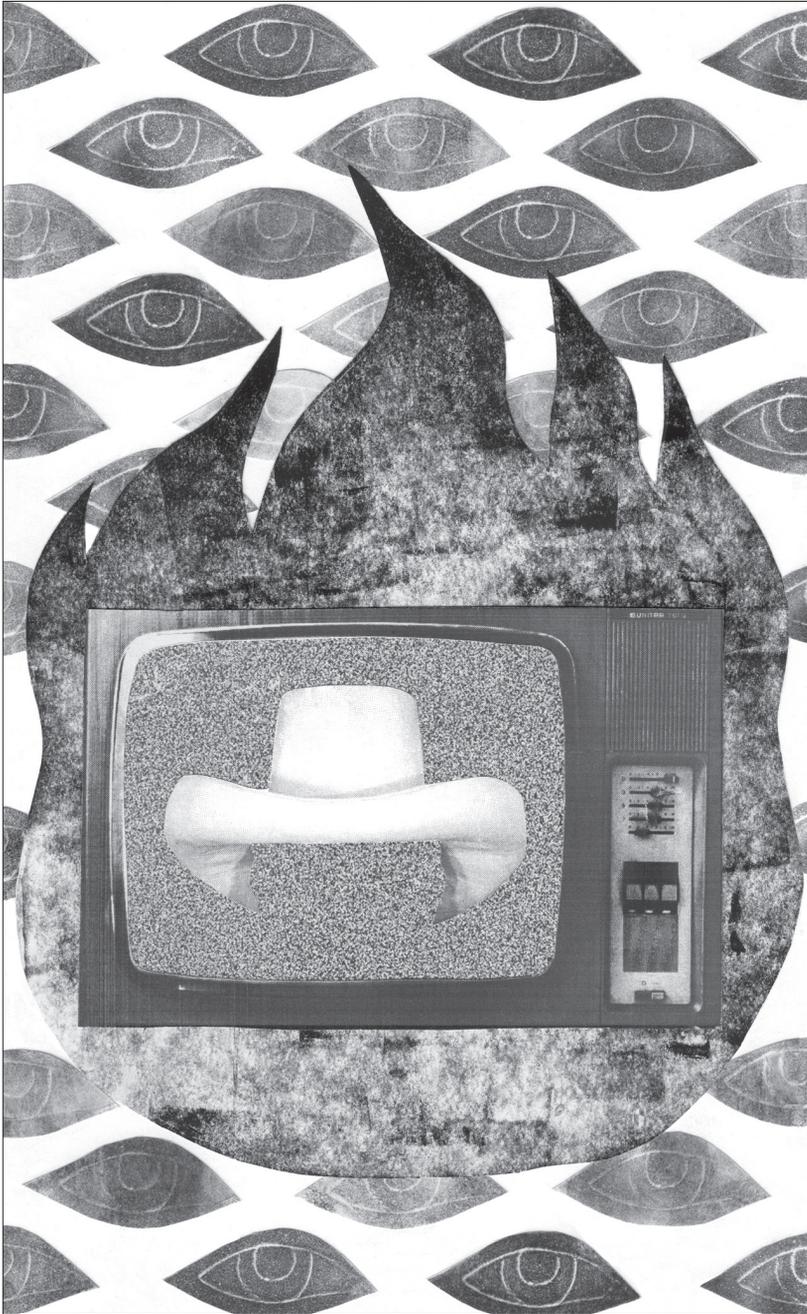
el manejo y el rol estatal, ni con la forma de generar riqueza y redistribuirla ni, sobre todo, con quienes pueden tener acceso al poder. Junto con el pánico ciudadano a un cambio radical de modelo político o económico, esta elección develó el miedo de una clase política a que «el otro» pueda también querer comer del pastel.

Los dos Perú

Desde hace 20 años, al país se lo puede leer de dos formas. En Perú hay alternancia en el poder. ¡Es el milagro peruano! Es una de las economías que más creció, con estabilidad financiera y gran capacidad para atraer inversiones extranjeras. Es un país donde el empleo urbano aumentó y la pobreza descendió consistentemente. Al mismo tiempo, Perú es un país donde la desigualdad va en aumento, con una mayoría que trabaja en el sector informal, o en el formal pero sin derechos laborales, con servicios básicos precarios o inexistentes en varias regiones y tremendamente racista contra su población andina y amazónica.

A Perú no se lo lee por filiación partidaria sino por ubicación geográfica. Mientras más lejos se esté del «milagro peruano», menos se cree que este sea real. Consistentemente, las zonas rurales más pobres, indígenas o campesinas, que para su supervivencia dependen más de la autoorganización que del Estado, votan en las elecciones presidenciales por opciones políticas que prometan más Estado, oportunidades y reivindicaciones socioculturales. Por su parte, las zonas costeñas, desérticas y urbanas tienden a votar por opciones más de derecha, casi siempre de la mano de los distritos más ricos de Lima. A estos dos grupos solamente los une el conservadurismo social. En el medio, una clase media frágil, sin preferencias muy definidas, juventudes apolíticas y microempresarios que, abandonados a su suerte por el Estado, se han echado a los hombros la economía local. Resignado a pagar a empresas privadas por servicios básicos de calidad mediocre, este último grupo vive aterrorizado de que una crisis política lo haga perder todo lo que a duras penas ha logrado.

La división no es casual. La clase política capitalina supo aprovechar muy bien el crecimiento macroeconómico proveniente principalmente de los altos precios de los minerales para asentar un discurso de *statu quo*. En Perú no hubo un giro a la izquierda como en la mayoría de los países vecinos. Tampoco reformas de peso para la mejora de servicios, como en Uruguay y Costa Rica. Mucho menos se vio el ascenso de movimientos sociales indígenas, estudiantiles o de trabajadores como en Bolivia, Ecuador, Chile y Argentina. En Perú, los políticos han dicho que para estar mejor no hay que hacer



nada. La representación, las reformas y el cambio son accesorios, cuando se sabe que la inercia es rentable. Incluso los partidos con mayores recursos de derecha parecen haber perdido la ambición de hacer política de verdad. En materia ideológica y de política pública, nada distingue a un político de Acción Popular de uno de Alianza por el Progreso o Fuerza Popular. Unidos por un pacto tácito de mutua protección, a nuestros políticos les es fácil cambiar de causas y rotar entre partidos, utilizando como único recurso de diferenciación la anécdota, el *impasse* y una que otra denuncia en Fiscalía.

No es que la ciudadanía no esté viva. Perú es el país con el mayor número de conflictos socioambientales de la región³ y también tiene un elevado porcentaje de autoridades subnacionales revocadas por corrupción⁴. No obstante, sin políticos con ambiciones de representación y con una estructura mediática centralista, es difícil que un peruano de las zonas urbanas o costeñas sepa qué reclaman sus compatriotas del sur o el oriente, y menos que se armen coaliciones nacionales. No se enteran de los largos viajes de las

Un peruano de las zonas urbanas no sabe nada hasta que la televisión le muestra un paro regional, una carretera bloqueada

autoridades municipales rurales a los ministerios en Lima para conseguir más maestros para sus escuelas o simplemente acceso al agua. Tampoco saben de los reclamos ciudadanos por obras sobrevaloradas o malversación de presupuestos. Un peruano de las zonas urbanas no sabe nada hasta que la televisión le muestra un paro regional, una carretera bloqueada o un grupo de «radicales» dibujados como amenazas a la estabilidad nacional. Perú ha crecido en reservas económicas y capacidad de gasto, pero

adolesce de empatía. Sigue sin poder cuestionarse la raíz de sus problemas porque lo han asustado diciéndole que lo que ese «otro peruano» quiere es arrebatárle todo lo que él ha logrado.

La prensa, ¿espejo del país?

Con un país escindido, las elecciones se convierten en el único momento en que todos valen igual; pero ¿se puede ser ejercer la democracia en un país que no se conoce a sí mismo? El imaginario de nación del que hablaba Benedict Anderson está principalmente representado por lo que los ciudadanos de hoy alcanzamos a ver en los medios de comunicación masivos. El problema

3. V. Observatorio de Conflictos Míneros en América Latina, <www.ocmal.org>.

4. Yanina Welp: «Recall Referendums in Peruvian Municipalities: A Political Weapon for Bad Losers or an Instrument of Accountability?» en *Democratization* vol. 23 N° 7, 2016.

es que en Perú la prensa ha elegido ser un jugador, más que un narrador de la realidad. Desde la primera vuelta del 11 de abril pasado, los medios hicieron una cobertura tendenciosa de las preferencias electorales, siempre dando más luz a las nueve versiones de la derecha que participaron de la contienda. De un total de 603 entrevistas en campaña, Alberto Beingolea, del Partido Popular Cristiano (conservador), que hace ya décadas no tiene nada de «popular», fue entrevistado 121 veces, mientras que Pedro Castillo solamente 17⁵. El primero no llegó a 2% de los votos y el segundo ocupa hoy la silla de Pizarro.

Todo fue cuesta abajo durante el balotaje. Si ya era una campaña rica en miedos y pobre en propuestas, los medios la empobrecieron todavía más intercambiando la investigación por el proselitismo. Durante semanas, hubo numerosas tapas en los diarios nacionales contra Castillo y ninguna contra su contrincante⁶. En las provincias, las noticias anunciaban la llegada de una suerte de mezcla entre comunismo y madurismo encarnada en cholos que, envalentonados, se apresuraban a invadir las casas de la «gente de bien». En televisión, constantemente se desafiaban las leyes de medios que norman neutralidad e imparcialidad. Los conductores de los programas juveniles más vistos aireaban la bandera nacional y repetían los lemas de campaña de Fujimori meneando sus rubios y musculosos cuerpos, al tiempo que sostenían las botellas de jugo que les tocaba promocionar en el siguiente bloque.

Casi todos los medios de prensa emitieron comunicados explicando que los dueños tenían derecho a establecer una línea editorial. En retrospectiva, los mensajes parecían amenazas. Luego de que tanto las encuestadoras como el conteo de la autoridad nacional indicaran que Castillo había ganado, los medios iniciaron una campaña de negación y desinformación. El ya viejo deporte del *terruqueo* –acusaciones de terrorismo para descalificar a los adversarios políticos– fue pan de cada día contra quienes reconocían los resultados electorales. Todos los reflectores iban hacia los ex-militares, líderes de ultraderecha y hasta hispanistas que repetían a coro que, de ganar Castillo, se alzarían en armas para «defender la democracia y la paz». A varios políticos les era más fácil argumentar en televisión que la Organización de Estados Americanos (OEA) y Joe Biden habían sido cómplices y compinches de un supuesto fraude que reconocer que el candidato chotano había

5. Grupo de Investigación de Partidos y Elecciones (GIPE): «Tabla: Entrevistas a candidatos presidenciales en televisión: 1 de enero - 11 de abril», Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2021.

6. Unión Europea, Misión de Expertos Electorales - Perú: «Elecciones generales 11 de abril de 2021. Segunda vuelta presidencial 6 de junio de 2021. Informe final. Periodo de referencia 15 de marzo - 19 de julio de 2021», 2021, disponible en <https://eeas.europa.eu/sites/default/files/eu_eem_per_2021_fr_es.pdf>.

vencido en las urnas. Incluso los periodistas que cuestionaron esta versión tuvieron que abandonar sus puestos⁷.

Así se pospuso la definición de los resultados del conteo final y, mucho peor aún, se arrojó sombra sobre el ideal de que el poder en América Latina se gana únicamente mediante los votos. Si ya las posibilidades de gobernabilidad de los presidentes peruanos estaban socavadas por el uso de las vacancias presidenciales como amenaza cotidiana, la deslegitimación de los resultados electorales abre una segunda caja de Pandora en la región, por la cual los perdedores se ven habilitados por otros poderes para no aceptar su derrota.

Una clase política que ya no representa a nadie, de la mano de una parte de la elite limeña con aires coloniales que emplea los legítimos miedos de un país altamente incomunicado y dividido para decir una vez más que el otro, el que vota distinto, es el enemigo. La democracia, hasta que me convenga: esta parece ser la consigna en el Perú del bicentenario.

La izquierda

Y aun así, Castillo asumió como presidente. No solamente les ganó a los partidos clones de derecha, sino también al modelo de izquierda implantado desde los 2000. Una izquierda que, urgida por reconstruirse y apartarse de un pasado ligado a los grupos terroristas, volvió a la escena pública con la bandera del compromiso democrático y la inclusión, pero que, al acceder a los cargos de poder, no persiguió cambios profundos. La llamada izquierda «caviar», una izquierda limeña y altamente educada, hacía más esfuerzos para complacer a los sectores más pudientes que para ampliar su base social. Su líder más importante, Verónica Mendoza, probó elección tras elección agrandar a la prensa y a la elite limeña moderando sus planteamientos. Olvidó el hecho de que para la mayoría de las regiones en Perú la continuidad significa exclusión. Mendoza terminó sin apoyo popular y sin sumar en las elites, que nunca habían considerado votarla. Ese vacío político fue ocupado por dos personajes de la sierra peruana: Castillo, un novato que encontró la oportunidad de participar en la política a través de la sigla de Perú Libre, el partido del acaso último hombre en el país que cree en la militancia, el médico educado en Cuba Vladimir Cerrón. Aunque su sueño

7. El programa dominical político más visto en televisión, *Cuarto Poder*, enfrentó la renuncia masiva de su equipo periodístico luego de que sus integrantes se opusieran al pedido directivo de hacer una cobertura favorable a Fujimori y contraria a Castillo. «Mordaza en *Cuarto Poder*: Periodistas renuncian por desacuerdo» en *El Perfil*, 8/6/2021.

siempre fue encabezar la batalla contra los sectores limeños, de derecha y progresistas desde una identidad «provinciana», Cerrón tuvo que ceder su puesto a Castillo ante la inhabilitación por una condena por corrupción en la región de Junín de la que fue gobernador. Perú Libre no aspiraba más que a conseguir algunas curules, pero en el país de los *outsiders* muchos vieron en el hombre del sombrero a uno como ellos, capaz de entender lo que es la pobreza y la exclusión. Ya en la segunda vuelta, muchos solamente notaron que no se apelidaba Fujimori. La prensa ha repetido hasta el cansancio que Castillo es títere de Cerrón, pero cada vez es más evidente que ellos persiguen objetivos distintos. A Castillo le interesa convertirse en un político. Cerrón, en cambio, busca desarrollar una estructura política que transforme el país.

Cerrón tuvo que ceder su puesto a Castillo ante la inhabilitación por una condena por corrupción en la región de Junín

Castillo y Cerrón irrumpen en la escena peruana para mover el péndulo de la discusión política del espectro de la derecha y el *statu quo* hacia el de la izquierda. Su sola presencia obliga a que todos los políticos salgan de sus zonas de confort y discutan qué clase de Estado, de democracia y de política económica quieren defender. Arrincona a los intelectuales, que hasta ahora vivían llorando la fragilidad de los partidos capitalinos, a que piensen cómo entender a las organizaciones políticas de las provincias. Sin hacer concesiones con los sectores más pudientes y sin pactar con los políticos tradicionales, Castillo y Cerrón han hecho además que las elites que antes *terruqueaban* a Verónica Mendoza hoy rueguen para que su equipo técnico participe del gobierno de Castillo. El cambio es tan brusco que casi uno se pregunta: ¿qué se discutía antes en la política peruana?

La remecida a la clase política limeña, sin embargo, no es suficiente para que Castillo y Cerrón puedan tomar conciencia de su rol y deber para con el país. Tampoco parece que tuvieran las herramientas necesarias para hacer un cambio justo. La izquierda paga el precio de su completa ausencia en la política. Sin renovación de cuerpos y sin militancia, no es capaz de pasar de lo deseable a lo posible. No hay aquí, como en Bolivia, un Luis Arce que pueda traducir los sueños revolucionarios en una política fiscal responsable y con prioridades claras. Los últimos líderes de izquierda en Perú fueron puestos contra la pared para no cumplir lo que prometieron o se resignaron a trabajar con tecnócratas sin espíritu político, dispuestos a trabajar con cualquier gobierno y, por ello, favorecieron que nada cambiara. Desde los años 2000, la vida política de la izquierda está sujeta a su promesa de no gobernar con políticas de izquierda. El problema es que, habiendo ganado por un margen mínimo y con el país polarizado, Castillo tiene que actuar rápido y de forma efectiva.

Al mismo tiempo, desde antes de que le impusieran la banda presidencial, Castillo tiene una guillotina con su nombre estampado. Los fantasmas de Pedro Pablo Kuczynski y de Martín Vizcarra que penan por los pasillos del Palacio de Gobierno le recuerdan al nuevo presidente que, sin mayorías, el Congreso no le va a dar tregua. Ambos ex-presidentes eligieron premieres y gabinetes conciliadores de centro y hasta cedieron ministerios a la derecha a cambio de su supervivencia. Ambos fueron destituidos. Con todos estos peligros, la nueva izquierda parece no definir su estrategia para asegurar gobernabilidad —no tiene claro si debe optar por la lealtad política o por la eficiencia—. El gabinete de dos cuerdas refleja muy bien cómo este dilema sigue sin resolverse. Por una parte, hay una facción compuesta por «fuerzas de choque», con figuras de izquierda radical como el premier Guido Bellido, apologista del grupo terrorista Sendero Luminoso; nostálgicos de la Revolución Cubana, como el ministro del Exterior Héctor Béjar (quien debió renunciar por declaraciones sobre el origen del terrorismo en el país); y partidarios de Perú Libre sin experiencia alguna en sus áreas, pero que ya empezaron a distribuir puestos. El otro grupo tiene técnicos y profesionales como el ministro de Economía Pedro Francke, el de Educación Juan Cadillo y las carteras de Agricultura, Mujer y Justicia, que tienen una doble tarea: generar mejoras inmediatas para calmar el pánico y salvar la imagen de los primeros. Aunque obsesionados por ser distintos, Castillo y Cerrón están por imitar a sus predecesores: buscan sobrevivir antes que realmente gobernar. Desde que empezaron los enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, la política se ha vuelto una competencia por ver quién logra llegar vivo al fin de su periodo, al costo que sea.

El futuro

A Castillo se le pide que designe a personas menos radicales, con credenciales éticas y más preparadas. La solicitud, que más parece ultimátum porque llega con la amenaza de vacancia bajo la manga, viene de tremendo púlpito. Se lo reclaman los partidos y políticos que llevaron al Congreso a pastores evangélicos que llamaban a la lapidación de las mujeres lesbianas, a viceministros hoy presos por malversación de fondos y a jóvenes ministros con el único mérito de ser el mejor amigo del hijo del premier. No queda claro si lo que les molesta es la insolvencia profesional o el hecho de no haber sido invitados al festín.

Otros sectores más centristas le piden además al nuevo presidente que traicione a su partido y pase a un proceso de *ollantización*; es decir, que siga el camino del ex-presidente Ollanta Humala, que reniegue de todo lo que dijo que haría y deje las cosas como están. En estos momentos, sin embargo,

cuando ya se activó una campaña de especulación y hay miedos reales sobre el futuro de la estabilidad económica, esta no es una opción. Un gobierno estático está condenado a padecer la pérdida de credibilidad y la fuga de capitales. Peor aún, mantener la inercia equivale a crear un caldo de cultivo para la emergencia de líderes más radicales.

Los peruanos sabemos que, ante la poca o nula representación de los partidos, en el país se ha creado un sistema de relación directa entre el Poder Ejecutivo y la ciudadanía, en el que esta última es quien ejerce contrapesos para apoyar a presidentes que percibe como reformistas. Castillo tiene el deber de enmendar sus objetivos políticos no para complacer a una clase política que va a petardear su gobierno sin importar sus decisiones, sino para ser consecuente con lo que los peruanos vienen reclamando y, por lo tanto, para convertirse en su representante. Esto es, ampliar la presencia del Estado en todo el país y construir una institucionalidad que otorgue mayor presencia a los intereses de los sectores hasta ahora excluidos. Por el contrario, trabajar con la misma gente acostumbrada a negocios turbios o antiderechos o caer ante el nepotismo le quitará la calle y lo dejará solo ante una oposición que ya saliva con la idea de que el caos en el país le devuelva sus cuotas de poder.

Castillo no es Evo Morales ni Luiz Inácio Lula da Silva, no viene empoderado por los movimientos sociales ni respaldado por los trabajadores organizados. Mucho menos tiene la experiencia política que ambos poseían al momento de llegar al poder. Sin embargo, los orígenes y la piel de Castillo lo colocan en un lugar único para mostrarle a una sociedad en la que se diseñan edificios con ascensores aparte para que los cholos no compartan espacio con sus patrones que todavía podemos perseguir el sueño de ser iguales. En concreto, el presidente tiene un capital social que debería traducirse en la creación de puentes de comunicación con un sector marginado que le permitan al Estado escuchar demandas, prevenir conflictos e implementar soluciones que vengan de los propios afectados por la política. Tiene una oportunidad para llevar a esta gente a ser parte de las reglas del Estado.

Quienes solo se apoyan en ese primer punto, sin embargo, terminan hundidos en el personalismo y socavando las reglas del Estado. Por ello, el nuevo gobierno tiene también el mandato de que la política sirva para legitimar el papel de las instituciones. Esto significa asimismo hacer ver que estas instituciones pueden estar al servicio de todos: pueden dar seguridad jurídica a los medianos y microempresarios, promover salud de calidad, fiscalizar y sancionar. Aunque a varios los incomode, promover la legitimidad de las instituciones pasa por hacer ver que ni la elite, ni la prensa y mucho menos el jefe de un partido están por encima de las leyes. ☐

Argentina: las aporías del neodesarrollismo

Francisco J. Cantamutto / Martín Schorr

El peronismo asumió la Presidencia de Argentina en medio de una crisis heredada, a la cual se sumó una crisis mundial. Ante ello, el gobierno neodesarrollista ha tomado como mandato ordenar la macroeconomía y destinar sus esfuerzos a maximizar la orientación exportadora de manera urgente. Al hacer esto, acepta la especialización productiva existente, basada en ventajas comparativas estáticas, y omite las consideraciones respecto de los actores concretos que la personifican, el rol del mercado interno, los impactos locales y las vías no comerciales por las cuales se fugan los recursos.

El candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, asumió la Presidencia de Argentina a fines de 2019. Para entonces, la actividad económica se contraía desde hacía dos años, mientras que las corridas cambiarias y financieras se sucedían desde abril de 2018, elevando la inflación a niveles de tres décadas antes, lo que produjo una severa caída del salario real y el consecuente aumento de la pobreza. El gobierno de Mauricio Macri había colapsado con su propio programa económico. Dejó una economía en crisis, endeudada de forma irresponsable e

Francisco J. Cantamutto: es economista y doctor en Investigación en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), sede México. Se desempeña como docente de la Universidad Nacional del Sur y es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina, con base en el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur (IIESS). Es integrante de la Sociedad de Economía Crítica.

Martín Schorr: es doctor en Ciencias Sociales por Flacso (Argentina), docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) e investigador del Conicet (Argentina).

Palabras claves: exportaciones, neodesarrollismo, Alberto Fernández, Argentina.

insostenible, a punto tal de tener que modificar el perfil de vencimientos de forma coercitiva (sin anuencia de los acreedores) y reinstalar los controles cambiarios que el mismo gobierno había repudiado al asumir cuatro años antes. La debacle socioeconómica en la que asumió el gobierno el Frente de Todos era palmaria.

Ante ello, la primera acción del presidente peronista, que ganó en dupla con Cristina Fernández de Kirchner, fue convocar a la Mesa contra el Hambre, una instancia multisectorial de diálogo para atender lo que de modo atinado se identificó como la necesidad más urgente. Consistente con sus propuestas programáticas previas, este mecanismo sería activado en distintas oportunidades para fortalecer las acciones gubernamentales más allá del poder presidencial¹. Sin embargo, esta lógica incluye un elemento clave, que sostiene los argumentos que siguen en este trabajo. Incluir a los actores ganadores de las políticas del gobierno anterior dificultaría tanto el cambio de rumbo como la reparación del daño causado por aquellas. La imposible promesa de que el cambio sea «con todos» supone que nadie pierda, ni siquiera quienes ocasionaron el daño.

En los primeros meses de gobierno se desplegaron políticas de apoyo a PYMES, se fortalecieron los controles cambiarios, se elevaron los costos de operar en moneda extranjera y se mejoraron las políticas de precios. Muchas de estas iniciativas se vieron afectadas por la irrupción de la pandemia de covid-19, que obligó a tomar medidas de confinamiento y aislamiento que paralizaron la actividad económica e intensificaron la crisis. Si bien el gobierno puso en marcha un plan de estímulo de la economía, así como diversas medidas de contención social, al promediar 2021 aún no se había logrado revertir los indicadores sociales más urgentes, lo cual exacerbó el mal humor de la sociedad.

No evaluamos aquí la acción del gobierno en materia sanitaria, ni tampoco minimizamos el impacto de esta doble crisis (la heredada y la global). Nuestro foco de análisis está en ciertas continuidades que exceden a esta doble crisis y que por su carácter programático se proyectan al futuro. Se trata de la presión por generar excedentes por la vía de la exportación, de forma urgente y necesaria. El gobierno de Macri lo tomaba como un rol «natural» asociado a las ventajas comparativas estáticas del país, que el Estado debería impulsar o con las que, al menos, no debería interferir. El nuevo gobierno peronista lo tomó en cambio como una necesidad estructural, basada en la escasez de divisas (la «restricción externa al crecimiento»). De este modo, lo que para la ortodoxia es un mandato lógico, para la heterodoxia

1. F. Cantamutto y M. Schorr: «El gobierno de Alberto Fernández: balance del primer año de gestión. Una mirada desde la economía política» en *e-l@tina*, en prensa.

neodesarrollista aparece como una necesidad resignada. Cualquier cambio estructural debe apoyarse en lo existente, en especial si se trata de avanzar mediante consensos.

El proceso de reestructuración de la deuda pública ilustra este punto. Ya en febrero de 2020, el presidente Fernández inició una gira en busca de apoyos internacionales, al mismo tiempo que lograba casi unanimidad en el Congreso con la Ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública. La reestructuración demandó tiempo y esfuerzos diplomáticos, y para septiembre de ese año se alcanzó un acuerdo con los acreedores privados. El resultado fue el reconocimiento de bonos de cuestionada legalidad, con una quita mínima de capital, pero también un descenso relevante de las tasas de interés y extensión de los plazos de maduración. Esto sería similar a lo que se propone alcanzar con el acreedor oficial más relevante, el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuya negociación lleva un año desde aquel hito. Hay que recordar que el organismo, bajo la presidencia de Christine Lagarde, otorgó en 2018 un préstamo récord por 57.100 millones de dólares para apuntalar al gobierno de Cambiemos. Pese a su retórica renovada, el FMI, al igual que los acreedores privados, no reconoce corresponsabilidad en los préstamos, aunque sí su insostenibilidad.

A diferencia de los privados, e incluso de otros acreedores oficiales, el FMI puede «inducir» de forma explícita a la aplicación de ciertas políticas, tendientes a maximizar el pago de la deuda en el corto plazo. Por supuesto, esto hace descontar que la deuda será pagada mientras se «hacen los deberes». La reestructuración lograda y la que está en curso mientras se escribe este artículo tienen por objetivo ganar tiempo, desplazar el momento de pago, y para ello es necesario ir avanzando con las tareas, a saber: ordenar la macroeconomía del país (la inflación minorista a mediados de 2021 rondó el 50% anual), proponer un cronograma creíble de liberalización y apertura, reducir el déficit fiscal (sin tocar los servicios de la deuda), lograr divisas para «honrar» los pagos. Si las primeras tareas se conducen, no sin fricciones, entre el Ministerio de Economía y el Banco Central, al último mandato se suma el Ministerio de Desarrollo Productivo. Exportar todo lo posible, cuanto antes, bajo la promesa de que esta vez vendrá con cambio estructural más tarde y, finalmente, con redistribución del ingreso².

2. «Palabras del Presidente Alberto Fernández en la Apertura del 139 periodo de sesiones ordinarias, del Honorable Congreso de la Nación Argentina, CABA», 1/3/2020, disponible en <www.caserosada.gob.ar>; Daniel Scheingart e Igal Kejesfman: «¿Alcanza con distribuir?» en *Anfibia*, 2021.

¿Es este el camino? El mandato de exportar a como dé lugar, de inmediato, obstruye diversos problemas que resultan críticos a la hora de pensar el desarrollo argentino en una clave más igualitaria, justa y sostenible.

Las exportaciones argentinas: ¿qué y quiénes?

Las exportaciones de productos primarios y su procesamiento básico se consolidaron como ejes de la participación argentina en la división mundial del trabajo e incrementaron su peso desde los gobiernos de Fernández de Kirchner hasta la actualidad, pasando por la presidencia de Macri. Como surge del cuadro 1, estos dos rubros explican en conjunto cerca de 70% de las exportaciones totales.

Cuadro 1

Argentina: estructura de las exportaciones por grandes rubros, 2007-primer semestre de 2021 (en porcentajes sobre promedios anuales)

	2007-2015	2016-2019	2020-1er. sem. 2021
Productos primarios	22,4	25,5	28,2
Manufacturas de origen agropecuario	35,5	38,1	41,7
Manufacturas de origen industrial	33,3	31,0	24,2
Combustibles y energía	8,8	5,4	5,9
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente: elaboración de los autores a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En este perfil de especialización, muy pocos sectores tienen superávits abultados y estables: la producción primaria de los sectores agropecuario y minero, la industria alimenticia y especialmente el complejo oleaginoso-cerealero son las principales fuentes de divisas y explican más de 90% del saldo agregado del balance cambiario desde 2003. Las cuatro primeras secciones de exportación del país en la primera mitad de 2021 fueron productos del agro, productos de las industrias alimentarias, bebidas y tabaco, grasas y aceites animales o vegetales y animales vivos y productos de la ganadería.

En un sentido opuesto, un conjunto de sectores resulta sistemáticamente deficitario, incluidos los que se abocan a la industrialización de bienes de alto o medio-alto contenido tecnológico, además de numerosos servicios. Este patrón de intercambio se magnifica en el comercio con la mayoría de las economías desarrolladas, incluida la china. Solo el Mercado

Común del Sur (Mercosur) escapa a esta caracterización, ya que el intercambio involucra comercio intraindustrial, centrado sobre todo en la cadena automotriz. Es decir, a través de gobiernos de diverso signo político, la última década y media vio consolidarse la especialización basada en ventajas comparativas estáticas.

Se trata de una inserción exportadora concentrada en pocos rubros de la actividad económica, pero también en un número reducido de grandes corporaciones: alrededor de 70% de las ventas externas totales es controlado por las 200 empresas más grandes del país. Además, dentro de ese panel se corrobora una alta concentración en las «primeras 50» compañías (cuadro 2). Ello invita a posar la mirada sobre una característica estructural de la economía argentina que por lo general no aparece en los debates públicos: el abultado y sistemático superávit comercial agregado de los oligopolios líderes contrasta con los déficits pronunciados y recurrentes del «resto de la economía». Esto les otorga a las empresas de la cúpula un enorme poder estructural basado en el control de las divisas.

Solo por tomar un año a título ilustrativo, en 2019 la cúpula empresarial en su conjunto operó con un excedente comercial que superó los 25.000 millones de dólares, frente a un saldo negativo próximo a los 7.000 millones para el resto de las compañías que operan en el ámbito nacional. La dependencia de la economía argentina respecto de los grandes proveedores de divisas por la vía exportadora se vuelve más evidente cuando se considera que, por ejemplo, en el periodo 2015-2019 las «primeras 50» firmas del panel dieron cuenta de aproximadamente 90% del superávit general (y de casi 100% en 2019).

Así, de manera sistemática, un puñado de sectores y grandes agentes económicos actúa como fuente de divisas, con cierta independencia de si este excedente es captado por el propio empresariado o redirigido en parte por el Estado para fomentar alguna otra producción. Si la ortodoxia neoliberal lo acepta como mandato natural, la heterodoxia neodesarrollista lo toma con resignación ante la imposibilidad del cambio. Por si esto no fuera suficiente, alrededor de las dos terceras partes de las exportaciones, las importaciones y los superávits agregados de la cúpula son explicados por empresas transnacionales. Son corporaciones que además suelen remitir sus ganancias al exterior, pero también utilizar precios de transferencia para reducir el pago de impuestos, e incluso realizarse autopréstamos para luego girar pagos al exterior. Se trata de algo esperable, dado que este tipo de firmas suele presentar los mayores niveles de internacionalización productiva y comercial. Sin embargo, reviste un misterio cómo se pretende que estos actores transnacionales con poder estructural determinante puedan devenir en agentes del desarrollo nacional, en especial cuando se les propone trabajar sobre la

Cuadro 2

Argentina: evolución de las exportaciones y el saldo comercial de la cúpula empresarial*, la economía en su conjunto y el resto de la economía, 2015-2019 (en millones de dólares)

Exportaciones						
	Cúpula empresarial				Total país (b)	Resto de la economía (c)=(b)-(a)
	Total (a)	Primeras 50	Segundas 50	Segundas 100		
2015	39.992	26.095	8.269	5.628	56.809	16.817
2016	42.387	30.621	5.931	5.835	57.960	15.573
2017	37.840	26.579	6.724	4.537	58.662	20.822
2018	39.833	29.631	5.310	4.892	61.801	21.968
2019	45.925	36.222	4.882	4.821	65.155	19.230

Saldo comercial						
	Cúpula empresarial				Total país (b)	Resto de la economía (c)=(b)-(a)
	Total (a)	Primeras 50	Segundas 50	Segundas 100		
2015	13.509	10.102	3.183	224	-785	-14.294
2016	19.415	15.755	2.751	909	4.416	-14.999
2017	9.221	7.626	1.694	-99	-5.447	-14.668
2018	9.407	10.100	180	-873	-743	-10.150
2019	25.386	25.321	212	-147	18.227	-7.159

*Se trata de las 200 empresas más grandes del país según sus ventas anuales (no se incluyen firmas del sector financiero y el agropecuario, salvo las abocadas a la comercialización de granos).

Fuente: Gustavo García Zanotti y M. Schorr: «Dinámica comercial externa de la cúpula empresarial de la Argentina en el gobierno de Cambiemos (2015-2019)» en *Apuntes del CENES*, en prensa.

base de urgencias de divisas y «consensos productivos». Aunque enfocamos en esta aporía, está claro que los integrantes de origen nacional de la cúpula empresarial no necesariamente escapan a esta caracterización³.

El Frente de Todos busca reeditar parte de la experiencia del kirchnerismo, lustrando de la pátina original las manchas de desorden y enfrentamiento que esta habría tenido. Esto coincide con la mirada de renombrados heterodoxos neodesarrollistas que no ven un problema en esta orientación exportadora por sí misma, sino en la falta de un entramado industrial que

3. M. Schorr (org.): *El viejo y el nuevo poder económico en la Argentina. Del siglo XIX a nuestros días*, Siglo Veintiuno, Buenos Aires, 2021.

se integre a la cadena de valor, sea en el procesamiento o el abastecimiento de insumos, infraestructura, maquinaria o servicios. El problema sería la falta de un Estado inteligente que, mediante políticas de fomento y mecanismos de coordinación, apunte esta integración productiva traccionada centralmente por sectores con ventajas comparativas estáticas. Para ello, es necesario contar con una macroeconomía ordenada (lo que involucra bajos niveles de déficit), un tipo de cambio competitivo, apertura comercial pero con mayor selectividad de incentivos y fortalecimiento de los mercados regionales, políticas sectoriales diseñadas a medida e integración del sistema científico-tecnológico a la producción.

Estos son los lineamientos expresados en un documento oficial del Ministerio de Desarrollo Productivo titulado «El desarrollo productivo en la Argentina pospandemia»⁴. Este documento fue presentado en la primera reunión del Acuerdo Económico y Social, realizada en octubre de 2020 y expresa con bastante precisión el programa económico que se propone llevar adelante el gobierno del Frente de Todos.

Se acepta de hecho la necesidad de una sociedad con aquellos sectores del poder económico que antes mostraron los dientes y las garras. Los diez «consensos» inician con la necesidad perentoria de «exportar más» y añaden, para ser explícitos, que «ningún sector sobra». Que ninguno sobre al momento de exportar más quiere decir que no se tocará a ninguno de los que hoy están, en contraste con la idea del gobierno anterior de que algunos sectores no competitivos debían reconvertirse o desaparecer.

Vale señalar que la heterodoxia neodesarrollista no parte de una ilusoria armonía natural, sino del diagnóstico del lugar periférico que ocupa la economía argentina. De ahí deriva la necesidad de una moneda fuerte (extranjera) para sostener una acumulación crecientemente internacionalizada. Faltan divisas para intercambiar con el mundo y, por lo tanto, es necesario obtenerlas para financiar el desarrollo⁵. Se trata de la restricción externa al crecimiento, originalmente pensada para entender los ciclos de la etapa difícil de la industrialización, cuando la expansión de la actividad venía acompañada por una demanda creciente de divisas para importar. Y aunque esto es aún válido, es solo una parte del problema. En la actualidad, la formación externa de activos (que es la forma contabilizada de la fuga de capitales, es decir, su valor mínimo) es la principal fuente estructural

4. Ministerio de Desarrollo Productivo: «El desarrollo productivo en la Argentina pospandemia. Hacia una visión compartida sobre el desarrollo económico de largo plazo y el cambio estructural», 10/2020.

5. Eduardo Crespo: «Las contradicciones del progresismo naif» en *Anfibia*, 2021; Juan Hallak: «Sin exportar, no se puede importar, y así no se puede crecer» en *La Nación*, 18/7/2021.

de pérdida de divisas, acompañada por los pagos de deuda y la remisión de utilidades al exterior, por nombrar las tres más relevantes. Sin embargo, el neodesarrollismo omite estas tres vías de salida al momento de estimar las urgencias y necesidades del desarrollo y espera, en una suerte de «keynesianismo ingenuo», que un proceso de acumulación dinámico se encargue por sí mismo de estimular la permanencia en el país de estos excedentes. Pero esta creencia no resiste evidencia en la fase actual del capitalismo, que se enmarca en el despliegue de procesos intensos y de largo alcance de transnacionalización y financiarización⁶.

Del anterior examen surge que es necesario impulsar las exportaciones ahora mismo. Para pagar deuda, para financiar el cambio estructural y para que la salida exportadora sea, en definitiva, la fuente de crecimiento que, en su momento, hará viable la redistribución del ingreso. Pero claro, entonces, no se puede confrontar con el capital exportador. Quizá por eso no se pudo avanzar con el caso de flagrante estafa de la empresa Vicentín⁷, o se volvió atrás a fines de 2020 con las retenciones a las exportaciones agrarias incluso antes de aplicarse la modificación⁸; por eso, las retenciones a una nacionalización definitiva de la gestión de la estratégica hidrovía Paraná-Paraguay-Uruguay. Esta perspectiva explica a su vez por qué el gobierno se esforzó por alentar una representación del agronegocio menos ensañada por ideología y más centrada en negocios, al ayudar a encumbrar al Consejo Agroalimentario y desestructurar a la opositora Mesa de Enlace, una organización que impulsó medidas de acción directa contra los gobiernos kirchneristas en el pasado. Y quizás también por esto mismo, diversos referentes intelectuales neodesarrollistas, con cargo público o sin él, se encarnizan con las organizaciones sociales que

**Diversos referentes
intelectuales
neodesarrollistas
se encarnizan
con las organizaciones
sociales que
reclaman por justicia
ambiental**

6. Enrique Arceo: *El largo camino a la crisis. Centro, periferia y transformaciones en la economía mundial*, Cara o Ceca, Buenos Aires, 2011.

7. Vicentín es una de las grandes empresas agroexportadoras de Argentina, que cayó en cesación de pagos en 2019. Los peritajes indicaron que el problema se originó en el sobreendeudamiento, que fue utilizado para desviar fondos hacia otras colocaciones del grupo. La evidencia disponible permitía al Estado, principal acreedor mediante la banca pública, argumentar a favor de tomar control de una empresa relevante en un rubro clave, entre otras cosas, en el acceso a divisas. Sin embargo, el gobierno cedió a las presiones corporativas y eludió una intervención más directa.

8. Alejandro Gaggero y Gustavo García Zanotti: «La crisis de Vicentín y los grupos empresariales que se expandieron a partir de su caída (2019-2020). Informe exclusivo para el Directorio y la Presidencia del Banco Nación», 2020, disponible en <www.elcoheteealaluna.com/wp-content/uploads/2020/12/Informe-final.-Vicentin-para-Prensa.pdf>.

reclaman por justicia ambiental (sobre todo en producciones primarias) como si se tratara de enemigos del desarrollo⁹.

¿Es posible pensar el cambio sin cuestionar el *statu quo*?

La heterodoxia neodesarrollista sostiene así la necesidad de financiar el cambio con lo que existe¹⁰. Y lo que existe son las producciones primarias poderosas que ya señalamos: agroindustria, minería e hidrocarburos. Al hacerlo, aceptan tácitamente la idea de ventajas comparativas estáticas como guía de su accionar. A diferencia de los neoliberales, que abrazan esta idea con gusto, lo hacen con un sabor amargo¹¹. El gobierno del Frente de Todos adopta esta orientación estratégica en el plano discursivo y en políticas concretas y debilita así los objetivos de un desarrollo más justo y equitativo que –vale reconocer– promueve en paralelo otra parte de la alianza gobernante.

Entendemos que al tomar este camino se omiten al menos cinco puntos relevantes en la lógica de buscar un futuro mejor. Estas omisiones parten de una lectura *peculiar* de las estructuras sobre las que se opera. Primero, se sostiene la idea de que existe una restricción externa que es operativa en virtud de las divisas comerciales; esto es, la vieja restricción externa basada en el intercambio desigual. Aunque válida, esta lectura omite que las principales vías de salidas de divisas no son hoy comerciales, sino, centralmente, la fuga de capitales. En lo sustantivo, este drenaje de recursos se financia con deuda durante los gobiernos neoliberales y con dólares comerciales bajo los ensayos «no neoliberales», pero los recursos siempre se van. Vale señalar que el Frente de Todos sostuvo la arquitectura de controles de capitales y cambiarios legada del gobierno anterior, lo que ha contenido en parte la fuga. Es imposible olvidar que gran parte de ella se origina en el desigual reparto del ingreso, que hace que quienes disponen de excedentes invertibles prefieran atesorar en moneda extranjera. Asimismo, cabe destacar que una legislación deficiente e ínfimos niveles de control han permitido a las grandes empresas desplegar diferentes formas de fuga por mecanismos comerciales (subdeclaración de exportaciones y sobrefacturación de importaciones) y financieros (autopréstamos).

El crédito y las inversiones externas, por su parte, hacen un exiguo aporte neto de divisas: en dos décadas han aportado menos que un año de saldo comercial. En cambio, sí aportan sus problemas: crean flujos sistemáticos de

9. Enrique de la Calle: «Claudio Scaletta: El falso ecologismo es un pensamiento reaccionario funcional al imperialismo» en *Agencia Paco Urondo*, 14/5/2021.

10. Martín Schapiro: «Hay que regular, no prohibir» en *Le Monde diplomatique* edición digital, 7/2021.

11. José Natanson: «Salmones plebeyos (respuesta a Ernesto Semán)» en *Le Monde diplomatique* edición digital, 7/2021.

salida de divisas, al tiempo que añaden un factor de inestabilidad originado en sus propias dinámicas. Cualquier heterodoxo formado reconocerá estos problemas, pero no parece haber el mismo ímpetu en reconocer la necesidad urgente de modificar el entramado de legalidad vigente que les da sostén. Allí sobresalen, por caso, las leyes de Entidades Financieras y de Inversiones Extranjeras, o los más de 50 tratados bilaterales de inversión en vigor. La discusión de estos engranajes institucionales no aparece en la retórica gubernamental.

Algo similar ocurre en torno de la discusión sobre la legalidad de la deuda, que a pesar de haber sido cuestionada en diversos tribunales sigue considerándose válida para su pago¹². Incluso más, se omite el conflicto que supone su pago con uso de recursos para garantizar el respeto de los derechos humanos consagrados en la Constitución, así como en pactos y convenios internacionales. A pesar de la evidencia en cuanto a estos dos puntos (ilegalidad y conflicto con otros derechos), la heterodoxia se limita a aceptar las reestructuraciones de deuda bajo el precepto de que «era lo mejor que se podía lograr». Las negociaciones de 2020 y 2021 avanzaron durante la crisis más grave del último siglo, siempre en aras de cerrar un acuerdo y pagar. ¿Cuándo se considerará oportuno discutir la continuidad de esa salida de divisas, si no es en una catástrofe de esta magnitud? Pagar deuda o habilitar inversiones extranjeras que se dirigen a sostener el tipo de inserción internacional ya existente no parecen ser vías de salida de este berenjenal.

Segundo, los actores efectivamente existentes son eludidos en el razonamiento. Al apostar a la inserción internacional actual como plataforma de crecimiento, se refuerza la posición estructural de la elite empresarial actual, la misma que concentra cada vez más producción; la cúpula que financia con sus excedentes el déficit de toda la economía, pero que al mismo tiempo controla las exportaciones y remite divisas al exterior en forma de fuga y de utilidades, al tiempo que genera poco empleo. Este núcleo del poder económico controla una proporción importante de la producción generada en el país (alrededor de la tercera parte). ¿Cómo se compatibiliza el claro sesgo transnacional de esta cúpula empresarial con los objetivos del desarrollo nacional? No se trata de algo dado de antemano.

Al apostar a la inserción internacional como plataforma de crecimiento, se refuerza la posición estructural de la elite empresarial

Este asunto es clave porque remite además a una segunda pregunta: ¿por qué un actor que se encuentra en una situación de privilegio acataría

12. Andrés Bernal, Augusto Martinelli y Francisco Verbic: «La nulidad del crédito de Argentina con el Fondo Monetario Internacional» en *Revista Derechos en Acción* N° 19, otoño de 2021.

políticas económicas que le hagan perder su centralidad? No hay una razón alegada que permita entender cómo un actor con poder de veto contribuiría por la vía del consenso a perder ese poder. El empresariado agroexportador no lo aceptó durante los años del kirchnerismo, al punto de fungir como polo antagónico en el campo político.

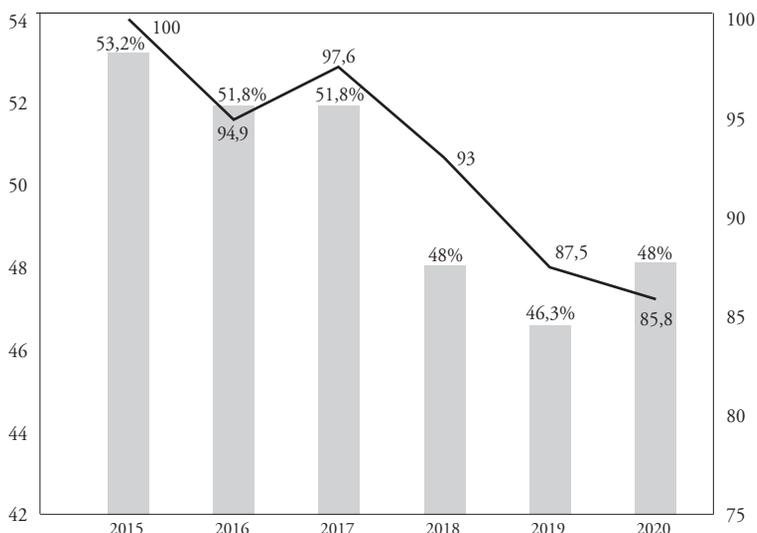
Al respecto, vale recordar que en junio de 2021 se originó una disputa en torno de la dinámica acelerada de la inflación, que persiste en niveles cercanos a los del muy regresivo bienio 2018-2019. En el caso reciente, el precio de los alimentos jugó un rol relevante, lo que afecta las necesidades más básicas de la población. La discusión se planteó a raíz del cierre temporal de las exportaciones de carnes para auditar la cadena de valor. Aunque esta medida no tuvo demasiado consenso, ni siquiera entre los economistas heterodoxos, para controlar la inflación, se trató de un gesto político para frenar las pretensiones del capital agroexportador. Aunque la producción ganadera se ha expandido en los últimos años, una parte de las mayores exportaciones se explica porque en el transcurso de la última década el consumo interno de carne cayó alrededor de 20%. Sin profundizar en las particularidades del tema, sirve para remarcar de forma explícita la tensión entre las políticas macroeconómicas necesarias para exportar y las necesidades de la población local.

Este es nuestro tercer punto, pues no se trata de una cuestión aislada, sino de una muestra de un proceso más general. Como se visualiza en el gráfico de la página siguiente, entre 2015 y 2020 la participación asalariada en el ingreso nacional (representada mediante las barras) cayó más de cinco puntos porcentuales. El salario real de los trabajadores registrados del sector privado (representado en la línea del mismo gráfico) perdió aproximadamente 15% desde 2015, mientras que el declive fue del orden de 25% en los empleos estatales¹³. Sumado a la mayor desocupación, la inactividad y la pérdida de calidad del empleo (incremento del cuentapropismo), se explica el aumento de la pobreza como fenómeno estructural, más allá de las variaciones coyunturales. Para fines de 2020, la pobreza alcanzaba a 42% de la población según datos oficiales. Aunque los neodesarrollistas propongan un círculo virtuoso de crecimiento, en los hechos el mercado interno no está jugando un rol dinámico para la cúpula empresarial, más interesada en el comercio exterior y en las prebendas del Estado.

13. De un trabajo reciente surge que en el transcurso de 2021 se ha profundizado el deterioro del poder adquisitivo de los salarios. Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA): «Informe de coyuntura N° 36», Central de Trabajadores de la Argentina, Buenos Aires, 8/2021.

Gráfico

Argentina: evolución del peso relativo de los salarios en el valor agregado bruto (eje izquierdo, barras, en porcentaje) y del nivel de los salarios registrados del sector privado (eje derecho, línea, índice 2015=100), 2015-2020



Fuente: elaboración de los autores a partir de datos del Indec, Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE) y Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA).

Lo anterior no contradice que, en algunos casos, en su propia producción, las actividades exportadoras paguen salarios relativamente altos, como ocurre en la minería metálica, los hidrocarburos y el complejo oleaginoso. Esto se hace a costa de segmentar el mercado de trabajo, estableciendo una creciente heterogeneidad entre sectores económicos, que terminan por obstruir cualquier otra actividad productiva: ¿con qué otras producciones es compatible esta especialización basada en ventajas comparativas estáticas? Sin un complejo de incentivos claro, muy pocas actividades sobreviven a la competitividad basada en la apropiación de renta. A esto se suman además el grado de precarización y la menor remuneración de las actividades conexas en la cadena de valor, mayormente subcontratadas en condiciones más pauperizadas, situación que ha sido detallada en el caso de la agricultura de exportación¹⁴. De modo que sus salarios son relativamente altos en relación

14. Juan Villulla: *Las cosechas son ajenas. Historia de los trabajadores rurales detrás del agronegocio*, Cienfuegos, Buenos Aires, 2015.

con una media social que está desvalorizada precisamente para garantizar cierto nivel de competitividad externa.

Más cerca de la tradición neodesarrollista, Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto lo describieron en su trabajo clásico como economía de enclave¹⁵ y cuestionaron su capacidad de llevar a un proceso de desarrollo más generalizado. De allí evolucionaría el programa político del desarrollo dependiente asociado, que bien podría decirse trataba de aceptar el estado de cosas y captar una parte de la renta para distribuir a través de políticas sociales. Al menos en esa línea argumental quedaba claro: no se podía esperar «ideología nacional» de estas elites empresariales.

El cuarto punto que enfatizamos tiene que ver, justamente, con esta lógica de enclave de una importante parte de los proyectos productivos de exportación. Se pueden considerar los efectos locales de estas producciones en al menos cuatro sentidos:

(a) Por un lado, muchas de las economías regionales devastadas por el huracán neoliberal han quedado con escasas alternativas productivas, y la falta de políticas territoriales consistentes en la heterodoxia neodesarrollista las relega a «zonas de sacrificio». Así ocurre con la cuenca de Vaca Muerta, la megaminería en San Juan y Catamarca, la explotación del litio en Jujuy, los pueblos rurales del interior pampeano, etc. Se presenta como dicotomía la producción existente o la condena a la pobreza. No en vano estos emprendimientos logran conquistar algunos adherentes locales ante la ausencia de alternativas.

(b) Se omite que mayormente los capitales que conducen la acumulación en estos núcleos dinámicos no son locales, de modo que la renta generada no se reproduce en esa escala, sino que se fuga a otros territorios o al exterior, y retroalimenta la inviabilidad de alternativas¹⁶.

(c) Derivado de lo anterior, se debe poner el acento en los efectos corrosivos sobre la democracia, que se ve seriamente afectada por la existencia de actores poderosos cuyos recursos, influencia y capacidad de presión se maximizan en esferas locales. Cuando los actores locales toman determinaciones contrarias a sus intereses, suelen ser demonizados o tomados por ingenuos o ignorantes, en la prensa o en el discurso gubernamental, por ortodoxos y neodesarrollistas¹⁷. Debe enfatizarse el carácter violento de muchos de los proyectos llevados a cabo en aras de las exportaciones, que desconocen los derechos de las comunidades a decidir sobre su espacio vital. Parece que las decisiones democráticas

15. F.H. Cardoso y E. Faletto: *Dependencia y desarrollo en América Latina*, Siglo Veintiuno, Ciudad de México, 1969.

16. Silvia Gorenstein (org.): *¿Crecimiento o desarrollo? El ciclo reciente en el norte argentino*, Miño y Dávila, Buenos Aires, 2012.

17. E. Crespo: ob. cit.; E. de la Calle: ob. cit.

locales solo valen cuando acatan el interés corporativo o cuando aceptan su sacrificio en aras de una prometida mejoría para el país.

(d) Al hablar de «sacrificio», nos referimos, por caso, a los efectos sobre la salud en la población habitante de los territorios donde se realizan estas producciones¹⁸. Que aumente de modo ostensible la cantidad de personas con cáncer y enfermedades respiratorias o que la tierra tiemble no parece ser un problema... mientras se esté en un escritorio lejos de ese lugar.

Recientemente, con este tono se ha debatido en torno de la prohibición de cría de salmones en aguas jurisdiccionales de la provincia de Tierra del Fuego. Se ha tomado a las fuerzas sociales y políticas locales como desconocedoras de las urgencias de divisas, o de sus propias prioridades¹⁹. Para ello, no se ha cejado en desorientar a lectores desprevenidos con la supuesta prohibición total que nunca existió²⁰, o con el carácter desarrollista de este negocio, desconociendo las formas concretas de producción y trabajo²¹. Incluso se ha ido más lejos, señalando que hay problemas ambientales más urgentes para debatir en otras geografías²², que requieren de divisas para invertir y resolver tanto la contaminación como la pobreza que la alimenta. ¿Alternativas? Parece que ninguna. Este debate ha crecido en el espacio público argentino, postulado como una tensión entre neodesarrollismo y ambientalismo. Pero se trata de mucho más que «medio ambiente» lo que está atacando, por acción u omisión, el neodesarrollismo.

Finalmente, no puede omitirse el carácter finito de los recursos sobre los cuales se basan las exportaciones argentinas. No se trata solo de los minerales o hidrocarburos, sino también de la explotación insostenible del suelo en la agricultura a gran escala. Siempre se presenta la idea de que no solo la urgencia propia amerita el negocio, sino que la existencia de una demanda mundial constituye una «ventana de oportunidad» para que esta vez sí sea posible desarrollarse. Sin embargo, es una inconsistencia que presume posible la explotación acelerada de Vaca Muerta y el litio como alternativas para agregar valor, pero sin cuestionar el lugar de la inversión extranjera, el

No se trata solo de los minerales o hidrocarburos, sino también de la explotación insostenible del suelo en la agricultura a gran escala

18. Sociedad Argentina de Pediatría: *Efecto de los agrotóxicos en la salud infantil*, 2021, disponible en <https://agenciatierraviva.com.ar/wp-content/uploads/2021/07/files_efectos-agrotoxicos.pdf>.

19. M. Schapiro: ob. cit.

20. Maristella Svampa y Enrique Viale: «El disparate de vincular subdesarrollo con protección ambiental» en *El DiarioAR*, 14/7/2021.

21. Ernesto Semán: «Matar al salmón» en *Panamá*, 18/7/2021.

22. Roy Hora: «Salmones en el Riachuelo» en *El DiarioAR*, 10/7/2021.

privilegio de lógicas cortoplacistas y financiarizadas, y una fuerte subvención estatal al sector privado. Y sin poner sobre la mesa su coherencia con las promesas de una «transición verde».

Palabras finales

El gobierno del Frente de Todos asumió en medio de una crisis heredada, a la cual se sumó una crisis mundial. Es imposible soslayarlo: es digno de ponderar que, ante la magnitud del cataclismo, la situación económica de la mayoría de la sociedad no haya empeorado de forma acelerada; no obstante, tampoco mejoró. Y esto contradice la idea de «comenzar por los últimos para poder llegar después a todos», manteniéndose más bien la fuerza del consenso con los poderosos ganadores de años previos. Lejos de tratarse de una crítica externa, las tensiones han atravesado la coalición de gobierno, por ejemplo, de la mano de las demandas por mayor inclusión para la economía popular por parte de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), o de una discusión más frontal con el FMI por parte de un sector del kirchnerismo. Sin embargo, el gobierno neodesarrollista ha tomado como mandato ordenar la macroeconomía y destinar sus esfuerzos a maximizar la orientación exportadora.

Para ello, se acepta la actual especialización productiva como *dictatum* de la realidad. Vale señalar que desde el propio Ministerio de Desarrollo Productivo se realizan esfuerzos para impulsar a sectores más intensivos en conocimiento, por ejemplo con el Plan de Desarrollo Productivo Argentina 4.0²³, o más sensibles a una transición ecológica, como mediante el Plan de Desarrollo Productivo Verde²⁴.

Sin embargo, ante la falta de cuestionamiento al orden de lo existente, en una dinámica consensual, esto equivale a utilizar aspirinas para contener una enfermedad severa. Cómo espera el neodesarrollismo convencer por la vía del consenso a los poderes fácticos legados por el neoliberalismo de que lo mejor es que moderen sus pretensiones y se permitan perder poder estructural es un misterio. Y mientras no lo hagan, las posibilidades de desarrollo del país quedarán atrapadas en vetos constantes.

Quizá sea hora de invertir el orden de las causalidades que propone un sector importante de la heterodoxia y del sistema político, y de que la

23. V. «Kulfas lanzó el 'Plan de Desarrollo Productivo Argentina 4.0'», 14/4/2021, <www.argentina.gob.ar/noticias/kulfas-lanzo-el-plan-de-desarrollo-productivo-argentina-40-0>.

24. V. «Kulfas lanzó el Plan de Desarrollo Productivo Verde», 13/7/2021, <www.argentina.gob.ar/noticias/kulfas-lanzo-el-plan-de-desarrollo-productivo-verde>.

redistribución del ingreso no sea variable dependiente del crecimiento (exportador) y se convierta en la variable independiente, en condición de posibilidad de un crecimiento sostenido, más equilibrado en materia productiva, territorial, ambiental, etc., y más inclusivo en términos económicos y sociales. Sin duda, ello requiere avanzar en la construcción de una amplia base de apoyo, ya que difícilmente el poder económico local se alinee con un planteo de esas características, máxime cuando su despliegue implicaría atacar por diferentes vías su poderío económico y su centralidad estructural.

La «nueva» orientación exportadora se forjó no para sostener los niveles internos de consumo, ni para resolver un supuesto desmanejo fiscal, sino para pagar deuda (en especial, en los años de hegemonía neoliberal). Con matices, Argentina se consolidó así como exportadora de materias primas, incluyendo aquí productos agropecuarios, piscícolas, forestales, mineros e hidrocarbúricos, así como su procesamiento básico. Para ello ha sido clave la falta de estándares ambientales, ya sea su directa ausencia o un reducido nivel de fiscalización.

Las especializaciones productivas de exportación no se fundamentan en programas de desarrollo nacional, en superar las barreras impuestas por la escala de mercado, ni en prioridades internas de consumo o inversión, ni siquiera en recaudación; no se sostienen sobre mecanismos de integración de segmentos claves de las cadenas de valor, ni en la aplicación de conocimientos generados en el ámbito nacional. Se basan en la urgencia de obtener divisas, como mandato ante la escasez que limita el crecimiento. Sin embargo, la tracción importadora asociada al crecimiento está basada en la propia apertura temprana de la economía nacional, que desmanteló actividades que bien podrían realizarse localmente²⁵.

Justamente, en la procura de dólares «genuinos» para sostener el crecimiento y la posterior redistribución, no se hace demasiado para sustituir importaciones. En los hechos, la salida exportadora «necesaria y urgente» deja a la economía atrapada en la explotación de los recursos en un estado casi «natural», sin generar mayores capacidades para avanzar en la industrialización. Esto ocurre incluso en sectores con ventajas comparativas, en los que Argentina tiene un potencial interesante para encarar planteos sustitutivos (minería, yacimientos no convencionales de hidrocarburos, etc.). A diferencia de muchos países de la región (Chile, Colombia, Perú,

En la procura de dólares «genuinos» para sostener el crecimiento, no se hace demasiado para sustituir importaciones

25. Lorenzo Cassini, Gustavo García Zanotti y M. Schorr: «Globalización y senderos nacionales de desarrollo: algunos hechos estilizados para reflexionar sobre el caso argentino» en *Revista de la Cepal* N° 133, 2021.

Ecuador, Venezuela, etc.), Argentina dispone de una base industrial como para avanzar en ese camino. Pero hacerlo requiere tiempo y coherencia, además de otra correlación de fuerzas. Actualmente, esa masa crítica existente no parece estar aprovechándose, máxime si se considera la plétora de subvenciones que el Estado otorga al sector privado para explotar los recursos tal como existen en la actualidad. El fetiche de las exportaciones como fuente de desarrollo se basa en la omisión de esta clase de consideraciones. Por supuesto, para la ortodoxia económica y los defensores de las grandes corporaciones, esto no constituye un problema. Para una gran parte de la heterodoxia, que no ignora el problema, se trata de un mandato de *Realpolitik*, incluso cuando no ocupa cargos de gobierno. Esta inesperada confluencia en las ideas ya ha permitido el llamado a la creación de una «coalición popular exportadora» que permite reunir ambos mundos en un final de péndulo inclinado hacia un lado²⁶.

Esto es extraño, porque al mismo tiempo que la heterodoxia neodesarrollista reconoce la necesidad de incrementar exportaciones para viabilizar múltiples salidas de divisas, elude cualquier consideración respecto de la capacidad de *lobby* y el peso estructural que adquieren los actores asociados. Su promoción no parece compatible con posteriores controles o regulaciones, a menos que se tenga una idea precaria de las dinámicas de poder o ilusiones respecto de la capacidad de los Estados (en especial, los subnacionales) de eludir la captura por parte de estos actores poderosos. No parece esperable que los actores económicos más poderosos vayan a ceder recursos económicos y políticos para su propio debilitamiento.

Ante la insuficiencia de argumentos para responder estas dudas, no pocas veces hemos visto una reacción conservadora, incluso agresiva, por parte de ortodoxos y heterodoxos que demandan exportar más, ahora mismo, y relegar la distribución del ingreso a un «futuro promisorio», si se logra primero consolidar un modelo de crecimiento traccionado por exportaciones. La urgencia está basada en la imposibilidad de cambiar las relaciones externas o de discutir procesos de largo alcance. Y al hacerlo suelen ridiculizar las objeciones de ambientalistas, comunidades locales o incluso sindicatos y diversos espacios académicos. Está claro: nadie a esta altura supone que una economía puede sobrevivir aislada del intercambio con el mundo. La propuesta no es aislacionismo y primitivismo, sino desarrollo basado en las necesidades locales, en garantizar niveles de vida decentes para toda la población. Y en esto, la orientación exportadora de las últimas décadas, incluso bajo gobiernos de diferentes ideologías, tiene un número elevado de pendientes. ☒

26. Jorge Fontevecchia: «Pablo Gerchunoff: En Argentina hay dos partidos políticos, la Unión Cívica Radical y La Cámpora» en *Perfil*, 16/7/2021.

El magnicidio de Jovenel Moïse

¿Un golpe dentro del golpe?

Arnold Antonin

El brutal magnicidio del presidente Jovenel Moïse añade nuevos elementos a la crisis de Haití, tras años de intervención extranjera y un Estado que cada vez más es una maquinaria para el enriquecimiento de las camarillas en el poder. Hoy el país se enfrenta a la perspectiva de una permanente degradación de los derechos humanos y de las condiciones de vida de su población, si no es capaz de aprovechar esta coyuntura para iniciar un proceso de reconstrucción.

La muerte de alguien, asesinado cruelmente en presencia de su esposa y sus hijos, tal como lo fue el presidente haitiano Jovenel Moïse en julio pasado, llama a un gesto de condena firme y unánime por parte de todos los demócratas del mundo. Es un drama que recuerda la crisis de 1867 en Haití, que terminó con el fusilamiento del presidente Sylvain Salnavé en enero de 1870, y la crisis de 1915, cuando fue masacrado el presidente Vilbrun Guillaume Sam en víspera de la ocupación militar estadounidense que se inició en julio y duró 19 años. No quisiera referirme al asesinato del padre de la patria, Jean-Jacques Dessalines, en octubre de 1806. Requeriría de una puesta en contexto más extensa, ya que es utilizado retóricamente en la actualidad por los defensores de la política del presidente Moïse, quienes buscan hacer temerariamente este paralelo.

El principal riesgo que trae aparejado el reciente magnicidio es que, con una Justicia inoperante, se refuerce la impunidad reinante, un mal permanente que padece la sociedad haitiana y que funciona como un obstáculo al imperio de la ley y del Estado de derecho.

Arnold Antonin: es un economista y cineasta haitiano, profesor en la Universidad del Estado de Haití. Es fundador y director del Centro Petión-Bolívar de Haití.

Palabras claves: golpe de Estado, magnicidio, violencia, Jovenel Moïse, Haití.

Existe así el riesgo de una doble impunidad: por una parte, quizás nunca se sabrá quiénes fueron los responsables de la muerte del mandatario; por la otra, ni Moïse ni sus cómplices responderán ya por los crímenes que han cometido, como lo reclamaban las organizaciones de derechos humanos, al igual que la oposición política, desde hace por lo menos tres años.

Un asesinato misterioso

Empecemos por el acontecimiento que conmovió al mundo entero y dejó en estado de *shock* a la sociedad haitiana: Moïse fue asesinado el 7 de julio de manera sorpresiva y rocambolesca, en una operación que a la vez parece muy bien planificada y absolutamente descabellada. He aquí algunos elementos que atraen la atención de todos los observadores: (a) sus guardias de seguridad no dispararon ni una bala; (b) la policía haitiana habría resuelto este caso en menos de 12 horas, un récord sospechoso considerando que, hasta la fecha, no había podido resolver ni una sola investigación sobre los numerosos asesinatos cometidos en el país; entre ellos, el del presidente de la Orden de Abogados, el insigne Monferrier Dorval; (c) el comando de los asesinos, compuesto esencialmente por ex-militares colombianos, no habría previsto un plan B de escape y todos se dejaron arrestar sin defenderse.

El primer ministro *ad interim* Claude Joseph, destituido dos días antes del magnicidio y reemplazado por el neurocirujano Ariel Henry, aparece frente a las cámaras y con una calma sorprendente declara tener todo bajo control y decreta el estado de sitio por dos semanas. Asimismo, pide ayuda al gobierno de Estados Unidos y a la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En estas circunstancias, la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH, por sus siglas en francés), a través de su representante, Helen La Lime,

**Se forma así un
gobierno de
continuidad con
casi todos los
ministros del
gabinete de Moïse
y del Partido de las
Cabezas Calvas**

le ofrece su apoyo. Días después, Henry, que había sido nombrado pero no había asumido su cargo al momento del asesinato, es sorpresivamente reconocido como jefe de gobierno legítimo por los representantes del así llamado «Core Group», integrado por los embajadores de EEUU, Canadá, Alemania, Francia y Brasil y los representantes del secretario general de la ONU y de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Haití.

El primer ministro destituido, que acababa de insultar a Henry en una reunión, finalmente acepta y reconoce su autoridad. Se forma así un gobierno de

continuidad con casi todos los ministros del gabinete de Moïse y del Partido de las Cabezas Calvas (PHTK, por sus siglas en creole).

Por su parte, la esposa del presidente, Martine Moïse, gravemente herida y evacuada hacia EEUU el mismo día del asesinato para ser atendida, reaparece una semana después, con un brazo enyesado, protegida por el FBI, y se proclama heredera política de su difunto marido, héroe y mártir, en un discurso muy elocuente durante el funeral. En realidad, ella es la testigo clave de este asunto. A pesar de eso, vuelve a EEUU el 28 de julio sin haber sido interrogada por la Justicia haitiana y declara al *New York Times* el 30 de julio que será candidata a la Presidencia. Sus intervenciones públicas confunden más aún las pistas.

Notemos que, en un caso tan crítico como este, hasta ahora no ha sido nombrado un juez instructor y es la Policía Nacional la que lleva las riendas de la investigación de manera desordenada, con la ayuda del FBI, de Interpol y de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). Hay que considerar que la Policía también ha sido señalada entre los sospechosos. Los jueces que podrían llevar adelante el caso denuncian las numerosas amenazas anónimas que reciben y ninguna de las normativas haitianas para asegurar la justicia está siendo respetada.

Mientras tanto, el Departamento de Estado de EEUU nombró a Daniel Lewis Foote, un diplomático de carrera con larga experiencia en países en crisis, para trabajar con las autoridades haitianas con el objetivo de intentar garantizar elecciones libres y estabilidad en el país. Foote viene también acompañado de la zanahoria: la ayuda humanitaria.

A estas alturas, tres cuestiones parecen evidentes: (a) el misterio sigue a pesar de la presencia de la Interpol y del FBI; (b) es la comunidad internacional, o sea las grandes potencias occidentales, quien decide; (c) pareciera que se trata de un complot transnacional con implicados de diferentes nacionalidades: colombianos, estadounidenses, venezolanos, ecuatorianos, dominicanos y haitianos del círculo muy cercano al presidente asesinado, entre ellos Joseph Badio, ex-funcionario del Ministerio de Justicia, así como un pastor protestante, supuestamente médico, residente en Florida (Emmanuel Sanon), y una jueza de la Corte de Casación (Windelle Coq Thélot).

En este orden de ideas, podríamos preguntarnos si no se trataría de un golpe de Estado dentro del mismo golpe de Estado que Moïse ya había llevado a cabo el pasado 7 de febrero de este año, cuando decidió quedarse en el poder más allá de la fecha prevista por la Constitución y la ley electoral haitiana. Por otra parte, muchos observadores se preguntan también qué papel han podido jugar los servicios secretos extranjeros en este drama.

Circulan en la prensa y en las redes sociales las más fantasiosas y múltiples versiones sobre los hechos y los responsables, lo que vuelve todavía más turbias las investigaciones.

Los antecedentes

En efecto, las elecciones presidenciales que debían llevarse a cabo en 2020 para permitir que el presidente entregara el poder el 7 de febrero de 2021 no se realizaron como lo establecen el decreto electoral publicado en el periódico oficial *Le Moniteur* del 2 de marzo de 2015 y la Constitución vigente de 1987. Moïse trató de justificarlo señalando que había tardado un año en asumir, en medio de la controversia electoral tras su elección de 2016. De esta manera, buscaba imponer ilegalmente una nueva Constitución y realizar elecciones generales con un consejo electoral también ilegal, que les permitirían a él y a sus aliados entregarle el poder a un candidato de su partido, el PHTK.

Vayamos un poco más atrás. Veamos la política del presidente asesinado y el clima que reinaba durante los últimos años de su mandato hasta la fecha de su brutal desaparición.

Es importante remarcar que, según las interpretaciones de numerosos y calificados juristas y constitucionalistas haitianos y extranjeros, el mandato de Moïse había culminado el 7 de febrero de 2021. El Consejo Superior del Poder Judicial había declarado el fin de su mandato y en respuesta a ello, el presidente mandó destituir arbitrariamente a tres de sus jueces inamovibles.

Entre sus esfuerzos para destruir todas las instituciones del Estado, en noviembre de 2020 el presidente emitió un decreto que reducía el poder de la Corte Superior de Cuentas, institución clave en el control de los gastos del Estado. Además, en lo que respecta al Senado, el mismo presidente había interpretado que, según la Constitución haitiana aún vigente de 1987 y la Ley Electoral, el mandato de una tercera parte del cuerpo había llegado a término el 13 de enero de 2020. Pero aun así, Moïse aplicó una vara diferente para sí mismo, hizo caso omiso de la prohibición constitucional

Y era así como el presidente Moïse, con plenos poderes, dejaba entrever su proyecto de instaurar en Haití una nueva dictadura

de prolongar su mandato por cualquier motivo que fuera y se otorgó un año más hasta el 7 de febrero de 2022. La oposición, la sociedad civil y los grupos de derechos humanos calificaron su intento de permanecer en el poder como un golpe de Estado. Desde 2020, empezó a gobernar mediante tuits y decretos presidenciales, de los que llegó a dictar más de 40 sin control parlamentario. Por otro lado, el Poder Judicial también se había tornado inoperante por diversas razones. Y era así como el presidente Moïse, con

plenos poderes, dejaba entrever su proyecto de instaurar en Haití una nueva dictadura, tal como lo denunciaba desde hace tiempo la oposición. Tomó una serie de iniciativas ilegales y operativas que demostraban con claridad sus intenciones.

En este sentido, en noviembre de 2017, Moïse resucitó el ejército disuelto por el ex-presidente Jean-Bertrand Aristide en 1995. El nuevo cuerpo carecía de los recursos necesarios y fue montado de manera muy precaria y precipitada. Viendo que esto no le garantizaba el apoyo militar que necesitaba para llevar a cabo sus iniciativas políticas, empezó a fomentar la formación de bandas armadas, que lograron constituirse a través del territorio nacional como verdaderos feudos. A veces desfilaban por las calles de la capital, Puerto Príncipe, con armas pesadas, sin intervención alguna de las autoridades. Por otra parte, se creó un cuerpo de policía civil forestal y costera, encargado de proteger algunas regiones ecológicas (áreas protegidas), el cual se transformó luego en una verdadera milicia al servicio de los objetivos del gobierno. Esto hace recordar los tiempos de los muy famosos Tonton Macoutes, la milicia política de la dictadura de Duvalier en los años 60 y 70.

Los grupos de derechos humanos Red Nacional de Defensa de Derechos Humanos (RNDDH), Je Klere (Ojos Abiertos) y el Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos (CARDH) reportan que entre el 15 de septiembre y principios de octubre de 2019 las bandas armadas masacraron a 17 personas y dejaron 200 heridos, entre ellos mujeres, niños y hasta bebés, en un solo barrio de la capital, La Saline, con la complicidad de funcionarios del Ministerio de Justicia, lo que amplificó la política del terror ya existente. Gran parte de los manifestantes callejeros en contra del gobierno provenían de estos barrios populares y el poder quiso escarmentarlos. Estas masacres se volvieron recurrentes hasta poco antes del magnicidio.

Algunos de los miembros de estas bandas armadas secuestran, a diestra y siniestra, alegando que están obligados a hacerlo porque el gobierno no les pagó lo prometido. Estas bandas asesinan a personas de todo origen y condición social. El 29 de junio de 2021, dispararon y mataron a 11 personas, entre ellas, al periodista Diego Charles y a la activista Marie Antoinette Duclaire. Duclaire era una joven militante feminista que había participado en la organización de las marchas contra Moïse y había estado en el grupo que entregó a la BINUH una petición de la sociedad civil por el cese del apoyo a Moïse a principios de este año. Había recibido ya amenazas de muerte por sus posiciones.

El presidente politizó más que nunca a la Policía, que ya había perdido cualquier operatividad en la lucha contra la inseguridad por no contar con el equipo ni el armamento necesarios para combatir a las bandas armadas, estas sí muy bien equipadas con armas de guerra y municiones a granel. Además, intentó crear una serie de dispositivos legales para asegurar su poder en el futuro. En este sentido, contra todas las normas democráticas,

Moïse emitió un decreto que instituía una policía secreta omnipotente, la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), base de un claro Estado dictatorial. Apenas instalado en su cargo, el nuevo primer ministro Henry trató de eliminarla, pero el secretario general del Consejo de Ministros, Renald Luberic, el mismo del difunto presidente, se opuso firmemente. Se espera aún la reacción de Henry a este acto de insubordinación.

Asimismo, Moïse creó un Consejo Electoral Provisional por fuera de las normativas legales, encargado de organizar el referéndum para cambiar la Constitución de 1987, las elecciones legislativas que no se habían realizado en 2020 y las presidenciales en septiembre de 2021. Creó también una comisión, con miembros designados por él, encargada de redactar la nueva Constitución. Es necesario destacar que la Constitución enmendada de 1987, sobre la cual se juramentó Moïse, prohíbe explícitamente cualquier tipo de referéndum, por ser esta una de las armas que usó el régimen duvalierista para crear la Presidencia vitalicia y luego la vitalicia hereditaria. Hay que tener en cuenta que la Constitución actual especifica cuáles son los mecanismos para su modificación.

Moïse pretendía hacer un referéndum sumario, diseñado a su gusto y medida, para aprobar la redacción de una nueva Constitución con personas designadas por él, algo que nada tiene que ver con los procesos de referendums democráticos y transparentes que se han realizado, por ejemplo, en países como Chile para cambiar la Carta Magna. En la nueva Constitución se preveía eliminar el Senado y la figura del primer ministro y otorgar plenos poderes al presidente, entre otras cosas.

En torno de Moïse, a pesar de que le gustaba referirse a sí mismo como jefe supremo (después de Dios) que lo «sabía todo» y tenía poder de decisión sobre todo, se creó una camarilla de intelectuales que armaron con él un discurso ideológico con todos los elementos de la filosofía fascista. Junto con la exaltación de la figura del presidente como «superhombre» y la eliminación de los demás poderes, se empezó a machacar sobre la figura de unos oligarcas «enemigos del pueblo», recordando a François Duvalier y su lucha contra los mulatos, o a Benito Mussolini con su lucha contra la plutocracia. Intentaban así crearse una base social a partir de un muy peligroso discurso de odio, llamando a una solidaridad basada en el color de piel, ya que Moïse era negro como la gran mayoría de la población. Sin embargo, su gobierno se instaló y pudo conquistar el poder gracias al apoyo de esos mismos «oligarcas» u hombres de negocios de piel más clara a los que siguió dándoles ventajas económicas hasta el final. Esta táctica ha sido recurrente en diferentes periodos de la historia haitiana.



El miedo a la justicia

Una de las grandes preocupaciones de Moïse era la posibilidad de tener que responder a la Justicia. Había sido acusado de crímenes económicos y de sangre por parte de diferentes organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil, así como de grupos que se habían constituido en parte civil frente a los tribunales. Uno de los eslóganes presentes en todas las manifestaciones era «Jovenel Moïse a la cárcel». Grupos de la sociedad civil y de defensa de los derechos humanos, reunidos en una estructura llamada «Caminemos por la Vida» (*Mache pou lavi*), lograron montar un Tribunal Popular en un proceso simbólico, el 19 de febrero de 2021, donde encontraron culpable a Moïse y lo condenaron a prisión por destrucción de las instituciones del Estado y violación de la Constitución y de los derechos humanos.

Sería muy largo tratar de enumerar la cantidad de informes producidos por organizaciones de derechos humanos, haitianas e internacionales, en los que se documentan diversos tipos de violaciones por parte del gobierno de Moïse. Contentémonos con citar el trabajo conjunto de la Coalición Haitiana de Defensa de Derechos Humanos y la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard del 22 de abril de 2021. Allí se analizan tres masacres perpetradas contra residentes de barrios desfavorecidos de Martissant, Bel Air y La Saline por bandas armadas, con un apoyo estatal que va desde altos funcionarios del gobierno de Moïse hasta agentes de la Policía Nacional. Los responsables son acusados de crímenes contra la humanidad. Por su parte, un informe de la Corte Superior de Cuentas ya había señalado al presidente como responsable de varios actos de corrupción, incluso desde que era solamente candidato. El propio Parlamento, antes de caer en la inoperancia, había elaborado un informe en el que lo acusaba de ser uno de los responsables del robo de los fondos Petrocaribe, que incluían un préstamo del gobierno de Venezuela por 11.000 millones de dólares. A fines de julio de 2019, un grupo de parlamentarios había presentado un acta de acusación de 29 páginas donde se denunciaba a Moïse por violación de la Constitución y crímenes de alta traición por diferentes razones.

Hay que saber que, antes de ser candidato, Moïse era un pequeño empresario bananero en quiebra del norte de Haití. Fue rescatado por la familia Martelly durante la campaña para las elecciones senatoriales de 2014, cuando Michel Martelly era presidente, elecciones que tampoco se realizaron. Fue así como en los comicios presidenciales de 2015, frente a las agudas rivalidades entre los allegados a Martelly, este decidió lanzar a Moïse como su candidato, con el acuerdo tácito de que al terminar su periodo le devolvería el poder.

Las primeras grandes manifestaciones multitudinarias en su contra se dieron en torno de la lucha contra la corrupción y el reclamo de su enjuiciamiento por parte del grupo de jóvenes llamados «Petrochallengers».

Un hombre de Trump

Al final de su vida, Moïse se había vuelto el presidente quizás más aislado y rechazado de Haití. Casi todos los partidos políticos, agrupaciones de la sociedad civil organizada, sindicatos, periodistas e intelectuales, asociaciones gremiales, asociaciones estudiantiles y de profesores, iglesias católicas, protestantes y vudú, e incluso algunas asociaciones del sector privado, le pedían que respetara la Constitución vigente y presentara su renuncia.

Su impopularidad era tan elevada que cuando trató de dirigirse a la población para que adoptara las medidas de protección frente a la epidemia de covid-19, la reacción fue: «Si lo dice el presidente, debe ser mentira». Moïse había profundizado el carácter depredador del Estado haitiano y ya no estaba en capacidad de ofrecer el más mínimo servicio a la población. El Estado mismo parecía haber desaparecido, mientras que, paradójica y patéticamente, hacía un discurso de presidente de un gobierno «fuerte». El clima de terror no hizo sino contribuir a la delincuencia general y ningún indicador económico o social había estado tan bajo desde los años 80.

¿En qué se apoyaba entonces el presidente Moïse para mantenerse en el poder? Principalmente, en un pacto con el entonces presidente Donald Trump celebrado durante una reunión el 21 de marzo de 2019 en la residencia de Mar-a-Lago en Florida. Trump le había prometido apoyo incondicional a cambio de que Haití abandonara su sostén a Venezuela y su régimen en la OEA y de que ayudara a frenar la ofensiva económica y comercial de China en la región.

En dos oportunidades, cuando la oposición haitiana parecía capaz de lograr su objetivo de derrocar a Moïse, Trump mandó a Haití a representantes de alto nivel para pedir un diálogo entre el gobierno y la oposición, dejando claro que el poder del Moïse no era negociable. El 20 de noviembre de 2019, el mandatario estadounidense envió a Kelly Knight Craft, embajadora permanente de EEUU en la ONU, quien subrayó que era amiga personal del presidente Trump y, el 5 de diciembre, al embajador David Hale. A partir de ese momento, Moïse se sintió totalmente apoyado para seguir adelante con sus planes autoritarios.

Al final de su vida, Moïse se había vuelto el presidente quizás más aislado y rechazado de Haití

Fue así como el presidente haitiano se lanzó en una cruzada contra el sistema institucional y la corrupción, tratando de ahogar los gritos de la oposición. Denunció los contratos firmados por el Estado haitiano con las compañías privadas de suministro de energía eléctrica y el contrabando. Sus directivos fueron acusados de sobrefacturación y de apropiación de bienes del Estado.

A todo esto se agregaba un nuevo y dramático caso: la sospechosa muerte del ex-fiscal y juez de instrucción Claudy Gasant, en República Dominicana, el 31 de julio de este año. Este abogado, famoso por sus audaces declaraciones como fiscal, había sido nombrado por Moïse jefe de la Unidad de Lucha contra la Corrupción (ULCC) de Haití. En este nuevo puesto, abrió una investigación contra el Consulado de Haití en República Dominicana, bajo sospechas de corrupción generalizada, lo que suscitó la ira del ministro de Relaciones Exteriores de entonces, Bocchit Edmond. Asimismo, instó a los senadores a que presentaran su declaración de patrimonio personal exigida por ley, algo que muchos de ellos no habían hecho. Corrió entonces el rumor de que el próximo investigado sería el propio presidente de la República. Moïse lo destituyó. Gasant decidió instalarse en República Dominicana, donde lo encontraron muerto en su casa. Su mujer explicó que se había suicidado degollándose con un cuchillo, debido a que sufría de depresión y había contraído covid-19. La Justicia dominicana concluyó en su investigación que había sido un suicidio. Todos se preguntan, sin embargo, si esta muerte puede estar relacionada con la de Moïse, ya que Gasant guardaba secretos de muchas personalidades.

Trump era quizás el único referente «ideológico» de Moïse. Quería hacer un negocio de todo, utilizaba la demagogia de la lucha contra el establishment y, sobre todo, aplicaba el principio de que la mentira descarada es lo que paga en política. Inventaba todo tipo de proyectos que no llevaba a cabo, pasando de uno a otro sin ninguna referencia al anterior. Poco le importaba que lo que dijera no tuviera ninguna relación con la realidad. Parecía vivir en un mundo de fantasía y, para darse coraje, manejaba un discurso de odio, que podía eventualmente voltearse contra él.

Durante su funeral en Cabo Haitiano —ya que Moïse era originario del norte de Haití—, se desencadenó una ola de violencia creada no por sus adversarios, sino por sus mismos seguidores, que obligó a los pocos diplomáticos que asistieron a huir rápidamente. En esta ocasión, los manifestantes saquearon e incendiaron el principal centro comercial de la ciudad y un puente, rechazando así a los «oligarcas» y a la gente de la capital que habían asesinado a un «presidente del Norte». El discurso de odio y divisionismo, que ha sido comparado con el de Radio Televisión Libre de las Mil Colinas de Ruanda en 1993-1994, antes del genocidio, funcionó y hace temer en

Haití no una guerra civil, sino eventuales masacres, sobre todo en Puerto Príncipe, por parte de las bandas armadas.

Al término del mandato de Trump, Moïse debería haberse dado cuenta de que no tenía más recurso que marcharse. Es verdad que las aparentes vacilaciones del recién asumido Joe Biden y el trabajo bien pagado de sus lobistas podían darle la ilusión de que no había perdido toda esperanza de un apoyo de la potencia del Norte. ¿Trataba Moïse de ampliar sus relaciones internacionales en previsión de una reducción del apoyo estadounidense? El miércoles 2 de junio de 2021, el presidente recibió las cartas credenciales de Sergei Mélik-Bagdasárov como nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario de la Federación de Rusia. Sin embargo, en el caso de las relaciones con China, contrariamente a República Dominicana, continuó dándole su apoyo a Taiwán, manteniéndose fiel a su acuerdo con Trump. Poco después, Moïse y su esposa realizaron un viaje intempestivo a Turquía para participar en una reunión internacional el 17 de junio de este año y firmar un acuerdo para el suministro de armas a Haití. Washington no emitió juicio.

Perspectivas

Una pesimista: continuidad de un neodualierismo que significa la permanente degradación de los derechos humanos y de las condiciones de vida del pueblo. Una optimista: la oportunidad para que un nuevo gobierno logre hacer una transición capaz de reconquistar la confianza del pueblo, de organizar unas elecciones democráticas creíbles, en condiciones de seguridad, y que estas no sigan siendo una ocasión de otras crisis mayores en Haití, para que así comience el fin del reino de la impunidad, esclareciendo, para empezar, el caso del asesinato del presidente.

Lamentablemente, es muy probable que este escenario optimista no se concrete y que ciertos sectores de la comunidad internacional prefieran adoptar un escenario más simplista.

¿Cuál será el papel de la comunidad internacional en el futuro próximo de Haití?

Por desgracia, la comunidad internacional ha sido a menudo parte del problema y pocas veces de la solución. No vamos a extendernos sobre el embargo y bloqueo de 1804, después de la independencia, que duró 21 años, ni sobre la famosa deuda de la independencia de 1825 reclamada por Francia, que ha pesado enormemente sobre el desarrollo económico y financiero de Haití, ni sobre la ocupación estadounidense de 1915 que se extendió durante 19 años.

**Por desgracia,
la comunidad
internacional
ha sido a menudo
parte del problema
y pocas veces
de la solución**

Las recientes Misiones de la ONU para la Estabilización de Haití, iniciadas en 2004, han dejado un mal sabor en Haití, así como las intromisiones extranjeras de todo tipo después del terremoto de 2010. En este sentido, es muy elocuente el libro-requisitorio *L'échec de l'aide internationale à Haïti. Dilemmes et égarements* [El fracaso de la ayuda internacional. Dilemas y extravíos], de Ricardo Seitenfus, ex-jefe de la misión de la OEA en Haití¹.

La ONU no logró su objetivo principal, que era la reforma de la justicia y la seguridad. Además, se agregó un desastroso accidente que ocasionaron sus soldados y que el secretario general de la ONU tardó demasiado en reconocer como de la responsabilidad de la Misión: se trata de la introducción del cólera en Haití, que dejó unos 9.000 muertos. Esto ocasionó que se asociara el nombre de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) sobre todo con esta desgracia. La situación haitiana actual tiene evidentemente repercusiones directas en todo el Caribe, sobre todo hacia República Dominicana, y algunos países latinoamericanos como Colombia, Chile y Brasil, receptores de miles de migrantes haitianos. Ahora muchos de estos países están involucrados en las investigaciones.

**Técnica y
económicamente
es indispensable
el apoyo de
la comunidad
internacional**

Para finalizar, consideramos que técnica y económicamente es indispensable el apoyo de la comunidad internacional para resolver:

- (a) el problema de la seguridad, en ausencia de un ejército y de una policía preparados para hacer frente a las bandas armadas que controlan gran parte del territorio;
- (b) el problema de la destrucción de la producción nacional, del medio ambiente y de la miseria infrahumana de la población. Se necesitan inversiones masivas en los servicios y en la producción. Hace falta una especie de Plan Marshall para Haití, y no una ayuda humanitaria o dádivas dispersas. Un ente estatal autónomo, formado por personas íntegras, de intachable reputación, debería garantizar la buena gestión de estos fondos;
- (c) el problema de la dependencia total de Haití de las decisiones externas. En consecuencia, las potencias extranjeras deben abstenerse de intervenir en los asuntos políticos internos y, principalmente, en la elección de las autoridades, como ha sucedido a menudo hasta ahora;
- (d) el apoyo a las acciones de los grupos de derechos humanos, que han hecho un trabajo valiente e impecable de monitoreo y denuncia a riesgo de sus vidas.

1. Les Éditions de l'Université d'État d'Haïti, Puerto Príncipe, 2015.

La mejor alternativa creo que estaría basada en un pacto de gobernabilidad entre las fuerzas políticas haitianas de oposición y la sociedad civil, lo cual crearía el interlocutor válido para que cualquier futuro apoyo de la comunidad internacional en Haití pueda tener éxito y para responder a las reivindicaciones populares con un plan de desarrollo y de reconstitución de las instituciones del Estado.

El problema haitiano es un desafío para que se reflexione sobre las relaciones entre un país cautivo de un grupo de dirigentes depredadores y los centros hegemónicos internacionales, y sobre la forma de encontrar nuevas soluciones para salir de las experiencias nefastas del pasado. Hace falta una conjunción de voluntad política, imaginación, coraje y verdadero patriotismo de las nuevas generaciones.

Adenda

La cantidad de acontecimientos, de diversa índole, que se siguen sucediendo en cascada cada día hacen que un nuevo hecho cubra el otro y al fin nada se resuelva. Esto hace que los gravísimos problemas existentes de manera permanente se vayan imponiendo, y que temas como la investigación sobre el asesinato del presidente pasen a un segundo plano y finalmente sean aplazados *sine die*. En estas condiciones, cualquier análisis de coyuntura, día a día, puede perder actualidad. Desde el asesinato del presidente Moïse el 7 de julio pasado han ocurrido varios hechos relevantes, entre ellos un terremoto de 7,2 grados en la escala de Richter, el 14 de agosto.

Entre los hechos sucedidos entre la fecha en que concluimos este artículo el 4 de agosto y la fecha actual, queremos mencionar los siguientes:

(a) El hallazgo, revelado por el director de la RNDDH, Pierre L'Esperance, de una importante suma de dinero en efectivo en la casa del presidente Moïse, que según otras fuentes puede ascender a varios millones de dólares. Este hecho aparece como un elemento importante entre los móviles del crimen. Hasta ahora, no se ha aclarado por qué el presidente tenía en su residencia privada tanto dinero líquido ni qué ha sido de él.

(b) La Dirección General de la Policía Judicial entregó, un mes después del asesinato, el resultado de su investigación al juez Bernard St. Vil, decano del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe. Este, luego de que varios jueces declinaran llevar adelante la instrucción del juicio por el asesinato del presidente aduciendo falta de seguridad, nombró el 9 de agosto al juez Mathieu Chanlatte. Este fue inmediatamente

rechazado por la opinión pública debido a su amistad con la familia del ex-presidente Martelly y el mismo Moïse. Pocos días después, el 11 de agosto, el secretario judicial del juez Chanlatte, Ernst Lafortune, fue asesinado, según la denuncia de la Asociación de Secretarios Judiciales Haitianos (ANAGH, por sus siglas en francés) luego de una viva discusión con el juez de instrucción recién nombrado a propósito del caso Moïse. Ante estos hechos, el juez Chanlatte, el 13 de agosto, desiste de asumir la instrucción del caso, aduciendo falta de protección y de medios. La causa terminó a cargo del juez Gary Orélien y, en un giro imprevisto, el fiscal Bed-Ford Claude acusó al primer ministro en funciones Ariel Henry, quien destituyó al fiscal el 14 de septiembre, lo que suma más opacidad a la conspiración para cometer el magnicidio.

(c) Varios elementos de prueba del asesinato han desaparecido y la escena del crimen ha sido totalmente vandalizada.

(d) Entre tanto, el sábado 14 de agosto un terremoto golpeó tres departamentos haitianos. Según la Protección Civil, las cifras provisionales al 18 de agosto de 2021 eran: 2.189 muertos, 12.168 heridos y 332 desaparecidos, unas 53.000 edificaciones destruidas y 77.000 dañadas, entre ellas 127 escuelas, 60 iglesias, 125 estructuras hospitalarias. 650.000 personas necesitan ayuda humanitaria urgente, es decir 40% de la población de esta zona. A esto se agregó la tormenta tropical Grace que se abatió sobre Haití a partir de la noche del domingo 15 y durante todo el lunes 16, lo que aumentó en modo extremo los sufrimientos de la población, que tuvo que dormir a cielo abierto por no poder refugiarse en sus casas y carecer de tiendas de campaña o alguna alternativa para protegerse.

Esta nueva catástrofe natural puso en evidencia las condiciones de precariedad en las que sobrevive la mayor parte de la población haitiana y la ausencia total del Estado en todos los campos. En lo que se refiere a la construcción de viviendas, vemos los resultados en esta nueva catástrofe.

Después del terremoto de 2010, hace ya 11 años, durante los gobiernos de Martelly y Moïse, no se tomaron las medidas necesarias para impedir la construcción de cientos de miles de viviendas anárquicas o sin permiso de construcción, y mucho menos se avanzó en la construcción masiva de viviendas económicas para personas de bajos recursos por parte del Estado. ☐

El pueblo, el gobierno y las realidades paralelas en Cuba

Jessica Dominguez Delgado

Sobre las protestas sociales del 11 de julio de 2021 en Cuba, hay muchas versiones e interpretaciones. La verdad suele ser un concepto flexible que se ajusta al punto de vista, la posición y el deseo de los distintos actores sociales, dentro y fuera de la isla. Lo cierto es que, en un contexto de creciente precariedad de la vida, diferentes sectores, sobre todo humildes, salieron a las calles en un hecho inédito.

Sobre los sucesos del 11 de julio de 2021 en Cuba, podría decirse que el consenso se reduce a que ese día miles de personas salieron a las calles. Es todo. Quiénes eran, qué buscaban, por qué salieron, qué pasó durante y después, etc. son cuestiones en disputa. Para unos, fueron protestas sociales espontáneas, un estallido ante la crítica situación nacional; para el gobierno, fueron disturbios en los que participaron mercenarios, contrarrevolucionarios y revolucionarios «confundidos» por la propaganda mediática enemiga. Para unos, fue un día histórico, por primera vez de forma masiva después de 1959 el pueblo salía a las calles a reclamar cambios; para el gobierno, fue una jornada heroica que demostró, a través de la respuesta oficialista, el respaldo a la Revolución. La realidad es que fueron las dos cosas. Cualquier elección que opte solo por ver un lado desconoce parte de la verdad. En un intento de objetividad, los hechos de ese día podrían sintetizarse así:

Jessica Dominguez Delgado: nació en La Habana en 1991. Es graduada en Periodismo, educadora popular y activista feminista. Actualmente es editora de «DeFacto», la unidad de verificación y datos de la revista digital cubana *elTOQUE*. Ha colaborado con diversos medios nacionales y extranjeros. Hace foco en temas de ciudadanía, participación y política. Twitter: <@jssk1002>.

Palabras claves: 11 de julio, crisis, protestas, Miguel Díaz-Canel, Cuba.

- En horas cercanas al mediodía, en el poblado de San Antonio de los Baños, a 35 kilómetros de La Habana, un grupo de personas reunidas frente a la iglesia comenzaron a manifestar sus insatisfacciones sociales y políticas.

- Las redes sociales esparcieron la noticia; en cuestión de horas, la llama se extendió a otras localidades y las manifestaciones llegaron a ser más de 60 en todas las provincias del país.

- El presidente Miguel Díaz-Canel llegó a San Antonio de los Baños junto con un equipo de gobierno para tratar de controlar la situación.

- En la tarde, en televisión nacional, el presidente informó de los sucesos y cerró sus palabras con la polémica frase: «¡La orden de combate está dada! ¡A la calle los revolucionarios!».

- En las calles hubo protestas pacíficas, enfrentamientos, expresiones a favor y en contra del gobierno. También hubo saqueos de tiendas en divisas y acciones contra la policía. En cada territorio tuvieron características diferentes.

- Se interrumpieron los servicios de datos móviles y se bloqueó el acceso a plataformas como Facebook y WhatsApp.

- Las fuerzas del orden público respondieron contra los manifestantes con violencia excesiva en algunos casos, en especial contra aquellos que documentaban los sucesos.

- Al final del día, los manifestantes se replegaron y quedó un saldo de cientos de detenidos. Todavía hoy se desconocen los números totales.

Se reconozca o no, la protesta fue un parteaguas, un golpe de efecto incuestionable para quienes intentan mirar a otro lado

Sin embargo, estos elementos no son suficientes para comprender la diversidad de actores, intereses y acontecimientos que se extendieron después del 11 de julio, en un escenario político que lleva años alimentando la polarización. Este no fue un hecho aislado o inexplicable; se reconozca o no, la protesta fue un parteaguas, un golpe de efecto incuestionable para quienes intentan mirar a otro lado o tapar el sol con

un dedo. La realidad se impuso ante quienes piensan que la sociedad cubana es la misma de hace 20 años, confiada y utópica. Puso en evidencia la fractura del pacto social y su calado.

El pueblo, dividido

No hubo permiso para protestar o manifestarse. Tampoco organización ni liderazgo, aunque el discurso oficial cuestione que las movilizaciones fueran espontáneas. El elemento sorpresa hizo posibles los hechos, pues jugó con la capacidad de reacción del poder y lo descolocó.

El derecho a manifestación está reconocido en el artículo 56 de la Constitución aprobada en 2019, pero en la práctica no existen instrumentos legales que establezcan las formas de ejercitarlo. No hay reglas claras sobre cómo se puede ejercer ese derecho. Pensar en obtener permisos para organizar una protesta como la del 11 de julio no cabe en el contexto cubano; sin embargo, tampoco esto deslegitima o ilegaliza los hechos. A ello se suma la falta de experiencia popular en las calles.

Aspirar a que los reclamos fueran un acto de civismo ejemplar, con objetivos establecidos y comedidos, como un mecanismo de reloj, es cuanto menos absurdo. No fue así en ningún bando. Fueron protestas reactivas, emocionales y cuya marca fue la «bravuconería» nacional.

Es importante mirar también a los sujetos de las acciones. Salieron a las calles personas de todas las edades, desde adolescentes hasta ancianos provenientes, en lo fundamental, de barrios humildes. A la calle no salieron las elites intelectuales o artísticas, aunque hubo alguna representación de esos sectores; allí estaba una parte de las personas que hacen largas filas para acceder a bienes de primera necesidad, quienes se han cansado, quienes están desempleados, quienes a pesar de más 60 años de Revolución cargan sobre sus espaldas la herencia de la desigualdad racial, los colectivos LGBTI+ y otros sujetos con derechos pospuestos o vulnerados, quienes han sido marginados por la sociedad, quienes no tienen formas de comunicación directa con el poder, las hijas y los hijos de la cultura del reguetón. Allí estuvo la clase popular, la menos favorecida. Ahí también hay un mensaje, porque en la Revolución «de los humildes y para los humildes» siguen siendo ellos los más olvidados e incomprensidos.

Gritaban diversas consignas, algunas históricas como «El pueblo unido jamás será vencido», y también «Díaz-Canel, singao», «Patria y vida», o simplemente «comida», «medicinas», o «democracia». La más extendida fue «libertad», que podría apelar a un sentido de dignidad que para cada uno tiene un significado distinto. También se oía, de vez en vez, «No tenemos miedo». Este era un acto de valor, un atrevimiento, y el colectivo lo sabía; aunque nadie se detendría a pensar en las consecuencias en ese instante, tampoco era posible preverlas.

En voz baja, al compañero de al lado a veces se le escuchaba: «¿Hasta cuándo?», «Esto no hay quien lo aguante», y se asentía. Era un sentimiento compartido, el tema más popular entre dos cubanos cualesquiera en el último año.

Los escenarios de las protestas fueron las zonas céntricas y los barrios pobres. En La Habana, por ejemplo, se concentraron en 10 de Octubre, Centro Habana, Habana Vieja. Municipios con alta densidad poblacional, con las peores condiciones de vivienda y grandes contrastes sociales. Las zonas residenciales, como el municipio Playa, donde viven muchos de los

dirigentes, empresarios y diplomáticos, no fue un espacio del levantamiento. En algunas fotos, se observa a las personas con brazos en alto, en señal de paz. Aunque no fue generalizado, para una parte no despreciable de quienes asistieron sí era una intención.

También estuvieron los representantes de organizaciones políticas y de masas, los dirigentes de la Juventud y del Partido Comunista, los trabajadores estatales, los «revolucionarios» para defenderse y «rescatar» las calles. Para evidenciar, en el espacio público, el respaldo al gobierno. El contrapeso. Llevaban banderas, afiches e incluso equipos de sonido. A la protesta, una contraprotesta, que tuvo tintes de violencia, pero esta sí fue «legítima».

Cuando Díaz-Canel explicó al día siguiente que su llamado a recuperar las calles «para los revolucionarios» no fue para enfrentar al pueblo, sino

El gobierno divide a la sociedad entre los de afuera y los de adentro, despojando a los primeros de toda participación en la política del país

para defender la Revolución y denunció que «los manifestantes respondieron con violencia y el pueblo se defiende», redujo su concepción del pueblo solo a los «revolucionarios» y parcializó su responsabilidad hacia toda la población cubana; incluso los «delincuentes», «mercenarios» y «confundidos» son parte de ese pueblo. Y justificó la violencia siempre que fuera para «defender a la Revolución». Dividió. Del mismo modo, el gobierno divide a la sociedad entre los de afuera y los de adentro, despojando a los primeros de toda participación en la política del país, aunque

contribuyan con sus remesas de forma decisiva a los ingresos de la economía nacional, aunque sigan siendo cubanos.

Hay migrantes cubanos en todo el mundo; ese es uno de los signos de la nación. Según las investigaciones demográficas, han emigrado por razones principalmente económicas, pero cuando una persona decide abandonar su tierra y su familia porque es incapaz de satisfacer allí sus necesidades materiales y espirituales, en especial en un país en el cual todo está mediado por la ideología, sus motivos son también políticos. Por eso, el día 11 y los sucesivos, las acciones trascendieron las fronteras nacionales y hubo expresiones simbólicas en ciudades como Madrid, Barcelona, Toronto, Ciudad de México, Santiago de Chile, Miami, Washington y otras. El pueblo que participó con reclamos legítimos y que ha sido víctima de una criminalización posterior, de juicios —en algunos casos, sin abogado, según reconoció el medio oficial *Cubadebate*¹—, de multas y otros abusos físicos y psicológicos, es un pueblo más herido.

1. Oscar Figueredo Reinaldo: «Así marchan las investigaciones penales tras los sucesos del 11 de julio en Cuba» en *Cubadebate*, 4/8/2021.

La política, invisible

En Cuba hay más de una realidad, como también hay más de una opinión política, pero la mayoría de ellas son invisibles ante la hegemonía oficial. La «unidad» se ha convertido en un concepto teórico y abstracto. Por unidad se entiende la imposibilidad de expresarse en contra del poder dominante, no digamos ya presionar o ejercer contrapoder. Expresarse es un signo de hejía. Por tanto, esa búsqueda de «unidad» deriva en actos discriminatorios, excluyentes y marginalizadores. Para la política cubana, «todo el que no está conmigo, está contra mí».

El gobierno actúa a la defensiva, más que a la ofensiva. Vive del pasado y eso le pasa factura. En los últimos años, los esfuerzos de la política se han centrado en tratar de mantener las conquistas alcanzadas. El proyecto de justicia social con acceso universal y gratuito a la educación y la salud, seguridad social, garantías de empleo, salario y alimentación básica, no ha sido sostenible. Con los años, lejos de avanzar, se retrocede.

Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución (conocidos como los «Lineamientos»), Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2030, Tarea Ordenamiento... Un plan tras otro, un congreso del Partido tras otro, un fracaso tras otro. La economía cubana no logra impactar de forma positiva en la vida material de las personas, no tiene logros visibles, no crece lo suficiente. Mientras, continúan las inversiones en la construcción de nuevos hoteles –incluso en pandemia– y la agricultura no despega.

La política de los últimos años es grosera, gritona, sobre todo en el ámbito internacional. Diplomáticos que dan gritos en la Organización de las Naciones Unidas (ONU)², que interrumpen e impiden el debate como acto de defensa; políticos que quedan en ridículo repitiendo consignas vacías, omitiendo hechos de la realidad nacional y dando respuestas evasivas a la prensa³. A eso se suman escándalos por el derroche y la especulación de familiares de los principales dirigentes⁴. Todo ello es un dardo directo contra la credibilidad oficial. Además, el discurso no conecta con una parte importante de la ciudadanía que necesita nuevos códigos. Necesita un presidente que le hable directo al pueblo, y no que mande señales al enemigo o regañe a los dirigentes en televisión nacional. Necesita una política con identidad propia.

2. «Cuba usa gritos y ruido para acallar denuncia de EEUU sobre presos políticos» en *Agencia EFE*, 16/10/2018.

3. Glenda Boza Ibarra: «Canciller cubano: manipulación, omisión y medias verdades» en *elTOQUE*, 15/7/2021.

4. «Nieto de Fidel Castro publicó video tras polémica por conducir un Mercedes Benz» en *Semana*, 5/3/2021.

**En el caso del
11 de julio,
el discurso oficial
fue cambiando
de la arrogancia
a la conciliación**

En el caso del 11 de julio, el discurso oficial fue cambiando de la arrogancia a la conciliación. Pero sin ceder. Ambiguo. Se tomaron medidas, temporales, muy reclamadas por la población, como la libre importación de alimentos y medicinas y la asignación de una libreta de abastecimiento —con la que el gobierno distribuye una cuota básica de alimentos y aseo— a aquellas personas que la necesitan: más de 200.000⁵. Pero se aclaró que esas medidas no eran resultado de las protestas. Mientras al pueblo se le sigue pidiendo que confíe, hay errores que no se reconocen, hay cambios de opinión que no se pueden prever, hay inestabilidad en las decisiones políticas, demoras en el marco legal, uso discrecional de la ley con intereses políticos, burocracia, silencio, falta de transparencia pública, falta de fiscalización y control popular, entre otras cosas. Hoy el contexto ha cambiado, ya no están los dirigentes históricos. Por tanto, la legitimidad de los actuales actores políticos es cuestionada en cada decisión, se les exige creatividad y capacidad y, sobre todo, ser medianamente eficientes en superar el bloqueo impuesto por Estados Unidos hace más de 60 años. Una condición injusta y cruel que afecta tanto al gobierno como al pueblo cubanos, pero que no depende de transformaciones internas y tampoco puede ser una justificación inmovilista para el desarrollo nacional. Desconocer las causas y la legitimidad de la protesta como un derecho, justificar la violencia, ocultar información sobre los procesos penales y los detenidos y criminalizar a todos los participantes construye una realidad paralela, de laboratorio, que solo funciona en una burbuja política.

La política necesita ser más transparente, pública, expresar sus contradicciones como la realidad para que represente y solucione. Una falsa unidad, que esconde la basura bajo la alfombra, impide a la sociedad ser operativa y práctica. Una política invisible envenena sus posibilidades de cambio y transformación; la invalida ante hechos como el 11 de julio y a futuro.

Las fuerzas del orden, sin límites

Es cierto que en el resto de América Latina, EEUU e incluso Europa la brutalidad policial, en la represión de las protestas callejeras, es mayor que en Cuba. Pero eso tampoco justifica los excesos de las fuerzas del orden. No hay reportes de gases lacrimógenos ni otros métodos antidisturbios, pero

5. AAVV: «Detalles sobre las medidas económicas anunciadas por el Gobierno cubano» en *Cubadebate*, 16/7/2021.

sí hubo lesiones y disparos. En las calles estaban la policía, los militares, las fuerzas especiales y gran número de oficiales vestidos de civil, algunos armados. Además, sacaron a jóvenes en periodo de servicio militar —que no pueden negarse a cumplir órdenes— vestidos de civil y con palos. Salieron, en general, con deseos e intenciones de dar golpes, actuaron con rabia, con desquite. Se sentían con derecho a reprimir y a expresar su fuerza —no siempre para defenderse—. Este hecho es, quizá, el más grave de los ocurridos el 11 de julio. Un límite peligroso que no se debió cruzar, pero se necesitaba que alguien lo estableciera y no pasó. Nadie recordó que el principal encargo policial es proteger al pueblo. Esto pone sobre la mesa, además, otros temas, como la compra de armamento militar, el gasto de defensa, los protocolos de las fuerzas policiales y su actuación ante hechos sociales; cuestiones que debieran formar parte de la agenda pública.

Como resultado de las protestas, oficialmente solo falleció una persona: Diubis Laurencio Tejeda, de 36 años. En la nota del Ministerio del Interior, se hacía referencia a sus antecedentes penales, como si eso justificara su muerte. Pero la violencia no solo ocurrió en las calles, continuó durante las detenciones en las estaciones policiales: maltratos, abusos de poder, restricción de alimentos y ausencia de derechos constitucionales han sido parte de los testimonios en días posteriores⁶. De hecho, la represión selectiva, más que la represión masiva, ha sido la estrategia de la Seguridad del Estado durante décadas. Hasta el momento, no ha habido un pronunciamiento oficial que proponga o reconozca alguna revisión pública a las fuerzas del orden por su actuación durante las protestas.

Los medios de comunicación, protagonistas

La principal fuente de información de la que hoy disponemos sobre los hechos es resultado de reportes ciudadanos. Videos y fotos que los propios participantes compartieron por redes sociales nutren el relato de los hechos. Con toda certeza, la apertura en Cuba del acceso a internet habilitó otras posibilidades para la expansión de las protestas. Antes de diciembre de 2018, cuando se abrió el servicio de datos móviles, y sin las experiencias de articulación ciudadana que han ocurrido después, es probable que las protestas no hubieran ocurrido, al menos no como ocurrieron.

En el espacio digital, sobre todo en Twitter, en los días anteriores se había posicionado el *hashtag* #sosmatanzas, derivando en #soscuba, a raíz

6. Eloy Viera Cañive: «El testimonio de Gabriela Zequeira describe un acto de tortura» en *elTROQUE*, 30/7/2021.

de la situación sanitaria, y se sumaron *influencers* y personalidades internacionales⁷ para hablar de ayuda humanitaria. Estas acciones también fueron denunciadas por el gobierno como parte de la guerra mediática. El acceso a internet como catalizador y herramienta de articulación explica el *blackout* de datos móviles durante el 11 de julio y los días posteriores como una medida represiva para limitar la comunicación.

La polarización en el ámbito mediático cubano, sobre todo en el espacio de redes sociales, donde prevalece un discurso de odio y posiciones poco favorables al diálogo, tanto en contra como a favor del gobierno, tergiversa, magnifica o desconoce los sucesos. Las desinformaciones asociadas a las protestas no tardaron en aparecer e involucraron a prestigiosos medios, como el diario *ABC* de España, que se hizo eco de una supuesta fuga de Raúl Castro⁸. Videos de otras fechas, supuestos asesinatos, así como frases e imágenes descontextualizadas todavía circulan en la web.

Por su parte, los medios oficiales cubanos solo cuentan la versión gubernamental. Ni la televisión nacional –como es habitual– ni ningún otro medio hicieron una cobertura propia de los sucesos. Tiempo después, mostraron imágenes de los «mítines revolucionarios» y reprodujeron, sin un solo cuestionamiento o ampliación, el discurso oficial, omitiendo parte de los hechos. Solo después de que el gobierno habla de un tema, la prensa oficial publica algo al respecto.

Desde el propio día 11, el presidente de la Unión de Periodistas de Cuba publicó que los miembros de esa organización estarían «junto al pueblo cubano en defensa de su honra y de sus derechos y alertándolo del grave escenario de guerra de cuarta generación y mezquino y mentiroso cerco mediático que se le impone al país». De esta manera, hacía patente la postura oficial frente a los hechos: la justificación de lo ocurrido debido a «una agresión comunicacional orquestada desde el exterior».

Los siempre presentes intereses externos

La vida en Cuba, guste o no, está estrechamente vinculada a la política estadounidense. De ella dependen desde el funcionamiento del gobierno hasta las familias. Por tanto, la relación entre EEUU y Cuba, en la que intervienen múltiples actores de ambos lados y tensan en distintas direcciones, es permanente, aunque no siempre pública. La existencia del bloqueo económico, comercial y financiero hace más de 60 años, el financiamiento sostenido a

7. «SOS Matanzas ¿cómo puedo ayudar?» en *VISTAR*, 9/7/2021.

8. DeFacto: «Desinformaciones en el contexto de las protestas» en *elTOQUE*, 21/7/2021.

programas contra el gobierno de la isla, las declaraciones del ex-presidente Barack Obama en 2017 sobre «un cambio de estrategia, no de objetivo», las 243 medidas adicionales aprobadas por Donald Trump y el cierre de la embajada en La Habana son solo algunos ejemplos de la incidencia estadounidense en la actual situación económica y social de Cuba.

Por tanto, las protestas también fueron el marco para que un grupo de intereses externos contrarios al gobierno se afilaran los dientes, proclamando que la hora de Cuba había llegado y tratando de escalar los hechos para forzar una situación de ingobernabilidad. Se pagaron e incentivaron actos de vandalismo y violencia. Algo clásico, que no por reiterado deja de ser cierto. Pero su existencia tampoco anula otros intereses legítimos.

La intervención extranjera y una guerra civil no son opciones deseables por la mayoría del país, aunque muchas veces desde el exterior se vean como «la solución a todos los males».

El 12 de julio, el presidente de EEUU, Joe Biden, declaró en un comunicado de la Casa Blanca que apoyaba al pueblo de Cuba en su llamado a la libertad, aunque descartó una intervención militar. Para el jueves 22, impuso nuevas sanciones al ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, Álvaro López Miera, y a la Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior cubano al incluirlos en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), lo que les prohíbe acceder al sistema financiero estadounidense⁹. El 31 de julio se reunió con representantes de la comunidad cubanoamericana.

Otros actores internacionales –gobiernos, organizaciones y partidos– se han pronunciado sobre los hechos que despiertan la curiosidad, el interés y la solidaridad con la isla, que ha tenido un importante papel en la geopolítica internacional y sobre la que el mundo tiene pasiones encontradas.

Interpretar el significado de las protestas solo como resultado de un «golpe blando» orquestado desde EEUU y como una acción de manipulación mediática desconoce la complejidad, la responsabilidad y las múltiples motivaciones de quienes se expresaron en el interior del país. Establece una distancia política con una parte creciente de la ciudadanía, desconoce el derecho a la manifestación –lo que se ha hecho más evidente en las sanciones impuestas a los participantes– y niega la posibilidad de un diálogo sincero y crítico sobre la situación actual del país, las prioridades

Las protestas también fueron el marco para que un grupo de intereses externos contrarios al gobierno se afilaran los dientes

9. Aamer Madhani y Matthew Lee: «Estados Unidos anuncia nuevas sanciones a Cuba» en *Los Angeles Times*, 22/7/2021.

establecidas y las demandas sociales. Reduce, en síntesis, las posibilidades de participación real.

El 11 de julio ocurrió un hecho inédito para Cuba, más allá de simplificaciones y visiones segmentadas, que presionó y demostró que la sociedad no está inmóvil.

La polarización se alimenta y robustece cada día: es política de Estado, es respuesta ciudadana, es resultado de conflictos históricos enquistados. Las causas inmediatas de las protestas están relacionadas con un agravamiento de las condiciones materiales del país y una precarización creciente de la vida¹⁰. Crisis económica, dolarización de la economía, disminución de la capacidad adquisitiva del salario, escasez de medicinas y alimentos, roturas e inestabilidad del suministro de agua potable y de electricidad, colapso del sistema sanitario ante el aumento de casos de covid-19; pero también hay desgaste político, cansancio, falta de confianza y, sobre todo, de esperanza. ☒

10. J. Domínguez Delgado: «¿Por qué estallaron las protestas en Cuba?» en *elTOQUE*, 13/7/2021.

Nicaragua, ¿una dinastía acorralada?

Gilles Bataillon

Daniel Ortega y Rosario Murillo han construido un poder familiar que recuerda a los tiempos previos a la Revolución Sandinista de 1979. Decenas de opositores han sido enviados a prisión mientras el país se encamina a unas elecciones sin espacio para la oposición. Pese a las protestas de 2018 y a las sanciones internacionales, el neosandinismo orteguista sigue controlando los resortes claves del poder.

Nicaragua ha entrado de nuevo en una grave crisis política. Desde principios de junio, 30 opositores políticos han sido encarcelados o sometidos a arresto domiciliario y privados de todo contacto con el exterior. El 2 de junio, Cristiana Chamorro, la candidata más importante de la oposición —hija de Violeta Chamorro, quien derrotó a Daniel Ortega en las elecciones presidenciales de 1990— fue puesta bajo arresto domiciliario. Igual suerte corrió su hermano menor Pedro Chamorro Barrios. Otros tres aspirantes a la Presidencia, Sebastián Chamorro, Félix Madariaga y Arturo Cruz, también fueron detenidos, al igual que la destacada activista de Derechos Humanos Violeta Granera; Tamara

Gilles Bataillon: es sociólogo e investigador del Centro de Estudios Sociológicos y Políticos Raymond Aron de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (CESPRA-EHES), París, y profesor afiliado a la División de Historia del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Ciudad de México. Es codirector de la revista *Problèmes d'Amérique Latine*. Publicó varios libros, entre ellos *Génesis de las guerras intestinas en América central (1960-1983)* (FCE, Ciudad de México, 2008) y *Crónica de una guerrilla (Nicaragua, 1982-2007)* (CIDE / CEMCA, Ciudad de México, 2016).

Palabras claves: sandinismo, Rosario Murillo, Daniel Ortega, Nicaragua.

Nota: primeras versiones de este artículo fueron publicadas en *Letras Libres* y *Cien Días*.

Traducción: José Darío Rodríguez.

Dávila, dirigente de la Unión Nacional Azul y Blanco (UNAB), la principal agrupación que reúne a diferentes fuerzas de oposición; y el influyente empresario José Adán Aguerri. Días más tarde en el mismo mes de junio, se sumaron a los detenidos un renombrado abogado constitucionalista y antiguos dirigentes sandinistas que pasaron a la oposición: José Pallais Arana, Dora María Téllez, Víctor Hugo Tinoco y Hugo Torres, y las dirigentes de Unión para la Renovación Democrática (Unamos)¹ Ana Margarita Vijil y Suyén Barahona. Lo mismo sucedió con el chofer de Cristiana Chamorro, Pedro Vásquez. Luis Rivas, director general de un importante banco de inversión (BANPRO), fue investigado, así como también otros dirigentes de las empresas privadas más grandes de Nicaragua, vinculadas a la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES). Todos bajo la misma acusación: «favorecer la injerencia extranjera» en el país. Contra Humberto Belli, ministro de Gobierno de Violeta Chamorro y antiguo opositor de Ortega, también se cierne una amenaza de enjuiciamiento. Los días 20 y 21 de junio fueron detenidos destacados periodistas, como Miguel Mora, candidato a la Presidencia, y Miguel Mendoza. Ese mismo día también fue detenida la diputada liberal María Fernanda Flores de Alemán, esposa del ex-presidente Arnoldo Alemán. El 7 de julio fueron encarcelados otros líderes opositores. Dos estudiantes: Max Jerez y Lester Alemán, quien había desafiado públicamente a los Ortega Murillo. Cuatro dirigentes campesinos: Medardo Mairena, Pedro Mena, Freddy Navas y Pablo Morales. A finales de julio y principios de agosto, otras personalidades de la oposición fueron sometidas a arresto domiciliario: el periodista Jaime Arellano, el candidato presidencial Noel Vidaurre y la candidata a la Vicepresidencia y ex-Miss Nicaragua Berenice Quezada, o encarceladas: el ex-ministro de Asuntos Exteriores Xavier Aguirre Sacasa, quien había intentado exiliarse en Costa Rica, y el conocido comentarista político José Antonio Peraza. Se sabe que no solo algunas de estas personas fueron maltratadas y humilladas durante sus detenciones, sino que sus condiciones de detención en la prisión de El Chipote son especialmente duras. A

**A los acusados
no se les permite
ver a sus familias
ni a sus abogados,
quienes también
son amenazados
con la cárcel**

los acusados no se les permite ver a sus familias ni a sus abogados, quienes también son amenazados con la cárcel, al igual que sus familiares si protestan contra estas condiciones de detención.

1. Unión para la Renovación Democrática es el nuevo nombre del antiguo Movimiento Renovador Sandinista (MRS).

Y es muy probable que otras figuras de la oposición sean arrestadas en los próximos días. Algunos periodistas, como Carlos Fernando Chamorro, y varios políticos prefirieron exiliarse antes de ser encarcelados. Fue también el caso del escritor y ex-presidente sandinista Sergio Ramírez, sobre quien, ya estando fuera del país, recayó una orden de detención.

El 28 de julio, el Parlamento aprobó leyes que ilegalizaban 24 ONG que trabajaban en los sectores de la salud y los derechos humanos. Todas ellas están acusadas de «violar sus obligaciones legales» en cuanto a declaraciones financieras. Las verdaderas razones de las disoluciones son dos. Algunas ONG no solo han criticado la falta de una política sanitaria adecuada ante la epidemia de covid, sino que también han intentado documentar las muertes y hospitalizaciones debidas a la epidemia. Otras criticaron la persecución del gobierno tanto a la sociedad civil como a las multinacionales de la oposición. Estas últimas medidas han obligado a algunas ONG a reducir sus actividades y a no hacer declaraciones públicas por temor no solo a ser prohibidas, sino también a que se les confisquen sus bienes y se encarcele a sus dirigentes. Más aún, el 7 de agosto la Alianza Ciudadanos por la Libertad (ACXL) se disolvió por completo. Por tanto, no podrá participar en las próximas elecciones. Finalmente, unos días más tarde, el gobierno prohibió al principal medio impreso de la oposición, *La Prensa*, la importación de papel para imprimir el periódico y distribuirlo a través de su red de vendedores. El periódico solo podrá circular en su versión electrónica.

No hay ninguna duda de que estas son señales del endurecimiento de un régimen triplemente acorralado, que perdió su legitimidad luego de la insurrección cívica de abril-junio de 2018. Es un régimen bajo la amenaza de graves sanciones internacionales y que, además, en los próximos meses se enfrenta a un desafío crucial: las elecciones presidenciales de noviembre.

Genealogía de una crisis política

Para comprender mejor el presente, es preciso recordar a grandes rasgos lo ocurrido desde la insurrección de 2018 cuando, entre abril y junio, amplios sectores ciudadanos se sublevaron contra el régimen de Ortega y Murillo. Durante ese lapso el país se paralizó por las protestas, que no se veían desde 1978 durante la lucha contra Anastasio Somoza. Barrios y ciudades se llenaron de barricadas, que hasta se autoproclamaron «territorios libres del dictador». Los manifestantes bloquearon las principales carreteras del país. Al comienzo, denunciaban la inacción del gobierno ante los incendios forestales que devastaban una reserva natural sobre la costa atlántica. Muy pronto, protestaban también contra la represión frente a sus primeras

manifestaciones y contra la reforma de la seguridad social. La brutalidad de la represión de estas manifestaciones pacíficas, con decenas de personas víctimas de disparos deliberadamente letales de la Policía, terminó uniendo a diferentes sectores de la oposición: empresariado, Iglesia católica, campesinos desposeídos por el proyecto del canal transoceánico, estudiantes y juventud urbana, prensa independiente y movimientos feministas. No solo denunciaban la corrupción y el autoritarismo del régimen. También reclamaban un diálogo nacional, el fin de la represión y una investigación de los crímenes cometidos por la Policía. Coincidían en que solo la realización de elecciones anticipadas pondría fin a la crisis de legitimidad del régimen.

Resulta poco decir que este levantamiento popular fue reprimido con enorme brutalidad: en apenas tres meses, hubo 328 muertos y miles de

En apenas tres meses, hubo 328 muertos y miles de heridos, centenares de personas apresadas

heridos, centenares de personas apresadas, la mayoría torturadas y agredidas por los policías, y más de 100.000 exiliados. Esto, en un país de 6,46 millones de habitantes. A finales de 2018, varios directores de prensa y medios de comunicación independientes fueron arrestados y sus medios, cerrados². Asimismo, las ONG consideradas muy críticas fueron sencillamente proscritas y sus bienes, confiscados. Las presiones internacionales de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y, sobre todo, la decisión del gobierno de Estados Unidos de congelar los bienes de altos funcionarios sandinistas, entre ellos Murillo y el secretario personal de Ortega, obligaron al gobierno a abrir unas mínimas negociaciones en 2019, que lo llevaron a promulgar una ley de amnistía en junio de 2019. Esta permitió la liberación de la mayoría de los presos políticos, con excepción de un centenar, aún detenido por «delitos de derecho común», según versiones oficiales.

No obstante, tal como lo comprueban varias leyes sancionadas entre octubre y diciembre de 2020, Ortega jamás mostró un deseo de poner fin a la política de terror que desplegó contra la oposición y mucho menos de permitir un retorno al libre juego de la democracia en Nicaragua. Estas nuevas leyes otorgaron poderes inquisitoriales a la Policía y a la Justicia. La detención preventiva, que no podía sobrepasar las 48 horas, hoy puede durar 90 días. Estas leyes crearon, además, los delitos de «incitación a la injerencia extranjera», «crimen de odio» y «ciberdelito», que permiten investigar y condenar con severas penas de prisión a todos aquellos que, por ejemplo, soliciten la visita de observadores internacionales para supervisar

No obstante, tal como lo comprueban varias leyes sancionadas entre octubre y diciembre de 2020, Ortega jamás mostró un deseo de poner fin a la política de terror que desplegó contra la oposición y mucho menos de permitir un retorno al libre juego de la democracia en Nicaragua. Estas nuevas leyes otorgaron poderes inquisitoriales a la Policía y a la Justicia. La detención preventiva, que no podía sobrepasar las 48 horas, hoy puede durar 90 días. Estas leyes crearon, además, los delitos de «incitación a la injerencia extranjera», «crimen de odio» y «ciberdelito», que permiten investigar y condenar con severas penas de prisión a todos aquellos que, por ejemplo, soliciten la visita de observadores internacionales para supervisar

2. 100% Noticias, las ONG Popol Na, Cenidh, CISAS, Hagamos Democracia, IEEPP, IPADE, Instituto de Liderazgo de las Segovias.

el desarrollo de las elecciones, o que denuncien las acciones del gobierno en redes sociales. Cabe agregar que la ola de arrestos apunta claramente a romper cualquier iniciativa de movilización social para exigir elecciones competitivas en las cuales la oposición tenga la posibilidad de ganar, tal como sucedió en 1990.

Hoy resulta esencial exigir dos cosas, desde el punto de vista democrático. Los prisioneros de opinión detenidos desde comienzos de junio y otros arrestados desde 2018 o antes³ deben ser liberados. El gobierno debe además comprometerse a permitir la realización de elecciones realmente competitivas, en las que los opositores tengan la posibilidad de hacer campaña sin estar sometidos a las presiones y acciones violentas de los sandinistas. Estas elecciones deberán ser organizadas por entidades independientes o por algún organismo internacional. Es preciso comprender además dos elementos primordiales para apoyar la lucha valerosa del pueblo nicaragüense para recuperar su libertad: (a) el tipo de poder que ejerce la pareja Ortega-Murillo y sus objetivos, y (b) la naturaleza de los múltiples segmentos de la oposición y la pertinencia de su estrategia.

La dinastía Ortega-Murillo

Numerosos observadores sostienen que la pareja presidencial tiene un solo objetivo: instituir una forma de patrimonialismo familiar siguiendo las mismas tendencias y prácticas de la familia Somoza, que gobernó Nicaragua de 1937 a 1979. Ortega y Murillo habrían, además, abandonado la ideología del Frente Sandinista y las promesas de redistribución de la riqueza y de progreso social promovidas durante la década de 1980. Su objetivo se centró en la recuperación del poder, que Ortega logró en 2006, para desde entonces nunca volver a abandonarlo. Para ello, sostienen Salvador Martí i Puig y Mateo Jarquín, «desmantelaron las instituciones democráticas del país (...) y prefirieron transformar el FSLN en una fuerza de derecha, antes que permitir el retorno al poder de 'la derecha'». Durante

3. Es el caso de Santos Sebastián Flores, arrestado en junio de 2013 y condenado a 15 años de prisión por haber denunciado los abusos sexuales de Ortega en contra de su hermana, Elvia Junieth Flores Castillo (nacida en 1990). Ortega habría abusado de Junieth desde que esta tenía 15 años. De estas violaciones nacieron dos hijas en 2011 y 2015. En noviembre de 2017, Junieth decidió denunciar los abusos y las injusticias infligidas a su hermano, a su familia y a ella misma mediante una llamada telefónica a medios de comunicación de Miami. Indicó estar secuestrada, vigilada en permanencia y sin derecho a salir del país. En enero de 2018, Santos Sebastián Flores permanecía internado en la cárcel La Modelo, galería 300, de prisioneros de alto riesgo. Se calcula que hay más de 120 presos políticos.

más de una década, supieron «construir un fuerte consenso autoritario en Nicaragua, con el apoyo tácito de sus antiguos enemigos ‘contrarrevolucionarios’ de los años 1980»⁴.

Resulta difícil discrepar con las observaciones de Martí i Puig y Jarquín. Desde 2006, Ortega y Murillo han instaurado metódicamente un poder dinástico, pervirtiendo las instituciones democráticas al someterlas al Poder Ejecutivo. Tal como lo demuestran todas las elecciones organizadas desde 2008, Ortega decidió no volver a aceptar ninguna puesta en juego del poder que pudiese obligarlo a buscar acuerdos con alcaldes o diputados de la oposición, o incluso a abandonar la Presidencia de la República. Durante cada una de estas elecciones⁵, el Consejo Supremo Electoral organizó metódicamente el fraude a favor del FSLN e ignoró sistemáticamente tanto las protestas de la oposición como los llamados al orden de la OEA. Las imágenes, a menudo grotescas, de la familia Ortega-Murillo (la pareja, sus ocho hijos y sus nietos) puesta en escena en diferentes ceremonias públicas y los roles claves atribuidos a cada uno de sus hijos al frente de distintos canales de televisión, de agencias de publicidad y en el mundo empresarial, son pruebas de su deseo de instituir un poder dinástico.

A esta tesis del proyecto dinástico cabe sumar el rol, cada vez más importante, de la vicepresidenta Murillo, luego de haber administrado, durante la presidencia anterior (2011-2016), la importante ayuda económica de Venezuela⁶ y de su omnipresencia en el medio de comunicación sandinista *El 19*. Desde allí, Murillo dicta la agenda de las movilizaciones populares, que el gobierno convoca de modo iterativo. Las intervenciones ditirámicas que Ortega le dedica son pruebas evidentes de las formas «familiares» de ese poder. Ella es «la camarada eternamente leal». Y Ortega tiene toda la razón sobre ello: su lealtad está fuera de duda. Murillo la demostró, por primera vez, en un momento crucial, cuando Zoilamérica, su hija mayor, nacida de una primera unión, osó denunciar en 1998 las violaciones repetidas de su padrastro y padre adoptivo, Daniel Ortega. Murillo calificó las declaraciones de su propia hija como calumnias y mentiras, y luego llamó a sus demás hijos a unir fuerzas en contra de Zoilamérica. Esta primera demostración de lealtad fue, además, el punto de partida de su carrera política en primer

4. S. Martí i Puig y M. Jarquín: «El precio de la perpetuación de Daniel Ortega» en *Nueva Sociedad* edición digital, 6/2021, <www.nuso.org>. Esta percepción es común entre muchos observadores de la realidad política nicaragüense.

5. Municipales de 2008, generales de 2011, municipales de 2012, generales de 2016 y municipales de 2017.

6. Estos fondos fueron administrados de modo discrecional por Murillo y aprovechados para financiar una política de asistencia personal a todos quienes aceptasen convertirse en miembros de las nuevas organizaciones de masas del FSLN.



plano al lado de su marido. Antes de eso, Murillo significaba poco o nada en el escenario político nicaragüense. Y esta lealtad no ha disminuido. Por el contrario, se reafirmó en 2018, cuando supervisó personalmente la represión de la insurrección cívica, dando una instrucción clara a la Policía y los grupos de choque del FSLN: «¡Vamos con todo!».

Los regímenes comunistas no han estado exentos de estas patologías dinásticas. Cabe pensar en Mao Zedong y su cuarta esposa durante la Revolución Cultural, Jian Qing. En Kim Il-sung entregando el poder a su hijo Kim Jong-un en Corea del Norte o, más cerca de Nicaragua, a los hermanos Castro en Cuba. Finalmente, en la Nicaragua de la década de 1980, con el peso decisivo de Daniel y Humberto Ortega en la Dirección Nacional del FSLN hasta que el primero, luego de asumir la Presidencia de la República, terminó enemistándose con su hermano.

Lo que interesa comprender es cómo, tras el retorno de Ortega al poder en 2006, él y su esposa han retomado metódicamente el control de todos los poderes, pero no al estilo de los caudillos latinoamericanos del siglo XIX y comienzos del XX, ni tampoco al de los militares de las décadas de 1960-1980. Aquellos proclamaban que sus dictaduras serían pasajeras. Aquí sucede lo contrario: el horizonte vislumbrado es el de un sometimiento a un par de «egócratas»⁷ que están allí para siempre. No cabe la idea de perder de nuevo el poder como en 1990, cuando según el ex-comandante sandinista Henry Ruiz, hoy opositor a Ortega, si hubieran sabido que podrían perder, los sandinistas habrían imaginado un plan para hacer fraude en las elecciones⁸. Los Ortega-Murillo pretenden encarnar al pueblo nicaragüense, al cual ofrecen una nueva dignidad. Buscan también controlar la vida social mediante el FSLN y sus organizaciones de masas. El Estado y el Partido son, de hecho, una unidad.

El presidente y la vicepresidenta hacen y deshacen carreras. Si Ortega prefiere la sombra, Murillo es una figura omnipresente, especialmente en los medios de comunicación bajo control de sus hijos y en el medio sandinista en línea *El 19*. Allí, ella aparece a cada instante dando instrucciones sobre cualquier tema. Los nicaragüenses, con cierta sorna, señalan que es experta en todo, incluso en meteorología. No obstante, el lado barroco y estridente de sus intervenciones no debe engañar. Sus caprichos, sus joyas abundantes, su vestimenta o, incluso, sus «árboles de la vida» o chayopalos, las gigantescas estructuras metálicas que bordean las grandes rotondas y las principales avenidas de la capital, así como sus llamados a oraciones

7. Retomando el término de Aleksandr Solzhenitsyn para evocar a Iósif Stalin.

8. Entrevista en el documental *Nicaragua, une révolution confisquée* (G. Bataillon y Clara Ott, Calisto Productions, 2013).

colectivas para hacer frente a la pandemia de covid-19⁹, son señales de un deseo de imponer su sello en todos los niveles, ya sea de protocolos o de organización del espacio público. Es, ante todo, una mujer que sabe calcular y gobernar, asegurándose la lealtad de quienes ella promueve gracias a las múltiples prebendas a las que les abre acceso.

Los «gracias a Dios», «Dios mediante» y «primero Dios» que salpican sus intervenciones públicas no engañan a nadie fuera de su pequeño círculo de simpatizantes. No se trata de expresiones de devoción a un Dios todopoderoso. Son más bien símbolos de la creencia en su destino providencial y en el de su marido. Son el emblema y la encarnación de la «Nueva Nicaragua, sandinista, cristiana, solidaria», adjetivos que no podrían disimular el retorno hacia una suerte de escatología totalitaria. Sus diatribas contra los opositores de 2018, a quienes trató de «seres minúsculos» y «seres diabólicos que jamás podrán gobernar Nicaragua», son muy reveladoras de su concepción de la política. Se encuentra allí, bajo un lenguaje tomado del cristianismo, la vieja separación totalitaria entre el Pueblo y sus enemigos predominante durante la década de 1980.

Murillo y Ortega tampoco se privan de revivir, literalmente, al gusto del día, la vieja polarización entre sandinistas y contras para estigmatizar a sus oponentes como «marionetas del imperialismo». En su elección como presidente en 2006, Ortega declaró que era el momento de la «segunda fase de la revolución». El paréntesis de su derrota en 1990 fue borrado, como también la democracia, a menudo corrupta, que Nicaragua conoció de 1990 a 2006. Según sus esquemas de pensamiento de la década de 1980, Ortega y Murillo conciben a las múltiples figuras de la oposición como enemigas del Pueblo, creadas casi *ex nihilo* por el imperialismo estadounidense. El nombre dado a las acciones policiales ejecutadas a comienzos de junio, «Operación Danto», también es un modo de revivir el imaginario de los años de la guerra civil: Danto es el seudónimo de Germán Pomares, uno de los líderes de la guerrilla sandinista, asesinado poco antes de la caída de Anastasio Somoza en 1979. Recibió este nombre una de las más grandes ofensivas contra la Contra durante los años 1980. La última prueba de la omnipresencia del imaginario del Pueblo Uno encabezado por su líder en la lucha contra los «enemigos del Pueblo» es el

Ortega y Murillo conciben a las múltiples figuras de la oposición como enemigas del Pueblo, creadas por el imperialismo estadounidense

9. Cabe destacar que, más allá de sus delirantes declaraciones, la vicepresidenta confinó cuidadosamente a toda su familia en una zona policial cerrada y extremadamente protegida durante la primera oleada de la epidemia.

discurso pronunciado por Ortega en el acto del 19 de julio de 2021 y luego, en los primeros días de agosto, cuando fue nominado por unanimidad por el congreso del FSLN como candidato a las elecciones presidenciales de noviembre próximo. El mensaje fue nítido. La crisis que atraviesa Nicaragua se debe a las acciones del «Imperio» (Estados Unidos) y las «potencias» (Europa), que quieren «someter» a Nicaragua como quieren hacer con la Federación Rusa y la República Popular China. Las decenas de detenidos, como las decenas de miles de opositores en 2018, solo serían «terroristas financiados por los millones de dólares del Imperio». Pero estos terroristas no tendrían ninguna posibilidad de ganar. No solo «¡El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo armado jamás será aplastado!», sino que «Aquí tenemos un ejército para resguardar la soberanía nacional y contribuir a la seguridad (...) y una policía de lleno comprometida con la seguridad ciudadana».

En su primer discurso de campaña electoral, Ortega utilizó las mismas metáforas, convirtiendo a los adversarios en traidores a la patria. Ciertos disensos no tienen razón de ser y cualquier apelación al apoyo extranjero es solo una señal de traición. Por ello, estos opositores no pueden reclamar ninguna indulgencia. «Es normal que en las familias discrepemos, pero que en la familia salga alguien a buscar al yanqui y al europeo para que vengan a agredir, a poner el hierro, el yugo a su familia en su tierra... ese, desde ese momento, deja de ser nicaragüense y se convierte en vendepatria». En cada una de estas ocasiones, Ortega se hizo pasar por un autócrata, encarnando a la vez al pueblo en lucha contra sus enemigos externos, pero también un principio de reconocimiento de lo legítimo y lo ilegítimo.

¿Cómo reaccionar? ¿Cómo actuar?

Ortega y Murillo no han roto del todo con su proyecto de transformación social de los años 1980. Cabe recordar que casi de inmediato, ya en el año 1980, se creó una burocracia prevaricadora cuyas prebendas y favoritismos lograron muy pronto vaciar de sentido las proclamas igualitarias de la Revolución Sandinista. Los hermanos Ortega y Tomás Borge estuvieron entre los primeros dirigentes en servirse generosamente de ello, al igual que otros múltiples prevaricadores de menor envergadura. Y esto, en todos los niveles del aparato del Partido-Estado sandinista. Hubo sin duda algún tipo de movilidad social, pero fueron muy pocos los líderes de costumbres franciscanas como Henry Ruiz u otros menos conocidos.

De cierto modo, el clientelismo y la corrupción que caracterizan a Nicaragua desde 2006 han permitido un tipo similar de movilidad. Hombres y mujeres de los orígenes más humildes han llegado a ocupar puestos

importantes en la administración estatal y en las nuevas organizaciones de masas. Muchos lograron aprovechar sus contactos o se beneficiaron, durante un tiempo, de la ayuda venezolana. Además, los empresarios, especialmente aquellos ligados al mundo rural y que exportan productos a Venezuela, lograron hacer excelentes negocios.

La verdadera novedad del momento tiene que ver con la manera en que Ortega y Murillo se confrontan con el contexto internacional. Durante la década de 1980 los sandinistas emplearon con astucia el lenguaje de la democracia. Hoy, el matrimonio presidencial actúa sin esconder para nada sus *habitus* totalitarios. Sus deseos se convierten en ley. Su confrontación con la oposición es frontal. Quien no se alinea incondicionalmente se convierte en enemigo potencial. El desprecio por los derechos humanos, así como por los principios democráticos, y el desdén absoluto por la opinión pública internacional son difundidos de manera deliberada. Se puede afirmar que hay algo de actitud suicida, pero su estilo resulta muy similar a los modos de actuar y de expresarse de Vladímir Putin o de Xi Jinping.

En este contexto, ¿qué peso tiene la oposición? Es poco decir que se encuentra en un momento difícil. La represión de que ha sido objeto desde 2018 ha fragilizado y roto la voluntad de muchos manifestantes. Algunos no han tenido más opción que huir al exterior para escapar de las persecuciones de las que han sido víctimas. Otros han perseverado, con una rara valentía y una abnegación admirable. Se trata tanto de militantes políticos (sandinistas renovadores de Unamos, miembros de los diferentes partidos liberales, conservadores o demócratas cristianos), como de periodistas, defensores de los derechos humanos, líderes de ONG, activistas y referentes religiosos. Aunque recientemente no han intentado manifestarse de nuevo en las calles debido al costo enorme de tales acciones, nada asegura que la rabia que muchos de ellos experimentan no los empuje a jugarse el todo por el todo. Si bien una cosa es expresar el descontento en redes sociales y otra muy distinta salir a las calles, las ideas que circulan en las redes muestran la amplitud del rechazo al poder. El FSLN y luego la pareja Ortega-Murillo contaban con un núcleo de simpatizantes de casi 40% en la década de 1980¹⁰, pero este disminuyó a menos de un tercio.

¿Qué peso tiene la oposición? Es poco decir que se encuentra en un momento difícil

10. En las elecciones de 1984, cuando el FSLN obtuvo 67% de los votos, el número real de sufragios era mucho menor. A pesar de las presiones ejercidas por el Frente, 10% de las personas en edad de inscribirse en las listas electorales no lo hicieron, 24% de los inscriptos se abstuvieron y 26% emitieron votos nulos. Por lo tanto, ese 67% de votos a favor del FSLN representaba, a lo sumo, 50% de los votos de electores potenciales o 40% de los votos emitidos.

Y eso hasta el presente. En caso de elecciones libres, la oposición tendría muchas posibilidades de ganar¹¹.

Un grupo social importante en términos de influencia, el mundo empresarial, mostró una actitud más ambigua antes, durante, después de los hechos de 2018 y hasta hoy. Los empresarios lograron adaptarse a la destrucción metódica de las instituciones democráticas de los Ortega-Murillo. Pagaban muy pocos impuestos, y las prebendas tanto a la familia gobernante como a sus aliados con el fin de manejar tranquilamente sus negocios les parecían un mal menor en comparación con una posible reforma fiscal o con la existencia de movimientos sociales y sindicales autónomos en sus empresas. Además, habían asegurado, especialmente los exportadores agrícolas, excelentes negocios con Venezuela, antes de que este país entrara en crisis. Muchos empresarios acariciaron la idea de que si los Ortega-Murillo se volviesen «razonables», un nuevo pacto con ellos sería la mejor solución. ¡Poco importan las libertades públicas si los negocios marchan! Pero la recesión económica que atraviesa el país desde 2018, acentuada por la pandemia, y las sanciones estadounidenses contra funcionarios sandinistas les han complicado considerablemente la tarea. Los activos de ciertos funcionarios sandinistas en EEUU han sido congelados y ninguna institución financiera internacional puede hacer negocios con ellos. Por haber respetado esta regla, varios empresarios han sido procesados por la Justicia en nombre de la «defensa de la soberanía nacional».

La oposición ha quedado atrapada también en una querrela de egos y hasta el momento no logra ponerse de acuerdo sobre una candidatura susceptible de reunir al mayor número de nicaragüenses para las próximas elecciones presidenciales. La mejor prueba de ello es que hay cinco candidatos para esas elecciones que se encuentran en prisión o bajo arresto domiciliario. La paradoja está en que esta ola represiva ha terminado por unir a personas anteriormente rivales, y en que el empresariado empieza a entender que el tiempo de los buenos negocios ha terminado.

Algunos observadores¹² argumentan que, a partir de las grandes manifestaciones de 2018, los opositores de todas las tendencias confiaron demasiado en que las sanciones internacionales tumbarían a la pareja gobernante. Resulta difícil comprender esa aseveración sin adoptar la lógica Ortega-Murillo, que ignora deliberadamente los compromisos de Nicaragua en materia de tratados internacionales, especialmente la carta de la OEA y sus

11. Hoy, la ley votada para permitir la reelección de Ortega estipula que, si un candidato obtiene más de 35% de los sufragios y supera a su primer contendor por un margen de cinco puntos, resulta elegido en primera vuelta.

12. S. Martí i Puig y M. Jarquín insisten notablemente sobre este punto. V. ob. cit.

considerandos sobre el respeto a las normas democráticas. La oposición, por su parte, exige que se apliquen sanciones contra los dirigentes nicaragüenses. Sin embargo, el meollo de estas sanciones está en si son eficaces y en qué costos implican para los nicaragüenses. Por ejemplo, la propuesta de algunos congresistas estadounidenses de poner en cuestión los tratados de libre comercio con Nicaragua no afectaría mucho a los dirigentes sandinistas, pero sí tendría terribles consecuencias en materia de empleo para los nicaragüenses más pobres. Precisamente por esto, detrás de su aparente realismo, tales medidas corren el riesgo de ser ineficaces o de producir efectos perversos.

Por su parte, las sanciones decretadas por EEUU, Canadá y Europa contra los líderes del régimen (la familia Ortega-Murillo, sus secuaces y testaferros) sí son muy eficaces. Estas personas cuentan con toda suerte de propiedades en EEUU, pero también en América Latina y Europa. El congelamiento de sus activos y su posible confiscación, la prohibición de realizar transacciones con bancos internacionales y la imposibilidad de viajar en aerolíneas internacionales son presiones eficaces contra estas figuras y sus entornos. Más allá de su retórica antiimperialista, todos, y más aún sus familias, son adeptos del *American way of life*, ávidos consumistas, confiados en que, en caso de revés de fortuna, saldrán de Nicaragua a disfrutar de sus bienes. Pero ahora las cosas les son mucho más complicadas. Cabe esperar que otros Estados, en América Latina y en Europa, adopten la misma política en la materia.

La presión de la OEA tendría también cierta eficacia. Las primeras medidas adoptadas, la condena de 26 países latinoamericanos a las detenciones arbitrarias, el llamado a la liberación inmediata y la creación de una comisión para encontrar una solución a la crisis nicaragüense, son pronunciamientos más que bienvenidos. Otra iniciativa que puede pesar en la balanza a favor de la oposición sería que los nicaragüenses demandaran a los altos mandos sandinistas ante tribunales internacionales y exigieran que sean juzgados por los delitos cometidos en 2018.

En las semanas y meses que vienen, los nicaragüenses tienen una gran necesidad del apoyo de la comunidad internacional en su pulseada con la pareja Ortega-Murillo, cuyas prácticas se encuentran a medio camino entre la revitalización del totalitarismo y las formas clásicas de la tiranía latinoamericana que Mario Vargas Llosa describió tan bien en *La fiesta del Chivo*. ☐

Los horizontes autonomistas del movimiento mapuche

Fernando Pairican

La elección de Elisa Loncon como presidenta de la Convención Constitucional chilena es el emergente de un largo proceso de organización y lucha de la población mapuche, que mediante diferentes estrategias, más gradualistas o más radicales, fue posicionando la cuestión de la autonomía y, más recientemente, del Estado plurinacional. Esta dinámica política constituyó una suerte de «otra transición» dentro de la Transición posdictadura.

Las nuevas problemáticas identitarias

Un momento marcó un punto de inflexión en la trayectoria del movimiento mapuche: alrededor de las 15:20 horas del 4 de julio de 2021. Concluida la segunda ronda electoral para escoger la mesa directiva de la Convención Constitucional, la mayoría del cónclave votó a favor de Elisa Loncon para conducir, en una primera etapa, la redacción de una nueva Carta Magna para Chile. Loncon proviene de una familia vinculada a los movimientos que impulsaron las «recuperaciones de tierras» durante la Reforma Agraria en las décadas de 1960 y 1970, aunque su historia se vincula al ñidolongko Loncomil, quien resistió a las fuerzas militares de Ejército de Chile en la ribera del río Malleco

Fernando Pairican: es académico de la Escuela de Antropología de la Pontificia Universidad Católica de Chile e investigador del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIIR) y el Instituto Milenio para la Investigación en Violencia y Democracia (VIODEMOS). Dirige la colección Pensamiento Mapuche de Pehuén Editores y es columnista de *The Clinic*, CNN y *Le Monde diplomatique* edición chilena.

Palabras claves: autonomía, Constitución, mapuche, plurinacionalidad, Chile.

junto con Kilapan, hijo de Mañilwenü, en 1860. Este episodio histórico fue denominado por la historiografía «Ocupación de la Araucanía»¹.

En su discurso del 4 de julio, Loncon propuso una ruta como horizonte para conformar un nuevo tipo de república que incluya la interculturalidad. La presidenta de la Convención señaló: «mandarles un saludo a los niños que nos están escuchando: se funda un nuevo Chile, plural, plurilingüe, con todas las culturas, con todos los pueblos, con las mujeres, con los territorios. Ese es nuestro sueño para escribir una nueva Constitución»².

En paralelo, desde principios de 2021, el movimiento mapuche partidario de la autodeterminación, encabezado por la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco (CAM), Resistencia Mapuche Lafkenche (RML), Resistencia Mapuche Malleco (RMM) y Weichán Auka Mapu [Lucha del Territorio Rebelde], impulsó una oleada de «recuperaciones de tierras», que incluyó el uso de la violencia política contra maquinarias y camiones forestales, y también el incendio de casas de agricultores y cabañas de turismo. Bajo los marcos ideológicos desarrollados por la CAM, que promueve el «control territorial como ejercicio de la liberación nacional», el movimiento favorable a la autodeterminación hizo uso de la violencia en el marco de lo que consideran sabotajes al capitalismo.

Los movimientos gradualistas y rupturistas han contribuido a la acumulación de fuerzas para la «liberación nacional» del pueblo mapuche. Este último concepto, incorporado en la década de 1990 por la organización Aukiñ Wallmapu Ngulam [Consejo de Todas las Tierras] –aunque debatido en la década anterior entre los jóvenes de la organización Ad Mapu–, creció dentro del movimiento, aunque solo se tornó hegemónica con la creación en 1998 de la CAM. La CAM fue un catalizador de nuevas ideas que en el plano teórico fueron debatidas por el partido mapuche Wallmapuwen y su equipo de intelectuales en la primera década del nuevo milenio³.

Desde nuestro punto de vista, fue como consecuencia de la acción colectiva de la CAM, más específicamente de sus estrategias de «recuperaciones de tierras» y edificación del «control territorial como ejercicio de la liberación nacional», que incluye formas de acción directa como la quema de

1. F. Pairican: *Toqui. Guerra y tradición en el siglo XX*, Pehuen / CHIR, Santiago de Chile, 2020. Un estudio clásico sobre el tema es el de José Bengoa: *Historia mapuche del siglo XIX*, LOM, Santiago de Chile, 2000.

2. El discurso está disponible en <www.mapuexpress.org/2021/07/05/video-discurso-inaugural-de-elisa-loncon-como-presidenta-de-la-convencion-constituyente/>.

3. F. Pairican: «Sembrando ideología: el Aukiñ Wallmapu Ngulam en la transición de Aylwin (1990-1994)» en *Sudhistoria* N° 4, 2012; Víctor Tricot y Germán Bidegain: «En busca de la representación política: el partido mapuche Wallmapuwen en Chile» en *Estudios Sociológicos* vol. 38 N° 113, 5-8/2020.

camiones y de maquinaria forestal —«símbolos del capitalismo forestal»—, que el concepto de «liberación nacional» se fue volviendo hegemónico en la discusión en el seno del pueblo mapuche. Sin embargo, en los últimos dos años, algunos hechos de violencia sobre civiles y detenciones de miembros del pueblo mapuche derivaron en hechos delictivos, que fueron criticados por los miembros del propio sector rupturista del movimiento.

Al movimiento mapuche se unió una corriente autonomista «desde abajo», que transitó de las «recuperaciones de tierras» a las del territorio como ejercicio de poder⁴. Coincidió con la hegemonía del modelo neoliberal en América Latina, propiciado por dictaduras militares y gobiernos democráticos entre las décadas de 1980 y 1990. El historiador, antropólogo y sociólogo José Bengoa ha llamado este proceso «emergencia indígena en América Latina», debido a la irrupción de las identidades de los pueblos originarios, lo que favoreció la expansión de un movimiento «panindigenista» basado en una «reinención» de la cuestión indígena que combina urbanidad y ruralidad⁵.

La gran revuelta indígena en América Latina transformó la situación política de los pueblos originarios y ha insertado la disputa por la historia como fundamento de sus horizontes políticos. Se trata de una suerte de «invención de la tradición» como la que han desarrollado todos los movimientos que se plantean en el marco de la reconstrucción de una nación. En el caso de la CAM, lo vemos en la revalorización del weichafe [guerrero] como elemento protagónico en el movimiento rupturista, así como en la del papel de las autoridades tradicionales⁶.

Estas últimas hacen alusión a los conductores y conductoras del pueblo mapuche: longko (cabeza jefe de una comunidad), werken (vocero), machi (autoridad sanadora). Cada comunidad tiene un longko, y el conjunto de las comunidades conforma el Wallmapu, el conjunto de la nación mapuche⁷.

4. Es relevante en estas reflexiones políticas el texto de Aracely Burguete Cal y Mayor: «Autonomía: la emergencia de un nuevo paradigma en las luchas por la descolonización en América Latina» en Miguel González, A. Burguete Cal y Pablo Ortiz-T. (coords.): *La autonomía a debate. Autogobierno indígena y Estado plurinacional en América Latina*, Flacso Ecuador / GTZ / IWGIA / CIESAS / UNICH, Quito, 2010.

5. José Bengoa: *La emergencia indígena en América Latina*, FCE, Santiago de Chile, 2000.

6. F. Pairican: «Weuwaiñ. La invención de la tradición en la rebelión del movimiento mapuche (1990-2010)» en Enrique Antileo Baeza, Luis Cárcamo-Huechante, Margarita Calfío Montalva y Herson Huinca-Piutrin (eds.): *Violencias coloniales en Wajmapu*, Ediciones CHM, Temuco, 2015; Eric Hobsbawm y Terence Ranger: *La invención de la tradición*, Crítica, Barcelona, 2013. Sobre el concepto de «weichafe», v. Héctor Llaitul y Jorge Arrate: *Weichan. Conversaciones con un weychafe en la prisión política*, Ceibo, Santiago de Chile, 2012.

7. El pueblo mapuche está dividido en identidades territoriales: Lafkenche (gente del mar), Nagche (gente de tierras bajas), Wenteché (gente de tierras cercanas a las nives), Pewenche (gente de la cordillera) y Williche (gente situada al sur del río Cautín).

En este marco, se ha producido también una descolonización de nombres y apellidos: los nuevos nacimientos reciben nombres en mapuzungun. Esta es una muestra de lo que se conoce como «orgullo de ser mapuche», resultado del accionar del movimiento, que ha incrementado la pertenencia étnica en los últimos años⁸. Para los mapuche, a todos los seres y espacios de la naturaleza se les asigna un alma que armoniza con el resto de las vidas existentes en Wallmapu. Según Elicura Chihuailaf: «nuestra existencia se afirma en dos grandes normas que regulan a la gente entre sí y a la gente con el medio natural que lo rodea. Son los conceptos de Nor y Az». El primero refiere a las pautas de la relación que debe tener la gente con la naturaleza y sus componentes, mientras que el segundo apunta al reconocimiento y la determinación del origen biológico y familiar de cada mapuche. Esto último permite articular la relación de cada familia con su lugar de origen, cimiento de los Lof, que luego del proceso de reducción territorial derivaron en lo que la Ley Indígena de 1993 catalogó como «comunidades».

A efectos de comprender los recientes debates internos del pueblo mapuche, es necesario distinguir las *comunidades tradicionales*, que derivaron de los títulos de merced post-Ocupación de la Araucanía, de las *nuevas comunidades* creadas al amparo de la Ley Indígena 19.253 de 1993, que permite la asociación de personas mapuche que se postulan para la compra de tierras no exclusivamente en sus territorios originarios, lo que ha sido fuente de nuevas controversias en el seno del pueblo mapuche. Por un lado, se «recuperan» tierras, pero por el otro, se rompen las normativas del equilibrio sobre la base del Az Mapu (sistema jurídico mapuche), al insertar a personas mapuche provenientes de otras identidades territoriales en territorios a los que no pertenecen desde perspectivas cosmológicas⁹. Esto ya había sucedido, sobre todo durante la Ocupación de la Araucanía, cuando ciertas familias tomaron la decisión de relocalizarse debido a la violencia estatal¹⁰.

La reciente elección de la Convención Constitucional demostró la fuerza del voto mapuche en sus territorios. Sin embargo, la misma elección

**Para los mapuche,
a todos los seres
y espacios de
la naturaleza se les
asigna un alma**

8. F. Pairican: *Malón. La rebelión del movimiento mapuche 1990-2013*, Pehuén, Santiago de Chile, 2014. Para mayores detalles, v. el Estudio Longitudinal de Relaciones Interculturales llevado a cabo por el CIR. Entre sus distintas mediciones, da cuenta del apoyo de la sociedad chilena a las reivindicaciones de los pueblos originarios y el crecimiento de la autoidentificación indígena. V. «Estudio UC: los chilenos apoyan cada vez más las demandas indígenas» en <www.elri.cl>.

9. Elicura Chihuailaf: *Recado confidencial a los chilenos*, LOM, Santiago de Chile, 1999. V. tb. José Quidel: «La noción mapuche de *che* (persona)», tesis de doctorado, Instituto de Filosofía y Ciencias Humanas, Universidad Estadual de Campinas, 2020.

10. V. Florencia Mallon: *La sangre del copihue. La comunidad mapuche de Nicolás Ailío y el Estado chileno, 1906-2001*, LOM Ediciones, Santiago de Chile, 2004.

–parafraseando al dirigente Adolfo Millabur, quien señaló que «mapuche vota por mapuche»– demostró que es muy relevante la fuerza de los mapuche que no viven en Wallmapu, sino que habitan en las grandes ciudades fuera del territorio mapuche. Así, las cifras de población mapuche que vive

Un sector del movimiento comenzó a reflexionar sobre la plurinacionalidad o la autonomía regional

fuera de Wallmapu han llevado al movimiento a pensar sobre su realidad y sus formas de construcción política. De esta forma, un sector comenzó a reflexionar sobre la plurinacionalidad o la autonomía regional como un camino plausible para desarrollar los derechos colectivos en una perspectiva de autodeterminación¹¹. Pero también se planteó

la posibilidad de un retorno al país mapuche para construir el control territorial. Con esto último creemos que se relaciona el reciente asesinato del miembro de la CAM Pablo Marchant en un enfrentamiento con Carabineros de Chile durante una «recuperación de tierras» en el fundo Santa Ana de Forestal Mininco¹².

Los debates sobre la autodeterminación

La autonomía ha dejado de ser una moda o un reclamo aislado para los pueblos indígenas. Para Miguel González y Aracely Burguete Cal y Mayor, este concepto debe ser visto como polisémico; proponen pensar en «las autonomías» como una imagen multicolor, con variables de contenidos y significados culturalmente construidos. Este paradigma, comprendido como parte de los procesos de descolonización, puede ser planteado en el marco de una imagen más amplia: la de los derechos humanos.

Puestas en debate en la Declaración de Barbados de 1971 y luego en la legislación del Régimen de Autonomía Regional de Nicaragua con la Revolución Sandinista, las autonomías permitieron avanzar en la discusión sobre los nuevos derechos que portan los pueblos indígenas. Así, desde la década de 1980, las dirigencias fueron creando marcos políticos, jurídicos y simbólicos para avanzar hacia la libre determinación¹³.

Los mapuche, no ajenos a estos debates, decidieron avanzar hacia un proyecto de «carácter histórico» –como llamaron a la autodeterminación–.

11. Claudia Zapata y Elena Oliva: «La Segunda Reunión de Barbados y el Primer Congreso de la Cultura Negra de las Américas: horizontes compartidos entre indígenas y afrodescendientes en América Latina» en *Revista de Humanidades* N° 39, 1-6/2019.

12. F. Pairican: «La tumba de Pablo Marchant y la evolución de la Coordinadora Arauco-Malleco» en *CNN Chile*, 23/6/2021.

13. C. Zapata y E. Oliva: ob. cit.

En palabras de José Mariman, estos nuevos postulados difieren de la reivindicación de la tierra del siglo xx; no obstante, las experiencias de las comunidades que refuerzan la concepción de autonomía fueron las «recuperaciones de tierras» bajo las reformas agrarias y los asentamientos. Para Mariman, el concepto de «autonomía» no es homogéneo, trasluce un debate interno en la «sociedad política» mapuche, que nos habla de la existencia de un discurso que pone el énfasis en lo etnocultural o en las tradiciones cuando se imagina un futuro para los mapuche¹⁴.

Ahora bien, ¿qué se entiende por autodeterminación? En 1983, en la Tercera Asamblea Nacional del Pueblo Mapuche convocada por Ad Mapu, se señaló: «la Ocupación significó la interrupción del proceso de desarrollo de nuestro pueblo y el arrinconamiento de nuestra población en reducciones indígenas». En los puntos siguientes, la Asamblea se pronuncia a favor de la «autonomía y autodeterminación de nuestro pueblo en cuanto a que debemos ser gestores y protagonistas de nuestro propio proceso de desarrollo» y concluye sosteniendo los deseos de «participar en la redacción de una nueva Constitución Política que resguarde y garantice nuestros derechos y patrimonio cultural de acuerdo con nuestra identidad étnica»¹⁵. En 1985, en la revista *Nüttram* —órgano ideológico de Ad Mapu—, se plantea: «un mapuche sin tierra no es un mapuche».

Años después, en una conversación con Ana Llao, dirigente de Ad Mapu, ella recordaba cómo se fue planteando la necesidad de una nueva Constitución que reconociera a los mapuche como sujetos de derechos¹⁶. La presión en el interior de Ad Mapu por hacer cumplir los compromisos del candidato a la Presidencia de la Concertación de Partidos por la Democracia, como el reconocimiento constitucional, la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (oit) y la creación de una normativa de protección y fomento de la identidad, buscó concretar un compromiso de la oposición a la dictadura, en el marco de una oleada democratizadora a escala global¹⁷.

La Ley Indígena de 1993, no exenta de visiones coloniales, diseñó políticas de afirmación que permitieron un desarrollo de la población mapuche sobre la base de la inserción educativa, el apoyo económico a estudiantes,

14. J. Mariman: *Autodeterminación. Ideas políticas mapuche en el albor del siglo XXI*, LOM, Santiago de Chile, 2012, p. 24.

15. Ad Mapu: «Tercera Asamblea Nacional del Pueblo Mapuche (Resoluciones)» en *Civilización*, 2/1983.

16. F. Pairican: «Ana Llao: 'Nosotros vemos la concepción de la vida como un bien común para todos'», entrevista en AAVV: *18 de Octubre: primer borrador. Reflexiones desde abajo para pensar nuestro mañana*, Quimantú, Santiago de Chile, 2020.

17. Rafael Otano: *Nueva crónica de la transición*, LOM Ediciones, Santiago de Chile, 2006.

el fomento de las artes y la inserción en el sistema educativo sobre la base de políticas de afirmación identitaria. A casi 20 años de esa ley, es factible pensar que los nuevos desafíos asociados a la politización de la identidad se relacionan con dos nuevas realidades: el auge del movimiento autonomista y las políticas de afirmación. Ambos, suscritos a un modelo económico que se constituye en la desigualdad y la diferencia, han terminado por crear un marco político en el que los miembros con pertenencia étnica son incorporados bajo el neoliberalismo sin ser sujetos de derechos y con dificultades de insertarse en un modelo que se basa en la desigualdad. Esto último potenció el movimiento extrainstitucional, que fue logrando, en los primeros siete años de la transición democrática, mayor peso político¹⁸. Desde 1990, con la fundación de Aukiñ Wallmapu Ngulam, la autodeterminación continuó afirmándose como horizonte político para el pueblo mapuche. Esto puede ser visto como la «otra transición» a la democracia, ya que Aukiñ Wallmapu Ngulam reforzó la perspectiva de que fuesen las comunidades las que sustentan el proceso político mapuche y que sus liderazgos tradicionales encabezaran el proyecto de «liberación nacional» mapuche.

Desde esa perspectiva, impulsaron nuevas «recuperaciones de tierras», lo que provocó conflictos con los gobiernos de la Concertación. A su vez, los procesos de «descolonización ideológica» llevaron a los militantes a forjar alianzas con comunidades situadas en Argentina, para fortalecer y ampliar el horizonte por la autonomía y la reconstrucción de Wallmapu. Para los miembros de la organización, la reconstrucción nacional del pueblo mapuche debía ser impulsada a ambos lados de la cordillera ya que esta, antes de que se establecieran las fronteras nacionales, era el centro del antiguo país mapuche. No fue extraño que, hacia el quinto centenario de la conquista de América, el movimiento mapuche lograra desarrollar un movimiento que articulaba a distintas comunidades, autoridades tradicionales y una fuerte movilización por la tierra junto con la creación de un arsenal político e ideológico, y que esto concluyera en la gestación de un movimiento autonomista. En esa línea, en octubre de 1992, la organización presentaría la bandera de la nación mapuche: la Wenüfoye¹⁹, que se vio flamear en todo el país durante la última ola de protestas.

La articulación de lo internacional y lo nacional derivó en la discusión de lo que se denominó Estatuto de Autonomía Mapuche. Sostenida en los

18. F. Pairican y Rolando Álvarez: «La Nueva Guerra de Arauco: la Coordinadora Arauco-Malleco y los nuevos movimientos de resistencia mapuche en el Chile de la Concertación (1997-2009)» en *Izquierdas* N° 10, 8-9/2011.

19. En relación con la discusión sobre la creación de la bandera, v. «Nación mapuche reafirma su identidad» en *Aukiñ*, 8-9/1992, p. 3.

antiguos territorios del Lof Kallfükura en Argentina, la discusión versó en torno de la definición de la Nación Mapuche desde un punto de vista histórico, normativo, institucional, territorial y cultural. Se propició inscribir el Estatuto bajo las legislaciones internacionales que el Estado debería adoptar para que los mapuche pudiesen ejercer sus derechos colectivos. Todo ello, bajo «el ejercicio concreto del derecho a la libre determinación»²⁰.

Estos avances políticos e ideológicos no fueron comprendidos por los gobernantes de la Concertación, que continuaron desconociendo los derechos colectivos del pueblo mapuche. La fundación de la CAM fue producto del proceso de radicalización mapuche. Bajo el influjo de la insurrección zapatista en México y la experiencia de algunos de sus miembros en organizaciones armadas de la izquierda chilena, la violencia política comenzó a ser ejercida y teorizada como un aspecto del proceso de autodeterminación.

Entre sus principales aportes, la CAM introdujo la perspectiva de la «descolonización ideológica». En ese ámbito, la ocupación de los territorios y el control de estos mediante lo que llama acción directa quiebra inexorablemente la institucionalidad que se desea imponer.

Las discusiones sobre la autodeterminación fueron cada vez más importantes en el seno de la comunidad política del pueblo mapuche, que continuaba construyendo elementos para forjar una subjetividad militante que el Estado nacional no tomaba en cuenta ni tampoco intentaba encauzar a través de reformas políticas. Al contrario, se inició una política de criminalización que significó abrir un espiral de violencia que no se ha detenido y que inclusive ha roto la confianza hacia cualquier intento de institucionalizar el conflicto mapuche. Lo que es más grave: un sector del movimiento autonomista no cree en los procesos de reformas constitucionales o que sea posible avanzar en los derechos colectivos a partir de la reconfiguración del Estado. La expresión de esto ha sido el reciente viaje de una comitiva de la comunidad Ignacio Queipul en Ercilla para cuestionar a los constituyentes mapuche electos por no representar los derechos colectivos, bajo la idea de que la participación mapuche en la Convención Constitucional es irresponsable e inconsecuente con la historia y el futuro del pueblo mapuche.

En paralelo, se inició una política de criminalización de los activistas de la CAM, quienes fueron enjuiciados usando normativas de excepción, como la Ley por Conductas Terroristas. Esto determinó el paso de la

La violencia política comenzó a ser ejercida y teorizada como un aspecto del proceso de autodeterminación

20. «Primer Estatuto de Autonomía» en *Aukiñ* N° 25, 10/1995.

organización a la clandestinidad, así como procesamientos por asociación ilícita terrorista. Esto último se aceleró luego de que entre 2001 y 2004 se sumaran a la CAM comunidades Wenteche que combatieron a los agricultores incendiando sus casas. En ese marco, comenzó un proceso de clandestinidad de los miembros de la organización y un conflicto esencialmente político fue entregado a la fuerza pública. Es viable plantear que, en ese escenario, el multiculturalismo como respuesta al ascenso del movimiento mapuche tomó protagonismo.

Los debates sobre la plurinacionalidad

En 1996, el joven mapuche de la provincia de Arauco Adolfo Millabur Ñancul fue elegido alcalde por la comuna de Tirúa. Para ese entonces, era miembro de la Coordinadora Territorial Lafkenche y del hogar de estudiantes Pegun Dugu. Los lafkenche (gente del mar) comenzaron a idear un movimiento en defensa del mar y sus seres vivos y a pensar en formas de recuperar la tierra y crear un movimiento de reivindicación política ante el contexto de emergencia indígena, así como de la influencia de Aukiñ Wallmapu Ngulam.

Los lafkenche (gente del mar) comenzaron a idear un movimiento en defensa del mar y sus seres vivos

La provincia de Arauco fue una de las comunas que vivieron la experiencia de la reforma agraria y la violación de los derechos humanos contra quienes participaron de ella. Además, por ser sede de yacimientos de carbón importantes para el país, la formación de una clase trabajadora con conciencia en esas tierras fue un hecho que contribuyó a la politización. Todas estas variables contribuyeron a la conciencia política de jóvenes que además reflexionaron sobre el ser mapuche.

La organización se caracterizaba por recuperar a las autoridades tradicionales como las conductoras del proceso político, aunque alejándose de una estructura vertical. «No somos un ejército –señalaba Millabur en 1999–, no andamos detrás de una sola persona, no tenemos una estructura única». Ese mismo año los lafkenche realizaron una cabalgata multitudinaria hacia Concepción para dar a conocer sus puntos de vista críticos, sobre todo frente a la construcción de la represa hidroeléctrica Ralco, y señalar su vinculación política con el mar. La relación entre geografía y política reforzó en los lafkenche la noción de pensar una solución económica y política en un sentido pluriétnico. Ello debería ir acompañado de una relación armoniosa con la naturaleza y el manejo de los recursos de los espacios marítimos del territorio mapuche, ya que este no era un aspecto productivo, sino la piedra

angular sobre la que se «construye la base de la identidad» de los lafkenche y, por ende, de la organización²¹.

Críticos del capitalismo, los lafkenche comenzaron a dotar de una perspectiva latinoamericana a sus formas de reflexión política. En 2002, un encuentro internacional en Lleu-Lleu, provincia de Arauco, los fue acercando a los debates en torno de la plurinacionalidad como vía para avanzar hacia los derechos colectivos. Al año siguiente, realizaron encuentros a escala nacional, lo que les permitió una vinculación a lo largo del país con gente mapuche que les permitió consolidar una fuerza política. En 2004, en Trawa Trawa se desarrollaron los primeros debates para formular un Proyecto de Ley de Protección del Espacio Costero haciendo uso del Convenio 169 de la OIT para tales efectos. La ley, que se comprometía en la protección de la biodiversidad, se aprobó en 2007 y se promulgó al año siguiente.

En 2006, la Identidad Territorial Lafkenche (ITL) realizó en Valdivia su primer congreso, que resolvió continuar luchando por formular una nueva Constitución. Cuatro años después, en el marco del triunfo de Evo Morales en Bolivia y del giro hacia la construcción de un Estado plurinacional en ese país, reafirmó su compromiso de redactar y discutir una Constitución vía Asamblea Constituyente. En 2012, tomó la decisión de construir un poder constituyente para una nueva Constitución agregando como horizonte el Itrofill Mongen [todas las vidas] para lograr un Küme Mongen [vivir en armonía y reciprocidad con todos los seres]. En este crucial debate, teniendo en consideración los ejemplos de Ecuador y Bolivia, que habían redactado para ese entonces constituciones que reconocían los derechos de la naturaleza, la autonomía y la plurinacionalidad como un nuevo marco de Estado, la ITL señala en 2013 que su propósito político sería la plurinacionalidad e interculturalidad.

En su IV Congreso en Hornopirén, en 2014, la ITL plantea que todos los acuerdos evidencian la necesidad de fundamentar los derechos colectivos (autodeterminación) en la redacción de una nueva Constitución. Dos años después, se establece la necesidad de forjar alianzas con otros actores involucrados en la protección del mar y defender las normativas consolidadas por el movimiento mapuche hasta el año 2018. Un año después, se produjo el estallido social, y ante la crisis de legitimidad de la República, los mapuche llegaron con una propuesta: la construcción de un Estado plurinacional.

Para Rosa Catrileo, que es en la actualidad convencional constituyente, la plurinacionalidad es un reconocimiento más bien constitucional. De

21. F. Pairican: «La vía política hacia la autonomía. Una comprensión del discurso y práctica de la Identidad Territorial Lafkenche en torno a la Plurinacionalidad, 1997-2020», inédito.

realizarse, plantea que esa declaración debe estar basada en un Estatuto de Garantía de Derechos. ¿Cuáles? «Primero reconocer al pueblo mapuche y a los pueblos originarios como sujeto de derecho, no como objeto de derecho, sujeto de derecho es que sean titulares, son titulares y lo otro es qué derecho; bueno, partamos por el básico: tierra y territorio... esa es la principal preocupación. Luego de ello materializar los derechos políticos, la autodeterminación con miras a la autonomía»²². En ese mismo sentido se suscriben las palabras de la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, para quien la autodeterminación continúa siendo uno de los ejes fundamentales del pueblo mapuche. No obstante, ve la plurinacionalidad como un punto intermedio para dialogar con los no indígenas, ya que desde su óptica, va a costar preparar a Chile para la plurinacionalidad, porque todas las constituciones fueron en función del Chile único, una sola nación, aun cuando existe tanta diferencia y diversidad. Eso habría calado hondo en la identidad chilena, pero también los chilenos han dicho «¡basta!» con el estallido social, lo que para la presidenta de la Convención significa que hay una decisión del pueblo de querer cambiar y hacer las cosas de otro modo. Para lograrlo, se necesita forjar «una cultura diferente» y para ello se deben introducir en el debate los conceptos plurinacionalidad, interculturalidad, derechos de la Madre Tierra, derechos sociales, derechos humanos fundamentales, verdad histórica.

Conclusión: ¿un camino a la domesticación de los derechos colectivos?

El 11 de agosto de 2021, la constituyente Rosa Catrileo, como parte de la subcomisión de Estructura y Funcionamiento, eliminó del Reglamento de la

Rosa Catrileo: «Chile es un Estado plurinacional (...) es momento de refundar la historia con muchas banderas y derechos»

Convención la frase «República de Chile». Los sectores más conservadores de la Convención expresaron su molestia y sostuvieron que se debilitaba la legitimidad del proceso por ese hecho. Catrileo explicó a los críticos que aquello era justamente lo que se iba a debatir. En su óptica, «Chile es un Estado plurinacional. Los pueblos están hablando, es momento de refundar la historia con muchas banderas y derechos». Y agregó: «Este es un cambio de pa-

radigma, que queremos [que] quede de manifiesto en la nueva Constitución y en la Convención, que es que aquí habemos diversos pueblos, naciones

22. Libertad Pinto: «Rosa Catrileo, constituyente mapuche: ‘Tierra y territorio son la principal preocupación que vamos a llevar a la Convención’» en *The Clinic*, 18/6/2021.

preexistentes al Estado, y nosotros somos los soberanos, los que vamos a refundar o dar esta nueva institucionalidad al Estado». Al siguiente día, reforzó su convicción: «la República de Chile para los mapuche ha sido bien invasora, no nos ha reconocido (...) y nosotros somos los soberanos, los que vamos a refundar o dar esta nueva institucionalidad al Estados».

Al siguiente día, la abogada Amaya Álvarez profundizó sobre la controversia que había generado la reacción de los sectores más conservadores de la Convención y del país. En sus palabras: «sacar la noción de República de Chile del artículo es una especie de símbolo para repensar este Estado Plurinacional (...) y una manera de apoyar la reivindicación histórica que hacían los escaños reservados». Álvarez comparte que Chile se encuentra ante un cambio de paradigma: «hablar de los pueblos de Chile con la idea de una república para Chile» no le parece contradictorio²³.

Las transformaciones que están llevando adelante los constituyentes mapuche ¿son la puerta para el multiculturalismo neoliberal? ¿Permitirán la consolidación de los derechos colectivos? ¿Es la violencia política el «verdadero camino» a la conquista de los derechos colectivos del pueblo mapuche? El último estudio de opinión pública del CIIR daba a conocer que 88% de los encuestados compartía que la naturaleza fuese sujeta de derecho, 81% era favorable al derecho a la propiedad comunitaria de sus territorios, 72% al reconocimiento de la jurisdicción indígena y 62% al reconocimiento de la libre determinación y autonomía²⁴.

Ante las críticas que emanaron de los mapuche de la comunidad Ignacio Queipul luego de llegar a las afueras de la Convención Constitucional, solicitando ser recibidos por el vicepresidente y desconociendo la autoridad de Elisa Loncon, en una conferencia de prensa dada por los convencionales, Adolfo Millabur planteó comprender las diferencias y levantó su mano derecha:

si miran esta mano es un solo órgano pero tiene cinco partes. Un pueblo también tiene derecho a tener diferencias, pero cada parte de las diferencias cumple un rol. Ellos vinieron legítimamente a presentar su diferencia, la escuchamos, estábamos disponibles para conversar, pero no como ellos querían por las normas sanitarias, son públicas las diferencias como mapuche. Nosotros los que estamos aquí creemos que este camino de la Convención es un paso para dar una solución que todos los mapuche conscientes queremos. Ellos vienen a reclamar el

23. «Sacar la noción de República de Chile del artículo es una especie de símbolo para repensar este Estado Plurinacional» en *El Mercurio*, 14/8/2021.

24. CIIR: «Estudio de opinión pública: pueblos originarios y nueva Constitución», 25/8/2021, disponible en <www.ciir.cl>.

territorio, nosotros también queremos lo mismo. Ellos quieren reclamar por justicia y nosotros también queremos lo mismo. La diferencia que tenemos es que creemos que por este camino institucional a través de la Convención podemos avanzar en cambiar las cosas duras de nuestro pueblo. Esa es nuestra apuesta.²⁵

La otra fuerza del movimiento mapuche continúa en la práctica del control territorial. Las «recuperaciones de tierras» han aumentado en los últimos meses. Desde la tumba de Marchant, en un predio en recuperación, Llaitul proclamó: «la única vía posible para la liberación nacional mapuche es el weychan [lucha o guerra] y la confrontación directa contra las expresiones del capitalismo en Wallmapu. Agregó que la participación mapuche en la Convención, como una supuesta oportunidad para refundar el país, lo que en realidad representa es un acto de sometimiento al pacto colonial»²⁶.

¿Qué camino es el correcto? ¿Cuál es el válido? Los constituyentes mapuche tienen hoy la legitimidad de las urnas. Si bien el número de quienes sufragaron a favor de los convencionales fue de 282.219, equivalente a 22,81% de un total de 1.239.395 habilitados para sufragar, es un número de adhesión importante para un movimiento que no confía en la institucionalidad debido a la forma de operar del Estado en las últimas décadas. Esto tiene relación, desde mi perspectiva, con la desafección hacia la democracia, que ha venido creciendo en los últimos años, y con el contexto pandémico, que hizo que muchas personas prefirieran restarse del momento político.

A modo de cierre, como me planteó Aracely Burguete Cal y Mayor en un diálogo que sostuvimos hace unos meses, es importante considerar que los pueblos originarios no buscamos un nuevo trato, sino derechos, y como tales deben quedar expresados en la nueva Constitución, «porque luego cuando uno ya los ve en el papel se hacen más pequeñitos, porque uno siempre siembra dinosaurios y al final cosecha hormigas. Entonces hay que tratar de sembrar dinosaurios aun cuando la tierra tiemble»²⁷. ☒

25. Conferencia de prensa de los constituyentes mapuche, 7/9/2021.

26. «CAM califica como 'acto de sometimiento' presencia de mapuche en la Convención» en *El Mercurio*, 16/7/2021.

27. F. Pairican: «Aracely Burguete Cal y Mayor y los pueblos originarios: 'El derecho madre es el de la libre determinación'», entrevista en *The Clinic*, 9/7/2021.

El Salvador: un autoritarismo *millennial*

Benjamin Moallic

Dos años y medio después de la elección de Nayib Bukele, la institucionalidad de El Salvador ha sido puesta a prueba de manera creciente sin que las crisis desatadas por el nuevo mandatario parezcan mermar su popularidad. Es que después de cuatro décadas de reino de los partidos nacidos de la guerra civil, el presidente apareció no solamente como la promesa de una renovación del escenario político, sino también como el «brazo vengador» que liquidaría el «viejo mundo» político.

Si Nayib Bukele encarnó una promesa de renovación política, fue sin duda por la imagen de *outsider* que vistió a lo largo de su campaña. Sin embargo, esta aura no ha sido más que el producto de una estrategia de marketing político y el resultado de los errores de valoración de su antiguo partido, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN). De hecho, cuando Bukele postuló su candidatura a la Presidencia, no era ningún novato de la política. Criado en una acomodada familia de comerciantes, pasó brevemente por la carrera de Derecho en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, que abandonó con tan solo 18 años de edad para hacerse cargo de los negocios familiares. Después de haber encabezado con éxito una empresa de *import/export* se lanzó a la publicidad, actividad que fue su puerta de entrada en la política. Tras varios años como responsable

Benjamin Moallic: es doctor en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS), París, e investigador del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos de México (CEMCA). Es especialista en la relación Estado-sociedad civil en México y Centroamérica (El Salvador, Nicaragua).

Palabras claves: institucionalización, populismo, Nayib Bukele, El Salvador.

de las campañas del FMLN, Bukele conquistó la Alcaldía Municipal de una localidad de la zona conurbana de la capital con el apoyo del partido izquierdista. Valiéndose de este primer mandato y nuevamente como abanderado del Frente, se lanzó con éxito a la contienda por la Alcaldía de San Salvador. Electo en 2015, implementó una política bastante tradicional: aseguramiento y recuperación de los espacios públicos, extensión de redes eléctricas a las zonas marginadas, construcción de caminos y glorietas... Pero afianzado por «sus obras» y su popularidad en los medios de comunicación, Bukele buscó su investidura por el FMLN como candidato presidencial. Lo hacía sin contar con el recelo de los *apparatchiks* del partido, quienes no demuestran ninguna simpatía por las «estrellas en ascenso» que no pertenecen al comité central. Fue por ello que Bukele se mostró cada vez más crítico hacia la cúpula del FMLN, hasta ser expulsado del partido en octubre de 2017 por «promover prácticas que incitan a la división interna», «irrespeto a los principios del partido» e «irrespeto al derecho de las mujeres»¹.

Si su expulsión del partido entonces en el poder le valió la imagen de «rebelde», sus pugnas con el Tribunal Supremo Electoral, que le impidió el registro de su nuevo partido y canceló la personería jurídica del pequeño partido socialdemócrata que se había propuesto promover su candidatura, lo erigieron definitivamente en candidato «antisistema».

Pero su verdadera imagen de *outsider* surgió de su estilo personal de gobernar: adepto a Twitter y a la retórica publicitaria, Bukele no dudó en privilegiar las demostraciones de fuerza y en jactarse de ser un hombre fuerte e independiente, sub 40, cuyo brazo iba a barrer «el sistema corrupto» instalado por los dos grandes partidos que compartieron el poder desde el fin de la guerra. Constantemente, en la enunciación de su poder y en la escenificación de una relación «directa» con «el pueblo» —aunque este solamente sea compuesto por la suma de sus *followers*—, Bukele manejó un estilo populista que chocaba con el carácter colegiado y burocrático del FMLN y de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena). Mostraba así un estilo personal cuyos lemas antisistema y anticorrupción anunciaban algo más que el reemplazo de la vieja clase dirigente por una nueva generación de *millennials*: la liquidación de las reglas del juego político salvadoreño.

No hay que olvidar el sentimiento de desilusión que invadió al electorado salvadoreño después del segundo mandato del FMLN, más aún entre los

1. Una consejera municipal de la ciudad de San Salvador acudió al Tribunal de Ética del FMLN y acusó a Bukele de haberle dicho «bruja» y de haberle arrojado una manzana a la cara. Ver Jonathan Laguan y Cristian Meléndez: «Nayib Bukele, expulsado del FMLN por estas razones» en *La Prensa Gráfica*, 10/10/2017; Sebastián Escalón: «¿Quién es Bukele, el presidente electo milenial y pro cicig de El Salvador?» en *Nómada*, 25/2/2019.

votantes de este partido. No solo la revolución prometida por el partido de izquierda nunca llegó, sino que los diez años de gobierno del FMLN quedaron manchados por los escándalos y la incapacidad de reforma. Ni el desempleo ni la violencia disminuyeron. Al contrario, el FMLN y Arena se comprometieron en pactos con las pandillas y permitieron su reconversión al negocio de la extorsión o el tráfico de drogas, a tal punto que se habló de «partidos mafiosos». De la misma manera, los discursos revolucionarios del FMLN no resistieron ante los escándalos de nepotismo y corrupción millonaria y el descubrimiento del tren de vida lujoso de la nueva «burguesía roja» vinculada al gobierno y a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). En fin, tanto el FMLN como Arena se encerraron en una forma muy tradicional y clientelista de hacer política, sin ver que el clientelismo se ha desgastado a los ojos de una juventud que reivindica sus derechos y aspira a algo más que recibir ayudas puntuales. En definitiva, la popularidad de Bukele fue el espejo del rechazo de Arena y el FMLN.

Por ello, la elección triunfal de Bukele en 2019 significó más que una voluntad de cambio. Personificó un rechazo de la población hacia las maniobras y los pactos partidistas que hundieron al país en un estado de convulsión permanente, de estancamiento económico y de bloqueos institucionales. Es decir que Bukele representó, si no una ruptura real, por lo menos una «brecha populista» en un país regido durante muchos años por un sistema «partidocrático» que había erigido los arreglos partidarios y la limitación de las ambiciones personales en reglas del juego.

Bukele representó, si no una ruptura real, por lo menos una «brecha populista»

Entre la dramaturgia y la inercia

La llegada al poder de Bukele fue sin duda una primera prueba de verdad. Sin mayoría en el Parlamento, sin partido estructurado ni cuadros sobre los cuales apoyarse, su discurso de «liquidación del viejo mundo» no podía sino tropezar con la realidad de las relaciones de poder y las inercias de la política salvadoreña.

De hecho, desde el inicio el presidente Bukele se topó con los mismos problemas estructurales que conocieron sus predecesores: en el plano económico, el país acumulaba una deuda que lo colocaba al borde del incumplimiento y limitaba el lanzamiento de políticas públicas ambiciosas; en el institucional, Bukele gobernaba con un Congreso en el cual no solo estaba en minoría, sino donde la oposición se había coaligado en su contra. Además, tuvo que transigir con un Poder Judicial que, a pesar de su politización,

se ha profesionalizado y ha ido impulsando una judicialización de la vida política, así como una fiscalización cada vez más minuciosa del ejercicio del poder. El contexto, a pesar de sus problemas, ha permitido la consolidación de sindicatos de empleados estatales, de periódicos de investigación, de ONG de defensa de los derechos humanos y de otros contrapoderes atentos a la gestión tanto de los mandatarios como de sus funcionarios.

No sorprendió entonces que los deseos del presidente se vieran inmediatamente frustrados por el Congreso o la Corte Suprema de Justicia. Así ocurrió con su voluntad de terminar con el llamado «nepotismo» del FMLN, para lo cual despidió masivamente a los empleados públicos contratados por las administraciones anteriores y desmanteló las secretarías presidenciales existentes para sustituirlas por nuevas secretarías a su medida. No contó entonces con el bloqueo del Congreso, única institución habilitada para crear plazas, suprimirlas y asignar sueldos a funcionarios y empleados públicos², ni con la acción de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó enseguida reinstalar a varios funcionarios removidos de sus cargos por incumplimiento de los procedimientos legales de cesación de contrato por parte de las nuevas autoridades. Es decir que, como ocurriera con los de sus antecesores, los márgenes de acción de Bukele se vieron limitados al reemplazo de las «plazas de confianza» y a la contratación de una nueva capa de funcionarios que se agregaría a las de los gobiernos anteriores. Así, Bukele tuvo que crear cerca de 3.662 empleos públicos en 2020 y 9.363 nuevas plazas en todos los sectores del Estado en 2021³, además de que tuvo que inventar plazas de asesores *ad honorem* para sus consejeros, quienes eran en realidad pagados con plazas de otros ministerios.

De la misma manera, en febrero del año pasado, la Asamblea Legislativa liderada por Arena bloqueó la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares destinados a la fase III del programa estrella de Bukele: su Plan Control Territorial. La votación del préstamo, destinado a la compra de material para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, fue suspendida por la Asamblea tras las revelaciones de posibles conflictos de interés entre el mismo presidente y varios contratistas contemplados para la venta de tecnologías, así como prevenciones sobre la sobrevaluación e incoherencia de algunos gastos⁴. La discusión parlamentaria no tardó en convertirse en una batalla mediática entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.

2. Eugenia Velázquez: «Secretarías creadas por Bukele sin base legal ni fondos» en *El Diario de Hoy*, 20/6/2019.

3. Denni Portillo y Laura Flores: «El Salvador: Ejecutivo pagará casi \$200 millones más en salarios que en 2019» en *El Economista*, 21/12/2020; Yolanda Magaña: «Planilla estatal crecerá \$124 millones y 9.363 plazas el próximo año» en *Diario El Mundo*, 13/10/2020.

4. Jimmy Alvarado: «El préstamo del BCIE, un paso más en la militarización de la seguridad pública de Bukele» en *El Faro*, 8/3/2020.



© Nueva Sociedad / Luisa Sabatini 2021

Luisa Sabatini (Montevideo, 1990) estudió ilustración en el taller de Denisse Torena. Ha realizado ilustraciones para el libro interactivo *Los monstruos de Calmachicha*, de Mauricio Delgado; el libro-disco *Turista*, de Pedro Restuccia; y los libros *Caracílico* (Factor 30, 2018) y *¿Qué querés inventar?* (Kapparazón, 2020), de Lorena Hugo, entre otros. Recibió una mención en la 3ª edición del Premio de Ilustración de UJ 2016, MEC. Dicta talleres de expresión plástica e ilustración. Tumblr: <luisabatini.tumblr.com>.

Bukele se abocó sobre todo a una teatralización exacerbada del poder presidencial

Limitado financieramente, Bukele rompió de inmediato su primera promesa de campaña de eliminar los gastos reservados de la Presidencia para utilizar de manera secreta hasta un millón de dólares por mes en los primeros tiempos de su gestión⁵. Pero Bukele se abocó sobre todo a una teatralización exacerbada del poder presidencial, con la cual intentaba compensar lo máximo posible su impotencia⁶. Así se debe interpretar el espectáculo que dio apenas instalado en el sillón presidencial, cuando ordenó por Twitter a sus nuevos ministros despedir de inmediato a los familiares de los principales cuadros del FMLN que fungían legalmente como empleados públicos. Como muchos ocupaban plazas de confianza revocables, la caza de brujas de Bukele no era otra cosa que una simulación de la depuración del Estado y la puesta en escena del advenimiento de un nuevo mundo donde sus ministros acatarían sus mandamientos a golpe de «inmediatamente» o «¡sí, mi presidente!».

La agitación populista de Bukele llegó a su verdadero clímax en febrero de 2020, cuando en un intento por doblegar a la representación nacional —después de haber amenazado a los diputados con represalias si no aprobaban el préstamo— llamó a una «insurrección popular» contra la «elite política» e instó al pueblo y al Ejército a manifestarse ante la Asamblea Legislativa. Entonces, a primeras horas del domingo 9 de febrero de 2020, Bukele irrumpió en la Asamblea rodeado de militares y policías armados para exigir a los diputados la aprobación del préstamo que requería para financiar su plan. Sentado en la silla del presidente de la Asamblea, dio inicio a la sesión plenaria ante una sala casi vacía donde solo habían acudido a su convocatoria los pocos diputados de su partido aliado, Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA). Cuando, consciente de haber llegado al límite de su demostración de fuerza, dio marcha atrás, comenzó a orar y declaró que Dios le había ordenado ser paciente.

Una vez más, Bukele quedaba atrapado entre la radicalidad de sus discursos y la realidad de su poder. De allí su dramaturgia: sus tuits y sus «golpes tentativos» son en esencia escenificaciones de una autoridad presidencial limitada en los hechos por la oposición. No obstante, este tipo de actuación populista comporta siempre riesgos. Por más simbólicas que sean, las demostraciones de fuerza y de autoridad implican siempre la posibilidad de

5. J. Alvarado: «Bukele ya gastó \$2 millones de la billetera secreta de la Presidencia» en *El Faro*, 4/9/2019.

6. Para un análisis del papel de la teatralización del poder en América latina, v. Danilo Martuccelli: *¿Existen individuos en el sur?*, LOM, Santiago de Chile, 2010.

pasarse los límites de la violencia y la transgresión aceptables en democracia. Y a este «cruce del Rubicón» lo llevó la crisis del covid-19.

El covid-19: la oportunidad autoritaria

Para Bukele, la pandemia de covid-19 fue sin duda una oportunidad inesperada para obtener los márgenes de acción que le faltaban. De hecho, le permitió primero invertir las relaciones de fuerza con la oposición parlamentaria, gobernar por decretos y obtener por otras vías los fondos y préstamos que la Asamblea le había denegado. Es más, el contexto de urgencia le otorgó la posibilidad de beneficiarse de nuevos préstamos internacionales, de emitir bonos y de utilizar fondos reservados o líneas presupuestales ya asignadas para financiar su nueva política, empezando por su política de seguridad pública⁷.

De esta manera, el nuevo presidente supo ganarse, si no la fidelidad de la población y de los funcionarios públicos, por lo menos sus simpatías. De hecho, pudo celebrar su primer año de gestión con la construcción de un hospital súper moderno, así como realizar varios proyectos sociales apalancados por una fuerte campaña publicitaria. A la vez, pudo financiar el reclutamiento de miles de nuevos funcionarios en las áreas de salud o de seguridad y, sobre todo, aumentar la remuneración de varios sectores del gobierno.

También logró implementar programas de alivio, como la entrega de un subsidio de 300 dólares a 1,5 millones de hogares considerados vulnerables o afectados por el desempleo (aproximadamente 75% de la población salvadoreña), así como el reparto de paquetes alimenticios, distribución de granos y enseres agrícolas para los agricultores o la oferta de créditos a bajo interés para las pequeñas y medianas empresas.

Pero los grandes beneficiarios de los fondos de la pandemia fueron ante todo la policía y los militares, o sea, los dos pilares sobre los cuales Bukele podía sostenerse para asentar su autoridad, a falta de apoyos significativos en el Congreso. Por lo que las fuerzas de seguridad no solo recibieron fondos considerables para el reclutamiento de nuevos efectivos y la compra de equipamientos modernos, sino que además obtuvieron «carta blanca» del nuevo mandatario para manejar «sus» asuntos. Así, el nuevo presidente no solamente prometió doblar los efectivos del Ejército en los próximos cinco años –pasando de 20.000 a 40.000– y extender sus facultades en materia de intervención interior, sino que, en septiembre de 2020, el mismo Bukele

7. FUSADES: «Impacto del covid-19 en la liquidez del gobierno» en *Análisis Económico* N° 53, 9/2020.

asumió la decisión de impedir el acceso a los archivos militares del juez del proceso penal encargado del caso de la masacre de El Mozote de 1981⁸. De la misma manera, se esmeró en ganarse la lealtad de la Policía Nacional Civil y su jefatura a golpe de bonos, de seguros privados y de aumentos presupuestales, pero también encubriendo los atropellos de la institución y dejándola manejar el «problema de las pandillas» con una severidad al límite de la violación de los derechos humanos. Sobre la marcha, Bukele protegió a Osiris Luna, viceministro de Seguridad y director general de Centros Penales, sospechado de haber recibido sobornos por parte de una empresa mexicana de seguridad⁹. A cambio, la Policía se alineó tras el presidente y llegó incluso a desacatar órdenes de la Asamblea Legislativa u obstaculizar la investigación de la Fiscalía General en posibles casos de corrupción en el gobierno de Bukele¹⁰.

**La pandemia
exacerbó
peligrosamente las
tendencias poco
institucionales
de Bukele**

Asegurados la lealtad de las fuerzas de seguridad y los nuevos financiamientos, el gobierno logró revertir en parte el desequilibrio que mantenía con la oposición. Sin embargo, la pandemia exacerbó peligrosamente las tendencias poco institucionales de Bukele. De hecho, la cuarentena nacional obligatoria otorgó poderes considerables a la Policía y al Ejército y reforzó a su vez los componentes autoritarios del gobierno. Pero el verdadero deslizamiento se dio por las contradicciones y el amateurismo del nuevo gobierno en su gestión de la crisis. Así, si bien Bukele había hecho de la lucha contra la corrupción su prioridad, a finales de 2020 la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) entregó a la Fiscalía General pruebas de numerosas irregularidades en los procesos de licitación pública o de compra de insumos médicos¹¹. De la misma manera, por generosos e innovadores que fueran, los programas de alivio económico lanzados por el gobierno alcanzaron rápidamente sus límites y no lograron cubrir en su totalidad las necesidades de la población y de las empresas. Por ello, la cuarentena nacional implementada por el presidente —entre las más estrictas de la región— suscitó ciertas

8. José Miguel Vivanco: «Con el respaldo de Bukele, el Ejército bloquea una investigación sobre la masacre de El Mozote» en *Los Angeles Times en español*, 9/11/2020.

9. Sergio Arauz: «Empresa mexicana de seguridad pagó el viaje de Osiris Luna» en *El Faro*, 3/2/2020.

10. Gabriela Cáceres: «El día en que la Policía obstaculizó la investigación del Fiscal contra el Gobierno Bukele» en *El Faro*, 11/11/2020; Gabriel Labrador: «Director de la PNC es absuelto y juez le advierte que ‘no estamos en una monarquía’» en *El Faro*, 23/12/2020.

11. «Investigan en El Salvador 17 casos de supuestas compras irregulares por covid» en Agencia EFE, 13/11/2020.

resistencias. Ante la multiplicación de desobediencias, la Policía reaccionó con exceso de violencia y arbitrariedad. Se encarceló a simples infractores del toque de queda en centros de detención o en hoteles de cuarentena donde la promiscuidad y las condiciones de atención precarias multiplicaban los riesgos de infección. De la misma manera, se prolongó fuera del límite legal el hacinamiento de viajeros puestos en cuarentena porque el Estado no tenía tests o los recursos necesarios para asegurar su situación sanitaria¹². Es decir que las propias limitaciones del gobierno lo llevaron a tomar actitudes cada vez más autoritarias.

Bukele empezó entonces a sufrir revés tras revés. Primero, ante una prensa independiente que, atenta a la supuesta «intachabilidad» del nuevo mandatario, empezó a revelar sus contradicciones y sus incumplimientos, empezando por casos de corrupción. Luego, los golpes vinieron de la Sala de lo Constitucional, que invalidó uno tras uno los decretos antipandemia de Bukele por violar los derechos fundamentales de los ciudadanos¹³.

Llamado por la Justicia a acatar sus resoluciones, Bukele prefirió encerrarse en un discurso populista que arremetió contra la prensa, los jueces y los universitarios. Cualquier voz crítica que reafirmaba la necesidad de respetar la formalidad del derecho era inmediatamente identificada como perteneciente a la oposición y rechazada del lado de aquellos a quienes llamaba confusamente «amigos del virus», «enemigos del pueblo» o simplemente «delincuentes»¹⁴. Pero pretendiendo encarnar al «Pueblo» y protegerlo de «sus enemigos», aunque estos fueran las propias instituciones del Estado, Bukele dio un vuelco a un discurso «provida», a través del cual se erigió en defensor de un principio aún más sagrado que la voluntad del pueblo: «la vida», y esto le permitió pisotear cualquier otro principio, ya fuera el interés público, los derechos individuales o la necesaria toma en consideración de las minorías... De tal manera que se elevó en una posición tutelar y no poco paternalista, que pretendía velar por los intereses del pueblo a pesar del pueblo mismo. Era imposible que esta actitud no suscitara el rechazo de una parte de la población.

El problema es que, en lugar de frenar a Bukele, ese mismo rechazo lo arrinconó cada vez más en su certeza autoritaria. Así se formó un círculo vicioso que lo llevó a romper en varias ocasiones con la legalidad. Se rehusó, por ejemplo, a aplicar las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia que

12. Lissette Monterrosa: «Con gritos de desesperación y carteles, personas que ya cumplieron su cuarentena piden regresar a sus hogares» en *El Salvador.com*, 17/4/2020.

13. Daniel Miranda: «Nayib Bukele: 'El Estado soy yo'. ¿Hasta dónde impondrá su agenda autoritaria?» en *Envío* N° 468, 3/2021.

14. *Ibíd.*

le exigían poner en libertad a los detenidos por infracción a la cuarentena. También dirigió varios ataques contra periódicos de investigación y periodistas independientes, quienes han sufrido exclusiones de las conferencias de prensa de Casa Presidencial, acusaciones de lavado de dinero y evasión fiscal, y hasta hostigamientos, intimidaciones o agresiones físicas¹⁵.

Es decir que la pandemia le permitió a Bukele no solo asentar las bases de su poder, sino también encontrar un estilo personal de gobernar que mezcla «reflejos vanguardistas» y «tentación autoritaria». Estos rasgos del bukélismo no serían tan preocupantes si no hubiera encontrado una manera de institucionalizarse tras la victoria arrasadora del oficialismo en las últimas elecciones legislativas de marzo de 2021.

La institucionalización del bukélismo

El 1 de marzo de 2021, Bukele y su partido, Nuevas Ideas, obtuvieron una contundente victoria electoral que les otorgó la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, con 56 diputados sobre 84.

El 1 de marzo de 2021, Bukele y su partido, Nuevas Ideas, obtuvieron una contundente victoria electoral

Aun sin contar con sus aliados de GANA, el partido presidencial dispone ahora de todas las latitudes para cambiar en profundidad la institucionalidad del país¹⁶. En lo esencial, Bukele está convencido de que el mal desarrollo de El Salvador es el resultado de la corrupción de los partidos nacidos de la guerra civil, que se incrustó hace 30 años en las instituciones del Estado, y por lo tanto, ahora que tiene las manos libres, se lanzó al desmantelamiento de las instituciones heredadas de los Acuerdos de Paz de 1992.

El primer acto de este desmantelamiento ha sido la destitución de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general de la República, el primer día de sesión de la nueva Asamblea. Pasando por alto los procedimientos legales y constitucionales para deponer y reemplazar a estos funcionarios, la Asamblea nombró inmediatamente a un nuevo fiscal y a nuevos magistrados afines al partido presidencial, los cuales fueron escoltados por la Policía hacia sus nuevos puestos después de que esta allanara

15. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): «Resolución 12/2021. Medidas cautelares N° 1051-20. 34 miembros identificados del Periódico Digital El Faro respecto de El Salvador», 4/2/2021; Nelson Rauda y Gabriel Labrador: «El Estado sin respuestas ante la CIDH por ataques a periodistas» en *El Faro*, 3/12/2020.

16. Para una lista de las decisiones al alcance de Bukele desde marzo de 2021, v. J. Alvarado y S. Arauz: «Todas las decisiones legislativas estarán al alcance de Bukele» en *El Faro*, 1/3/2021.

las instalaciones de la Corte Suprema y de la Fiscalía¹⁷. Leal al presidente, el nuevo fiscal lanzó una campaña de lucha contra la corrupción, no sin que antes la Asamblea otorgara inmunidad a los funcionarios del Ministerio de Salud por compras durante la pandemia y que la sección de probidad de la Corte Suprema dejara de investigar el patrimonio de los nuevos funcionarios de Bukele. Así, la campaña anticorrupción se redujo de hecho a una auditoría de los mandatos pasados de la oposición.

En paralelo, el gobierno tomó medidas para descartar de las instituciones a cualquier actor exterior que no le sea leal. Así, la nueva Asamblea aprobó un pliego de reformas a leyes constituyentes de instituciones autónomas y descentralizadas de gobierno, con el fin de retirar la facultad exclusiva a los empresarios agremiados en la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) de colocar representantes en las juntas directivas de estas entidades estatales. De la misma manera, el presidente Bukele rompió el acuerdo que tenía con la Organización de Estados Americanos (OEA) que dio origen a una comisión internacional contra la corrupción, la CICIES, para investigar irregularidades en las gestiones gubernamentales pasadas y presentes, después de que la Comisión hubiera denunciado ante la Fiscalía varios casos de posible corrupción del nuevo gobierno.

Es decir que, asegurado de su mayoría, Bukele emprendió la tarea de reformatear las instituciones del país para debilitarlas o achicarlas, comenzando por recortar sus presupuestos. Así procedió inmediatamente con instituciones fiscalizadoras como el Instituto de Acceso a la Información Pública, la Corte de Cuentas y la Procuraduría de Derechos Humanos¹⁸. A la par, promulgó reformas legislativas que concentraron los poderes de las secretarías y entidades autónomas del Estado en las únicas manos de los administrativos nombrados por él¹⁹. También, desde 2020, dejó de transferir 10% del presupuesto de la nación destinado a las municipalidades del país –muchas de ellas gobernadas entonces por la oposición– para reducir este monto a 6%, del cual 75% será únicamente entregado en «obras» sobre la base de proyectos aprobados por una nueva Dirección Nacional de Obras Municipales controlada por la Presidencia²⁰.

17. Fernando Romero, Bryan Avelar, Loida Avelar y Gerson Vichez: «La Asamblea de Bukele se toma la Corte Suprema y la Fiscalía» en *Revista Factum*, 2/5/2021; G. Vichez: «Asamblea estrena coreografía para elegir magistrados» en *Revista Factum*, 30/6/2021.

18. D. Portillo: «¿Qué dice y qué no dice el decreto del presupuesto 2021?» en *El Economista*, 30/12/2020.

19. Beatriz Benítez: «Bukele pide ocultar las declaraciones patrimoniales y propone otras 12 reformas en contra de la transparencia» en *El Gato Encerrado*, 13/7/2021.

20. Yolanda Magaña: «Bukele anuncia recorte del Fodes y dice ‘ya no se entregará en efectivo’» en *Diario El Mundo*, 7/4/2021.

De esta manera, recentralizando el poder y los recursos, Bukele ha iniciado un trabajo paulatino de debilitamiento de las instituciones del Estado; trabajo que ha ido de la mano de la creación de estructuras paralelas de decisión que responden únicamente a su persona y se imponen sobre el resto de los ministros o secretarios presidenciales. El primero de estos círculos está compuesto por los hermanos del presidente, quienes, a pesar de no tener oficialmente ningún puesto público, operan como negociadores, emisarios y principales estrategas del gobierno de Nayib²¹. Verdadero clan familiar que tiene una influencia considerable sobre su hermano, los Bukele no solo llegaron a reclutar a algunos de los altos funcionarios del gobierno, sino que negocian y pactan en nombre del presidente con todo tipo de actores, desde la oposición legislativa hasta los grandes empresarios del país o algunas potencias extranjeras; esto sin que jamás se pueda rastrear este «trabajo entre bastidores» por no implicar ningún tipo de gasto público.

Abajo de este clan familiar se encuentra otro gabinete *ad hoc*, compuesto por una decena de venezolanos, asesores extraoficiales también sin cargos formales –la mayoría de ellos ligados al gobierno «interino» de Juan Guaidó y a la dirigencia del partido Voluntad Popular–, los cuales hacen el enlace entre los hermanos Bukele, el partido dirigido por un primo de la familia y los ministros y secretarios. No solamente controlan la comunicación y la propaganda de todo el gobierno, sino que además bajan lineamientos, dan órdenes y diseñan los programas del gobierno, como el Plan Control Territorial o el Programa de Emergencia Sanitaria²².

Es decir que, a la vez que debilita las instituciones del Estado, Bukele reinstitucionaliza una estructura personal de decisión compuesta de familiares y allegados, varios de ellos extranjeros, una de cuyas «virtudes» es estar completamente desarraigados del juego político salvadoreño y de sus protagonistas tradicionales; una desconexión de la esfera de decisión y de poder que se tradujo, por ejemplo, en la adopción por la Asamblea Legislativa, sin debate alguno, de una ley de reforma monetaria que confirió al bitcoin el estatus de moneda de curso legal y «obligatoria» en un país donde solo 57% de la población tiene acceso a internet²³. Esta reforma, que se quiere el

21. Para una descripción exhaustiva del círculo de poder familiar que rodea a Bukele, v. el artículo de J. Alvarado, G. Labrador y S. Arauz: «El clan Bukele que gobierna con Nayib» en *El Faro*, 7/6/2020.

22. Estos elementos han sido detallados en J. Alvarado: «El gabinete oculto de venezolanos que gobierna con Bukele y su familia» en *El Faro*, 6/6/2021.

23. N. Rauda y Roman Gressier: «Asamblea aprobó en solo cinco horas la Ley Bitcoin que Bukele había anunciado tres días antes» en *El Faro*, 10/6/2021; José Barrera: «El Salvador alcanzó los 3,8 millones de usuarios de internet en 2020» en *Diario El Mundo*, 8/2/2021.

primer paso hacia la creación de una moneda virtual nacional y una futura «digitalización» del Estado salvadoreño, no se puede entender sin la intervención personal de los hermanos Bukele, jóvenes empresarios convertidos a la economía financiera y virtual, quienes negocian con las grandes empresas del sector y proponen usar el Estado y sus recursos para respaldar sus ambiciones de liderar una de las primeras economías digitalizadas del mundo²⁴. Pero tampoco se puede entender sin ver en ello la huella de los asesores venezolanos de Bukele, quienes tejen indudablemente un puente entre El Salvador, la diáspora venezolana y Venezuela, cuya economía se ha transnacionalizado, digitalizado e inclinado cada vez más hacia la «minería» de bitcoins.

En conclusión, y retomando conceptos de Alain Touraine, la institucionalización del bukélismo no solamente reemplaza la institucionalidad del país por un organigrama personal a mano del presidente, sino que acentúa en exceso la desarticulación de la sociedad salvadoreña, y con ello, sus contradicciones²⁵. Por ejemplo, abrir la economía al bitcoin no bastará para atraer inversionistas y crear empleos si no se diseña un plan de inversión millonario para que la juventud salvadoreña salga del sistema educativo con diplomas universitarios y técnicos de calidad en economía, informática o idiomas. De la misma manera, bajar las tasas de homicidios del país y así atraer a inversionistas extranjeros no bastará para dinamizar la economía nacional si no se detiene la extorsión que sofoca el tejido de empresas pequeñas y microempresas del país. Podríamos alargar la lista de evidentes contradicciones del bukélismo. El riesgo no es solamente ver alejarse una economía y un Estado cada vez más internacionalizados mientras la sociedad queda atrapada en desafíos locales muchas veces muy básicos; es también que el choque del bukélismo con las inercias de la sociedad lo hunda cada vez más en un populismo autoritario, o lo convenga de que la solución se encuentra en la liquidación total del «viejo régimen» gracias a la reescritura de una Constitución a su medida. ☒

24. Para más detalles de esta confusión de intereses y proyectos, v. S. Arauz, N. Rauda y R. Gressier: «Bukele y sus hermanos planean emitir colones digitales» en *El Faro*, 16/6/2021.

25. A. Touraine: *Las sociedades dependientes*, Siglo Veintiuno, Ciudad de México, 1978.

Un ejercicio de memoria feminista

Laura Fernández Cordero

La antología *Feminismos para la revolución* recupera una polifonía de voces de la historia de los movimientos de mujeres. No se trata de visibilizarlas, porque muchas de ellas no lo necesitan, ni de construir heroínas o buscar coherencias forzadas, sino de leer esos textos en voz alta y en conexión con las luchas del presente.

Hace más de 100 años, la anarquista rioplatense Virginia Bolten escribía en un periódico de Montevideo: «Busquemos en el pasado la inspiración para luchar en el porvenir: fracasos, designios y errores nos señalan el derrotero a seguir; para evitarlos contaremos con un inmenso caudal de conocimientos adquiridos en los días memorables»¹. Sus palabras se convirtieron en un

inspirador epígrafe para una antología de voces que sonaron desde las izquierdas y desde los feminismos entre mediados del siglo XIX y las primeras tres décadas del siglo XX. No solo por su atractiva invitación a volver a las memorias históricas como una forma de sumar potencias y evitar tropiezos, sino porque la figura de Bolten y su trayectoria anticipan las vicisitudes

Laura Fernández Cordero: es socióloga y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina, con sede en el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas, Universidad Nacional de San Martín (CEDINCI / UNSAM), donde tiene a su cargo el Área Académica y coordina el programa Sexo y Revolución. Memorias Políticas Feministas y Sexo-Genéricas. Es autora de *Amor y anarquismo. Experiencias pioneras que pensaron y ejercieron la libertad sexual* (Siglo Veintiuno, Buenos Aires, 2017) y coautora de *Vidas en lucha. Conversaciones* (con Judith Butler y Virginia Cano, Katz, Buenos Aires, 2019).

Palabras claves: feminismo, izquierdas, memoria, mujeres, revolución.

Nota: este texto es una versión levemente reformulada de la introducción a *Feminismos para la revolución. Antología de 14 mujeres que desafiaron los límites de las izquierdas*, selección, introducción y perfiles biográficos de L. Fernández Cordero, Biblioteca del Pensamiento Socialista, Siglo Veintiuno, Buenos Aires, 2021.

1. V. Bolten: «Enseñanzas del pasado» en *La Nueva Senda* N° 12, 1910.

mismas de la compilación. Luchadora por una revolución social con vistas a la emancipación humana, supo enfrentar a los compañeros que entendían la Humanidad en clave masculina. Luchó por la huelga general, al tiempo que alzó la «voz de la mujer» para decir que las relaciones amorosas se debían, también, una revolución profunda. Renegó del «feminismo» y es hoy una de las más recordadas protagonistas del movimiento de mujeres. A pesar de todas esas aparentes contradicciones, matices e inflexiones (o quizás por todo eso), aquellas palabras pueden evocarse hoy como puerta de entrada a una nueva antología.

La primera lista fue imposible. La segunda, delirante. Los elementos que tamizarían la selección «izquierda y feminismo», los más escurridizos: indefinidos en sus contornos, desbordantes en sus escrituras y tendientes a la taxonomía infinita. Además, son tantos los ejercicios de recuperación, edición y visibilización de biografías que estaba en duda la necesidad misma de una nueva antología. ¿Acaso no detectamos e identificamos ya a numerosas pioneras? ¿No nos basta con las vidas ejemplares que conocemos? ¿No sacudimos lo suficiente panteones y cánones a fuerza de poner en evidencia sus borramientos? ¿Ya olvidamos que fuimos tentadas por alabanzas que forjaron a heroínas y divas? ¿Cuántas veces imaginamos una progresión en etapas de menor complejidad o mayor ingenuidad hasta nuestro presente iluminado? Pero todos esos pecados, cometidos por necesidad y con entusiasmo,

fueron los que lograron multiplicar las lecturas feministas y alimentaron el desborde contemporáneo. Si allí hay espacio para una nueva antología es porque quizá ya no necesitamos presentar mujeres intachables, vidas consistentes o biografías de novela. De un tiempo a esta parte, pasamos de los deslumbramientos a disfrutar la relectura; fue y es un regreso atento a las voces quebradas, dubitativas, inconsistentes, polémicas y hasta suicidas.

La antología *Feminismos para la revolución* reúne 14 nombres y sus textos. No son representativos, no son los únicos posibles, no agotan ni la vida ni la obra de cada voz autoral; no se compondrá con ellos una biblioteca consistente. Se ofrece como un muestrario más en el ejercicio de la memoria feminista, uno personal, puesto que me tocó reunirlos, y también colectivo, porque han vivido en la multitud de lecturas y a ellas quieren volver.

Mi exploración comenzó a partir de una escena de fines del siglo XIX. La encontré mientras rastreaba los primeros ecos locales del término «feminismo»: una conferencia en Buenos Aires, donde el profesor argentino Ernesto Quesada explicaba a un grupo de mujeres las novedades de ese fantasma que recorría el mundo. En su presentación, afirmaba que la mejor versión era la estadounidense, tan moderna, y no la del «sentimiento femenino ruso exaltado inspirado por la impetuosa y perturbadora Claire Démar». ¿Quién era esa francesa cuyo brío llegaba hasta Rusia? Descubrí que sus escritos, apenas dos, no estaban traducidos al castellano ni

formaban parte de los cánones conocidos; pero esa sola advertencia del profesor me decidió a tomarla como primera voz de esta serie donde lo común es el tenor de los calificativos recibidos: exaltadas, virulentas, altisonantes, exageradas, veleidosas, impulsivas, irracionales, primitivas, emocionales, sensibleras, desubicadas, frenéticas.

De biografías reacias a la condensación, las voces compiladas se expresaron en momentos históricos muy agitados. Flora Tristán en los inicios del siglo XIX francés, sacudido por revueltas, restauraciones y el despuntar de la lucha obrera. Tras la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana (1791) de Olympe de Gouges, el Código Napoleónico clausuró gran parte de las promesas de la Revolución de 1789 y provocó que escritoras como Jenny D'Héricourt y tantas otras renovaran la lucha en sus clubes y periódicos. Hombres como Charles Fourier —a quien se le ha atribuido la creación del término *feminisme*— y Joseph Déjacque —quien habría acuñado el neologismo *libertaire*, ayer sinónimo de anarquismo y hoy disputado por las derechas— serían material de lectura crítica y ambivalente presencia aliada para estas mujeres.

Uno de los periódicos de las nuevas jornadas revolucionarias de 1848, *La Voix des Femmes*, resonó hacia 1896 en la publicación anarquista *La Voz de la Mujer* de Buenos Aires. Sus redactoras fueron perseguidas por el mismo Estado que capturó y analizó a La Bella Otero (Agustina Otero Iglesias), aquella que logró por un momento hacer del encierro psiquiátrico un escenario,

regalando retrato y dedicatoria a su carcelero lombrosiano. Otras, como la feminista María Abella Ramírez, dispondrán del privilegio de su voz pública para disparar contra la Iglesia católica argentina. Si volvemos a Europa, veremos cómo los fuegos de Rusia atrajeron a la alemana Clara Zetkin, líder de la socialdemocracia, y a Rosa Luxemburgo, compañeras de esa misma lucha por la que vivió la revolucionaria Aleksandra Kollontay. Hasta allí llegaría, ilusionada, la anarquista Emma Goldman, quien pronto abandonaría la Unión Soviética para dejarse encantar por la España revolucionaria en 1936. Hacia la península ibérica viajó, también, la argentina Ana Piacenza con el sueño de trabajar por la causa en varios frentes, entre ellos la organización Mujeres Libres, cuya revista era leída por la escritora María Lacerda de Moura en una comuna de emigrantes europeos en Brasil.

Detrás de estos nombres propios palpitan legiones. Masas, grupúsculos, organizaciones, clubes, aquéllares, círculos de lectura, hordas. No podemos dar cuenta de todas: hay que saber escuchar el estruendo bajo las frases de las que llegaron a la autoría y a la placa consagratoria. Sus biografías están unidas por acontecimientos y escrituras. Por citas recíprocas, por lecturas mutuas. Por magisterios y admiraciones. Como eficaces archivadoras amigas, se editan entre sí, componen los mismos periódicos, se pasan fotocopias. Una incesante interlocución que nos arrastra y nos suma porque, cada vez que leemos, compartimos un texto

o escribimos, nos hacemos parte de ese camino que la palabra no olvida.

Se trata de una antología que se quiere sonora, una apuesta de ampliación que va del «Yo hablo» de una escritora como Claire Démar al silencio estratégico de una librepensadora como la brasileña Maria Lacerda. Porque antes de tener nombre, el feminismo ya era una cuestión de voz. De alzarla y escribirla. De actuarla y resonar. Mientras las voces fueron pocas, eso que llamamos patriarcado apenas tembló. Cuando fueron muchas y unieron sus tonos diversos, lo que parecía natural se reveló histórico, lo evidente se tornó injusto y lo antes acallado se hizo denuncia pública. Voces que argumentaban suave, contestaciones fuertes, críticas sobre los críticos, reniego de las filosofías previas, acusaciones con dedo en alto, burla a los vigilantes, mohínes seductores, narraciones autocelebratorias, exhibición de pesares, humor. También fueron variados los géneros que transitaron: folletos, tratados, poemas, notas de opinión, novelas, ensayos, autobiografías, editoriales, entrevistas, cartas de amor.

Para visitar esa biblioteca profusa, es deseable reponer épocas y circunstancias, como intentan hacer las presentaciones que acompañan cada texto. En su brevedad no alcanzan a dar cuenta de la intensidad de esas vidas ni de la profundidad de sus obras; pero el repaso biográfico pone esas escrituras en diálogo con los acontecimientos históricos y resalta sus puntos de encuentro a través de los tiempos. Aunque también es posible saltarlas,

olvidar todos los contextos y jugar a descubrir ecos inesperados, brutales actualizaciones, anacronismos hilarantes. Darse al peligro de la relectura con su eficacia descontrolada. Descubrir que algo todavía retumba en tu organización, en tu sindicato, en la cocina, en tu cama.

En *Feminismos para la revolución*, la socialista Flora Tristán conversa con mi hija. A pesar de la secuencia cronológica —que comienza en 1800, cierra en 1945 y pretende facilitar la lectura—, se invita a desconfiar de las continuidades lógicas, del etapismo y de las olas. Ese tipo de organización de la memoria resulta útil en muchas circunstancias —en especial, las pedagógicas—, pero no alcanza a ser el único modo de contar la historia feminista. Cuanto más esquemático es el relato, mayor es el riesgo de simplificar lo abigarrado, acallar lo extemporáneo o invisibilizar los márgenes.

Feminismos para la revolución se suma al largo intercambio entre las izquierdas y los feminismos, ya no suponiendo dos entidades concretas y definidas —que, según el momento o la geografía, se avienen a un matrimonio feliz, un noviazgo fallido o una separación tajante—, sino explorándolos como espacios que se están conformando mientras debaten. Rebeldías, insurrecciones, revueltas y emancipaciones hubo muchas a lo largo de la historia; pero socialismos, anarquismos, comunismos y feminismos comenzaron a tomar forma y nombre en ese proceso que se abrió alrededor de la Revolución Francesa y no cierra todavía.

Entre una Clara Zetkin, pilar del Partido Socialdemócrata, y una María Lacerda, que se resiste a cualquier filiación política, nos encontramos con posicionamientos muy disímiles, pero todas tuvieron alguna participación en espacios de izquierdas que, con distintos grados de centralidad, incluían en su ideario o programa una preocupación por la denominada «emancipación femenina» o por la «cuestión de la mujer». Sus recorridos personales confirman la importancia de la lectura y la escritura como prácticas liberadoras; la mayoría fundó periódicos, editó folletos y libros o animó revistas con gran esfuerzo por conseguir los recursos materiales necesarios.

Muchas veces en velada o maniifiesta controversia respecto de los órganos de expresión del partido o del movimiento, como se refleja en algunos títulos: *Maison du Peuple* y *La Voix des Femmes*, *La Protesta Humana* y *La Voz de la Mujer*, *La Antorcha* y *Nuestra Tribuna*. Revistas viajeras, epistolarios copiosos, giras de propaganda, libros en traducción son prueba de un decidido internacionalismo. Con intercambios que no siempre partieron desde los centros europeos hacia las periferias latinoamericanas, sino que establecieron diálogos horizontales en distintas direcciones geográficas e ideológicas. (Un pulso similar tuvo la construcción de la antología, al contrarrestar las fronteras clausuradas y los aislamientos obligados por la pandemia del covid-19 con veloces fotografías caseras, generosos documentos adjuntos y cálidos envíos de libros

recién editados). Aquellas publicaciones guardan las huellas de una polémica recurrente con los hombres que declamaban la doctrina de la «emancipación de la Mujer» pero oponían resistencia a las libertades de las compañeras. Ellas aprenderían a asumir su lucha en primera persona y en una doble batalla, hacia la vida política en general y hacia el interior de sus colectivos; siempre con esforzadas negociaciones o con rupturas, desplantes y portazos que sonaban como denuncia de los límites del espacio que pretendía contenerlas.

Al parecer, incluso las consignas de emancipaciones femeninas o las fórmulas como «mujer y socialismo» escondían orientaciones tácitas de justas medidas y buenos modales; por ejemplo, en línea con el partido, en voz moderada, secundando. O con sensibilidad, prudencia, virtud y bondad. O con dedicación casi exclusiva a los temas «de mujeres» como si fueran «labores propias de su sexo», expresión muy común por entonces. Hubo que aprender, también, que cualquier desliz por fuera de esas pautas podía conllevar insultos y comentarios sobre la moral o el comportamiento sexual de la mujer (muy) pública. No siempre la respuesta de ellas fue en el sentido más rebelde; muchas quedaban entrampadas en el pudor o les era difícil ejercer su libertad con tan poca información, con escaso acceso a métodos anticonceptivos seguros y con violencias naturalizadas.

Junto con la mentada «cuestión de la mujer», el de estas voces es, también, el tiempo de la «cuestión sexual», con un amplio despliegue de las sexologías

como dispositivos de saber y de poder, más los comienzos de los activismos para la despenalización de la homosexualidad. Las discusiones sobre la libertad sexual se dieron en los espacios más progresistas y de izquierdas, como lo demuestra la conformación de la Liga Mundial por la Reforma Sexual, que en 1928 fue encabezada por tres hombres: el médico y activista alemán Magnus Hirschfeld, el sexólogo británico Henry Havelock Ellis y el psiquiatra suizo Auguste Forel. La tensión entre «revolución» y «reforma» conformaba todo un paradigma que resultaba progresista respecto de las posturas religiosas y conservadoras, sobre todo al procurar distinguir entre goce y procreación y al no criminalizar la homosexualidad. Sin embargo, siguió entendiendo la sexualidad como una faceta instintiva, sujeta a la dicotomía varón-mujer y reprimida por factores sociales que, bajo un sistema injusto, podían generar «desviaciones» respecto de su cauce natural. La maternidad fue considerada un destino, y la reproducción, analizada con una mirada eugenésica por entonces muy en boga, mientras que la explotación y la hipocresía de la doble moral eran señaladas como causas de esa otra institución solidaria del matrimonio burgués, la prostitución. Con algunos pocos matices, los textos que componen esta antología comparten ese marco que, pese a sus limitaciones, propició nuevas libertades y subjetividades, y recién mostró signos de quiebres en la segunda mitad del siglo xx, cuando otras izquierdas y

otros activismos se aliaron en favor del «sexo y la revolución»; así, surgieron nuevas configuraciones teóricas para comprender cuerpos y deseos.

La elección de autoras no tuvo como principio de selección una Mujer con mayúsculas. Al contrario, intenta exponer las vicisitudes de una figura siempre en disputa. Quienes luchaban por conquistar derechos para las ciudadanas partieron de un contexto que las consideraba biológicamente débiles e inferiores. Desafiaron academias enteras para construir la mujer del derecho civil y político. Contra esa vertiente liberal, las obreras quebraron la ilusión sobre la igualdad femenina al insistir en las diferencias de clase. En un sentido similar actuarían las mujeres de todos los colores por fuera de la supuesta uniformidad blanca y las que se querían libres del mandato heterosexual. Ni biología ni esencias femeninas fueron viables para sostener una Mujer indiscutida, y esa inestabilidad, que se vislumbra en cada texto de esta selección, encontrará su síntesis, a mediados del siglo xx, con Simone de Beauvoir: «No se nace mujer, se llega a serlo».

La antología no pretende ser un proyecto de visibilización. Muchas de estas biografías ya han sido retomadas, incluso hasta la canonización militante. Algunas recibieron atención por parte de sus colegas o integrantes de sus agrupaciones y alcanzaron a un gran público lector. Aquí, en cambio, se invita a pensar el mecanismo mismo de esa visibilización/invisibilización en tanto lógicas de la construcción de cánones, programas de estudio, paneles

de debate o, precisamente, antologías. Un juego de luces y sombras que opera en la historiografía y en la memoria política, y que debemos revisar con actitud aún más crítica cuando responde a nuestras preferencias o se solaza en los cupos cumplidos.

En esta cadena de sentidos compartidos a través de la historia no es necesario aclamar la originalidad ni justificar pionerismos, sino comprender singulares flexiones individuales, combinaciones personales de un drama histórico, eslabones preciosos de un nuevo engarce. Más que en el nombre propio o en la persona concreta que escribió, a veces en carne viva o ante la muerte, se busca centrar la atención en esa figura que, en cada texto, asume la primera persona y organiza distintas estrategias argumentativas para criticar, discutir, persuadir, enamorar.

A la colección de textos compilados en *Feminismos para la revolución* no se les pide coherencia: nos gustan así, desmañados. Sin pretender corregir o aleccionar, invitan al desbarajuste de las interpretaciones. Y a la conmemoración con una herramienta filosa en mano, una que pueda contra el mármol de los mitos. Queremos vida. Eso lleva tanto más trabajo, porque es preciso escarbar datos, descongelar imágenes muy apreciadas, destartalar figurones. Sobre todo, cruzar información, revolver archivos, identificar no el mejor relato, sino el más documentado. Y, después, no temer equivocarse en el nuevo armado, que será precario en su verdad, aunque meditado y siempre discutible.

Apostamos a ser parte de los feminismos que no son refugio de identidad ni barrera de control sobre los cuerpos. Nada más alejado de las versiones que se llaman a sí mismas radicales y se abroquelan en una suelta definición biológica, desde la cual excluyen a quienes no cumplen sus acotados y fantasiosos parámetros «naturales». Al contrario, los feminismos que todavía tienen mucho para decir viven en las alianzas con los movimientos de mujeres y los activismos LGBTI+. Un terreno de acuerdos y divergencias, desencuentros momentáneos, grandes querellas y finas redes de sensibilidades diversas sostenidas por lesbianas que no son mujeres, mujeres y hombres trans, mujeres cis, travestis, identidades no binarias, denominaciones queer y cuir, géneros fluidos, cuerpos gestantes, etc., en una indetenible creatividad personal y política.

Apostamos también a contrapesar el efecto de novedad de la marea feminista, no porque carezca de una faceta inédita, específicamente la masividad y cierta aceptación cada vez más generalizada, sino porque la búsqueda es comprenderla desde esos pasados que le dan fuerza. Para acompañarse con las escrituras de otros tiempos memorables. Para anticipar nudos políticos y teóricos que ya se han enfrentado, y para desanudarlos con ideas previas que esperan volver al ruedo. Y, sin dudas, para enriquecer las autocríticas, ese bien tan propio.

Las quejas por la falta de acuerdo o por la pluralidad excesiva de los feminismos parecen desconocer que más

que un partido vertical, una camaradería obsecuente o un club de iguales, fueron siempre un campo de debate. Un vital desacuerdo que resistió la invitación a la ortodoxia y al recitado de catecismos. Conocer los inicios con perspectiva crítica permite comprender que aquellos primeros feminismos se forjaron con fe en el Progreso, bajo la irradiante luz de la Razón, en el imperio de la Ciencia de los países coloniales. ¿Acaso puede sorprender tanto el vocabulario racista de una francesa de salón o el pánico homosexual de una señora de pueblo? ¿El pudor de una paria de la moral de su tiempo?

El usual señalamiento de esas tensiones problemáticas como un descubrimiento de último momento o como un factor de perspicacia personal (resaltado por títulos efectistas) demuestra que es necesario insistir en la historia de los feminismos. Dar a conocer con mayor ahínco los jaques que se hicieron a las hegemonías y a los divisimos, las persistencias de sus memorias como calderas en continua ebullición. Sí, tenemos en ellas vestales ilegibles y celebrantes del sexo. Alianzas y rupturas, silenciamientos vergonzantes, redescubrimientos y nuevas ediciones de una palabra que no cesa. Y también por eso nos llaman marea.

Adentrarse en el pasado feminista ayuda a contrarrestar los análisis que tienden a clausurar el feminismo buscando una coincidencia con el fin del ciclo revolucionario de las izquierdas. Esas propuestas suelen identificar el triunfo del neoliberalismo con el del feminismo liberal, como si este fuera

un sinónimo del feminismo en toda su extensión, o como si se tratara de una deriva reciente provocada por la cooperación capitalista, y no una expresión feminista fundante combatida por obra de las militantes de izquierda. ¿Se olvida que el anarquismo ya denunciaba el corazón burgués de las sufragistas y que las socialistas advertían que al feminismo se lo podía tragar entero el capitalismo con todas sus astucias? El malestar de la derrota histórica que atraviesa a cierta izquierda no se condice con la festiva potencia del fenómeno feminista actual. Ni justifica deplorar ni simplificar con la etiqueta «políticas de identidad» una de las revoluciones de la subjetividad, la vida cotidiana, la filosofía política y las sexualidades más dinámicas de la historia. Contra esto, hay remedio: encarar la lectura y el estudio de la gran cantera teórica y política feminista con la misma seriedad y pasión con que se aborda hasta el último de los manuscritos que nos legó Karl Marx.

La antología parte de la idea de que los famosos encuentros y desencuentros de las izquierdas deben leerse allí donde las voces se quiebran. Por ejemplo, en estos textos, breves trances desafiantes que, aunque firmados con nombre propio, recogen saberes de la práctica política colectiva, donde lo personal y lo político estuvieron siempre abrazados. Cada uno deja ver cómo estas mujeres y algunos hombres que (sobre todo en el anarquismo) supieron percibirlo pusieron en duda la homogeneidad de la Humanidad, ese desvelo de las izquierdas. La repetida

enunciación en primera persona y en femenino, así como las invocaciones a «obreros» y «obreras», sin más, resquebrajaban la idea de un conjunto universal, homogéneo y definitivo.

En esa interlocución, el feminismo no participa como un partido compacto ni como un movimiento de contornos definidos, sino como forma de enunciación singular. Una posición enunciativa de la revuelta, revulsiva incluso contra sí misma. Una voz que va en la senda de Virginia Woolf, hablando de recursos económicos cuando la convocaron a discurrir sobre «la Mujer y la novela»; de Julieta Lanteri, inscribiéndose como candidata cuando no le permitían ser electora; de Audre Lorde, advirtiendo sobre las insidiosas herramientas del amo; de Sara Ahmed y la tipificación de la aguafiestas que sabemos ser; de Virginie Despentes, convocando a las putas, las gordas y las feas frente al feminismo presentable; de Lohana Berkins, narrando su adolescencia y transformando mis ideas antes, siquiera, de leer a Judith Butler.

Desacatadas, las mil lenguas de la enunciación feminista no caben en ninguna revolución, la desbordan. Una práctica del decir sin olvidar la historia de aquellas voces que, desde las izquierdas, pudieron renegar del

feminismo y aun así legarnos feminismos que se comprometan con el fin del capitalismo y con la imaginación de un mundo sin explotación. Un movimiento de innúmeras bocas para dudar de los cierres y las burocracias, para agitar las secretarías generales y los comisariatos. Para enrarecer partidos y sindicatos y habitar los aparatos de Estado con un ojo en la puerta de salida. Feminismos disidentes para leer la letra minúscula de las políticas públicas, los registros civiles y las utopías. Para denunciar la feminización de las deudas, vociferar contra la debacle ecológica y habitar las luchas antirracistas, antifascistas, antipunitivistas y antiespecistas presentes y futuras. Feminismos para revisar entidades como «ciudadano», «vecino», «compañero», «camarada», en una imparable invención subjetiva que tiene para ofrecer redefiniciones de la mujer tanto como estrategias para fugar de esa categoría si es preciso.

En esa cantera inagotable recolecté estas pocas voces. Ahora solo resta una invitación: *leer los textos en voz alta*. En soledad o en ronda. Leerles los gritos y los silencios, porque en cada una de sus puntuaciones apasionadas reviven los feminismos para la revolución permanente de la mismísima Revolución. ☒

Summaries

Resúmenes en inglés

Colette Capriles: Venezuela: Will the New Incentives to Negotiate Work? [4725]

The internal situation – including a strong political disaffection of the population – and the external situation – an alignment of the United States and Europe in favor of dialogue – have changed the conditions for a political negotiation in Venezuela. With Norwegian mediation, the dialogue being carried out in Mexico seeks institutional normalization, within the framework of the regional elections that will take place next November.

Keywords: Change, Continuity, Negotiations, Nicolás Maduro, Venezuela.

Guadalupe González / Mónica Hirst / Carlos Luján / Carlos A. Romero / Juan Gabriel Tokatlian: Afghanistan and Latin America in the Face of the Challenged Supremacy of the United States [4726]

Despite its geographical remoteness, the occupation and departure at the pace of

the unstoppable advance of the Taliban illuminate some questions about the US international intervention policy and its limits that are useful for thinking about Latin American geopolitics, in a context in which the world supremacy of the Northern country seems to be going through a declining phase.

Keywords: Regime Change, Statehood, Afghanistan, Latin America, United States.

Bernabé Malacalza: South America: A Disrupted Periphery [4727]

South America is the region most affected by the coronavirus on the planet. A great dragging economic depression and growing social unrest, aggravated by the pandemic, account for the current state of upheaval, which is expressed in social protests. At the same time, in this delicate scenario, an increase in the presence of the United States and China is observed, which, from different perspectives, carefully observe the spiral of instability and try to demarcate various forms of control.

Keywords: Crisis, Syndemic, Welfare Multilateralism, China, South America, United States.

**Elisabeth Möhle / Daniel Scheingart:
Towards a Latin American
Ecodevelopment [4728]**

The pandemic seems to be subsiding, but Latin American problems are not. How can the region face the social and environmental challenges presented by the post-pandemic world? The answer that is proposed in this article is an ecodevelopmental framework that guarantees triple sustainability (social, macroeconomic, and environmental) and allows us to face together and in a virtuous way the great deficits that drag the development models of the region.

Keywords: Commodities, Developmentalism, Environmentalism, External Constraint, Latin America.

**Jorge Atria / Cristóbal Rovira
Kaltwasser: Chilean Elites and their
(Dis)Connection with Society [4729]**

Chile recently experienced a social outbreak, which is largely explained by the disconnect between the elite and the citizenry. To demonstrate the empirical validity of this thesis, data are presented from a study that allows the analysis of opinion gaps between the elite and society, as well as discrepancies and concordances between the different elites of the country. The results suggest that if the elites are not willing to facilitate the

reforms demanded by the citizens, it will be difficult for Chile to regain political and economic stability.

Keywords: Conflict, Elites, Ideology, Polarization, Chile.

**Zaraí Toledo Orozco: A Guide
to Understanding Pedro Castillo's
Peru [4730]**

How did a trade unionist from the province become president of Peru? In a country that was left out of the regional «turn to the Left» of the 2000s and the indigenous uprisings of other countries in the region, and that made the continuity of the economic model a dogma of faith for any candidate seeking to achieve the Presidency, the 6th June elections caused a political earthquake. It will be necessary to see if it is the announcement of a reconciliation of the country with itself or the anticipation of new political crises.

Keywords: Inequality, Pedro Castillo, Keiko Fujimori, Peru.

**Francisco J. Cantamutto / Martín
Schorr: Argentina: The Aporias
of Neo-Development [4731]**

Peronism assumed the Presidency of Argentina in the midst of an inherited crisis, to which a world crisis was added. Given this, the neo-developmental government has taken the mandate to organize the macroeconomy and to put effort into urgently maximizing the export orientation. In doing this, it accepts the

existing productive specialization, based on static comparative advantages, and omits considerations regarding the specific actors that personify it, the role of the internal market, local impacts, and the non-commercial pathways through which resources are leaking.

Keywords: Exports, Neo-Developmentalism, Alberto Fernández, Argentina.

Arnold Antonin: The Assassination of Jovenel Moïse: A Coup within a Coup? [4732]

The brutal assassination of the Haitian president adds new elements to the crisis in Haiti, after years of foreign intervention and a State that is increasingly a machine for the enrichment of the cliques in power. Today the country faces the prospect of a permanent degradation of human rights and the living conditions of its population, if it is not able to take advantage of this situation to start a reconstruction process.

Keywords: Assassination, Coup d'Etat, Violence, Jovenel Moïse, Haiti.

Jessica Dominguez Delgado: The People, the Government, and Parallel Realities in Cuba [4733]

There are many versions and interpretations of the social protests of July 11th, 2021 in Cuba. The truth is usually a flexible concept that adjusts to the point of view, position, and desire of the different social actors, inside and outside the island. The truth is that, in a context of

growing precariousness of life, different sectors, especially humble ones, took to the streets in an unprecedented event.

Keywords: 11th July, Crisis, Protests, Miguel Díaz-Canel, Cuba.

Gilles Bataillon: Nicaragua, a Cornered Dynasty? [4734]

Daniel Ortega and Rosario Murillo have built a family power reminiscent of the days before the Sandinista Revolution of 1979. Dozens of opponents were sent to prison as the country heads for elections with no space for the opposition. Despite the 2018 protests and international sanctions, Ortega neo-Sandinism continues to control the key sources of power.

Keywords: Sandinista Ideology, Rosario Murillo, Daniel Ortega, Nicaragua.

Fernando Pairican: The Autonomist Horizons of the Mapuche Movement [4735]

The election of Elisa Loncon as president of the Chilean Constitutional Convention is an outcome of a long process of organization and struggle of the Mapuche population, which through different strategies, more gradualist or more radical, has positioned the issue of autonomy and, more recently, of the plurinational State. This political dynamic constituted a kind of «another transition» within the post-dictatorship transition.

Keywords: Autonomy, Mapuche, Plurinationality, Constitution, Chile.

**Benjamin Moallic: El Salvador:
A Millennial Authoritarianism [4736]**

Two and a half years after the election of Nayib Bukele, El Salvador's institutional framework has been increasingly put to the test, without the crises unleashed by the new president seeming to diminish his popularity. After four decades of reign of the parties born of the civil war, the president appeared not only as the promise of a renewal of the political scene, but also as the «avenging arm» that would wipe out the political «old world».

Keywords: Institutionalization, Populism, Nayib Bukele, El Salvador.

**Laura Fernández Cordero:
An Exercise in Feminist
Memory [4737]**

The *Feminismos para la revolución* [Feminisms for Revolution] anthology recovers a polyphony of voices from the history of women's movements. It is not a matter of making them visible, because many of them do not need that, nor of building heroines or seeking forced coherence, but of reading these texts aloud and in connection with the struggles of the present.

Keywords: Feminism, Left, Memory, Revolution, Women.

RELACIONES INTERNACIONALES

Enero-Junio de 2021

La Plata

Año 30, Nº 60

EDITORIAL: **Norberto Consani**. DIÁLOGOS: **Dra. Silvia Fernández Gurmendi**. ESTUDIOS: L'apport des institutions parlementaires aux organisations régionales: l'expérience des Amériques, **Gordon Mace** y **Mamadou Lamine Sarr**. A una década de la Primavera Árabe: ¿hacia dónde va el mundo árabe?, **Zidane Zeraoui**. El «primer Mercosur» y la «flexibilización». Antecedentes útiles para la reflexión (1991-2001), **Gerardo Caetano**. Integración y desarrollo. Peregrinaciones euro-latinoamericanas en los orígenes, **Lorenza Sebesta**. Post-neoliberalismo, post-pandemia covid-19 y sociedad civil global, **Kiyoshi Matsushita**. Militares y bolsonarismo: un caso de transición fallida y democracia inacabada, **Karl Schurster** y **Francisco Carlos Teixeira Da Silva**. *Carthago delenda est*. La impronta de Donald Trump en la política exterior de Estados Unidos, **Gilberto Aranda Bustamante** y **Jorge Riquelme Rivera**. On the essentials of international law in Xi Jinping thought on the rule of law, **Liu Huawen**. Les instructions du covid-19 et la nécessité de coopération des pays de l'Asie de l'Ouest en vue de sortie des crises, **Mehdi Zakerian** y **Talieh Sakhamanesh**. La agenda exterior de Biden y sus implicaciones para la Unión Europea y América Latina, **Anna Ayuso**. RESÚMENES DE TESIS: Migraciones en el Mercosur. Hacia la conformación de un modelo de integración regional, **Laura Bogado Bordazar**. REFLEXIONES: Aportes a un debate sobre el futuro de la integración latinoamericana y del Mercosur, Félix Peña. La fin des relations internationales?, **Jean-Pierre Ferrier**. HISTORIA: A 30 años de caída de la URSS, **Patricia Kreibohm**.

Director – Fundador: Dr. Norberto Consani

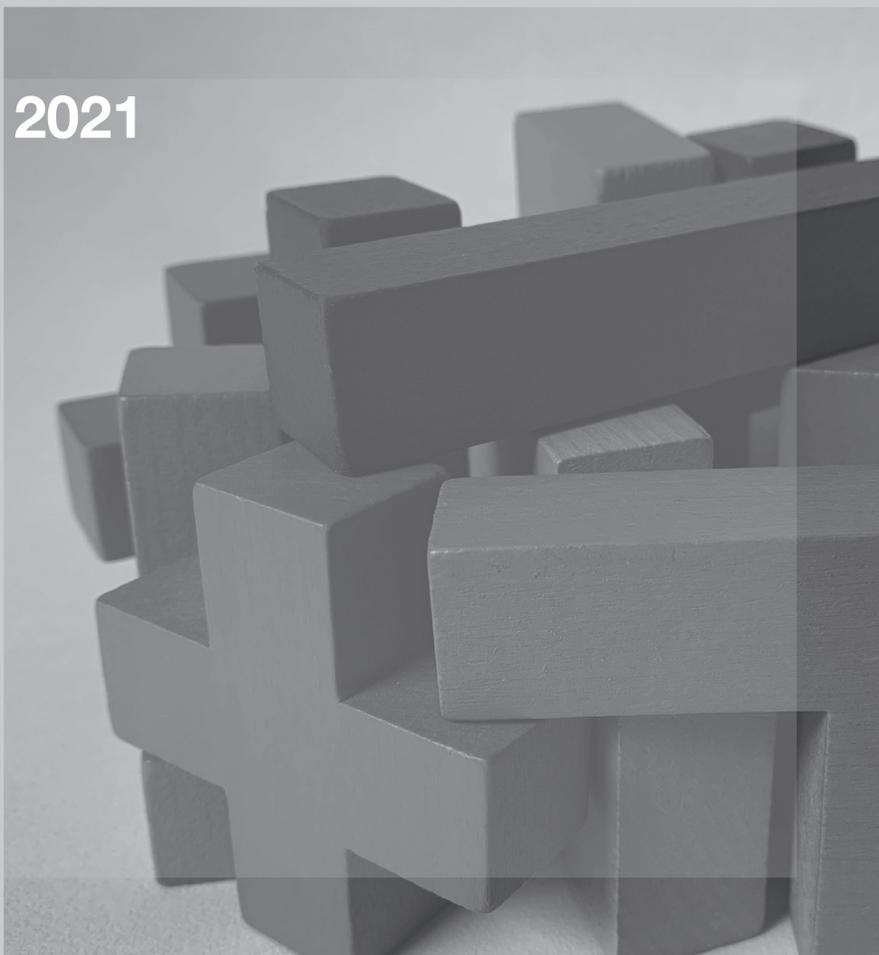
Relaciones Internacionales es una publicación del Instituto de Relaciones Internacionales, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional de La Plata. Calle 48 e/ 6 y 7 – 5º Piso, 1900, La Plata, Argentina. Tel.: (54-221) 4230628. Página web: <www.iri.edu.ar>. Correo electrónico: <iri@iri.edu.ar>.

NUEVA SOCIEDAD Especial em português



América Latina: geopolítica e integração

2021



Alemania: F. Delbanco, Tel.: (49 4131) 2428-8, e-mail: <post@delbanco.de>.

Argentina: Distribuidor: Jorge Waldhuter, Pavón 2636, Buenos Aires, Tel./Fax: 6091.4786, e-mail: <jwalibros@ciudad.com.ar>.

Bolivia: en La Paz: Yachaywasi, Tel.: 2441.042, e-mail: <yachaywa@acelerate.com>, Fax: 244.2437. En Santa Cruz de la Sierra: Lewylibros, Junín 229, Tel.: (591) 3 3360709.

Colombia: Librería Fondo de Cultura Económica, Calle 11 No. 5-60, Barrio La Candelaria, Bogotá, Colombia. Tel.: (571) 2832200, e-mail: <libreria@fce.com.co>.

Costa Rica: Librería Nueva Década, Tel.: (506) 2225.8540, e-mail: <ndecada@ice.co.cr>.

Ecuador: LibriMundi, Tel.: (5932) 252.1606, 223.4791, e-mail: <librimu1@librimundi.com.ec>.

España: Marcial Pons-Librero, Tel.: (34 914) 304.3303, e-mail: <revistas@marcialpons.es>.

Japón: Italia Shobo, Fax: 3234.6469; Spain Shobo Co., Ltd., Tel.: 84.1280, Fax: 84.1283, e-mail: <info@spainshobo.co.jp>.

Perú: El Virrey, Bolognesi 510, Miraflores, Lima, Tel.: 444.4141, e-mail: <info@elvirrey.com>.

Puerto Rico: Laberinto, 251 calle de la Cruz, San Juan. Tel.: (787) 724.8200, e-mail: <info@librerialaberinto.com>.

Ventas y consultas por Internet:
<www.nuso.org>

Distribución internacional a librerías:
<distribucion@nuso.org>

PARA SUSCRIBIRSE A NUEVA SOCIEDAD

SUSCRIPCIÓN	ANUAL	BIENAL
Incluye flete aéreo	6 números	12 números
América Latina	US\$ 70	US\$ 121
Resto del mundo	US\$ 107	US\$ 196
Argentina	\$ 1.900	\$ 3.800

> Formas de pago

- Pago online:** Ingrese en <<http://www.nuso.org/suscribe.php>>, donde encontrará un formulario para registrar su pedido y efectuar el pago.
- Pago con tarjeta de crédito:** Solicite instrucciones a <distribucion@nuso.org>
- Pago con cheque:** Envíe un cheque por el importe correspondiente a la orden de **Fundación Foro Nueva Sociedad** a la siguiente dirección: Nueva Sociedad, Humberto Primo 531, C1103ACK Buenos Aires, R. Argentina, acompañado de los datos del suscriptor (nombre, domicilio postal completo, teléfono, correo electrónico).

> Para otros medios de pago y cualquier otra consulta, escriba a <distribucion@nuso.org>.

PENSAR LAS DESIGUALDADES EN AMÉRICA LATINA

COYUNTURA

Javier Rodríguez Sandoval. El voto nulo y el triunfo de la derecha en Ecuador

TRIBUNA GLOBAL

Susanna Ligerio. Raza, biología y poder. Entrevista a Angela Saini

TEMA CENTRAL

Gonzalo Assusa / Gabriel Kessler.

¿Percibimos la desigualdad «realmente existente» en América Latina?

Elizabeth Jelin. Género, etnicidad/raza y ciudadanía en las sociedades de clases. Realidades históricas, aproximaciones analíticas

Juan Pablo Pérez Sáinz. Marginación social y nudos de desigualdad en tiempos de pandemia

María Mercedes Di Virgilio.

Desigualdades, hábitat y vivienda en América Latina

Constanza Tabbush. La pandemia, una encrucijada para la igualdad de género

Gioconda Herrera. Migraciones en pandemia: nuevas y viejas formas de desigualdad

Evangelina Martich. Salud y desigualdad: la pandemia reforzó lo que ya sabíamos

Inés Dussel. Escuelas en tiempos alterados. Tecnologías, pedagogías y desigualdades

Fernando Filgueira / Rubén M. Lo Vuolo.

Oportunidades, espejismos y bloqueos de la renta básica universal

Alejandro I. Canales. Demografía de la desigualdad

ENSAYO

Martín Bergel. El socialismo cosmopolita de José Carlos Mariátegui

SUMMARIES

¿QUÉ SABEMOS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL?

COYUNTURA

María Victoria Murillo. Protestas, descontento y democracia en América Latina

TRIBUNA GLOBAL

Ahmet Insel. La Turquía de Erdoğan: un autoritarismo electivo y autocrático

TEMA CENTRAL

Enzo Ferrante. Inteligencia artificial y sesgos algorítmicos. ¿Por qué deberían importarnos?

Martín Ariel Gendler. Internet, algoritmos y democracia. ¿Del sueño a la pesadilla?

Sofía Scasserra. La desigualdad automatizada. Industrialización, exclusión y colonialismo digital

Leonardo Fabián Sai. ¿Qué es el capital cibernético?

Sebastián Sanjurjo. Hacia un mundo digitalizado

Juan Manuel Ottaviano. La amenaza fantasma. Inteligencia artificial y derechos laborales.

Daniela Muradas Antunes. Inteligencia artificial: el derecho y el revés

Carolina Martínez Elebi. Inteligencia artificial aplicada a la salud. Luces y sombras

Johanna Caterina Faliero. Limitar la dependencia algorítmica. Impactos de la inteligencia artificial y sesgos algorítmicos

Paul Nemitz. La democracia en la era de la inteligencia artificial

ENSAYO

Christophe Prochasson. El socialismo, una cultura

SUMMARIES



NUEVA SOCIEDAD | 295

Agitación en América Latina

COYUNTURA

Colette Capriles Venezuela: ¿alcanzarán los nuevos incentivos para negociar?

TRIBUNA GLOBAL

G. González / M. Hirst / C. Luján / C.A. Romero / J.G. Tokatlian

Afganistán y América Latina frente a la primacía desafiada de Estados Unidos

TEMA CENTRAL

Bernabé Malacalza América del Sur: una periferia convulsionada

Elisabeth Möhle / Daniel Schteingart Hacia un ecodearrollismo latinoamericano

Jorge Atria / Cristóbal Rovira Kaltwasser Las elites chilenas y su (des)conexión con la sociedad

Zarai Toledo Orozco Una guía para entender el Perú de Pedro Castillo

Francisco J. Cantamutto / Martín Schorr Argentina: las aporías del neodesarrollismo

Arnold Antonin El magnicidio de Jovenel Moïse. ¿Un golpe dentro del golpe?

Jessica Dominguez Delgado El pueblo, el gobierno y las realidades paralelas en Cuba

Gilles Bataillon Nicaragua, ¿una dinastía acorralada?

Fernando Pairican Los horizontes autonomistas del movimiento mapuche

Benjamin Moallic El Salvador: un autoritarismo *millennial*

ENSAYO

Laura Fernández Cordero Un ejercicio de memoria feminista